

NACIONES UNIDAS

**MEMORIA ANUAL
DEL SECRETARIO GÉNERAL
SOBRE LA
LABOR DE LA ORGANIZACION
16 de junio de 1957 - 15 de junio de 1958**



ASAMBLEA GENERAL
DOCUMENTOS OFICIALES : DECIMOTERCER PERIODO DE SESIONES
SUPLEMENTO No. 1 (A/3844)

Nueva York, 1958

NOTA

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La simple mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

Indice

	<i>Página</i>
PRÓLOGO.....	vii
 I. ASUNTOS POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD	
1. La cuestión del desarme.....	1
2. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos.....	7
3. Efectos de las radiaciones atómicas	7
4. Declaración sobre la coexistencia pacífica de los Estados.....	9
5. Denuncia formulada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tituladas: "Medidas urgentes destinadas a poner fin a los vuelos efectuados por aeronaves militares de los Estados Unidos armadas con bombas atómicas y de hidrógeno hacia las fronteras de la Unión Soviética"	9
6. Admisión de nuevos Miembros	10
7. La cuestión de Hungría	11
8. La Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas.....	13
9. El Canal de Suez	14
10. La cuestión de Palestina	14
11. Asistencia a los refugiados de Palestina	17
12. Denuncia de amenazas a la seguridad de Siria y a la paz internacional	19
13. Comunicaciones relativas a Omán y Mascate	20
14. Denuncia presentada por el Líbano	20
15. La cuestión de la frontera entre el Sudán y Egipto.....	21
16. La cuestión de Chipre	21
17. La cuestión de Argelia.....	23
18. Denuncias formuladas por Túnez y Francia	24
19. Trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana..	25
20. La cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de la política de segregación racial (<i>apartheid</i>) del Gobierno de la Unión Sudafricana	26
21. La cuestión India-Pakistán	27
22. La cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental).....	28
23. La cuestión de Corea	29

24.	La cuestión de la representación de China en las Naciones Unidas..	32
25.	Nombramiento de Secretario General de las Naciones Unidas.....	32
26.	Cuestión de la reforma de la Carta para aumentar el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y el número de miembros del Consejo Económico y Social y de la Corte Internacional de Justicia	32
27.	Comunicación referente a la República Árabe Unida.....	32
II. EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		
A. Asuntos Económicos y Sociales		
1.	Estudios económicos	35
2.	Desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados	36
3.	Desarrollo de la cooperación económica internacional.....	39
4.	Problemas internacionales relativos a los productos básicos....	39
5.	Problemas fiscales y financieros	40
6.	Cooperación internacional en cuestiones de cartografía.....	41
7.	Transportes y comunicaciones	41
8.	Servicios de estadística de las Naciones Unidas.....	42
9.	Comisiones económicas regionales	44
10.	Derechos humanos	50
11.	Condición jurídica y social de la mujer.....	52
12.	Fiscalización internacional de estupefacientes.....	54
13.	Asuntos sociales	55
B. Asistencia técnica		
1.	Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico	59
2.	Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.....	61
3.	Cuerpo de funcionarios administrativos internacionales	62
C. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.....		
D. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados		
E. Cuestiones de coordinación y relaciones con organismos especializados		
		66
III. ASUNTOS RELATIVOS AL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA Y A LOS TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS		
A. Territorios en fideicomiso		
1.	Funcionamiento del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria	69

	<i>Página</i>
2. Condiciones existentes en los territorios en fideicomiso.....	70
1) Territorios en fideicomiso del Africa occidental	70
2) Territorios en fideicomiso del Africa oriental	71
3) Territorios en fideicomiso del Pacífico	73
B. <i>Territorios no autónomos</i>	
1. Transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta	75
2. Examen de la información transmitida.....	75
3. Cuestiones generales relativas a la transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta.....	78
4. La cuestión del procedimiento de votación en la Asamblea General en los asuntos relativos a territorios no autónomos	78
5. Información sobre el progreso alcanzado por los territorios no autónomos	79
6. Colaboración internacional para el progreso económico y social..	79
C. <i>Cuestión del Africa sudoccidental</i>	80
IV. ASUNTOS JURÍDICOS	
1. Corte Internacional de Justicia	81
2. Comisión de Derecho Internacional	87
3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.....	89
4. Cuestión de la definición de la agresión y asuntos relacionados con ella	90
5. Tratados y convenciones multilaterales	90
6. Prerrogativas e inmunidades	92
7. Reglamentos de los órganos de las Naciones Unidas.....	92
8. Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas.....	92
9. Cuestión de la revisión de la Carta.....	94
V. MAYOR COMPRENSIÓN EN LA OPINIÓN PÚBLICA	95
VI. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO	
1. Servicios de conferencias y documentos	99
2. Servicios generales	100
3. Administración del personal	101
4. Asuntos financieros	102
5. Escuela Internacional de las Naciones Unidas y locales de oficina para las delegaciones	103

Prólogo

En este documento presento a la Asamblea General mi décimatercera memoria anual sobre la labor realizada por la Organización desde el 16 de junio de 1957 al 15 de junio de 1958.

La reseña de la función que la Organización desempeña en los asuntos mundiales, y que normalmente aparece en forma de introducción a mi memoria anual, será presentada este año como adición a este documento en una fecha más próxima a la apertura del décimotercer período de sesiones.



DAG HAMMARSKJÖLD

Secretario General

1° de julio de 1958

Capítulo I

ASUNTOS POLITICOS Y DE SEGURIDAD

El capítulo I describe las actividades de las Naciones Unidas en asuntos políticos y de seguridad entre el 16 de junio de 1957 y el 15 de junio de 1958. En este capítulo se da cuenta de las medidas adoptadas por la Asamblea General durante la reanudación del undécimo período de sesiones en las sesiones celebradas en el mes de septiembre y en el duodécimo período de sesiones. Además reseña las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad y por el Secretario General, así como por los diversos comités, comisiones y organismos establecidos para tratar de los asuntos políticos y de seguridad.

En su duodécimo período de sesiones la Asamblea General eligió al Canadá, Japón y Panamá como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para cubrir las vacantes producidas el 31 de diciembre de 1957 al terminar el período de funciones de Australia, Cuba y Filipinas. En consecuencia, la composición del Consejo de Seguridad, a partir del 1° de enero de 1958, como resultado de esas elecciones es la siguiente: China, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (miembros permanentes) y Canadá, Colombia, Irak, Japón, Panamá y Suecia (miembros no permanentes).

En consecuencia se efectuaron los cambios correspondientes en la Comisión de Desarme cuya composición fué ampliada, además, por la adición de 14 Estados Miembros que, durante el primer año, desde el 1° de enero de 1958 hasta el 1° de enero de 1959, son Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Birmania, Checoslovaquia, Egipto, India, Italia, México, Noruega, Polonia, Túnez y Yugoslavia.

Las cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad han sido tratadas más brevemente que las demás, ya que en el *Informe del Consejo de Seguridad, 16 de julio de 1957 a 15 de julio de 1958*, se puede encontrar una descripción más detallada de los debates celebrados en el Consejo sobre esas cuestiones.

I. La cuestión del desarme

a) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA SUBCOMISIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARME

i) Actuación de la Subcomisión

La Subcomisión de la Comisión de Desarme, que con arreglo a la resolución 1011 (XI) de la Asamblea General se reunió de nuevo en Londres el 18 de marzo de 1957, celebró 71 sesiones entre esa fecha y el 6 de septiembre de 1957. La Subcomisión aprobó su cuarto y quinto informes que fueron presentados a la Comisión de Desarme el 1° de agosto y el 6 de septiembre de 1957 respectivamente.

Los debates en la Subcomisión versaron sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre medidas par-

ciales de desarme como primer paso hacia un programa general. Aunque no se logró ningún acuerdo, se prestó atención especial a la suspensión de pruebas con armas nucleares y de la producción de esas armas, a la primera etapa de reducción de las fuerzas armadas y de los armamentos de las grandes Potencias, bajo inspección internacional y a la prevención de ataques por sorpresa mediante un sistema de reconocimientos aéreos. Se planteó por primera vez la cuestión de utilizar exclusivamente el espacio cósmico para actividades pacíficas.

Las principales propuestas y declaraciones formuladas ante la Subcomisión fueron las tres propuestas presentadas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 18 de marzo, el 30 de abril y el 14 de junio de 1957 respectivamente, y la declaración y dos propuestas presentadas conjuntamente por el Canadá, Francia, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 2 de julio y el 2 y 29 de agosto respectivamente.

ii) Propuestas de la URSS

La propuesta formulada por la URSS el 18 de marzo sobre la reducción de armamentos y de las fuerzas armadas y la prohibición de armas nucleares, además de reiterar algunos puntos contenidos en propuestas anteriores formuladas por la URSS, disponía la renuncia al uso de las armas nucleares, incluso los cohetes con carga nuclear, y el control de los cohetes teledirigidos durante una segunda etapa del programa de desarme.

El 30 de abril la URSS, señalando que las Potencias occidentales no estaban preparadas para concluir un acuerdo sobre un programa general de desarme, presentó propuestas relativas a la adopción de medidas parciales de desarme entre las que se incluían las siguientes: 1) Las fuerzas armadas de los Estados Unidos y de la URSS serían reducidas a 2.500.000 hombres y más tarde a 1.500.000 hombres en dos etapas sucesivas y las fuerzas armadas de Francia y del Reino Unido reducidas en forma correspondiente a 750.000 y 650.000 hombres. 2) Durante la primera etapa de las reducciones, los armamentos de tipo corriente y los presupuestos militares serían reducidos en un 15%. 3) También durante la primera etapa un órgano de control, establecido bajo la fiscalización del Consejo de Seguridad, recogería y analizaría la información suministrada por los Estados concerniente a la aplicación de las medidas de desarme parcial. Se establecerían puestos de control, a base de reciprocidad, en los grandes puertos, en los empalmes de ferrocarriles y en las carreteras principales. Durante la segunda etapa se establecerían puestos de control en los aeropuertos en relación con un acuerdo sobre la prohibición completa del uso de armas nucleares y su eliminación de los armamentos de los Estados. 4) Al principio de la

primera etapa los Estados se comprometerían a renunciar al uso de las armas nucleares de todos los tipos, incluso bombas y cohetes con carga nuclear. Además, se comprometerían a hacer todo lo posible para concluir un acuerdo sobre la prohibición completa de las armas nucleares, su eliminación de los arsenales de los Estados, a cesar completamente su fabricación y a destruir sus existencias de esas armas. La cuestión relativa a la cesación de las pruebas de armas nucleares debería ser tratada independientemente y resuelta sin más demora. 5) Debería examinarse la cuestión relativa a la supresión de bases militares situadas en territorio extranjero, y acordarse, en primer lugar, cuáles de esas bases podrían ser suprimidas dentro del plazo de uno o dos años. 6) Las fuerzas armadas de los Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia estacionadas en el territorio de Alemania podrían ser reducidas en una tercera parte. 7) Asimismo, se podría llegar a un acuerdo respecto de la reducción de las fuerzas armadas de estos cuatro Estados situadas en los territorios de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte o del Tratado de Varsovia. 8) El reconocimiento aéreo podría realizarse en un sector de Europa limitado al oeste por el meridiano de Greenwich, al este por el meridiano 25° al norte por el paralelo 54°, y al sur por el paralelo 39° 38'. En el Lejano Oriente, la inspección aérea podría extenderse a los territorios de la URSS situados al este del meridiano 108° y a los territorios de los Estados Unidos situados al oeste del meridiano 90°. 9) La propaganda de guerra, particularmente con respecto al uso de armas atómicas y de hidrógeno, debería ser suprimida.

El 14 de junio, la URSS presentó otra propuesta en la que se preveía que cesaran inmediatamente todas las pruebas con armas nucleares por un período de dos o tres años y que se estableciera una comisión internacional encargada de vigilar el cumplimiento de esa obligación por parte de los Estados. Se establecerían puestos de control a base de reciprocidad en los territorios de la Unión Soviética, de los Estados Unidos, del Reino Unido y en la zona del Océano Pacífico.

iii) *Propuestas conjuntas presentadas por Canadá, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido*

El 2 de julio, las Potencias occidentales acogieron con satisfacción que la URSS aceptara sus condiciones relativas al establecimiento de puestos de control dotados de instrumentos, equipo y servicios científicos adecuados para los fines de control y detección de las pruebas con armas nucleares. Convinieron en que esa aceptación permitía considerar la posibilidad de suspender temporalmente las pruebas con armas nucleares como parte de un acuerdo para una primera etapa en el desarme. La cesación temporal de las pruebas estaría sujeta a un acuerdo preciso sobre su duración y cronología, la instalación y ubicación de los medios de control necesarios, incluso los puestos de inspección y su relación con otras disposiciones relativas a la primera etapa del desarme.

El 2 de agosto las cuatro Potencias presentaron un documento de trabajo sobre sistemas de inspección destinados a establecer una salvaguardia contra la posibilidad de ataques por sorpresa. Los sistemas de inspección incluirían la inspección aérea, con puestos de observación terrestres situados en los puertos principales, los empalmes de ferrocarril, las carreteras principales y los aeropuertos importantes y equipos móviles terrestres con autoridad específicamente definida. Las regiones propuestas para la inspección serían: 1) todo el terri-

torio de los Estados Unidos, Alaska, las Islas Aleutianas, Canadá y la URSS; o, 2) si la URSS rechazaba esta propuesta, una región que comprendería todo el territorio situado al norte del Círculo Ártico correspondiente a la URSS, Canadá, Alaska, Groenlandia y Noruega; el territorio del Canadá, los Estados Unidos y la URSS situado al oeste del 140° meridiano, al este del 160° y al norte del paralelo 50°; todo el resto de Alaska y de la península de Kamchatka y todas las Islas Aleutianas y las Kuriles. 3) Si la URSS aceptara cualquiera de esas dos zonas, se añadiría una zona de inspección en Europa que incluyese el territorio limitado al oeste por el meridiano 10° oeste, al este por el meridiano 60° este y al sur por el paralelo 40°; o 4) si la URSS rechazara esta zona europea, una zona más reducida que incluiría, no obstante, una parte importante del territorio de la URSS, así como de los demás países de Europa oriental.

El 29 de agosto, las Potencias occidentales presentaron conjuntamente propuestas para la adopción de medidas parciales de desarme con el sobreentendido de que esas propuestas eran inseparables. En dichas propuestas se disponía que: 1) Las fuerzas armadas de la URSS y de los Estados Unidos serían reducidas a 2.500.000 hombres para cada una y las fuerzas armadas de Francia y del Reino Unido a 750.000 hombres respectivamente, dentro del período de un año a partir de la entrada en vigor de la convención de desarme. Durante ese período los Estados colocarían en depósitos situados en sus propios territorios y bajo control internacional las cantidades específicas de tipos de armamentos designados de común acuerdo. Otras reducciones de las fuerzas de las cuatro Potencias, a los niveles sucesivos de 2.100.000 hombres y 700.000 hombres y de 1.700.000 hombres y 650.000 hombres serían negociadas a condición de que: a) se reconociese como satisfactoria la ejecución de las disposiciones de la convención; b) se realizase progreso hacia una solución de los problemas políticos; c) otros Estados cuya participación en el sistema es esencial se hubiesen adherido a la convención y aceptado para sus efectivos y armamentos los niveles establecidos en relación con las cuatro Potencias. Otras reducciones de armamentos se relacionarían con los niveles de fuerzas armadas. El sistema de control sería apropiadamente ampliado y suficiente para comprobar cualesquiera otras reducciones efectuadas. 2) Las cuatro Potencias pondrían a disposición de la Organización Internacional de Control información anual concerniente a sus presupuestos militares. 3) Cada una de las partes contratantes renunciaría al uso de armas nucleares a menos que un ataque armado no la pusiese en situación de legítima defensa individual o colectiva. 4) Entraría en vigor un acuerdo concerniente a que toda la producción futura de materiales fisionables sería utilizada exclusivamente con fines pacíficos un mes después de la instalación de un sistema efectivo de inspección. También se concluiría un acuerdo destinado a cooperar a la pronta instalación de ese sistema, a designar un grupo de expertos técnicos encargados de preparar el sistema de inspección necesario, a transferir los materiales fisionables fabricados anteriormente a usos no militares en fechas y cantidades convenidas y a no transferir armas nucleares excepto para legítima defensa individual o colectiva, ni a transferir material fisionable salvo con fines pacíficos. 5) La cesación de los experimentos con armas nucleares durante un período de 12 meses empezaría a partir de la fecha de la entrada en vigor de la convención, a condición de que se hubiese concluido un acuerdo concerniente a la

instalación y conservación de los medios de control necesarios, incluso puestos de inspección provistos de instrumentos científicos, situados en los territorios de la URSS, el Reino Unido y los Estados Unidos, la región del Océano Pacífico y en cualquier otro lugar en que esos métodos de control fuesen necesarios. Un grupo de expertos nombrados por los cinco miembros de la Subcomisión se reuniría para preparar el sistema de inspección. Si el sistema de control funcionara satisfactoriamente y se hubiese realizado algún progreso en la preparación del sistema de inspección para cesar la producción de material fisiónable con fines militares, la cesación de los experimentos con armas nucleares se prolongaría por otros 12 meses. Los experimentos con armas nucleares se podrían reanudar transcurridos 24 meses si el sistema de control para cesar la producción con fines militares no se hubiese instalado a satisfacción de todas las partes interesadas. 6) Dentro de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor de la convención, un comité técnico estudiaría la preparación de un sistema de inspección con el fin de asegurar que el envío de objetos a través del espacio cósmico se realizaría exclusivamente con fines pacíficos. 7) Las zonas y métodos de inspección destinados a establecer una salvaguardia contra la posibilidad de un ataque por sorpresa serían los mismos que los descritos en el documento de trabajo de fecha 2 de agosto (véase *supra*). Todo sistema inicial de inspección destinado a establecer una garantía contra cualquier posibilidad de ataque podrá ser extendido de tal manera que en definitiva pueda prevenir el peligro de un ataque por sorpresa desde cualquier dirección. 8) Todas las obligaciones descritas en la convención sólo serán válidas mientras funcione de manera continua un sistema internacional eficaz de control e inspección bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. La adopción de decisiones importantes por el órgano de control necesitará los votos favorables de los representantes de los países miembros de la Subcomisión y de otros países que sean partes contratantes. 9) Se establecerá un sistema para reglamentar las exportaciones e importaciones de determinados armamentos. 10) Cada parte contratante tendrá derecho de suspender sus propias obligaciones parcial o totalmente en el caso de una violación grave de la convención o de una acción perjudicial para seguridad que requiera tal suspensión.

b) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA COMISIÓN DE DESARME

El 30 de septiembre de 1957, la Comisión de Desarme tomó nota de los informes cuarto y quinto de su Subcomisión y los transmitió para su examen, junto con los documentos pertinentes de la Comisión, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad.

c) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL

La cuestión del desarme figuró en el programa del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General con el título siguiente: "Reglamentación, limitación y reducción equilibrada de todas las fuerzas y de todos los armamentos; concertación de una convención (tratado) internacional sobre la reducción de los armamentos y la prohibición de las armas atómicas, de hidrógeno y demás armas de destrucción en masa". En este título se incluyeron cuatro puntos: a) Informe de la Comisión de Desarme; b) Ampliación de la composición de la Comisión de Desarme y de su Subcomisión (solicitado por la India); c) Acción colectiva de infor-

mación para que los pueblos conozcan los peligros de la carrera de armamentos y especialmente los efectos destructores de las armas modernas (solicitado por Bélgica); y d) Cesación, bajo control internacional, en los experimentos con armas atómicas y de hidrógeno (solicitado por la URSS).

La cuestión del desarme figuró prominentemente en el debate de la Asamblea General. La Primera Comisión examinó el tema en 28 sesiones celebradas entre el 10 de octubre y el 6 de noviembre de 1957 y aprobó dos proyectos de resolución (el primero con el título del tema y el segundo con el título del punto c)) que fueron aprobados por la Asamblea durante cinco sesiones celebradas entre el 14 y el 19 de noviembre (véanse más abajo los incisos i) y iii)). La Asamblea aprobó también un proyecto de resolución presentado en sesión plenaria, con el título siguiente: "Ampliación de la composición de la Comisión de Desarme" (véase más abajo el inciso ii)).

i) *Reglamentación, limitación y reducción equilibrada de todas las fuerzas y de todos los armamentos; concertación de una convención (tratado) internacional sobre la reducción de los armamentos y la prohibición de las armas atómicas, de hidrógeno y demás armas de destrucción en masa*

Bajo este título general la Primera Comisión examinó un proyecto de resolución y un memorándum presentados por la URSS, un proyecto de resolución de la India, un proyecto de resolución presentado por 24 Potencias y un proyecto de resolución de Yugoslavia.

El memorándum de la URSS sobre medidas parciales de desarme fué presentado el 20 de septiembre. En el memorándum se detallaban las propuestas formuladas por la URSS el 30 de abril y 14 de junio (véase *supra*). Sin embargo, con objeto de armonizarlos con las opiniones expresadas por las Potencias occidentales, en sus propuestas del 2 y 29 de agosto, se modificaron los puntos siguientes: 1) Respecto de los armamentos de tipo corriente, la URSS aceptaba las cifras propuestas por las Potencias occidentales para los niveles de fuerzas armadas de las cuatro Potencias durante las tres etapas sucesivas. Aunque mantenía que los armamentos y los presupuestos militares debían ser reducidos en un 15% durante la primera etapa, la URSS aceptaba en principio el plan de las Potencias occidentales relativo a la presentación mutua de listas de los armamentos que debían ser reducidos. No obstante, se señaló que la transición de una etapa a otra no debía depender de condiciones externas (por ejemplo, de la solución de problemas políticos, conforme se exponía en las propuestas de las Potencias occidentales); 2) En el memorándum se proponía que la obligación de no utilizar armas nucleares se asumiría inicialmente por un período de cinco años y no se pondrían armas nucleares a la disposición de cualquier otro Estado o mando de bloques militares. 3) Con respecto a la inspección aérea, la URSS declaraba que, en el presente estado de desconfianza y en vista de que muchos países con bases militares extranjeras en su territorio quedaban excluidos del sistema de inspección aérea propuesto por las Potencias occidentales, el hecho de consentir que todo su territorio y el de sus aliados en virtud del Tratado de Varsovia quedase sujeto a inspección aérea, sería colocarlos en posición desventajosa. Además la propuesta de inspección aérea de las regiones del Ártico no fué considerada útil.

El memorándum fué completado mediante un proyecto de resolución de la URSS, presentado el 23 de

septiembre, en el que se disponía que los Estados poseedores de armas nucleares serían invitados a renunciar, como primera medida, al uso de esas armas, quedando entendido que si al cabo de cinco años no se lograba un amplio acuerdo internacional sobre el problema del desarme, la cuestión de la renuncia al uso de las armas nucleares sería considerada nuevamente por las Naciones Unidas.

En el debate, el representante de la URSS señaló la importancia de no vincular una medida determinada a otra y dijo que la conclusión de un acuerdo sobre algunas de las medidas propuestas por lo menos, podría ser de gran importancia para lograr una paz duradera.

El 26 de septiembre, la India presentó un proyecto de resolución conforme al cual, en su forma revisada ulteriormente, la Asamblea pedía que la Comisión de Desarme nombrase a un número igual de representantes de los Estados que sostienen las opiniones divergentes presentadas en el informe de la Comisión, y a representantes de otros Estados que escogerían de común acuerdo los representantes mencionados en primer lugar. Los representantes así nombrados formularían recomendaciones apropiadas a la Comisión de Desarme sobre cuestiones como las siguientes: 1) fecha a partir de la cual la producción de materiales fisiónables sería utilizable únicamente con fines pacíficos; 2) abstención del uso de armas nucleares y termonucleares con miras a la eventual eliminación de tales armas; 3) desmontaje de las armas nucleares y termonucleares en existencia y conversión de los materiales fisiónables a fines pacíficos; y 4) medidas de inspección y fiscalización necesarias para la ejecución de acuerdos sobre los armamentos de tipo corriente.

El 11 de octubre, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Honduras, Italia, Laos, Liberia, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Dominicana y Túnez, a los que se agregó más tarde Bélgica, presentaron un proyecto de resolución, conforme al cual la Asamblea General: 1) instaría a los Estados interesados y, particularmente, a los que componen la Subcomisión de la Comisión de Desarme, a que tratasen de llegar cuanto antes a un acuerdo de desarme según el cual, a su entrada en vigor, se procedería a lo siguiente: a) suspensión inmediata de las pruebas de armas nucleares con la pronta implantación de un sistema eficaz de fiscalización internacional que comprendiese puestos de inspección, provistos de instrumentos científicos adecuados, dentro de los territorios de los Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido, las zonas del Océano Pacífico y en otros lugares en que se estimasen necesarios; b) cesación de la producción de materiales fisiónables para la fabricación de armas y el empleo de toda la futura producción de dichos materiales con fines no militares bajo efectiva fiscalización internacional; c) reducción de las existencias de armas nucleares mediante un programa en virtud del cual las existencias de material fisiónable utilizadas en la fabricación de armas de destinasen, en forma equitativa y a base de reciprocidad y bajo vigilancia internacional, a usos no relacionados con las armas; d) reducción de las fuerzas armadas y de los armamentos mediante acuerdos adecuados que entrañasen garantías; e) implantación progresiva de un sistema de libre inspección con elementos terrestres y aéreos, para prevenir la posibilidad de un ataque por sorpresa; f) estudio en común de un sistema destinado a garantizar que el envío de objetos a través

del espacio cósmico se haría exclusivamente con fines pacíficos y científicos; 2) pediría a la Comisión de Desarme que, en cuanto fuese posible, volviera a convocar a su Subcomisión para este propósito, y que la Subcomisión informase a la Comisión de Desarme, a más tardar el 30 de abril de 1958, sobre los progresos alcanzados.

Al presentar ese proyecto de resolución, que según se declaró, se basaba en las propuestas presentadas por las cuatro Potencias el 29 de agosto véase *supra*), tanto los representantes de los Estados Unidos como del Reino Unido señalaron que las seis medidas propuestas debían constituir las bases fundamentales de cualquier acuerdo parcial sobre el desarme. Dichas medidas no debían ser aplicadas inmediatamente, pero se debía convenir en que lo serían en etapas aceptables.

Varias enmiendas fueron presentadas al proyecto de resolución de las 24 Potencias. El 31 de octubre, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Uruguay, países a los que más tarde se sumó México, presentaron una enmienda en virtud de la cual, en su forma revisada ulteriormente, la Asamblea recomendaría que los Estados interesados, especialmente aquellos que eran miembros de la Comisión de Desarme, estudiaran la posibilidad de destinar, de los fondos disponibles como consecuencia del desarme, recursos adicionales al mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente en los países menos desarrollados.

El 1º de noviembre, la India propuso las siguientes enmiendas al proyecto de resolución de las 24 Potencias: 1) añadir un nuevo párrafo al preámbulo que recordara la resolución 808 (IX) de la Asamblea General del 4 de noviembre de 1954; 2) modificar el párrafo 1 de la parte dispositiva y añadirle un nuevo inciso b) a fin de instar a la Subcomisión a conceder prioridad a la conclusión de un acuerdo sobre la suspensión de las pruebas de armas nucleares y al nombramiento de especialistas científicos y técnicos que representasen las opiniones divergentes para que hiciesen recomendaciones sobre el sistema de control e inspección mencionado en el inciso a); 3) agregar un nuevo texto como párrafo 2 de la parte dispositiva y un inciso a) instando a la Subcomisión a que inmediatamente conviniera en principio e hiciera recomendaciones sobre la "abstención del uso de armas nucleares y termonucleares con miras a la eventual eliminación de tales armas". Los incisos b) a f) del párrafo 1 de la parte dispositiva se convertirían en los incisos b) a f) del párrafo 2.

El 4 de noviembre, Noruega y Pakistán presentaron una enmienda al proyecto conjunto de resolución de las 24 Potencias proponiendo que se añadieran dos nuevos párrafos, en virtud de los cuales la Asamblea General: 1) pediría a la Comisión de Desarme que invitara a su Subcomisión a emprender como una de sus primeras tareas, la constitución de un grupo o grupos de expertos técnicos encargados de estudiar sistemas de inspección para las medidas de desarme que la Subcomisión conviniese en principio y de presentarle un informe dentro de un plazo determinado; 2) recomendaría que tal grupo o grupos técnicos comprendieran un experto de cada uno de los Estados Miembros representados en la Subcomisión y un experto de cada uno de otros tres Estados Miembros que designaría el Secretario General en consulta con la Subcomisión.

El 24 de octubre Yugoslavia presentó un proyecto de resolución en virtud del cual la Asamblea General instaría a la Subcomisión a que procurara concertar un acuerdo sobre las cuestiones siguientes: 1) reducción de

las fuerzas armadas, los armamentos y los gastos militares; 2) medidas que contribuyeran a la cesación de la carrera de armamentos nucleares, por ejemplo, un compromiso formal de no proporcionar a otros países armas nucleares o materiales fisiónables para usos militares, la cesación de la producción de materiales fisiónables para usos relacionados con las armas y arreglos para destinar gradualmente los materiales fisiónables, que se estaban acumulando en la actualidad para usos militares, a fines no relacionados con las armas; 3) medidas para asegurar que los proyectiles intercontinentales y todos los demás dispositivos que permitieran el movimiento en el espacio cósmico se destinen exclusivamente a fines pacíficos y científicos; 4) medidas adecuadas y efectivas de fiscalización e inspección; 5) con carácter de prioridad, la cesación inmediata de las pruebas de armas nucleares y termonucleares, con las necesarias medidas de fiscalización.

En el debate, todos los representantes convinieron en que, si bien era de desear la conclusión de un amplio acuerdo general sobre el desarme, por el momento sólo era posible adoptar medidas iniciales. Los representantes que apoyaban el proyecto de resolución de las 24 Potencias opinaban que las seis medidas previstas en la propuesta de los países occidentales estaban claramente relacionadas entre sí y tenían que ser incluidas en un solo acuerdo. Otros, incluso los representantes de la India, Noruega, Pakistán, Siria y Suecia, señalaron que el desarme no era indivisible y que debía evitarse la actitud equivalente a "todo o nada". Los representantes que apoyaban el parecer de la URSS abogaron especialmente por una prohibición temporal del uso de las armas nucleares, la cesación de las pruebas con armas nucleares y el posible establecimiento de zonas de armamentos limitados. El representante de Polonia dijo que su país estaba dispuesto a prohibir en su territorio la producción y almacenamiento de armas nucleares a condición de que los dos Estados alemanes convinieran de adoptar medidas similares en los suyos. El representante de Checoslovaquia prometió lo mismo al apoyar dicha propuesta, que había sido objeto de consultas entre todos los Estados Partes en el Tratado de Varsovia. El representante de Irlanda abogó por una disposición que disminuyera la tirantez política en sus puntos de mayor peligro — Europa Central, el Cercano Oriente y el Lejano Oriente — para que pudieran desarrollarse con éxito las discusiones sobre el desarme. El representante de Israel reiteró una propuesta encaminada a una reglamentación regional de los armamentos en el Cercano Oriente, mediante acuerdo entre todos los Estados de la región y todos los Estados proveedores de armas.

El 6 de noviembre, al procederse a votación, la Primera Comisión decidió conceder prioridad al proyecto de resolución de las 24 Potencias. La primera enmienda presentada por la India, la enmienda presentada por Bolivia, Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay, y la enmienda presentada por Noruega y Pakistán fueron aprobadas. Las otras tres enmiendas presentadas por la India fueron rechazadas y el proyecto de resolución de las 24 Potencias quedó aprobado, con las enmiendas introducidas. El 14 de noviembre, la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión por 56 votos contra 9, y 15 abstenciones (resolución 1148 (II)).

El proyecto de resolución presentado por la URSS fué rechazado por la Primera Comisión, por 45 votos contra 11 y 25 abstenciones. El proyecto de resolución de la India y el proyecto de resolución de Yugoslavia

no fueron sometidos a votación a solicitud de sus autores.

ii) *Ampliación de la composición de la Comisión de Desarme y de su Subcomisión*

En el memorándum que acompañaba su petición de incluir este tema en el programa, la India señalaba la necesidad de adoptar medidas inmediatas para intensificar los esfuerzos de las Naciones Unidas encaminados a resolver el problema del desarme, y expresaba la opinión de que las discusiones de la Comisión de Desarme y de su Subcomisión serían más eficaces debido a la presencia de los países que, en virtud de su enfoque general de los problemas de la paz mundial, podrían encontrarse en condiciones de contribuir más directamente a la comprensión y al acuerdo entre las Potencias interesadas. El 25 de septiembre, la India presentó un proyecto de resolución conforme al cual la Asamblea General decidiría ampliar la composición de la Comisión de Desarme y de su Subcomisión.

En su memorándum del 20 de septiembre, la URSS señaló la necesidad de discutir la cuestión de invitar a un número mayor de Estados a participar en las negociaciones sobre el desarme y recomendó que todas las negociaciones sobre la cuestión del desarme que se celebraran dentro de las Naciones Unidas fuesen públicas. El 27 de octubre, la URSS presentó un proyecto de resolución proponiendo disolver la actual Comisión de Desarme y establecer una comisión permanente de desarme compuesta de todos los Miembros de las Naciones Unidas. Las reuniones de la Comisión serían públicas y el presidente y el vicepresidente quedarían encargados de dirigir las labores ordinarias de la Comisión. La URSS aceptó una enmienda de la RSS de Ucrania (presentada el 6 de noviembre), conforme a la cual la Asamblea transmitiría a la comisión permanente todas las propuestas concernientes al desarme que le fuesen presentadas durante el duodécimo período de sesiones. El 6 de noviembre, al procederse a votación en la Primera Comisión, el proyecto de resolución de la India, a solicitud del representante de ese país, no fué sometido a votación. El proyecto de resolución presentado por la URSS, con la enmienda introducida, fué rechazado por 51 votos contra 9 y 12 abstenciones.

El 14 de noviembre el Canadá y Japón presentaron en sesión plenaria un proyecto de resolución conforme al cual, en su forma revisada ulteriormente y patrocinada además por la India, Paraguay, Suecia y Yugoslavia, la Asamblea General decidiría ampliar la Comisión de Desarme incluyendo en ella a los 14 Estados siguientes para 1958: Argentina, Australia, Bélgica, Birmania, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, India, Italia, México, Noruega, Polonia, Túnez y Yugoslavia. El 19 de noviembre, Albania presentó una enmienda encaminada a añadir a la Comisión los siguientes Estados: Austria, Bulgaria, Ceilán, Finlandia, Indonesia, Rumania y Sudán. El representante de la URSS, que en la Primera Comisión había manifestado que la Unión Soviética no participaría ya en la labor de la Comisión de Desarme o de su Subcomisión tal como estaban entonces integradas, declaró en la Asamblea que en el caso de adoptarse la enmienda propuesta por Albania la URSS participaría en la labor de la Comisión.

El 19 de noviembre, la Asamblea General rechazó primero un proyecto de resolución presentado por la URSS que había sido presentado de nuevo después de ser rechazado en la Primera Comisión. Después de rechazar la enmienda de Albania al proyecto de resolu-

ción de las seis Potencias, del cual Yugoslavia se había separado como patrocinador, la Asamblea aprobó ese proyecto de resolución por 60 votos contra 9 y 11 abstenciones (resolución 1150 (XII)).

iii) *Acción colectiva de información para que los pueblos conozcan los peligros de la carrera de armamentos y especialmente los efectos destructores de las armas modernas*

Junto con su solicitud de inclusión de este tema en el programa, Bélgica presentó el 12 de agosto de 1957 un proyecto de resolución conforme al cual, en su forma revisada ulteriormente, la Asamblea General pediría a la Comisión de Desarme que formulara recomendaciones sobre la clase de información que debería difundirse respecto de los peligros de la carrera de armamentos y pediría al Secretario General que informara a dicha Comisión sobre los medios que habrían de aplicarse para llevar a cabo tal acción internacional.

Durante el debate en la Primera Comisión, el representante de Bélgica señaló que esa campaña internacional de publicidad sería dirigida bajo los auspicios de las Naciones Unidas y sin tener en cuenta consideraciones ideológicas y políticas. Muchos representantes alabaron el proyecto de resolución de Bélgica considerándolo constructivo y destinado a aumentar la comprensión del público respecto de la urgente necesidad de llegar a un acuerdo sobre el desarme. El representante de Polonia declaró que la campaña de publicidad sugerida por Bélgica debería reflejar la política de las Naciones Unidas sobre el desarme y presentar los diversos aspectos del problema en sus verdaderas proporciones. Consiguientemente presentó dos enmiendas al proyecto de resolución de Bélgica. En la segunda enmienda se proponían cambios de redacción en el proyecto de resolución y fué aceptada por Bélgica. En la primera enmienda se proponía modificar el preámbulo del proyecto de resolución poniendo de relieve la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre la reducción de los armamentos y la prohibición de producir y emplear armas atómicas, y la urgente necesidad de suspender a la mayor brevedad posible las pruebas con armas nucleares.

El 6 de noviembre, la Primera Comisión rechazó la enmienda de Polonia y aprobó el proyecto de resolución revisado de Bélgica. El 14 de noviembre, la Asamblea General aprobó la resolución recomendada por la Primera Comisión por 71 votos contra 9 y 1 abstención (resolución 1149 (XII)).

iv) *Cesación, bajo control internacional, de los experimentos con armas atómicas y de hidrógeno*

Junto con su solicitud de incluir en el programa un tema separado concerniente a la cesación de los experimentos con armas atómicas y de hidrógeno, la URSS presentó, el 20 de septiembre, un proyecto de resolución conforme al cual la Asamblea General invitaría a los Estados que realizaran experimentos con armas atómicas y de hidrógeno a que concertasen inmediatamente un acuerdo sobre la cesación de tales experimentos por un período de dos o tres años a partir del 1° de enero de 1958. El cumplimiento del acuerdo sería fiscalizado por una comisión internacional que informaría al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General. Bajo la dirección de la comisión se establecerían puestos de control en el territorio de la URSS, los Estados Unidos, el Reino Unido y sus posesiones y en la región del Océano Pacífico, incluso Australia.

El 23 de septiembre, el Japón presentó un proyecto de resolución por el cual la Asamblea General: 1) pediría a la Comisión de Desarme que recomendara a su Subcomisión que siguiera esforzándose por llegar sin demora a un acuerdo, particularmente sobre las medidas iniciales de desarme incluso el sistema de inspección destinado a asegurar la prohibición de fabricar armas atómicas y a evitar ataques por sorpresa; 2) invitaría a los Estados Miembros interesados: a) a suspender todas las explosiones nucleares experimentales desde el momento en que se llegara a un acuerdo de principio sobre el sistema de fiscalización e inspección necesario para comprobar la suspensión de las pruebas y hasta la conclusión de los debates sobre el informe de la Comisión de Desarme en el décimotercer período de sesiones de la Asamblea General; b) a emprender negociaciones inmediatamente después de iniciada la suspensión de las pruebas con el fin de llegar a un acuerdo sobre el establecimiento del sistema de fiscalización necesario para comprobar la suspensión de las pruebas.

El 24 de septiembre, la India presentó un proyecto de resolución conforme al cual, en su forma revisada ulteriormente, la Asamblea General: 1) pediría a los Estados interesados que convinieran en el nombramiento de una comisión científica y técnica compuesta de especialistas científicos y técnicos que representasen las opiniones divergentes, así como de otros eminentes especialistas científicos y técnicos aceptados de común acuerdo por dichos representantes; 2) pediría a la mencionada comisión que recomendara a la Comisión de Desarme un sistema adecuado de medidas para efectuar inspecciones en todos los territorios del mundo donde fuese necesario, a fin de fiscalizar y hacer efectiva la suspensión de las pruebas; 3) exhortaría a los Estados interesados a que conviniesen sin demora en suspender las pruebas con armas nucleares; y 4) invitaría a todos los Estados Miembros a comunicar a la comisión científica todo indicio que llegase a su conocimiento de explosiones nucleares.

Durante el debate se convino, en general, que era deseable suspender las pruebas con armas nucleares. Algunos representantes, incluso los de Egipto, India, Japón, México, Nepal, Suecia, la URSS y Yugoslavia, insistieron en la urgencia de la cuestión y señalaron que una cesación de las pruebas podría ser una primera medida que facilitara la conclusión de otros acuerdos sobre el desarme. Los representantes del Ecuador, Estados Unidos, Francia, Israel, Noruega, los Países Bajos, Pakistán, Reino Unido y otros, opinaron que una cesación de las pruebas no constituía el desarme en sí y mantuvieron que éste debía vincularse a otras medidas que permitieran terminar la carrera de armamentos nucleares, especialmente la producción de armas nucleares.

El 6 de noviembre, al procederse a votación en la Primera Comisión, el proyecto de resolución de la URSS a solicitud de su autor, no fué sometido a votación. Los proyectos de resolución presentados por la India y el Japón fueron rechazados. En la Asamblea General, la India volvió a presentar su proyecto de resolución, que fué rechazado de nuevo el 19 de noviembre, por 34 votos contra 24 y 20 abstenciones.

d) OTROS ACONTECIMIENTOS

Debido a su constante preocupación frente al estancamiento a que se había llegado en las negociaciones internacionales para resolver los problemas del desarme, los gobiernos y el Secretario General continuaron durante

el primer semestre de 1958 examinando distintas posibilidades incluso las indicadas en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones. No obstante no se reunió la Comisión de Desarme ni su Subcomisión ni se elaboró de común acuerdo ningún otro medio de reanudar la discusión. El 14 de marzo de 1958, del Ministro de Relaciones Exteriores de la URSS formuló una declaración en la que reiteraba la posición de ese país con respecto a su participación en la labor de la Comisión de Desarme, y en la que la URSS instaba nuevamente, como lo había hecho del 10 al 14 de diciembre de 1957 en mensajes dirigidos a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y al Secretario General, a que se celebrara una conferencia de jefes de gobierno para examinar diversas cuestiones de carácter internacional, incluso el problema del desarme. Durante el período que se examina los gobiernos han continuado sus discusiones con respecto a esa conferencia.

El 12 de enero y el 15 de febrero, en sendos mensajes dirigidos al Primer Ministro de la URSS, el Presidente de los Estados Unidos sugirió que el espacio ultraterrestre debía utilizarse exclusivamente con fines pacíficos, mediante acuerdo internacional. El 15 de marzo la URSS propuso oficialmente que en el programa provisional del décimotercer período de sesiones de la Asamblea General se incluyera un tema titulado "Prohibición del uso del espacio cósmico para fines militares, eliminación de las bases militares extranjeras situadas en el territorio de otros países y cooperación internacional para el estudio del espacio cósmico".

El 3 de abril la URSS transmitió a las Naciones Unidas el texto de un Decreto del Consejo Supremo de ese país concerniente a la cesación unilateral, por la URSS, de los experimentos con armas atómicas y de hidrógeno y en el que se formulaba un llamamiento a otros Estados que poseían armas nucleares para que adoptaran medidas análogas.

2. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

a) ACUERDO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA)

Por resolución 1115 (XI), del 11 de enero de 1957, la Asamblea General autorizó al Comité Consultivo para la utilización de la energía atómica con fines pacíficos a negociar con la Comisión Preparatoria del OIEA un proyecto de acuerdo sobre las relaciones entre las Naciones Unidas y el Organismo. El proyecto del acuerdo convenido fué sometido a la aprobación de la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones y a la Conferencia General del OIEA en su primer período de sesiones.

El 23 de octubre de 1955, el Director General Interino del OIEA anunció al Secretario General que ese día la Conferencia General del Organismo había aprobado el Acuerdo sobre las relaciones entre las Naciones Unidas y el OIEA. La Junta de Gobernadores del Organismo había hecho lo mismo anteriormente y había recomendado la aprobación del Acuerdo por parte de la Conferencia General.

El 14 de noviembre de 1957 la Asamblea General adoptó una resolución por la que aprobaba el Acuerdo sobre las relaciones entre las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía Atómica (resolución 1145 (XII)). En esa misma sesión la Asamblea

General aprobó una resolución por la que autorizaba al OIEA a solicitar de la Corte Internacional de Justicia opiniones consultivas (resolución 1146 (XII)) y el 13 de diciembre de 1957 otra resolución por la que aprobaba el ingreso del Organismo a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (resolución 1201 (XII)).

b) ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

El primer período de sesiones de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica se convocó en Viena el 1° de octubre de 1957, y la Junta de Gobernadores creada por dicha Conferencia inició sus sesiones el 3 de octubre. La Conferencia y la Junta de Gobernadores basaron su labor en los informes presentados por la Comisión Preparatoria de 18 naciones que había celebrado sus sesiones en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, y más tarde en Viena, desde su creación por la Conferencia sobre el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica en octubre de 1956. Entre los principales temas examinados por la Conferencia General figuraron la aprobación del programa y el presupuesto del Organismo en su primer año, la aprobación del Acuerdo sobre las relaciones entre las Naciones Unidas y el OIEA, la elección de Viena como sede permanente del Organismo y el nombramiento del Sr. W. Sterling Cole como Director General del Organismo por un período de cuatro años.

c) SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ATÓMICA CON FINES PACÍFICOS

En cumplimiento de la resolución 912 (X) del 3 de diciembre de 1955, en junio de 1957 se enviaron invitaciones a los Miembros de las Naciones Unidas, a los miembros de los organismos especializados y a estos últimos a participar en el segundo período de sesiones de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos que había de celebrarse en Ginebra del 1° al 13 de septiembre de 1958. Junta con la invitación se envió un programa provisional, redactado previa consulta con el Comité Consultivo para la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, y además el reglamento de la Conferencia.

Los preparativos para la Conferencia se iniciaron en noviembre de 1957 bajo la dirección del Secretario General de la Conferencia, Dr. Sigvard Eklund. La presentación de unos 2.300 trabajos da idea del alcance de la Conferencia. Además se han adoptado medidas para organizar una amplia exposición científica en la que participarán 21 gobiernos y para la cual se ha construido un edificio especial provisional en el terreno del Palais des Nations, en Ginebra. La Conferencia funcionará en sesiones generales y en cinco sesiones técnicas simultáneas. Se calcula que las actas de la Conferencia llenarán 33 volúmenes impresos.

3. Efecto de las radiaciones atómicas

a) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DUODÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

El 12 de julio de 1957 Checoslovaquia solicitó que, en el programa provisional del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General, se incluyera el tema titulado "Efectos de las radiaciones atómicas", y el 26

de agosto presentó un memorándum explicativo. El 20 de septiembre la Asamblea decidió incluir este tema en su programa y la cuestión fué examinada por la Primera Comisión en cinco sesiones celebradas entre el 7 y el 11 de noviembre.

El representante de Checoslovaquia declaró que los hombres de ciencia estaban de acuerdo en que la radiactividad por la utilización de la energía atómica con fines pacíficos podía ser controlada, pero que en cambio la derivada de las explosiones nucleares y experimentales de las armas de hidrógeno no podía serlo. Dijo que la existencia del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas demostraba que las Naciones Unidas habían comprendido la necesidad de contar con una evaluación científica de los efectos de las radiaciones atómicas. Ahora, como resultado del aumento constante en los niveles de radiación, era necesario completar el trabajo de ese Comité con las opiniones de los hombres de ciencia de todas partes del mundo. Por esas razones Checoslovaquia presentó un proyecto de resolución por el que recomendaba que, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se reuniese una conferencia científica sobre los efectos de las radiaciones atómicas y en el que se pedía además al Comité Científico: 1) que estableciese una estrecha cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica; 2) que preparase informes resumidos anuales sobre el nivel de las radiaciones ionizantes en el mundo y sobre los efectos de la radiación; y 3) que indicase otros terrenos de investigación que pudiesen requerir mayor estudio.

El 8 de noviembre presentaron otro proyecto de resolución los siguientes países: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suecia, a los cuales se sumó México el 11 de noviembre para presentar un texto revisado. En virtud de dicho proyecto la Asamblea General: invitaba a todos los interesados a que continuasen prestando su concurso facilitando información sobre cuestiones comprendidas dentro de la esfera de competencia del Comité Científico; 2) pedía a éste que terminase su informe lo antes posible y lo pusiese a disposición de todos los Miembros de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y de la segunda Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos; y 3) decidía incluir en el programa de su décimotercer período de sesiones el informe del Comité Científico.

Los representantes de los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido hablaron en apoyo del proyecto presentado por las nueve Potencias. El representante de los Estados Unidos resumió la posición de su Gobierno en los siguientes términos: las pruebas con armas nucleares eran una de las obligaciones impuestas a los Estados Unidos por el esfuerzo que desarrollaban para proporcionar una poderosa arma defensiva para sí mismos y para otros países que contaban con ellos para su seguridad; su Gobierno tenía pleno conocimiento de que existía cierta contaminación atmosférica derivada de todas las pruebas nucleares. Por lo tanto, debido a que existía preocupación por ese hecho, los Estados Unidos deseaban que se suspendiesen las pruebas en la única forma que no pusiese en peligro la defensa de los países libres, es decir, como parte de una primera etapa de un programa de desarme general. En sus actuales actividades experimentales, los Estados Unidos progresaban en el desarrollo de armas nucleares que producían mucho menos precipitación radiactiva y las pruebas con armas

nucleares eran sólo una fuente menor de la radiación ionizante peligrosa para los seres humanos.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al hablar en defensa de la posición de Checoslovaquia, señaló que era muy peligroso restar importancia al aumento de la radiactividad del medio ambiente resultante de las explosiones con armas nucleares.

Japón presentó dos enmiendas al proyecto de resolución de las nueve Potencias. Por la primera, la Asamblea General pediría que se incluyera también información sobre los niveles de radiación natural del medio ambiente, la exposición debida a los usos industriales de fuentes de radiaciones y la contaminación del medio ambiente por la radiactividad artificial, inclusive la resultante de las explosiones nucleares experimentales y de los desechos radiactivos industriales. En la segunda enmienda del Japón se pedía al Secretario General que estudiase la necesidad de reforzar las atribuciones del Comité Científico y el método para hacerlo.

El representante de la India opinó que convendría disponer de un texto técnico que expresara todas las ideas enunciadas por las dos principales tendencias con respecto al problema de la radiación, y dijo que se podría al mismo tiempo ampliar las atribuciones del Comité Científico.

El 11 de noviembre la India presentó un proyecto de resolución auspiciado también por Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, Estados Unidos, Francia, India, Japón, México, Polonia, Reino Unido, Suecia y Yugoslavia. En virtud del mismo la Asamblea General: 1) invitaría a todos los interesados a que continuasen prestando su concurso facilitando información sobre cuestiones comprendidas dentro de la esfera de competencia del Comité Científico; 2) pediría al Comité Científico que terminase su informe lo antes posible; 3) pediría al Secretario General que, en consulta con dicho Comité, considerase la cuestión de la intensificación y ampliación de las actividades científicas en este campo, y que informase a la Asamblea General en su décimotercer período de sesiones; 4) decidiría incluir en el programa de su décimotercer período de sesiones el informe del Comité Científico; y 5) transmitiría al Comité las actas de los debates de la Primera Comisión sobre el tema.

El proyecto de resolución de las 16 Potencias fué aprobado por unanimidad por la Primera Comisión el 11 de noviembre. Anteriormente los autores de los otros proyectos de resolución habían declarado que no insistirían en que los mismos fuesen sometidos a votación.

El proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión fué aprobado por unanimidad en una sesión plenaria celebrada el 14 de noviembre (resolución 1147 (XII)).

b) COMITÉ CIENTÍFICO PARA EL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LAS RADIACIONES ATÓMICAS

En el período que se examina, el Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas celebró su cuarto período de sesiones del 27 de enero al 28 de febrero de 1958. En ese período el Comité examinó un proyecto del informe general a la Asamblea General. El proyecto fué discutido detenidamente por grupos de trabajo especializados del Comité que introdujeron nuevos cambios. El Comité aprobó la versión final del informe el 13 de junio de 1958, en su quinto período de sesiones, para presentarlo a la Asamblea General. En el quinto período de sesiones, cele-

brado del 9 al 13 de junio de 1958, el Comité eligió al Profesor Rolf Sievert, de Suecia, como Presidente y al Dr. V. R. Khanolkar, de India, como Vicepresidente.

El informe del Comité representa un examen amplio de los datos que hoy se poseen con respecto a los niveles de radiación y a las radiaciones ionizantes que reciben el hombre y el ambiente en que vive, y los efectos que pueden tener esas radiaciones incluyendo además información sobre investigaciones de interés. El informe va acompañado de anexos técnicos importantes que sirven de base a sus conclusiones.

El Comité ha continuado distribuyendo muestras normales de materiales que contienen estroncio-90 a los países (en la actualidad 26) que las han solicitado para calibrar la medición de la precipitación radiactiva.

4. Declaración sobre la coexistencia pacífica de los Estados

El 20 de septiembre de 1957 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pidió que en el programa del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General se incluyese el tema "Declaración sobre la coexistencia pacífica de los Estados". En un memorándum explicativo se declaraba que la política de "posición de fuerza" que practicaban algunas Potencias occidentales y las tentativas sistemáticas de esos Estados de imponer su voluntad, mediante medidas militares, a varios países de África y del Cercano Oriente, habían dividido a los Estados en grupos militares opuestos, habían perturbado las relaciones económicas y culturales entre los Estados y habían aumentado la amenaza de una nueva guerra mundial. Por consiguiente, la complicada situación internacional a que se había llegado exigía la adopción de medidas efectivas respecto a la cesación de la carrera de armamentos y el fomento de la cooperación pacífica. El reconocimiento explícito, por parte de algunos países, de ciertos principios de coexistencia pacífica, tales como los expresados en Bandung, ejercía una influencia favorable en las relaciones entre esos países.

Al memorándum se acompañaba un proyecto de resolución en virtud del cual la Asamblea General: 1) considerando que uno de los propósitos más importantes de las Naciones Unidas era consolidar la paz mundial y fomentar las relaciones amistosas entre los Estados independientemente de su régimen social; 2) tomando nota con satisfacción de que, recientemente, muchos Estados habían comenzado a basar sus relaciones con otros Estados, en los principios de a) respeto mutuo a la integridad territorial y soberanía; b) no agresión; c) no intervención en asuntos internos bajo ningún motivo de carácter económico, político o ideológico; d) igualdad y provecho mutuo y e) coexistencia pacífica; 3) reconociendo que la aplicación de estos principios a las relaciones entre todos los Estados contribuiría excepcionalmente a disminuir la tirantez internacional y fomentaría la cooperación internacional; 4) instaba a los Estados a que orientasen sus relaciones teniendo en cuenta los principios mencionados y a que dirimiesen todas las controversias que surgieran entre ellos exclusivamente por medios pacíficos.

El 1° de octubre la Asamblea decidió incluir el tema en su programa remitiéndolo a la Primera Comisión, la cual lo examinó en seis sesiones celebradas entre el 12 y el 14 de diciembre.

Además del proyecto de resolución de la URSS, la Comisión tuvo ante sí un proyecto de resolución presentado por la India, Suecia y Yugoslavia, y relativo

a las relaciones pacíficas y de buena vecindad entre los Estados. En virtud de dicho proyecto la Asamblea General: 1) considerando la urgencia e importancia de fortalecer la paz internacional y de fomentar relaciones pacíficas y de buena vecindad entre los Estados, con abstracción de sus divergencias o del grado relativo del carácter de su desarrollo político, económico y social; 2) recordando que entre los objetivos fundamentales de la Carta figuraban el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la cooperación amistosa entre los Estados; 3) reconociendo la necesidad de promover esos objetivos y de fomentar entre los Estados relaciones pacíficas y de tolerancia, en conformidad con la Carta, basadas en el respeto y beneficio mutuos, la no agresión, el mutuo respeto de la soberanía, igualdad e integridad territorial y la no intervención en los respectivos asuntos internos, y de cumplir los propósitos y principios de la Carta, y 4) reconociendo la necesidad de ampliar la cooperación internacional, reducir la tirantez y resolver las diferencias y controversias por medios pacíficos, 5) exhortaría a todos los Estados a hacer cuanto estuviera a su alcance para fortalecer la paz internacional, fomentar las relaciones de amistad y cooperación y resolver sus controversias por medios pacíficos como se prescribía en la Carta y se consignaba en el proyecto de resolución.

El 14 de diciembre de 1957, atendiendo a una petición del representante de la India y contando con el consentimiento del representante de la URSS, se dió prioridad al proyecto de las tres Potencias que fué aprobado. Después el representante de la URSS anunció que no insistiría en que fuera puesto a votación el proyecto de resolución presentado por su delegación.

Ese mismo día la Asamblea General aprobó por 77 votos contra ninguno y 1 abstención el proyecto de resolución recomendado por la Comisión (resolución 1236 (XII)).

5. Denuncia formulada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas titulada: "Medidas urgentes destinadas a poner fin a los vuelos efectuados por aeronaves militares de los Estados Unidos armadas con bombas atómicas y de hidrógeno hacia las fronteras de la Unión Soviética"

El 18 de abril de 1958 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad para considerar esta cuestión, que fué examinada por el Consejo el 21 de abril y en otras cuatro sesiones celebradas el 29 de abril y el 2 de mayo.

El 21 de abril el representante de la URSS presentó un proyecto de resolución por el cual el Consejo, considerando que vuelos como los mencionados en el punto en debate eran causa de tirantez internacional, constituían una amenaza para la seguridad internacional, y podían conducir al quebrantamiento de la paz mundial y desencadenar una guerra atómica, exhortaría a los Estados Unidos a poner fin al envío de aeronaves militares hacia las fronteras de otros Estados con el propósito de amenazar la seguridad de esos Estados o de hacer demostraciones de poderío militar.

El representante de los Estados Unidos, al rechazar la denuncia de la URSS, declaró que los vuelos efectuados por aeronaves del Mando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos, cuidadosamente fiscalizados, sólo

podían ser considerados como medidas indispensables de legítima defensa para protegerse contra la posibilidad de un ataque por sorpresa. Las rutas y los procedimientos utilizados habían sido elegidos de manera que en modo alguno podían causar accidentalmente una guerra. Los representantes de Canadá, Colombia, China, Francia, Irak, Japón, Panamá y el Reino Unido hablaron también en contra del proyecto de resolución.

El representante de la URSS propuso primero que se levantase la sesión hasta la tarde siguiente, y luego, hasta el día siguiente por la mañana. Después que ambas mociones fueron rechazadas, el representante de la URSS retiró su proyecto de resolución como un acto de protesta contra el procedimiento utilizado.

En la sesión siguiente celebrada el 28 de abril, los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución en virtud del cual el Consejo, a) habiendo considerado nuevamente el punto propuesto por la URSS, b) observando que, particularmente en la Unión Soviética y en los Estados Unidos, había aumentado el poder de realizar un ataque en masa por sorpresa, c) considerando que la aplicación de medidas que eliminasen todo temor ante ataques de ese tipo contribuiría a reducir la tirantez y fomentar la confianza entre los Estados, d) tomando nota de las declaraciones formuladas por ciertos miembros del Consejo con respecto a la importancia particular que tiene la zona ártica: 1) recomendaría el pronto establecimiento de la zona septentrional de inspección internacional contra esos ataques examinada por la Subcomisión de Desarme de las Naciones Unidas en agosto de 1957; y 2) invitaría al Canadá, Francia, la URSS, el Reino Unido y los Estados Unidos, junto con Dinamarca y Noruega y a cualquier otro Estado que tuviere parte de su territorio al norte del Círculo Ártico y que deseara incluir ese territorio en la zona de inspección internacional, a que nombrasen en seguida representantes para participar inmediatamente en discusiones a fin de llegar a un acuerdo sobre las medidas técnicas necesarias.

El representante de Suecia apoyó el proyecto de resolución de los Estados Unidos, pero presentó una enmienda para agregar un párrafo en virtud del cual el Consejo expresaría la opinión de que esos debates podrían servir adecuadamente de base para entablar negociaciones sobre el problema del desarme en la conferencia cumbre, para cuya convocatoria se habían iniciado ya conversaciones.

Ese mismo día la URSS presentó un segundo proyecto de resolución, idéntico al que había retirado previamente salvo un nuevo párrafo final por el cual el Consejo, teniendo en cuenta la necesidad de adoptar, lo antes posible, medidas para evitar la amenaza de una guerra atómica y disminuir la tirantez internacional, tomaría nota con satisfacción de que ya se habían iniciado conversaciones preliminares entre los Estados interesados a fin de convocar una conferencia cumbre para discutir varios problemas urgentes incluso la cuestión de preparar medidas destinadas a evitar el peligro de un ataque por sorpresa, y expresaría la esperanza de que la conferencia cumbre sería convocada a la mayor brevedad posible.

Los representantes de Canadá, China, Francia, Irak, Japón, Panamá, y el Reino Unido formularon declaraciones en contra del proyecto de resolución de la URSS y a favor del proyecto de resolución de los Estados Unidos. También el Secretario General hizo una declaración en la que recordó, en primer lugar, que en una

oportunidad anterior¹ había expresado la opinión de que no sólo tenía el derecho sino el deber de intervenir si, a su juicio, podía contribuir a promover los propósitos de la Organización y los principios de la Carta, y, en segundo lugar, que en una reciente conferencia de prensa había encontrado razones para apoyar la decisión de la Unión Soviética de suspender unilateralmente los experimentos con bombas atómicas. Al hacerlo se había guiado exclusivamente por la influencia que, a su juicio, podría tener esa medida sobre el estancamiento a que se había llegado en los debates acerca del desarme, causado fundamentalmente por la falta de confianza que padecía toda la humanidad. Con ese mismo espíritu y por las mismas razones deseaba ahora aplaudir la iniciativa de los Estados Unidos al presentar una propuesta que podría acabar con el estancamiento mediante un sistema limitado de inspección. Confiaba en que su intervención no sería interpretada como un acto partidista, sino simplemente como una expresión de los profundos sentimientos que imperaban en todo el mundo y que tenían derecho a ser escuchados también en el Consejo, al margen de la política de cualquier gobierno.

El 2 de mayo los Estados Unidos incorporaron la enmienda de Suecia a su proyecto de resolución, pero, previo consentimiento del representante de Suecia, cambiaron las palabras "la conferencia cumbre" por las palabras "una conferencia cumbre".

Ese mismo día el Consejo de Seguridad sometió a votación los proyectos de resolución. El proyecto de los Estados Unidos, con la enmienda introducida, obtuvo 10 votos a favor y 1 en contra (URSS) y no fué aprobado por ser el voto en contra el de un miembro permanente del Consejo. El proyecto de resolución de la URSS fué rechazado luego por 9 votos contra 1 (URSS) y 1 abstención (Suecia).

6. Admisión de nuevos miembros

a) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD

El 31 de agosto de 1957, la Federación Malaya presentó su solicitud de admisión en las Naciones Unidas, y el 5 de septiembre de 1957 el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad el proyecto de resolución presentado por Australia y el Reino Unido en el que se recomendaba la admisión de dicho Estado.

El 9 de septiembre de 1957 el Consejo de Seguridad examinó, con el título de "Admisión de nuevos Miembros", las resoluciones 1017 A y B (XI) del 28 de febrero de 1957, relativas a las solicitudes de admisión de la República de Corea y de Viet-Nam, y comunicaciones con respecto a la solicitud de la República Popular Mogola.

Un proyecto de resolución presentado por Australia, Colombia, Cuba, China, Estados Unidos, Filipinas, Francia, el Reino Unido, por el que se recomendaba la admisión de la República de Corea, obtuvo 10 votos a favor y 1 en contra (URSS) y fué rechazado por ser el voto en contra el de un miembro permanente del Consejo. Anteriormente había sido rechazada por 9 votos contra 1 (URSS) y 1 abstención (Suecia), una enmienda a ese proyecto de resolución presentada por la URSS, en virtud de la cual el Consejo recomendaba que se admitiesen al mismo tiempo a la República Popular Democrática de Corea y a la República de Corea.

¹ Véase *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, undécimo año, 751a. sesión, párrs. 1 a 6.*

Una moción de la URSS para que se aplazase el examen de la solicitud de Viet-Nam hasta lograr la unificación de ese país fué rechazada por 10 votos en contra y 1 a favor (URSS), después de lo cual, un proyecto de resolución presentado por las mismas ocho Potencias por el que se recomendaba la admisión de Viet-Nam, obtuvo 10 votos a favor y 1 en contra (URSS), y fué rechazado por ser el voto en contra el de un miembro permanente del Consejo.

Un proyecto de resolución de la URSS por el que se recomendaba la admisión de la República Popular Mogola fué rechazado por 5 votos contra 2 (Suecia, URSS) y 4 abstenciones (Australia, Francia, Irak, Reino Unido).

b) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DUODÉCIMO PERÍODO DE SESIONES

El 17 de septiembre la Asamblea General examinó la recomendación del Consejo de Seguridad relativa a la admisión de la Federación Malaya y decidió por unanimidad admitir a ese país como miembro de las Naciones Unidas.

El 20 de septiembre de 1957 la Asamblea General remitió la cuestión titulada "Admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas" a la Comisión Política Especial, que la examinó en seis sesiones celebradas entre el 10 y el 17 de octubre de 1957.

La Comisión tuvo ante sí tres proyectos de resolución. El primero fué presentado por Australia, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Irak, Italia, Japón, Nueva Zelandia, Países Bajos y Reino Unido. En virtud del mismo la Asamblea General, recordando anteriores resoluciones, en las que había declarado que la República de Corea reunía las condiciones requeridas para ser admitida como Miembro de las Naciones Unidas, y advirtiéndole con pesar que el Consejo de Seguridad se veía en la imposibilidad de recomendar la admisión de la República de Corea a causa del voto negativo de un miembro permanente del Consejo, reiteraba que la República de Corea reunía todas las condiciones para ser admitida como Miembro de las Naciones Unidas y que debería admitírsela. Este proyecto de resolución fué aprobado por 51 votos contra 9 y 20 abstenciones.

El segundo proyecto de resolución, presentado por las mismas 13 Potencias, que formulaba una declaración similar con respecto a Viet-Nam, fué aprobado por 49 votos contra 9 y 22 abstenciones.

El tercer proyecto de resolución, presentado por la India e Indonesia, preveía que la Asamblea General, considerando que la cuestión de la admisión de nuevos Miembros exigía un nuevo examen, 1) decidía transmitir al Consejo de Seguridad las propuestas presentadas en el duodécimo período de sesiones, y 2) pedía al Consejo de Seguridad que examinase todas las solicitudes de admisión de nuevos Miembros.

El párrafo 2 de la parte dispositiva de este proyecto fué rechazado por 33 votos contra 30 y 15 abstenciones. El proyecto de resolución en su totalidad, con las enmiendas introducidas, fué rechazado por 37 votos contra 33 y 10 abstenciones.

El 25 de octubre la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución recomendado por la Comisión Política Especial relativo a la República de Corea, por 51 votos contra 9 y 21 abstenciones, y el relativo al Viet-Nam por 49 votos contra 9 y 23 abstenciones (resoluciones 1144 A y B (XII)).

7. La cuestión de Hungría

a) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL AL REANUDAR SU UNDÉCIMO PERÍODO DE SESIONES

El 10 de septiembre de 1957, de conformidad con la resolución 1119 (XI) del 8 de marzo de 1957, la Asamblea General reanudó su undécimo período de sesiones para proseguir el examen de la cuestión de Hungría. La Asamblea celebró nueve sesiones plenarias del 10 al 14 de septiembre.

Los representantes de Hungría y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como otros representantes, protestaron contra la reanudación del debate sobre cuestiones que a su juicio eran esencialmente de la jurisdicción interna de Hungría, y también contra el informe de la Comisión Especial para el Problema de Hungría, creada por la Asamblea General en conformidad con la resolución 1132 (XI) del 10 de enero de 1957.

Además del informe de dicha Comisión, la Asamblea consideró un proyecto de resolución presentado por 37 Miembros. En virtud de éste y entre otras cosas, la Asamblea General, habiendo recibido ya el informe unánime de la Comisión Especial, y lamentando que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y las actuales autoridades de Hungría no hubiesen prestado ninguna cooperación a la Comisión: 1) apoyaría el informe; 2) observaría que la Comisión había llegado a la conclusión de que los sucesos ocurridos en Hungría en octubre y noviembre de 1956 constituyeron un levantamiento nacional espontáneo; y 3) encontraría que las conclusiones de la Comisión basadas en el examen de todas las pruebas de que se disponía, confirmaban lo siguiente: a) que la URSS, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, había privado a Hungría de su libertad e independencia política y al pueblo húngaro, del ejercicio de sus derechos humanos fundamentales; b) que el régimen actual de Hungría había sido impuesto al pueblo húngaro por la intervención armada de la URSS; c) que la URSS había efectuado deportaciones en masa de ciudadanos húngaros al territorio de aquélla; d) que la URSS había violado las obligaciones que le correspondían según las Convenciones de Ginebra de 1949; y que las actuales autoridades de Hungría habían violado los derechos humanos y las libertades que garantizaba el Tratado de Paz con Hungría. La Asamblea, además: 1) condenaría esos actos y la continua inobservancia de sus resoluciones; 2) reiteraría su preocupación por el prolongado sufrimiento del pueblo húngaro; 3) exhortaría a la URSS y a las actuales autoridades de Hungría a que desistiesen de emplear medidas represivas contra el pueblo húngaro, respetasen la libertad e independencia política de Hungría y el goce por parte del pueblo húngaro de su libertad y de sus derechos humanos fundamentales y asegurasen el regreso a Hungría de los ciudadanos húngaros que habían sido deportados a la URSS; 4) solicitaría del Presidente de la Asamblea General en su undécimo período de sesiones, Príncipe Wan Wai-thayakon, que como representante especial de la Asamblea General sobre el problema de Hungría tomase las medidas que juzgara pertinentes, en vista de las conclusiones de la Comisión, para alcanzar los fines que perseguían las Naciones Unidas conforme a varias resoluciones de la Asamblea General, consultase con la Comisión, según fuere oportuno, e informase a la Asamblea General y sometiese a su consideración las recomenda-

ciones que estimara convenientes; y 5) decidiría incluir en el programa provisional del duodécimo período de sesiones el tema sobre Hungría.

Birmania presentó enmiendas a la parte dispositiva del proyecto de resolución encaminadas a agregar las palabras "sobre todo" en el párrafo que se refería a las conclusiones de la Comisión Especial con respecto a la naturaleza de los sucesos ocurridos en Hungría, a sustituir la palabra "Condena" por la palabra "Deplora", y a suprimir toda referencia a consultas entre el Presidente de la Asamblea General y la Comisión Especial.

El 14 de septiembre de 1957 las tres enmiendas presentadas por Birmania fueron rechazadas, respectivamente, por 40 votos contra 4 y 31 abstenciones, por 45 votos contra 2 y 30 abstenciones, y por 42 votos contra 3 y 32 abstenciones. El proyecto de resolución de las 37 Potencias fué aprobado por 60 votos contra 10 y 10 abstenciones (resolución 1133 (XI)).

b) INFORME DEL REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL

El 9 de diciembre de 1957, el Príncipe Wan Wai-thayakon, Representante Especial de la Asamblea General sobre el Problema de Hungría, informó a la Asamblea acerca de las medidas adoptadas en cumplimiento de lo solicitado en dicha resolución. El Representante Especial señaló que los objetivos que había tratado de alcanzar eran: 1) un trato humanitario en Hungría; 2) regreso a Hungría de las personas deportadas a la URSS; 3) retiro de las tropas soviéticas de Hungría; y 4) elecciones libres en Hungría. El 30 de septiembre se puso en comunicación con el Ministro de Relaciones Exteriores de la URSS e hizo un llamamiento a favor de un trato humanitario en Hungría. Se le contestó que este asunto no era de la incumbencia del Gobierno de la URSS. Hizo entonces un llamamiento para lograr el regreso a Hungría de las personas deportadas a la URSS. El Ministro de Relaciones Exteriores de la URSS replicó que las deportaciones eran una invención y que el tema relativo a Hungría constituía una intervención en los asuntos de la jurisdicción interna y era "ilegítimo", en consecuencia, no podía discutirlo.

El Representante Especial se dirigió en forma similar al Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, el 10 de octubre de 1957, haciéndole un llamamiento humanitario para que se diera un tratamiento más benévolo a los presos, a las personas detenidas en campos de concentración y a las personas que iban a ser sometidas a juicio, y para que en los procesos se siguieran los debidos procedimientos judiciales, para que se admitiera a los estudiantes en las universidades sin discriminación, etc., y por último para que se declarara una amnistía a favor de los delincuentes políticos. El Ministro de Relaciones Exteriores contestó que éstos eran asuntos que correspondía determinar al Gobierno de Hungría, en virtud de su derecho soberano. El Representante Especial observó que ello no impedía un intercambio de información y opiniones en las Naciones Unidas como centro armonizador de la conducta de las naciones. Por último, el Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría manifestó que si el Representante Especial redactaba un memorándum en el que se enumeraran las cuestiones sobre las cuales deseaba información, él suministraría esa información. El Representante Especial ofreció ir a Budapest para continuar allí las discusiones, pero se le respondió que como el Gobierno de Hungría no podía permitir a observadores

de las Naciones Unidas, no podía concederle un visado. Posteriormente, el 15 de noviembre y el 2 de diciembre, el representante de Hungría informó al Representante Especial que había recibido instrucciones de aceptar el memorándum de preguntas debido a que el Gobierno de Hungría no podía negociar sobre un asunto que correspondía a su jurisdicción interna.

Como no se había planteado ninguna cuestión relacionada directamente con la Comisión Especial, el Representante Especial señaló que no había tenido ocasión de celebrar consultas con ella. Deploraba no haber podido encontrar una oportunidad de establecer negociaciones. Sin embargo, no podía creer que los Gobiernos de Hungría y de la Unión Soviética pudiesen permanecer impasibles ante el clamor de la opinión pública mundial y de la conciencia de la humanidad. En consecuencia, esperaba que al disminuir la tirantez internacional, se le daría la oportunidad de prestar ayuda para establecer plena cooperación internacional encaminada a promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Hungría.

c) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DUODÉCIMO PERÍODO DE SESIONES

El 10 de diciembre, la Asamblea General examinó el informe de la Comisión de Verificación de Poderes, en la que ésta le informaba que, por 6 votos contra 1 y 4 abstenciones, había aprobado una moción presentada por los Estados Unidos al efecto de "que la Comisión no adoptara ninguna decisión sobre las credenciales presentadas en nombre de los representantes de Hungría". El representante de Hungría declaró que las credenciales de su delegación habían sido expedidas en conformidad con las disposiciones de la constitución húngara y del reglamento de la Asamblea General, por lo cual protestaba categóricamente contra lo que calificó de tentativa de discriminación e intervención por parte de los Estados Unidos. La Asamblea General aprobó el informe de la Comisión de Verificación de Poderes por 77 votos contra 1.

En la sesión de clausura del duodécimo período de sesiones, celebrada el 14 de diciembre de 1957, el Presidente, refiriéndose al informe del Representante Especial, expresó la esperanza de que las partes interesadas prestarían a dicho representante la necesaria cooperación al proseguir su labor en esa cuestión tan importante. En el curso del debate se aludió a los informes que daban cuenta de juicios seguidos contra las personas que habían participado en el levantamiento de 1956 en Hungría, y varios representantes opinaron que la Comisión Especial debía continuar su labor.

El 20 de diciembre de 1957, la Comisión Especial declaró que continuaría el examen de la situación en Hungría en cumplimiento del mandato que le confirió la Asamblea General. La Comisión dirigió una carta al Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, en la que expresaba su inquietud por las constantes noticias de juicios contra personas que habían participado en el levantamiento de 1956, y pedía mayor información y la seguridad de que esas personas serían tratadas conforme a las normas humanitarias más elevadas. La carta fué devuelta por el representante de Hungría el 21 de diciembre de 1957, con la observación de que el Gobierno de Hungría no reconocía el establecimiento y funcionamiento de esa Comisión debido a que la resolución por la que había sido instituida era contraria a la Carta.

8. La Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas

El 9 de octubre de 1957, el Secretario General, en cumplimiento de la resolución 1125 (XI) aprobada por la Asamblea General el 2 de febrero de 1957, presentó a ésta un informe sobre la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, en el que proporcionaba los datos esenciales, evaluaba su funcionamiento y discutía la cuestión de su financiamiento.

El informe declaraba que bajo el mandato de su Comandante, el General E. L. M. Burns, la Fuerza se había mantenido durante unos 10 meses con Cuartel General en Gaza y un efectivo aproximado de 6.000 hombres, integrado por contingentes de 10 países. Desde el retiro de todas las tropas extranjeras del territorio de Egipto en marzo, la Fuerza, interpuesta entre las fuerzas armadas de Egipto y las de Israel, se había dedicado a su función fundamental de mantener la tranquilidad en la región mediante despliegues y patrullas en la faja de Gaza, a lo largo de la costa oriental de la península de Sinaí y en la región de Sharm el Sheikh. La resolución 1125 (XI) había pedido que la Fuerza de Emergencia se situase en la línea de demarcación entre Egipto e Israel establecida por el Armisticio, pero hasta el momento de presentar el informe no había sido posible estacionar tropas de la FENU en Israel debido a que ese país no lo había consentido. Las operaciones más difíciles de la Fuerza habían sido las que le correspondió en la faja de Gaza, pero desde el 14 de julio no se había recibido ninguna denuncia de incidentes de gravedad a lo largo de la línea de Gaza.

El informe decía luego que el objeto de la FENU era satisfacer una necesidad concreta en un caso de emergencia grave. La autoridad que se le había conferido era forzosamente limitada. Pero los objetivos y el papel básico de la Fuerza, definidos por la Asamblea General, eran claros. La mayoría de los muchos problemas planteados habían sido resueltos satisfactoriamente, aunque el Comandante de la FENU había advertido que existían algunos que estaban todavía sin resolver, incluso el despliegue definitivo de la FENU. No parecía que hubiese motivos para dudar de la eficiencia de la FENU. Se la había llegado a considerar como un primer esfuerzo importante en la evolución de los métodos ideados para hacer que prevaleciera la paz. Sin embargo, la situación actual a lo largo de la línea entre Egipto e Israel era vulnerable y la tranquilidad podía desaparecer repentinamente en cualquier momento. Esa tranquilidad era indispensable para la realización de esfuerzos fructíferos que hicieran desaparecer los mayores obstáculos que impedían la paz en el Cercano Oriente.

Con respecto a las necesidades financieras de la FENU, se calculaba en el informe que, hasta el 31 de diciembre de 1957, los gastos ascenderían a una cantidad que oscilaría entre 24.000.000 y 30.500.000 dólares en caso de que la Asamblea General aceptase la propuesta del Secretario General en virtud de la cual las Naciones Unidas asumieran la responsabilidad de reembolsar a los gobiernos que habían proporcionado unidades todos los gastos adicionales y extraordinarios incurridos. El Secretario General opinaba que una vez transcurrido el limitado período de emergencia de seis meses, cualquier arreglo en virtud del cual pesara sobre unos cuantos Estados Miembros una carga financiera desproporcionadamente grande, no constituía una forma sana ni equitativa de cumplir una obligación colectiva de las Naciones Unidas.

El informe señalaba que tal vez la cuestión más importante que debía ser examinada y resuelta urgentemente, era la que se planteaba a consecuencia de la decisión de la Asamblea General de examinar, en su duodécimo período de sesiones, las bases para el financiamiento de cualesquiera gastos de la Fuerza que excediesen de los 10.000.000 de dólares aprobados inicialmente que no fuesen cubiertos mediante contribuciones voluntarias. En vista de la respuesta sumamente limitada a la solicitud de contribuciones voluntarias y dado el alcance de las operaciones de la FENU, el Secretario General ponía en duda ese método de obtener los créditos presupuestarios necesarios.

El 19 de noviembre el Secretario General informó a la Asamblea que los Estados Unidos y el Reino Unido habían ofrecido 12.000.000 de dólares y 1.000.000 de dólares, respectivamente, como "ayuda especial" destinada a reducir los gastos para el período que terminaba el 31 de diciembre de 1957. Esos ofrecimientos se habían hecho dando por supuesto que el saldo pendiente de pago por gastos incurridos durante 1957 y todos los gastos de la Fuerza correspondientes a 1958 se prorratearían según la escala de cuotas habitual. Más tarde hicieron ofertas similares de menor cuantía Australia, Austria, Birmania, Ceilán, Irlanda, Japón, México y los Países Bajos.

El 22 de noviembre la Asamblea General examinó la cuestión relativa a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas y por 51 votos contra 11 y 19 abstenciones, aprobó un proyecto de resolución presentado por 21 Potencias. En virtud de dicha resolución, la Asamblea General, teniendo presente la contribución aportada por la Fuerza al mantenimiento de la tranquilidad en la zona, expresaba su agradecimiento por la ayuda prestada a la Fuerza por los Estados Miembros, aprobaba los principios y las propuestas para el prorrateo de los gastos entre las Naciones Unidas y los Estados Miembros interesados que habían facilitado tropas según se exponía en el informe del Secretario General; autorizaba a gastar una suma adicional, durante el período que terminaba el 31 de diciembre de 1957, que no excediese de 13.500.000 dólares y, en caso necesario, una suma de hasta 25.000.000 de dólares para que la Fuerza prosiguiera su servicio; y decidía que los gastos autorizados serían costeados por los Estados Miembros conforme a la escala de cuotas habitual (resolución 1151 (XII)).

Algunos países de América Latina, aunque aprobaban la misión de la Fuerza, se opusieron al proyecto de resolución por considerar que la escala de cuotas no era justa ni equitativa. Otros países, incluso la Unión Soviética, reafirmaron las opiniones expresadas en el curso del undécimo período de sesiones según las cuales la creación de la FENU era contraria a la Carta, se opusieron al proyecto de resolución y declararon que los gastos de la FENU debían ser sufragados por los tres Estados que habían perpetrado la agresión armada contra Egipto; declararon además que no contribuirían a financiar los gastos de la Fuerza.

El 13 de diciembre la Asamblea General aprobó, por 45 votos contra 9 y 10 abstenciones, una resolución recomendada por la Quinta Comisión en virtud de la cual la Asamblea General tomaba nota con aprobación de las observaciones y recomendaciones relativas al cálculo de los gastos necesarios para mantener la FENU, formuladas en un informe preparado a solicitud de la Asamblea General por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (resolución 1204 (XII)).

9. El Canal de Suez

a) COMUNICACIONES DE EGIPTO RELATIVAS A SU DECLARACIÓN SOBRE EL CANAL DE SUEZ

Durante su examen de la cuestión del Canal de Suez suscitada por la nacionalización del Canal por Egipto el Consejo de Seguridad resolvió por unanimidad, en octubre de 1956, que cualquier arreglo de la cuestión de Suez debía satisfacer seis requisitos básicos. Cuando el Consejo reanudó su examen de esta cuestión en abril y mayo de 1957 para tomar nota de la situación relativa al paso de la navegación por el Canal nuevamente abierto, se expresaron puntos de vista diversos al apreciar si la Declaración hecha por Egipto el 24 de abril de 1957 relativa al Canal de Suez y a las disposiciones adoptadas para su funcionamiento satisfacía debidamente los seis requisitos indicados por el Consejo.

El 18 de julio Egipto completó la Declaración aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia para todas las controversias de orden jurídico que pudieran surgir entre los signatarios de la Convención de Constantinopla de 1888 respecto a la interpretación o a la aplicabilidad de lo dispuesto en la Declaración.

El 20 de mayo de 1958, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida transmitió al Secretario General, con referencia al párrafo 8 de la Declaración egipcia del 24 de abril de 1957 el texto de los Puntos de Acuerdo relativos a la indemnización a los Accionistas de Suez. Los Puntos de Acuerdo habían sido negociados por mediación de los buenos oficios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y suscritos el 29 de abril por representantes de la República Árabe Unida y de los Accionistas de Suez. La República Árabe Unida se comprometía a pagar en concepto de compensación la suma de 28.300.000 libras egipcias en pagos parciales y ceder todos los haberes en el exterior a los Accionistas.

b) DESPEJO DEL CANAL DE SUEZ

El 16 de septiembre de 1957, el Secretario General propuso la inclusión en el programa del duodécimo período de sesiones del tema "Despejo del Canal de Suez: informe del Secretario General". El 1º de noviembre, el Secretario General presentó su informe en el cual se describían el plan de operaciones, las medidas de orden práctico y los acuerdos negociados con respecto al despejo del Canal de Suez autorizados por la Asamblea General en su resolución 1121 (XI) del 24 de noviembre de 1956. El informe declaraba que el Teniente General Raymond A. Wheeler había servido de Representante Especial a cargo de las Operaciones Técnicas y el Sr. John J. McCloy como asesor en las negociaciones financieras relacionadas con los trabajos. El 10 de abril de 1957, se decía en el informe, la flota de rescate de las Naciones Unidas había terminado el despejo del Canal varias semanas antes de la fecha originalmente prevista. Los gastos y deudas incurridos por las Naciones Unidas habían alcanzado un total de aproximadamente 8.400.000 dólares. En conclusión, el Secretario General informó que, después de estudiar varias maneras posibles de cubrir el costo de las operaciones recomendaba que para reembolsar la suma superior a 11.000.000 de dólares adelantada durante el curso de las operaciones por 11 países contribuyentes se recargasen los derechos de paso por el Canal, reteniendo el 3% de lo recaudado para ese concepto. El procedimiento se establecería de

común acuerdo con el Gobierno de Egipto y con las otras partes que interviniesen en el asunto. Siguiendo este método podía calcularse que los gastos se reembolsarían en un plazo aproximado de tres años.

El 14 de diciembre, al estudiar el informe del Secretario General, la Asamblea General consideró un proyecto de resolución presentado por Brasil, Filipinas, Irán y Tailandia, en el que se disponía que la Asamblea autorizase al Secretario General para que tomara las medidas necesarias a fin de poner en práctica la recomendación contenida en su informe para reembolsar los fondos adelantados por los países contribuyentes y se instaba a los Estados Miembros a que colaborasen plenamente.

Durante el debate relativo a este proyecto de resolución varios representantes manifestaron que hubiesen preferido que los gastos hubieran sido sufragados por las Naciones Unidas con arreglo a la escala de cuotas. Otros, entre ellos el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se opusieron al propuesto método de reembolso, con el argumento de que los usuarios del Canal no deberían contribuir al pago de los gastos sino que todos los desembolsos causados por la agresión de Francia, el Reino Unido e Israel contra Egipto, incluso los relacionados con el despejo del Canal, deberían ser reembolsados en su totalidad por dichos Estados.

El 14 de diciembre de 1957, la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución de las cuatro Potencias por 54 votos contra ninguno y 19 abstenciones (resolución 1212 (XII)).

10. La cuestión de Palestina

a) ACONTECIMIENTOS EN LA FRONTERA ENTRE SIRIA E ISRAEL

En mayo de 1957, el Consejo de Seguridad estudió una reclamación siria en la que se alegaba que en violación del artículo V del Acuerdo de Armisticio General habían sido construidas fortificaciones militares y un puente en el sector del lago Huleh en la zona desmilitarizada. Esta cuestión había sido objeto de un informe del Jefe Interino de Estado Mayor del Organismo de Vigilancia de la Tregua. A raíz de esta discusión, el Jefe Interino de Estado Mayor presentó el 27 de junio de 1957 un informe complementario acerca de determinados aspectos de la labor que desempeñaban los órganos de las Naciones Unidas en la zona. Se señalaba que, en general, a partir del 30 de octubre de 1956 las solicitudes de entrada de los observadores militares en la zona desmilitarizada para visitas ordinarias o investigaciones habían sido rechazadas por Israel. Siria no había impedido dicha entrada. En sus conclusiones, el Jefe Interino de Estado Mayor manifestó que la posibilidad de efectuar una investigación en cualquier momento en virtud del artículo V del Acuerdo de Armisticio General y la concesión a los observadores de las Naciones Unidas de libertad completa de tránsito por la zona desmilitarizada cuando realizaban una investigación o visitas ordinarias era indispensable para el ejercicio de la responsabilidad de vigilancia general en dicha zona.

El Jefe Interino de Estado Mayor añadió que el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel le había dado a entender que la objeción de su país a la investigación de las reclamaciones presentadas por Siria era de carácter exclusivamente formal y que su país no se oponía a ninguna investigación que realizase el Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio entre

Israel y Siria, por sí mismo o por medio de un representante, respaldado por la autoridad que le confería el artículo V.

Aunque el Jefe Interino de Estado Mayor decía que era motivo de satisfacción ver que Israel había aceptado quitar las minas de las zonas desmilitarizadas, las demandas para que se demoliesen en ese sector las obras de fortificación cuya magnitud excedía de la que podía permitirse para la protección de la población civil, habían sido rechazadas.

A fines de enero y a principios de febrero de 1958, Israel y Siria presentaron ante el Consejo de Seguridad en varias comunicaciones diversas denuncias de actos de agresión cometidos respectivamente por Siria e Israel durante el período transcurrido entre fines de diciembre de 1957 y principios de febrero de 1958 a lo largo de la frontera entre Siria e Israel. Algunas de las acusaciones más graves se referían a incidentes en la zona desmilitarizada de dicha frontera.

Después, en comunicaciones dirigidas al Consejo de Seguridad, la República Árabe Unida e Israel se acusaron mutuamente de ser responsables por un tiroteo en las cercanías de Galbinieh en el sector del lago Huleh a fines de marzo, relacionándose estos incidentes con un proyecto de riegos de Israel. La cuestión fundamental consistía en averiguar si un canal de avenamiento construido por Israel se internaba por tierras sobre las cuales los árabes tenían derechos de propiedad e incluidas en la zona desmilitarizada. El incidente fué resuelto por un anuncio que hizo el Jefe de Estado Mayor de la Organización para la Vigilancia de la Tregua el 8 de abril de 1958 en el que se declaraba que ambos Gobiernos habían aceptado el resultado del último examen topográfico, según el cual se había producido una penetración de escasa importancia, y por el anuncio posterior de Israel en el sentido de que pensaba tomar medidas para remediar la situación.

b) COMUNICACIONES DE JORDANIA E ISRAEL RELATIVAS A LA ZONA INCLUIDA ENTRE LAS LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DE ARMISTICIO EN EL SECTOR QUE RODEA EL PALACIO DEL GOBIERNO EN JERUSALÉN

El 4 de septiembre de 1957, Jordania pidió que se convocase urgentemente una reunión del Consejo para considerar su denuncia de que había surgido una situación grave debido a las violaciones por Israel del Acuerdo de Armisticio General en la zona incluida entre las líneas de demarcación del armisticio en el sector de Jerusalén. El 5 de septiembre, Israel pidió que el Consejo de Seguridad considerase una reclamación presentada por Israel sobre violaciones cometidas por Jordania contra lo dispuesto por el Acuerdo de Armisticio General y, en particular, por el artículo VIII de dicho Acuerdo.

El Consejo de Seguridad estudió dichas denuncias en cinco sesiones, los días 6 de septiembre, 22 de noviembre de 1957 y 22 de enero de 1958. Los representantes de Jordania e Israel participaron en los debates.

En la sesión del Consejo celebrada el 6 de septiembre ambos temas fueron incluidos en el orden del día.

En cumplimiento de la solicitud del Consejo, el Jefe Interino de Estado Mayor del Organismo de Vigilancia de la Tregua presentó un informe, fechado el 24 de septiembre de 1957, sobre la parte incluida entre las líneas de demarcación (zona neutral) que rodea el sector del Palacio del Gobierno.

Manifestó que parecía haber tres modos de enfocar el problema: a) transformar la zona incluida entre las

líneas de demarcación en terreno neutral y aplicar el párrafo 3) del artículo IV del Acuerdo de Armisticio General por el que se prohíbe atravesar la línea de demarcación y adentrarse en la zona a toda persona que no pertenezca al personal de las Naciones Unidas; b) volver a las condiciones que existían el 3 de abril de 1949; c) llegar a un acuerdo que tendría en cuenta, por lo menos hasta cierto punto, los cambios ocurridos desde 1949. Las posibilidades a) y b) no parecían aconsejables pero la posibilidad c) parecía ofrecer una base razonable para la solución. Las actividades no militares de ambas partes podían continuar, pero manteniéndose separadas.

El 31 de octubre de 1957, el Consejo recibió un informe del Jefe Interino de Estado Mayor que trataba de los aspectos específicos de la denuncia presentada por Israel contra Jordania ante el Consejo el 5 de septiembre de 1957 en la que se hacía una referencia concreta a lo dispuesto en el artículo VIII, artículos I y III, y en el artículo XII del Acuerdo de Armisticio General.

El 22 de enero de 1958, el Consejo estudió la denuncia de Jordania en dos sesiones. El Reino Unido y los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución por el que el Consejo de Seguridad, tomando nota de que la situación jurídica de la zona había sido afectada por lo dispuesto en el Acuerdo de Armisticio General y que ni Israel ni Jordania disfrutaban de soberanía sobre parte alguna de dicha zona (por hallarse más allá de las respectivas líneas de demarcación) disponía: 1) dar instrucciones al Jefe de Estado Mayor para reglamentar las actividades dentro de la zona, en conformidad con aquellos arreglos que pudieran concertarse en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo de Armisticio General y el párrafo 3 de la resolución, teniendo en cuenta los derechos de propiedad en aquella región, y entendiéndose que, a menos que de mutuo acuerdo se decidiese de otro modo, los israelíes no deberían tener derecho a disfrutar de las propiedades árabes y los árabes no deberían tener derecho a disfrutar de las propiedades israelíes; 2) instruir al Jefe de Estado Mayor en el sentido de que realizase un estudio de los registros de la propiedad con vistas a determinar los derechos de propiedad en la zona; 3) aprobar las recomendaciones del Jefe Interino de Estado Mayor a este fin y: a) las partes debían discutir por mediación de la Comisión Mixta de Armisticio entre Israel y Siria las actividades no militares en la zona; b) para crear un ambiente más favorable a discusiones fructíferas, debían suspenderse en la zona las actividades de carácter semejante a las iniciadas por los israelíes el 21 de julio de 1957 hasta quedar terminado el estudio de los registros y haberse tomado medidas para reglamentar las actividades en dicha zona; c) estas discusiones tenían que quedar concluidas dentro de un plazo de dos meses.

En su 810a. sesión, el Consejo aprobó por unanimidad el proyecto conjunto de resolución.

c) EL PROBLEMA DEL MONTE SCOPUS

El 7 de julio de 1948 se llegó a un Acuerdo para la desmilitarización de la zona del Monte Scopus, al nordeste de Jerusalén. Las Naciones Unidas aceptaron ser uno de los signatarios de este Acuerdo y asumieron la responsabilidad de velar por la seguridad de la zona desmilitarizada. En virtud del Acuerdo de 7 de julio de 1948, se ubicarían en sus respectivas zonas policías civiles árabes y judíos bajo las órdenes del Comandante de las Naciones Unidas. La bandera de las

Naciones Unidas debía ondear en los edificios principales. Como la zona del Monte Scopus estaba totalmente rodeada por territorio jordano, las Naciones Unidas se comprometieron a hacer cuanto fuese necesario para que el personal judío de la zona recibiese remesas regulares de víveres. El Comandante de las Naciones Unidas también debía organizar los relevos del personal y las visitas de las personas debidamente acreditadas procedentes de Israel.

En esta región se produjeron varios incidentes. En noviembre de 1957 surgió una crisis grave cuando las autoridades de Jordania se opusieron a que se enviara gasolina en los convoyes.

A principios del mes siguiente, el Secretario General realizó una rápida visita al Oriente Medio en relación con este problema inmediato y el problema más amplio de restablecer la total aplicación del Acuerdo del 7 de julio de 1948 sobre la desmilitarización de la zona del Monte Scopus.

A raíz de un intercambio de consultas entre el Secretario General y los Ministros de Relaciones Exteriores de Jordania e Israel, se anunció el 4 de diciembre que se habían concertado medidas para reanudar el envío de convoyes. El 5 de diciembre, el Secretario General anunció también que ambos Gobiernos le habían dado garantías de su deseo, a base de reciprocidad, de cumplir plenamente las disposiciones del Acuerdo del 7 de julio de 1948 y que habían aceptado, partiendo de esa base, la inspección del Monte Scopus por las Naciones Unidas, que era necesaria para que éstas pudieran cumplir con su misión de comprobar que se ponía en práctica y se mantenía la aplicación del Acuerdo. En el mismo anuncio el Secretario General manifestaba que había decidido nombrar un Representante Personal para celebrar negociaciones con los Gobiernos de Jordania e Israel a fin de aplicar plenamente el Acuerdo. En virtud de esta decisión el Sr. Urrutia, Embajador de Colombia, Representante Personal del Secretario General, visitó la zona y, el 18 de enero de 1958, presentó un informe al Secretario General sobre el progreso realizado por sus negociaciones. Entre otras cosas, el informe disponía en su párrafo 4 que representantes nombrados especialmente por el Secretario General visitasen el Monte Scopus. Cuando dichos representantes nombrados especialmente visitaron la zona fueron autorizados a utilizar los servicios del personal militar del Organismo de la Vigilancia de la Tregua para ayudarles en caso necesario.

El 9 de abril de 1958 el Secretario General designó al Embajador Sr. Urrutia y al Dr. Ralph J. Bunche como representantes especialmente nombrados; como tal, el Embajador Sr. Urrutia visitó la zona a principios de abril de 1958. El 10 de junio de 1958 el Secretario General también nombró representante suyo especialmente designado al Sr. Andrew W. Cordier, quien visitó la zona del 14 al 23 de junio de 1958.

Esta visita tuvo efecto poco después de ocurrir uno de los incidentes más graves en el Monte Scopus. El 26 de mayo una patrulla de policía israelí se vio complicada en un tiroteo. El Teniente Coronel Flint, Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio entre Jordania e Israel y representante del Jefe de Estado Mayor en el Monte Scopus, trató de concertar un alto el fuego sobre el terreno. Mientras se dirigía hacia los miembros heridos de la patrulla israelí para socorrerlos, el Coronel Flint recibió un disparo mortal. También perdieron sus vidas cuatro miembros de la patrulla

israelí. El Secretario General rindió un sentido homenaje a las cualidades personales del Coronel Flint y expresó su pesar con respecto a las otras víctimas graves. Añadió que la muerte del Coronel Flint y las bajas sufridas por los israelíes deberían recordar una vez más la necesidad de un cambio radical en las actitudes que habían conducido a ese trágico acontecimiento y que deberían ser vencidas si se deseaba restablecer en la zona condiciones pacíficas.

El 17 de junio el Secretario General hizo distribuir el informe del Jefe de Estado Mayor relativo al incidente del 26 de mayo. La parte I se ocupaba de los detalles de hecho de los acontecimientos y manifestaba que la conclusión provisional de la investigación sobre las circunstancias que rodeaban la muerte del Teniente Coronel Flint era que había sido probablemente alcanzado por una bala disparada desde territorio ocupado por Jordania. La parte II describía las circunstancias del incidente, que había sido precedido por incidentes de menor gravedad ocurridos esporádicamente en un ambiente de tirantez. Los contactos y conflictos entre la policía de Israel y los árabes en el Monte Scopus habían aumentado debido a la expansión de las actividades de patrullas de la policía civil de Israel. Estas actividades ocurrían fuera del vallado que rodeaba a los edificios judíos y a lo largo de la carretera que conducía al pueblo de Issawiya, al norte de dichos edificios, y más al sur en la ladera occidental del Monte Scopus y también en la ladera oriental donde había ocurrido el incidente del 26 de mayo. Los incidentes en dichas laderas estaban relacionados con una antigua controversia relativa a si las zonas en cuestión se hallaban dentro de la zona delimitada del Monte Scopus o en territorio jordano. En la parte III del informe el Jefe de Estado Mayor concluía que los aldeanos árabes y la policía de Israel del Monte Scopus podían vivir pacíficamente siempre que se tomaran medidas prácticas para evitar contactos entre ellas y se les mantuviese a distancia. En tales condiciones, las patrullas de la policía de Israel no serían necesarias por razones de seguridad. En espera de que se diese total aplicación a los Acuerdos del 7 de julio de 1948, el Jefe de Estado Mayor recomendaba que se mantuviera la situación encontrada en 1954 por su predecesor, el General Burns. El Jefe de Estado Mayor concluyó que si se reconocía que esta pauta debía aplicarse a ambas partes y que únicamente las Naciones Unidas debían garantizarla, sin intervención por ninguna de las otras dos partes, la cuestión de las zonas objeto de litigio podía dejarse en suspenso hasta llegarse a otro acuerdo.

d) INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PALESTINA

El 12 de junio de 1958, la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina aprobó su 16º informe sobre la evolución de la situación a la Asamblea General, el cual cubría el período del 1º de octubre de 1956 al 31 de mayo de 1958. En el informe se describía el progreso realizado para identificar las propiedades de los refugiados árabes en Israel, que casi había quedado terminado, y la liberación de las cuentas de los refugiados árabes bloqueadas en Israel, así como la transferencia de los fondos y objetos valiosos en custodia. La Comisión también manifestó que había decidido que el programa de avalúos de las propiedades de los refugiados árabes en Israel se realizase a la mayor brevedad posible.

11. Asistencia a los refugiados de Palestina

a) INFORME DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SOCORRO A LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCAÑO ORIENTE (NACIONES UNIDAS) (OOPSRPCO)

En el octavo informe anual del OOPSRPCO, que cubría el período del 1° de julio de 1956 al 30 de julio de 1957, el Director recordaba a la Asamblea General que la labor del Organismo debía juzgarse teniendo en cuenta los antecedentes políticos de la cuestión de Palestina, a la cual el problema de los refugiados estaba indisolublemente vinculado. El Organismo había pasado por una serie sin precedentes de dificultades pero continuó desempeñando sus dos principales tareas de socorro y de rehabilitación en la medida en que lo permitieron las condiciones locales y los fondos disponibles. El Organismo continuó prestando sus servicios esenciales de socorro casi sin interrupción y a un costo extremadamente bajo. En cuanto a la rehabilitación, la falta de una solución aceptable de la cuestión de Palestina hizo que la gran masa de refugiados siguiese oponiéndose al desarrollo de grandes proyectos de rehabilitación económica. Durante el año a que se refiere este informe, sin embargo, se ayudó a un número considerable de refugiados a alcanzar su independencia económica. La escasez de fondos no permitió más que continuar el actual y modesto sistema de educación general y de enseñanza de oficios a los refugiados.

El Director ponía de relieve la crisis financiera extremadamente grave que comprometía la existencia misma del Organismo. Pedía con urgencia que la Asamblea General aprobase el presupuesto presentado por el OOPSRPCO para 1958 como mínimo compatible con las tareas del Organismo, que se comprometiese y pagase contribuciones por valor de 25.700.000 dólares y 15.000.000 de dólares para gastos de socorro y rehabilitación respectivamente y 8.000.000 de dólares para constituir un fondo de operaciones adecuado.

b) COMITÉ ESPECIAL PLENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA EL ANUNCIO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS AL ORGANISMO DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO A LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCAÑO ORIENTE (NACIONES UNIDAS)

En virtud de la resolución 1091 A (XI) del 27 de febrero de 1957, la Asamblea General se constituyó el 4 de octubre de 1957 en Comité Especial Plenario de la Asamblea General para el anuncio de contribuciones voluntarias a los programas de ayuda a los refugiados del OOPSRPCO. Tras una declaración por el Director del Organismo relativa a sus urgentes necesidades financieras, 30 representantes de Estados Miembros y no Miembros hicieron declaraciones relativas a las contribuciones que habían sido o serían hechas por sus respectivos Gobiernos.

c) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DUODÉCIMO PERÍODO DE SESIONES

El 12 de noviembre, el Director del OOPSRPCO (Naciones Unidas) transmitió una declaración de la Comisión Asesora del Organismo en la que expresaba su preocupación con respecto a la situación financiera del OOPSRPCO a la luz de los resultados de la citada reunión del Comité Especial Plenario. La Comisión ponía de relieve su opinión relativa al carácter mínimo del presupuesto del Organismo para 1958 y apoyaba

todos los esfuerzos tendientes a obtener mayores contribuciones para el OOPSRPCO.

El informe anual del Director, junto con el informe especial de la Comisión Asesora del OOPSRPCO, fué estudiado por la Comisión Política Especial en sus reuniones celebradas entre el 18 de noviembre y el 6 de diciembre de 1957.

Al inaugurarse los debates de la Comisión, el Director del OOPSRPCO insistió en que el Organismo necesitaba urgentemente saber qué cantidad estaba dispuesta a aportar la Asamblea General para financiar las actividades del OOPSRPCO; o los Estados Miembros contribuían fondos suficientes para permitir que el OOPSRPCO llevase a cabo sus tareas en 1958, o la Asamblea General debería adoptar la nefasta decisión de reducir severamente las actividades del Organismo. Se había llegado a una situación en que si el Organismo no recibía fondos adecuados tendría que eliminar categorías enteras de actividades y sólo la Asamblea General podía tomar decisiones capaces de producir tan graves resultados. El Director se opuso vigorosamente a tales reducciones ya que ellas implicarían enormes sufrimientos y privaciones para los refugiados, y tendrían graves repercusiones en los países de asilo. Para satisfacer el presupuesto mínimo de socorro para 1958, el OOPSRPCO requería 2.000.000 de dólares más de la suma con que podía contarse entonces procedente de los países contribuyentes, otros 2.000.000 de dólares para proseguir únicamente las actividades de mayor prioridad en la esfera de rehabilitación, 8.000.000 de dólares más para atender íntegramente al presupuesto de rehabilitación y otros 8.000.000 de dólares para un fondo de operaciones adecuado.

Los representantes que participaron en el debate de la Comisión elogiaron unánimemente la eficiencia y la devoción con que el Director del OOPSRPCO y su personal habían llevado a cabo sus actividades.

Los representantes de los Estados árabes mantuvieron que la única solución justa y duradera del problema de los refugiados de Palestina residía en la repatriación e indemnización, tal como había sido previsto en la Asamblea General en la resolución 194 (III) del 11 de diciembre de 1948 y, tanto ellos como varios otros representantes, consideraron que las Naciones Unidas deberían orientar sus esfuerzos en el sentido de asegurar la realización de las decisiones de la Asamblea. Los representantes árabes también propusieron que las Naciones Unidas tomaran diversas medidas, por ejemplo que obligaran a Israel a pagar a los refugiados las rentas producidas por sus bienes abandonados, que creasen una comisión de custodia para administrar y fiscalizar la conservación de dichos bienes, que tomase disposiciones para restituir a los árabes la parte de Palestina que las Naciones Unidas decidieron que continuase siendo territorio árabe, y que deberían hacer lo necesario para que un organismo internacional fiscalizase la inmigración judía en Israel.

El representante de Israel sostuvo que el problema de los refugiados tuvo su origen en la agresión perpetrada por los Estados Árabes contra Israel y que la comunidad internacional tenía derecho a exigir a dichos Estados que contribuyesen plenamente a resolver los problemas que provocaron. La solución adecuada para los refugiados árabes era su integración en la vida de los Estados árabes vecinos. Israel estaba resuelto a indemnizar a los refugiados árabes por los bienes que abandonaron para contribuir a su reasentamiento, pero el pago de indemnizaciones debería coincidir con la

solución de algunos problemas exclusivamente financieros y económicos relacionados con el boicot de la capacidad financiera de Israel por los Estados árabes.

Según varios otros oradores, en general parecía haberse llegado a una situación en que la falta de flexibilidad de una de las partes interesadas provocaba una rigidez parecida en la otra, con amenaza para la paz internacional, lo cual no permitía esperar que la situación actual mejorase pronto. Era posible que mediante negociaciones directas o indirectas entre las partes se elaborasen fórmulas de arreglo. En primer lugar incumbía a Israel y a los Estados árabes resolver el problema. Era ilusorio creer que el problema podía resolverse mediante la repatriación o la incorporación económica solamente. Era preciso adoptar medidas simultáneas en ambos sentidos.

Una vez terminado el debate general, los Estados Unidos, Filipinas, Nueva Zelandia, los Países Bajos y el Reino Unido presentaron un proyecto de resolución que fué después revisado, luego adoptado por la Comisión Política Especial y finalmente aprobado por la Asamblea General el 12 de diciembre por 52 votos contra ninguno y 19 abstenciones (resolución 1191 (XII)). En virtud de esta resolución la Asamblea General señalaba, entre otras cosas, a la atención de los gobiernos la crítica situación financiera del OOPSRPCO y les encarecía que considerasen hasta qué punto podían contribuir o podían aumentar sus contribuciones, a fin de que el Organismo estuviese en condiciones de ejecutar los programas previstos en su presupuesto y no se viese obligado a reducir servicios; pedía al Secretario General que, como cuestión urgente, hiciera esfuerzos especiales a fin de obtener la asistencia financiera adicional necesaria para cubrir los gastos previstos en el presupuesto del Organismo y para proporcionar a éste un fondo de operaciones adecuado; y encargaba al Organismo que prosiguiese la ejecución de sus programas de socorro y de rehabilitación, teniendo presentes los recursos que obtuviese en respuesta a los dos precedentes párrafos.

d) ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO A LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCAÑO ORIENTE (NACIONES UNIDAS)

Operaciones

Durante el año transcurrido, el Organismo pasó por períodos de gran incertidumbre respecto al volumen de los ingresos que recibiría en 1958 para llevar a cabo la misión que le fué encomendada por la Asamblea General. A pesar de ello, el Organismo siguió realizando ininterrumpidamente sus trabajos esenciales, si bien se vió obligado a disminuir o suspender por motivos financieros sus actividades más constructivas de ayuda al esfuerzo propio.

El número de refugiados inscritos en el Organismo aumentó de 1.012.547 el 1° de mayo de 1957 a 1.049.931 el 1° de mayo de 1958. Se observará que la cifra para 1° de mayo de 1957 es superior a la que se publicó en el informe del año pasado para la misma fecha. Esto se debe al método, recientemente adoptado, de cartulinas perforadas para la compilación de datos estadísticos que refleja con mayor exactitud las cifras de las varias categorías de refugiados y la asistencia que reciben. El número total también incluye varias categorías de refugiados que anteriormente no habían sido registradas y que ahora han sido incluídos en las listas aunque no reciben ayuda del Organismo.

No ha habido cambios en las raciones básicas ni en la alimentación complementaria que se da a los refu-

giados. El número de estos con derecho a recibir raciones secas básicas era de 845.352 (828.527 raciones completas; 16.825 medias raciones) el 1° de mayo de 1957. Para el 1° de mayo de 1958 el número era de 852.490 (835.872 raciones completas; 16.618 medias raciones). Durante el mismo período, el promedio mensual de mujeres embarazadas o en período lactante que recibían una ración complementaria especial fué de 25.829, y el promedio de comidas calientes de mediodía distribuidas por prescripción médica fué de 44.343. Durante el período objeto del informe anterior estas cifras fueron 21.913 y 43.616 respectivamente.

La forma en que el Organismo adquiere sus considerables suministros, especialmente para atender su programa de alimentación, no sufrió ningún cambio. Para facilitar la distribución en una zona tan amplia, se envían los pedidos de mercaderías con seis meses de anticipación con respecto a la fecha en que deben ser consumidas y los almacenes locales suelen tener una reserva de un mes además de lo necesario para la distribución en cualquier mes particular. Durante el período a que se refiere este informe entraron en el puerto de Beirut 565 buques con mercancías para el Organismo y 130 llegaron a Port Said; unas 122.000 toneladas y 40.000 toneladas fueron desembarcadas respectivamente para su reexpedición hacia Jordania, Líbano y Siria y la faja de Gaza. Durante los disturbios ocurridos en el Líbano en mayo y junio de 1958 se tomaron medidas de precaución para garantizar los suministros a los refugiados en todas las zonas en que opera el Organismo, por ejemplo, modificando el rumbo de un buque y enviándolo hacia Akaba.

En el 31 de marzo de 1958, el número de refugiados alojados en los campamentos ascendía a 369.659 en comparación con 373.160 un año antes. Aunque desgraciadamente fué imposible, por motivos financieros, proporcionar alojamiento a todos los refugiados que lo requerían y, en particular, extender el alojamiento disponible para cubrir las necesidades de las familias que estaban creciendo, el Organismo ha realizado progresos considerables en la sustitución de las tiendas de campaña por habitaciones de hormigón. Durante el período a que se refiere este informe, el número de tiendas de campaña disminuyó en 3.323 hasta un total de 5.055, mientras el número de habitaciones de hormigón aumentó de 87.794 a 99.368.

Los servicios de sanidad del Organismo siguen siendo fundamentalmente los mismos, dedicándose una atención particular a la medicina preventiva. Durante casi 10 años, en que la Organización Mundial de la Salud ha estado encargada de la dirección técnica de los servicios de sanidad administrados por el Organismo y sus predecesores, no se ha producido entre los refugiados ninguna epidemia de grandes proporciones. Su estado de salud ha sido en general satisfactorio. Durante el período que se estudia se realizó una investigación especial que demostró que la nutrición de los refugiados no había empeorado.

La escasez de medios económicos ha afectado gravemente el proyectado desarrollo de la educación y el sistema de formación profesional organizado por el Organismo, aunque su propósito general no ha sufrido ninguna alteración y su dirección técnica sigue bajo la responsabilidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Durante el año académico 1957-1958, unos 120.000 alumnos asistieron a 381 escuelas del Organismo, y unos 60.000 alumnos refugiados recibieron asistencia para seguir cursos en escuelas privadas y oficiales. La

clausura de los dos centros de formación de maestros del Organismo retrasará la deseada mejora de la competencia docente de los maestros en las escuelas del Organismo; debido a la suspensión casi completa del programa de construcción de nuevas aulas ha habido un exceso de alumnos y en algunas escuelas ha seguido el sistema de dos turnos. Por otra parte, la introducción de enseñanza de artesanía en Jordania para niños de 10 a 14 años de edad ha tenido gran éxito (ya se había implantado anteriormente con buenos resultados en la faja de Gaza); en la actualidad hay 18 centros de formación de artesanos en Jordania con 400 alumnos cada uno. Del mismo modo, aunque sigue siendo financieramente imposible construir los nuevos centros de formación profesional que se requieren, se ha añadido a las asignaturas de los centros existentes de Gaza y Jordania la agrimensura y los cálculos de la construcción y en el Líbano se han organizado cursillos especiales para enseñar a los refugiados el oficio de soldadores de oleoductos, para cuya profesión hay gran demanda en esa región.

La constante escasez de fondos ha impedido que se reanude el programa del Organismo destinado a proyectos de pequeña escala y para actividades económicamente independientes en Jordania y Siria. Sin embargo, no hay duda de que son muchos los refugiados que desean trabajar y ganar algo, por poco que sea, incluso si no es bastante para poder atender a sus propias necesidades. En vista de esto, el Organismo ha empezado a fomentar la formación de grupos con organización cooperativa para pequeñas empresas productoras utilizando fondos de menor cuantía o contribuciones especiales de organismos benéficos para proporcionar el capital inicial; se confía en que los grupos experimentales tendrán éxito y que esta labor, cuyo propósito esencial es levantar el ánimo, continuará progresando.

Presupuesto y colectas para recaudar fondos

Durante la primera mitad del período a que se refiere este informe, no quedó bien claro si en 1958 se dispondría de fondos suficientes para sufragar el presupuesto mínimo del Organismo para proyectos de socorro y parecía que iba a ser necesario suspender el programa educativo para el año académico 1958-1959.

El presupuesto de gastos del Organismo, presentado a la Asamblea General durante su duodécimo período de sesiones, ascendía a 40.700.000 dólares subdivididos de la manera siguiente: 25.700.000 dólares para alimentación, alojamiento, sanidad y servicios sociales; 7.200.000 dólares para educación, formación profesional, colocación y aquellos proyectos de rehabilitación económica que no había sido posible poner en práctica y 7.800.000 para reanudar o comenzar otros proyectos de rehabilitación y servicios de formación profesional que habían sido reducidos o suspendidos.

De acuerdo con la petición de la Asamblea en su duodécimo período de sesiones el Secretario General hizo esfuerzos especiales para garantizar la obtención de los fondos necesarios; el Director del Organismo y el Comité de Negociaciones encargado de obtener fondos extrapresupuestarios hicieron también llamamientos urgentes. Como resultado de ello parece probable que se reciban en 1958 de 32.000.000 a 33.000.000 de dólares para cubrir el presupuesto mínimo de 33.000.000 que incluye el presupuesto completo de obras de socorro y las actividades más importantes del programa de rehabilitación. Sin embargo, para lograr

esto sería necesario que los contribuyentes regulares del Organismo se comprometiesen a pagar al Organismo durante el segundo semestre de este año las mismas cantidades que durante el primero. Esta suma sería la mayor recibida hasta la fecha por el Organismo, en un solo año, para actividades normales e implicaría un aumento sustancial de las contribuciones de varios Gobiernos, especialmente de aquellos que son ya los principales contribuyentes al fondo del Organismo.

Personal

En el 31 de diciembre de 1957 el personal del Organismo consistía de 9.820 empleados procedentes de la región, en su mayoría refugiados, y de 122 funcionarios internacionales. De aquéllos, 3.443 eran funcionarios de los servicios médicos y sanitarios, 3.200 eran maestros y 1.185 se dedicaban a trabajos de transporte y de distribución de suministros.

12. Denuncia de amenazas a la seguridad de Siria y a la paz internacional

El 15 de octubre de 1957, Siria solicitó que en el programa del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General se incluyese dicho tema. En un memorándum explicativo, Siria declaró que la concentración de tropas turcas en las inmediatas cercanías de la frontera entre Siria y Turquía constituían una verdadera amenaza militar a Siria y originaban frecuentes actos de provocación en la frontera. Como los esfuerzos realizados por vía diplomática y por otros medios no habían logrado mejorar la situación, el Gobierno de Siria solicitaba que la Asamblea General examinase urgentemente el tema propuesto y estableciese una comisión investigadora. El 16 de octubre, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en una carta dirigida al Presidente de la Asamblea General, apoyó la solicitud de Siria y declaró que, en caso de que Turquía, con ayuda de los Estados Unidos de América, atacase a Siria, la URSS propondría que los Estados Miembros de las Naciones Unidas prestasen inmediatamente ayuda militar a Siria.

El 18 de octubre, la Asamblea decidió incluir el tema en su programa y lo consideró en seis sesiones plenarias celebradas entre el 22 de octubre y el 1º de noviembre.

El 22 de octubre, el representante de Turquía declaró que Su Majestad el Rey Saud de Arabia Saudita había ofrecido sus buenos oficios como mediador entre Turquía y Siria, y que Turquía había aceptado ese ofrecimiento. Agregó que, en vista de las disposiciones del Artículo 33 de la Carta, consideraba que la Asamblea podía convenir en el aplazamiento del examen de esta cuestión por un tiempo apropiado a fin de esperar los resultados de esa tentativa de solución.

El representante de Siria se opuso a que se aplazara el examen de la cuestión y afirmó que en realidad no existía ninguna mediación y que Siria insistía en que se hiciese una investigación cuidadosa. Dijo que la concentración en masa de tropas turcas en la proximidad de la frontera septentrional de Siria tenía estrecha relación con la política seguida por los Estados Unidos, por ciertas Potencias colonialistas occidentales y por el sionismo mundial, quienes, en el empeño de preservar la región del Cercano Oriente como zona de influencia occidental, trataban de mantener o establecer regímenes políticos, favorables a esas Potencias, que se agruparan en campos y bloques militares para servir los objetivos de las mismas. A partir de 1955 se habían

venido empleando tales actividades como instrumento para ejercer presión contra la política independiente de Siria, que era esencialmente nacionalista y de neutralidad. El representante de Siria reiteró que se creara una comisión investigadora encargada de verificar los hechos y de informar a la Asamblea.

El representante de Turquía dijo que el envío de grandes cantidades de armas y equipo a Siria, procedentes de la Unión Soviética, y la construcción de bases aéreas y para submarinos en Siria habían llevado a su Gobierno a la conclusión de que se estaba transformando a ese país en un arsenal mediante suministros de armas que sobrepasaban con mucho sus necesidades propias. Turquía había reiterado constantemente las seguridades de su buena voluntad hacia Siria considerándola como país vecino, y expresado su deseo de que Siria conservase su independencia y su integridad territorial. Siria había formulado denuncias totalmente infundadas relativas a violaciones del espacio aéreo, ataques armados e incidentes fronterizos. En cuanto a la distribución de las fuerzas de defensa de Turquía dentro de las fronteras turcas, se trataba de un asunto de la jurisdicción interna de su país. No obstante, Turquía no había acumulado nunca fuerzas en ninguna de sus fronteras en cantidades que excediesen la necesidad de las precauciones defensivas. En conclusión, el representante de Turquía estimaba que no sólo era necesario investigar la situación en Siria sino también aclarar los verdaderos objetivos e intenciones ocultos de Siria y de la Unión Soviética.

El representante del Paraguay propuso que se aplazara el debate del problema en la Asamblea General a fin de permitir que se conocieran los resultados de la mediación del Rey Saud. A continuación el representante de Siria propuso que se levantara la sesión. Cuando esta propuesta fué rechazada por 36 votos contra 30 y 6 abstenciones, propuso que se modificase la moción del Paraguay, a fin de aplazar el debate por un período que no excediera de tres días. La enmienda fué aprobada por 33 votos contra 32 y 15 abstenciones, y la propuesta del Paraguay, con la enmienda introducida, fué aprobada por 37 votos contra 10 y 34 abstenciones.

El 25 de octubre se reanudó el debate general sobre la cuestión, y prosiguió hasta el 1º de noviembre. El 30 de octubre, Siria presentó un proyecto de resolución en virtud del cual la Asamblea General decidiría constituir una comisión de investigación encargada de estudiar sobre el terreno la situación en la región de la frontera entre Siria y Turquía y de presentar a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad un informe preliminar dentro de las dos semanas siguientes. El mismo día, Canadá, Dinamarca, España, Japón, Noruega, Paraguay y Perú presentaron un proyecto de resolución, según el cual la Asamblea confiaría en que el Secretario General en el ejercicio de sus funciones con arreglo a la Carta, y sin perjuicio de los esfuerzos que se estuvieran haciendo conforme al Artículo 33, pudiese entablar negociaciones con representantes de Siria y Turquía, y trasladarse a los países interesados.

El 1º de noviembre, de resultas de un llamamiento formulado por el representante de Indonesia y apoyado por el representante de Noruega, los autores de ambos proyectos de resolución convinieron en no insistir en que éstos fuesen sometidos a votación.

13. Comunicaciones relativas a Omán y Mascate

El 13 de agosto de 1957, Arabia Saudita, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Sudán, Túnez y Yemen pidieron que el Consejo de Seguridad considerase "la agresión armada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra la independencia, soberanía e integridad territorial de Omán". El 17 de agosto, el Sultán de Mascate y Omán informó al Consejo por cablegrama que los asuntos a que se refería la carta de los 11 Estados árabes eran exclusivamente de su jurisdicción interna y no concernían a las Naciones Unidas.

En dos sesiones celebradas el 20 de agosto de 1957, el Consejo de Seguridad consideró la cuestión de incluir dicho punto en el orden del día. El representante del Irak declaró que los 11 Estados Miembros árabes que habían solicitado del Consejo que considerase la situación en Omán estimaban que la acción del Reino Unido ponía en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en el Cercano Oriente. Añadió que el Consejo tenía la obligación de tomar medidas a fin de proteger a los Estados más pequeños y le instó a que incluyera la cuestión en su orden del día, en conformidad con los Artículos 34 y 35 de la Carta. El representante del Reino Unido, al oponerse a la inclusión del punto en el orden del día, dijo que Omán, por ser parte de los dominios del Sultán de Mascate y Omán, no era un Estado independiente y soberano, y que la acción militar británica había sido emprendida a solicitud del Sultán a fin de restablecer el orden que había sido perturbado debido a una rebelión contra su autoridad.

Después del debate, el Consejo decidió no incluir el punto en su orden del día.

El 21 de noviembre de 1957, los 11 Estados que habían presentado el asunto ante el Consejo declararon, en una carta dirigida al Consejo, que el Gobierno británico había proseguido sus actos de represión militar y que la situación en Omán podía provocar fricción internacional y era susceptible de poner en peligro la paz y la seguridad.

14. Denuncia presentada por el Líbano

El 22 de mayo de 1958, el Líbano solicitó una reunión inmediata del Consejo de Seguridad para considerar la: "Denuncia presentada por el Líbano en relación con una situación originada por la intervención de la República Árabe Unida en los asuntos internos del Líbano, cuya continuación es susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales". En la denuncia se especificaba que dicha intervención se caracterizaba por la infiltración de bandas armadas en el Líbano, procedentes de Siria, la participación de nacionales de la República Árabe Unida en actos de terrorismo y rebelión contra las autoridades constituídas del Líbano, la entrega de armas procedentes de Siria a individuos y bandas que en el Líbano se rebelaban contra dichas autoridades, y la violenta campaña de radio y prensa llevada a cabo en la República Árabe Unida en favor del derrocamiento de las autoridades constituídas del Líbano.

El 27 de mayo, el Consejo de Seguridad incluyó la carta del Líbano en su orden del día pero aplazó el examen de la cuestión hasta el 3 de junio, en vista de

que la Liga Árabe debía considerar la reclamación del Líbano el 31 de mayo.

Tras un nuevo aplazamiento destinado a permitir que la Liga Árabe examinase el asunto, el Consejo de Seguridad comenzó a debatir la cuestión el 6 de junio. El representante del Líbano expuso detalladamente la reclamación de su Gobierno y el representante de la República Árabe Unida declaró que el Consejo se hallaba frente a un problema puramente interno del Líbano y rechazó categóricamente la afirmación de que había habido una intervención en los asuntos del Líbano por parte de la República Árabe Unida. El debate prosiguió durante las sesiones del 10 y el 11 de junio. El 11 de junio, el Consejo aprobó, por 10 votos contra ninguno y 1 abstención (URSS), un proyecto de resolución presentado por Suecia en que se decidía enviar inmediatamente un Grupo de Observación al Líbano, encargado de garantizar que no se produjera ninguna infiltración ilegal de personal ni ningún envío de armas o de otro material a través de las fronteras libanesas; se autorizaba al Secretario General a tomar las medidas necesarias con ese fin; y se pedía al Grupo de Observación que mantuviera constantemente informado al Consejo de Seguridad por mediación del Secretario General.

En un informe provisional con fecha 16 de junio, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad con respecto a las medidas que había tomado para dar cumplimiento a la resolución. Los Sres. Galo Plaza, del Ecuador, y Rajeshwar Dayal, de la India, y el General Odd Bull, de Noruega, habían sido nombrados en calidad de miembros del Grupo de Observación, que se constituiría y determinaría su propio procedimiento. El Grupo debía celebrar su primera reunión en Beirut el 19 de junio, y el Secretario General tenía intención de ayudar al Grupo asistiendo a sus primeras reuniones.

Los primeros de los 15 Observadores Militares experimentados que se había dispuesto destacar de la Organización de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua, a fin de que prestaran asistencia a título temporal al Grupo de Observación, habían llegado al Líbano el 12 de junio. Los equipos de observación habían iniciado sus operaciones de reconocimiento el 13 de junio. El número de observadores militares debía ser aumentado hasta 100 y para ello se había pedido a 14 Gobiernos que proporcionaran oficiales.

15. La cuestión de la frontera entre el Sudán y Egipto

El 20 de febrero de 1958, el Sudán solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad para que se examinara "la grave situación existente en la frontera entre el Sudán y Egipto, originada por la concentración en masa de tropas egipcias que avanzan hacia las fronteras sudanesas".

El Consejo examinó la cuestión el 21 de febrero e invitó a las partes interesadas a participar en el debate.

El representante del Sudán declaró que el 29 de enero Egipto había exigido que se le entregaran dos territorios sudaneses situados en la frontera entre el Sudán y Egipto, que habían sido parte integrante del Sudán durante medio siglo. El 13 de febrero, Egipto había afirmado su intención de que los electores de dichas regiones participasen en un plebiscito que había de celebrarse en Egipto el 21 de febrero, y el 16 de febrero había informado al Gobierno del Sudán que había enviado comités electorales y guardias fronterizos a las

zonas en cuestión. No se había tenido tiempo suficiente para decidir un punto tan importante, especialmente a causa de las elecciones generales que debían celebrarse en el Sudán el 27 de febrero. El representante del Sudán subrayó que su Gobierno estaba dispuesto a negociar con Egipto al respecto, pero había solicitado que el debate se aplazara hasta después de dichas elecciones.

El representante de Egipto deploró que la cuestión hubiera sido sometida a la consideración del Consejo de Seguridad con tanto apresuramiento. Si bien Egipto tenía derechos fundados sobre la zona en disputa, siempre había preferido adoptar una actitud de tolerancia y amistad con respecto al Sudán. En ese espíritu, su Gobierno había decidido aplazar el arreglo de la cuestión fronteriza hasta después de las elecciones sudanesas.

Después de las declaraciones formuladas por los miembros del Consejo, el Presidente resumió las opiniones del mismo declarando que éste tomaba nota de las garantías dadas por el representante de Egipto respecto del aplazamiento del arreglo de la cuestión hasta después de que se celebraran las elecciones sudanesas.

16. La cuestión de Chipre

El 12 de julio de 1957, Grecia solicitó que en el programa provisional del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General se incluyera el tema titulado: "Chipre: a) Aplicación, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos en el caso de la población de la Isla de Chipre; b) Violaciones de los derechos humanos y atrocidades cometidas por la Administración Colonial Británica contra los chipriotas".

El 20 de septiembre, la Asamblea General decidió incluir el tema en el programa con el título de "La cuestión de Chipre", y lo remitió a la Primera Comisión, que lo examinó en ocho sesiones celebradas entre el 9 y el 12 de diciembre de 1957.

El 9 de diciembre, Grecia presentó un proyecto de resolución en virtud del cual la Asamblea, a) expresando su inquietud por que no se hubiera realizado ningún progreso hacia la solución de este problema, según lo dispuesto en la resolución 1013 (XI) del 26 de febrero de 1957, b) considerando además que la situación en Chipre continuaba siendo muy peligrosa y que era necesario hallar lo más pronto posible una solución conforme a los principios de la Carta, para preservar la paz y la estabilidad en esa región; c) expresaría el deseo de que se diera al pueblo de Chipre la oportunidad de decidir su propio futuro mediante el ejercicio de su derecho a la libre determinación.

El 12 de diciembre, Canadá, Chile, Dinamarca y Noruega presentaron conjuntamente enmiendas al proyecto de resolución de Grecia en el sentido de: 1) intercalar en el preámbulo un nuevo párrafo reiterando la resolución 1013 (XI); 2) sustituir las palabras "no se ha realizado ningún progreso" por las palabras "no se han realizado mayores progresos" en el segundo párrafo del preámbulo (véase a) *supra*); 3) suprimir en el párrafo siguiente las palabras "conforme a los principios de la Carta"; y 4) substituir el párrafo dispositivo por un texto en el que la Asamblea General expresaría la viva esperanza de que se entablarían prontamente nuevas negociaciones y discusiones entre los interesados en un espíritu de cooperación, con miras a hallar una

solución pacífica, democrática y justa, en conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

En la misma sesión, el representante de Grecia presentó una subenmienda a las enmiendas presentadas por las cuatro Potencias, tendiente a reemplazar el párrafo dispositivo propuesto por un nuevo texto en el que la Asamblea expresaría la viva esperanza de que se entablarían nuevas negociaciones y discusiones en un espíritu de cooperación, con miras a la aplicación del derecho de libre determinación en el caso del pueblo de Chipre.

El representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte declaró que la cuestión de Chipre no era un simple problema colonial del tipo de los que el Reino Unido estaba habituado a tratar. Los aspectos internos del problema caían dentro de la jurisdicción soberana de su Gobierno y no eran asuntos que pudieran discutirse internacionalmente. No obstante, el apoyo activo de Grecia al movimiento de la *enosis* había suscitado una cuestión internacional. El Gobierno del Reino Unido trataba de hallar una solución conciliatoria que resultara aceptable a las dos comunidades que existían en Chipre y a los tres Gobiernos interesados — Grecia, Turquía y el Reino Unido. El representante del Reino Unido hizo una reseña de las propuestas formuladas por su Gobierno desde la segunda guerra mundial para promover la autonomía de Chipre. Las propuestas presentadas por el Reino Unido en diciembre de 1956, aceptadas por Turquía pero rechazadas por Grecia, tendían a la introducción inmediata de una autonomía liberal, conforme a la Constitución de Radcliffe, que, cuando las circunstancias fuesen más favorables, iría seguida de la libre determinación, que beneficiaría por igual a ambas comunidades de Chipre. Dichas propuestas aún estaban en pie. Después del último período de sesiones, el Gobierno del Reino Unido había adoptado distintas medidas encaminadas a facilitar una solución satisfactoria para todos los interesados, tales como la liberación del Arzobispo Makarios, el aligeramiento de las medidas de urgencia y la aceptación del ofrecimiento de buenos oficios hecho por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no había sido aceptado por Grecia. El Gobierno del Reino Unido había sugerido también conversaciones privadas sobre los aspectos internacionales del problema con las autoridades griegas y turcas, a fin de facilitar la solución ulterior de las cuestiones internas mediante conversaciones directas con los representantes chipriotas. Pero el Gobierno de Grecia había insistido en que previamente se definieran por la vía diplomática las condiciones fundamentales de una solución. No obstante, el intercambio de opiniones entre los tres gobiernos había continuado, cosa que constituía una señal favorable. Sería verdaderamente trágico, dijo el representante del Reino Unido, que un recrudecimiento de la violencia general surgiera en un momento en que, a juicio del Reino Unido, se vislumbraban perspectivas firmes de adelantar hacia una solución, gracias al nombramiento de un nuevo Gobernador. El Gobierno del Reino Unido seguía dispuesto a examinar cualquier solución de la cuestión de Chipre con sus amigos griegos y turcos. Por último, el representante dijo que la responsabilidad de su Gobierno por los asuntos internos de Chipre y sus responsabilidades estratégicas en la isla le dejaban margen para adoptar una actitud conciliatoria.

El representante de Grecia caracterizó al proyecto de constitución propuesto por el Reino Unido como instrumento concebido para perpetuar el sistema colonial.

Gran Bretaña debía reconocer el derecho de los chipriotas, de los cuales el 80% eran de origen griego, a la libre determinación y a la autonomía, a base de la integridad territorial de la isla. La cuestión de Chipre era esencialmente un problema que debía resolverse entre el Gobierno del Reino Unido y el pueblo chipriota. El Tratado de Lausana, que se había invocado, no podía impedir para siempre que se modificara la condición jurídica de Chipre. Además, no podía privarse a ningún pueblo de su libertad y de su derecho a la libre determinación so pretexto de que la posición geográfica de su territorio afectaría la seguridad de otros varios Estados. Además añadió que, aunque se había puesto fin a la violencia en la isla después de la liberación del Arzobispo Makarios, la represión colonial había continuado.

Tampoco se había prestado oídos a los ofrecimientos hechos para reanudar las negociaciones relativas a los derechos de los chipriotas a la libre determinación, con la debida consulta a las minorías chipriotas, y Gran Bretaña había replicado con la amenaza de dividir la isla. El representante de Grecia dijo que el objeto de la fórmula tripartita de negociación entre Grecia, Turquía y el Reino Unido, que este último había favorecido, era eliminar al pueblo de Chipre, cuyos intereses eran los únicos que debían predominar, aislar a Grecia y obligarla a traicionar a los chipriotas o, en caso contrario, a asumir la responsabilidad de romper negociaciones. Las acusaciones de que Grecia alimentaba ambiciones expansionistas con respecto a Chipre eran falsas. Chipre sólo pertenecía a su pueblo, y Grecia estaba dispuesta a aceptar por adelantado cualquier decisión que éste adoptase libremente. Sólo se podía buscar la manera de satisfacer las legítimas preocupaciones de algunos Estados, relativas a ciertos aspectos de la cuestión de Chipre que se relacionaban con su seguridad nacional, una vez que el pueblo de Chipre pudiese ejercer su derecho a la libre determinación.

El representante de Turquía, después de recordar que en Chipre vivían dos pueblos completamente distintos en el mismo territorio, afirmó que dicho territorio carecía de las características de un Estado nacional así como de una organización estatal jurídica. Además, el interés que Turquía tenía por Chipre se justificaba por que se trataba de una isla situada cerca de su costa, que dominaba las rutas de comunicación, defensa y comercio, vitales para Turquía. Por último, el estatuto actual de Chipre había sido decidido por consentimiento mutuo entre Turquía, Grecia y el Reino Unido en el Tratado de Lausana, que seguía siendo válido. La *enosis*, o cualquier otra solución unilateral impuesta por la intransigencia de un gobierno o un sector de la población, sería equivocada e inconcebible.

El problema tal como lo planteaba Grecia era un problema de anexión y no de colonialismo en oposición al derecho del pueblo a la libre determinación. La minoría turca de Chipre no deseaba jamás verse bajo la dominación griega. Era Grecia quien se oponía al ofrecimiento de buenos oficios, insistiendo en que debían reconocerse por anticipado sus aspiraciones con respecto a Chipre. El Arzobispo Makarios había interpretado falsamente la resolución de la Asamblea como una recomendación de que se interrumpieran las conversaciones tripartitas y se iniciaran conversaciones bilaterales en las cuales el Reino Unido debería aceptar por anticipado los pretendidos derechos del gobierno griego, y de las cuales se hubiera excluido a Turquía. Dicha premisa era totalmente inaceptable.

El 13 de diciembre, las cuatro Potencias autoras de las enmiendas aceptaron una subenmienda presentada por España, por la cual, en el párrafo dispositivo, se reemplazaban las palabras "viva esperanza de que se entablarán" por las palabras "su deseo de que se entablen". El representante de Grecia declaró que aceptaba las enmiendas al preámbulo propuestas por las cuatro Potencias, pero que mantenía su subenmienda de fondo, que fué luego sometida a votación en la Primera Comisión y aprobada por 33 votos contra 18 y 27 abstenciones. En dos votaciones separadas, quedaron adoptados el primer párrafo del preámbulo y el resto del preámbulo. El proyecto de resolución de Grecia con las enmiendas introducidas fué aprobado a continuación por 33 votos contra 20 y 25 abstenciones.

El 14 de diciembre, en sesión plenaria, el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión recibió 31 votos a favor, 23 en contra y 24 abstenciones y, al no obtener la mayoría necesaria de dos tercios, fué rechazado.

Por comunicaciones fechadas el 13 y el 19 de junio de 1958 procedentes de Grecia, y por notas fechadas el 13 y el 16 de junio enviadas de Turquía, el Consejo de Seguridad se informó de la opinión griega y turca sobre el curso de los acontecimientos relativos a la cuestión de Chipre, incluso sobre las últimas manifestaciones de violencia en la Isla.

17. La cuestión de Argelia

El 16 de julio de 1957, Afganistán, Arabia Saudita, Ceilán, Egipto, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Nepal, Pakistán, Siria, Sudán, Túnez y Yemen solicitaron que el tema titulado "La cuestión de Argelia" se incluyera en el programa del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General. El 23 de julio, Birmania se sumó a dichos países anteriores en esta solicitud. En un memorándum explicativo, se recordaba que el 15 de febrero de 1957 la Asamblea General había aprobado por unanimidad la resolución 1012 (XI) en la que expresaba la esperanza de que, en un espíritu de cooperación, se encontraría una solución pacífica, democrática y justa, por medios adecuados, en conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Se tomaba nota de que, aunque era razonable esperar que se adoptarían medidas en cumplimiento de la resolución, ningún Estado Miembro había comunicado a las Naciones Unidas que se hubiera logrado progreso alguno desde entonces. Por el contrario se había recibido mucha información acerca del empeoramiento de la situación. Esto había sido comunicado al Secretario General y, por su conducto, a los Estados Miembros, en una carta del 15 de abril de 1957 firmada por los representantes de 19 Estados Miembros.

El 20 de septiembre de 1957, la Asamblea incluyó el tema en su programa. El asunto fué examinado por la Primera Comisión durante 14 sesiones celebradas entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre.

El representante de Francia subrayó que el hecho de que su delegación no se hubiese opuesto a la inclusión del tema en el programa no debía interpretarse como que aceptaba la intervención de las Naciones Unidas en esta cuestión. Argelia se había convertido constitucionalmente en parte de Francia en 1848, y Francia había ingresado en las Naciones Unidas con las fronteras que se le reconocían como suyas, y que incluían a Argelia. En consecuencia, los problemas que se planteaban en Argelia eran de la jurisdicción de Francia.

El representante de Francia subrayó que la rebelión argelina era una campaña política organizada por una minoría que habría fracasado de no disponer de la ayuda que le facilitaban ciertos países, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, de las disposiciones de la resolución de la Asamblea General titulada "Bases esenciales de la paz" y de los principios de coexistencia pacífica aprobados en la Conferencia de Bandung en 1954. Francia no podía aceptar los ofrecimientos de buenos oficios hechos por Marruecos y Túnez porque la soberanía de dichos países se veía amenazada por la presión de los rebeldes argelinos. Además, el ofrecimiento llevaba en sí como condición previa el reconocimiento de la soberanía de Argelia y afirmaba que el FLN (Frente de Liberación Nacional) era el único representante de las poblaciones argelinas. El ofrecimiento de Francia para negociar, hecho sin condiciones previas inaceptables, había sido constantemente rechazado. Francia seguía dispuesta a negociar el cese del fuego, y si la finalidad del ofrecimiento de buenos oficios fuera únicamente obtener esto, Francia favorecería la mediación de Marruecos y Túnez.

El representante de Francia declaró que existían profundos antagonismos entre los dos grupos rebeldes principales y se refirió al papel desempeñado por los comunistas argelinos dentro de dichos grupos. Hizo una reseña de las reformas realizadas por la Administración francesa, y dijo que los tres pilares de la política de Francia en Argelia eran el cese del fuego, las elecciones y las negociaciones. La *loi cadre*, que establecía principios y no entraba en detalles de aplicación, era uno de los instrumentos de la política francesa. Contenía una ley electoral y demostraba que Francia estaba resuelta a preparar las condiciones de un equilibrio pacífico y a poner en práctica un sistema práctico que permitiera lograr el triple objetivo de la política de Francia. El representante de Francia consideraba que la aplicación del principio de libre determinación a Argelia en las circunstancias existentes daría como resultado la división de Argelia en dos o más Estados.

Varios representantes, entre otros los de Argentina, Australia, Cuba, España, Israel, los Países Bajos, Perú, Portugal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte defendieron también la tesis de que las Naciones Unidas no tenían competencia para intervenir.

Los representantes de los Estados que habían presentado el tema y algunos otros consideraban que las Naciones Unidas sí tenían competencia en el asunto. Sostuvieron que la cuestión de competencia no podía decidirse por la declaración unilateral de un Estado Miembro. Puesto que la dominación francesa en Argelia había tenido su origen en una intervención militar, sólo se la podía considerar actualmente como una ocupación colonial. Además, como la lucha en Argelia ponía en peligro la paz y la seguridad de la región, las Naciones Unidas tenían tanto el derecho como el deber de proseguir la búsqueda de una solución equitativa. Además, la crisis de Argelia perjudicaba las buenas relaciones de Francia con respecto a Túnez y Marruecos, y por lo tanto se justificaba invocar el Artículo 14 de la Carta. Se subrayó también que Argelia había sido, sin restricción alguna, una entidad nacional antes de la ocupación francesa, y que el concepto de Argelia como parte integrante de Francia se hallaba en contradicción con la historia y con el curso de la política francesa en Argelia.

Entre los que sostuvieron dichas opiniones figuraban los representantes de Albania, Arabia, Saudita, Ceilán, Egipto, Guatemala, Haití, Indonesia, Jordania, el Líbano,

no, Marruecos, Nepal, el Pakistán, la República Socialista Soviética de Bielorrusia, la República Socialista Soviética de Ucrania, Rumania, Sudán, Siria, Túnez, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yemen. Además, los representantes de los Estados árabes rechazaron las denuncias de intervención formuladas por Francia, y dijeron que la situación en Argelia emanaba directamente de la política de Francia.

Varios representantes afirmaron también que el movimiento de liberación argelino representaba genuinamente al pueblo de Argelia, y que de hecho los rebeldes administraban gran parte del país. La *loi cadre* no podía llevar a una solución porque se trataba de una acción unilateral de Francia. Sólo bajo los auspicios de las Naciones Unidas se podía lograr un acuerdo pacífico. Además, la Asamblea debía reconocer que el principio de libre determinación era aplicable al pueblo argelino.

Se presentaron dos proyectos de resolución. Uno de ellos por Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Ceilán, Egipto, Ghana, Indonesia, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Nepal, Siria, Sudán, Túnez y Yemen. Disponía que la Asamblea, 1) deplorando que la esperanza expresada en su resolución 1012 (XI) no se hubiera hecho realidad todavía, 2) reconociendo que el principio de la libre determinación era aplicable al pueblo argelino, y 3) advirtiendo que la situación en Argelia continuaba causando muchos sufrimientos y pérdidas de vidas humanas, 4) exhortaría a que se realizaran negociaciones con el propósito de llegar a una solución en conformidad con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

El segundo proyecto de resolución fué presentado por Argentina, Brasil, Cuba, España, Italia, Perú y la República Dominicana. Disponía que la Asamblea, 1) habiendo oído las declaraciones de varias delegaciones y discutido la cuestión de Argelia, y 2) teniendo en cuenta la situación, que seguía causando muchos sufrimientos y pérdidas de vidas humanas, decidiría 3) tomar nota de los intentos de resolver el problema tanto por medio de los buenos oficios del Jefe de Estado, como de iniciativas legislativas francesas, y 4) expresaría de nuevo la esperanza de que, en un espíritu de cooperación, se encontraría una solución pacífica, democrática y justa, por medios adecuados, en conformidad con los principios de la Carta.

Canadá, Irlanda y Noruega presentaron enmiendas al proyecto de resolución de las 17 Potencias. La primera consistía en sustituir el cuarto párrafo del preámbulo (véase 2) *supra*) por un párrafo en el que se reconociera que correspondía al pueblo de Argelia forjar su propio porvenir en forma democrática. La segunda enmienda consistía en sustituir el párrafo de la parte dispositiva por un texto en virtud del cual la Asamblea propondría la celebración de discusiones efectivas que tuviesen por objeto poner fin a la actual perturbación y llegar a una solución en conformidad con los principios y propósitos de la Carta. Las enmiendas no fueron aceptadas por los autores del proyecto.

El proyecto de resolución de las 17 Potencias y las enmiendas fueron sometidos a votación el 6 de diciembre de 1957. El representante de Francia declaró que no participaría en la votación. Las enmiendas fueron aprobadas en su totalidad por 37 votos contra 36 y 7 abstenciones. El proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas, no fué adoptado, pues obtuvo 37 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones. El representante de la Argentina manifestó que los autores del proyecto de resolución de las 17 Potencias no insisti-

rían en que éste se pusiese a votación, pero que se reservaban el derecho de presentarlo en sesión plenaria. En consecuencia, la Primera Comisión no pudo recomendar que se aprobara un proyecto de resolución.

El tema fué examinado en sesión plenaria el 10 de diciembre de 1957. Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, España, India, Irán, Irlanda, Italia, Japón, México, Noruega, Perú, la República Dominicana y Tailandia presentaron un proyecto de resolución. En él se proponía que la Asamblea General, recordando su resolución 1012 (XI) de 15 de febrero de 1957, 1) expresaría nuevamente su preocupación por la situación en Argelia; 2) tomaría nota del ofrecimiento de buenos oficios hechos por Su Majestad el Rey de Marruecos y Su Excelencia el Presidente de la República de Túnez; y 3) expresaría el deseo de que, con espíritu de cooperación efectiva, se iniciarían conversaciones y se utilizarían otros medios apropiados con miras a lograr una solución, en conformidad con los propósitos y principios de la Carta. La resolución fué aprobada por 80 votos contra ninguno (resolución 1184 (XII)).

18. Denuncias formuladas por Túnez y Francia

a) DENUNCIAS PROVOCADAS POR INCIDENTES EN SAKIET-SIDI-YOUSSEF EL 8 DE FEBRERO DE 1958

El 13 febrero de 1958 Túnez pidió que el Consejo de Seguridad se reuniera a considerar el punto titulado "Denuncia formulada por Túnez de un acto de agresión perpetrado contra ella por Francia el 8 de febrero de 1958 en Sakiet-Sidi-Youssef". En un memorándum explicativo, se acusaba de que en esa fecha aviones militares franceses efectuaron un bombardeo en masa contra el pueblo tunecino fronterizo de Sakiet-Sidi-Youssef que ocasionó considerables bajas y daños materiales y, asimismo, se afirmaba que el ataque era una de las varias violaciones del territorio de Túnez, cometidas desde mayo de 1957 por las fuerzas francesas procedentes de Argelia. Túnez pedía que se adoptaran medidas adecuadas para acabar con una situación que amenazaba su seguridad y ponía en peligro la paz y seguridad internacionales en esa parte del mundo.

En una nueva comunicación dirigida al Consejo de Seguridad el 17 de febrero, Túnez explicó que la situación que amenazaba su seguridad se debía a la presencia de tropas francesas en Túnez y añadió que éstas deberían ser evacuadas en su totalidad. La guerra en Argelia y sus repercusiones sobre la seguridad de Túnez eran las que hacían peligrar la paz internacional.

El 14 de febrero, Francia pidió que el Consejo estudiara en su próxima sesión la siguiente denuncia contra Túnez: "Situación creada por la ayuda que Túnez presta a los rebeldes, que permite a éstos realizar, desde el territorio de Túnez, operaciones contra el territorio francés y la seguridad de las personas y bienes de nacionales franceses". En un memorándum explicativo, Francia acusaba a Túnez de haber violado el Artículo 4 de la Carta al no poder mantener el orden en la frontera franco-tunecina o al no querer hacerlo. Reseñando las circunstancias que habían provocado el incidente de Sakiet-Sidi-Youssef, Francia pidió al Consejo que condenara la asistencia prestada por Túnez a los rebeldes argelinos.

En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el 18 de febrero, se incluyeron ambas denuncias en el orden del día. Durante el debate, los representantes de los Estados Unidos de América y del Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte informaron al Consejo sobre una oferta de buenos oficios formulada conjuntamente por sus Gobiernos con objeto de ayudar a Túnez y Francia a resolver sus problemas pendientes, como asimismo la aceptación de esta oferta por ambas partes. Atendida esa circunstancia, el Consejo decidió suspender la sesión hasta conocer los resultados de las gestiones de avenimiento.

Posteriormente, el Consejo recibió de los Gobiernos de Francia y Túnez diversas comunicaciones acerca de incidentes relacionados con las denuncias de Túnez y Francia.

b) DENUNCIAS DEL 29 DE MAYO DE 1958 RELATIVAS A INCIDENTES EN REMADA

El 29 de mayo de 1958 Túnez pidió que el Consejo de Seguridad se reuniera para considerar la cuestión "Denuncia formulada por Túnez de actos de agresión armada perpetrados contra ella desde el 19 de mayo de 1958 por fuerzas militares francesas acantonadas en su territorio y en Argelia". En un memorándum explicativo, después de recordar que, atendida la oferta anglo-norteamericana de buenos oficios, el Consejo había decidido, el 18 de febrero de 1958, aplazar su examen del incidente de Sakiet-Sidi-Youssef, Túnez expuso que la oferta había culminado, el 15 de marzo de 1958, en un compromiso que establecía, entre otras cosas, el procedimiento para evacuar las tropas francesas desde Túnez. Sin embargo, el compromiso no se había aplicado debido a que el Gobierno de Francia no pudo ratificarlo. El 24 y 25 de mayo de 1958, se exponía más adelante, las fuerzas francesas iniciaron acciones militares en la zona de Remada en Túnez meridional. El 24 de mayo, dispararon contra puestos tunecinos situados en esa zona, y el 25 de mayo, aviones de bombardeo y caza franceses procedentes de Argelia bombardearon y ametrallaron la región en un radio de varias docenas de kilómetros. El Gobierno de Túnez señaló a la atención del Consejo la suma gravedad de la situación resultante de esos actos, que calificaba de agresión armada contra su integridad territorial, perpetrados por las fuerzas francesas acantonadas en su territorio y por las situadas en Argelia. Por considerar que sus gestiones conciliatorias habían fracasado y que su soberanía estaba gravemente amenazada, pidió al Consejo que, de conformidad con el Artículo 40 y siguientes de la Carta, adoptase medidas para poner fin a esta situación.

El mismo día 29 de mayo de 1958, Francia pidió al Consejo que, en su próxima sesión, examinara: "1) La denuncia formulada por Francia contra Túnez el 14 de febrero de 1958 (S/3954); 2) la situación creada por la violación por parte de Túnez, del *modus vivendi* que imperaba desde febrero de 1958 con respecto al estacionamiento de tropas francesas en ciertos puntos del territorio de Túnez". En un memorándum explicativo se recordó que, el 18 de febrero de 1958, el Consejo había tomado nota de la aceptación por parte de Francia y Túnez de la oferta de buenos oficios anglo-norteamericanos. Las partes—se agregaba—habían convenido en que los suministros a las tropas francesas en Túnez continuarían normalmente y ninguna de ellas adoptaría medidas que alterasen el *statu quo*. Sin embargo, el Gobierno de Túnez había creado condiciones propicias para incidentes al adoptar medidas que denominaba "preventivas", tales como maniobras de tropas y entrega de armas a la población civil. A pesar de eso, las tropas francesas obedecían estrictamente las órdenes recibidas y todas las medidas adoptadas por las autoridades francesas durante los incidentes de Remada

denotaban la preocupación de Francia por no agravar los incidentes provocados por los tunecinos. Sólo se había decidido recurrir al empleo de la fuerza aérea francesa en la mañana del 27 de mayo como un recurso extremo, después de las bajas sufridas por las fuerzas de Francia. En el plano político, el Gobierno de Francia había tratado incesantemente de lograr un arreglo completo o limitado de las diversas dificultades existentes entre Francia y Túnez. El 25 de mayo de 1958, el Encargado de Negocios de Francia en Túnez informó al Presidente del Gobierno de este país acerca del procedimiento para llevar a cabo el acuerdo en principio del Gobierno de Francia relativo al reagrupamiento de sus tropas. Al día siguiente, el Vicepresidente del Consejo de Túnez comunicó las contrapropuestas de su Gobierno al representante de Francia y le rogó que fueran consideradas lo antes posible. Ahora bien, en el preciso momento en que se realizaban las conversaciones, y a pesar de las múltiples manifestaciones de buena voluntad por parte del Gobierno de Francia, el Gobierno de Túnez, al presentarse de nuevo ante el Consejo, creaba la impresión de que Francia se disponía a violar la soberanía de Túnez. Estas actitudes contradictorias por parte del Gobierno de Túnez, concluía el memorándum, no desalentarían al Gobierno de Francia en sus gestiones por resolver las controversias entre los dos países mediante un acuerdo amistoso, por lo que encarecía al Consejo que recomendase al Gobierno de Túnez que restableciera condiciones favorables para reanudar las negociaciones.

En una sesión celebrada el 2 de junio, el Consejo incluyó en su orden del día el punto presentado por Túnez y los dos puntos sometidos por Francia. El representante de Túnez fué invitado a tomar asiento a la mesa del Consejo.

El Consejo, tras examinar el problema en esa sesión y en otras dos celebradas el 2 y 4 de junio, aprobó una propuesta de Francia para aplazar el estudio de estos puntos hasta el 18 de junio de 1958 con objeto de permitir negociaciones directas entre las partes.

En la sesión del 18 de junio los representantes de Francia y Túnez informaron al Consejo que, en un intercambio de comunicaciones ocurrido el día anterior entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Túnez y el Encargado de Negocios de Francia en dicho país, se había convenido en que todas las fuerzas francesas, salvo las estacionadas en Bizerta, evacuarían Túnez en un plazo de cuatro meses. El estatuto provisional para la base de Bizerta sería objeto de negociaciones.

19. Trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana

El 16 de agosto de 1957 la India y el Pakistán solicitaron que en el programa del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General se incluyera la cuestión relativa al trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana. En su memorándum explicativo recordaban que, en el anterior período de sesiones, la Asamblea, por resolución 1015 (XI), del 30 de enero de 1957, había instado a las partes interesadas a que emprendiesen negociaciones para facilitar la solución del problema. Por desgracia, todas las iniciativas en este sentido se habían visto frustradas por la falta de una respuesta del Gobierno de la Unión Sudafricana. Entretanto, la situación de las personas de origen indio en la Unión Sudafricana había seguido empeorando.

El 20 de septiembre de 1957 la Asamblea decidió por 63 votos contra 2 y 16 abstenciones incluir el tema en su programa. El representante de la Unión Sudafricana participó en el debate sólo para objetar contra la inclusión del tema alegando que su examen constituía una intervención en los asuntos de la jurisdicción interna de su país en violación del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. La Comisión Política Especial estudió la cuestión en seis sesiones celebradas entre el 4 y el 12 de noviembre de 1957.

Los representantes de la India y del Pakistán declararon que el Gobierno de la Unión Sudafricana persistía en aplicar su política de *apartheid* con grave perjuicio para la población no europea de la Unión, en la que había 400.000 habitantes de origen indio. Al proceder así, el Gobierno de la Unión Sudafricana obraba contra la Carta, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y, en especial, contra los convenios internacionales concertados por la India y la Unión Sudafricana.

En el curso de los debates, se aludió a la relación que había entre la cuestión del trato dado a las personas de origen indio y el problema más vasto de la política de *apartheid*. Se propuso examinar el primer tema como parte de la cuestión general de la *apartheid*, pues no había modo de resolver el problema particular del trato dado a las personas de origen indio mientras el Gobierno de la Unión Sudafricana no modificara su política racial general.

Aunque admitieron que el tema constituía un aspecto de la cuestión de la *apartheid*, varios representantes insistieron en que continuara examinándose separadamente porque entrañaba no sólo la cuestión general del respeto a los derechos humanos, sino asimismo el problema concreto del acatamiento de los convenios internacionales.

El 8 de noviembre de 1957, Filipinas, Irán, México y Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución, por el cual la Asamblea General: 1) tomaría nota de que los Gobiernos de la India y del Pakistán habían reiterado que estaban dispuestos a entablar negociaciones con el Gobierno de la Unión Sudafricana; 2) observaría con pesar que el Gobierno de la Unión Sudafricana no había accedido a cumplir los propósitos de la resolución 1015 (XI); 3) instaría al Gobierno de la Unión Sudafricana a que celebrara negociaciones con los Gobiernos de la India y del Pakistán con objeto de resolver este problema de conformidad con los propósitos y principios de la Carta y con la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4) invitaría a las partes interesadas a que informaran a la Asamblea General, según fuese adecuado, conjunta o separadamente, acerca de la marcha de las negociaciones.

El 12 de noviembre de 1957 la Comisión Política Especial aprobó el proyecto de resolución y, el 26 de noviembre de 1957, la Asamblea General lo adoptó por 64 votos contra ninguno y 15 abstenciones (resolución 1179 (XII)).

20. La cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de la política de segregación racial (*apartheid*) del Gobierno de la Unión Sudafricana

El 6 de agosto de 1957, Bolivia, Costa Rica, Egipto, India, Indonesia, Liberia, Sudán y Uruguay, y más tarde Ceilán, propusieron la inclusión de este tema en el programa del duodécimo período de sesiones de la

Asamblea General. Sostuvieron que, como el Gobierno de la Unión Sudafricana había hecho caso omiso de la resolución 1016 (XI) del 30 de enero de 1957 y había seguido adoptando medidas legislativas y de otra índole para llevar adelante su declarada política de *apartheid*, era indudable que la Asamblea General desearía volver a ocuparse de este tema.

El 20 de septiembre de 1957 la Asamblea decidió por 64 votos contra 8 y 9 abstenciones, incluir este tema en su programa. La Comisión Política Especial lo examinó en ocho sesiones entre el 21 de octubre y el 1° de noviembre. El representante de la Unión Sudafricana se limitó en el debate a renovar su protesta contra la persistente intervención en los asuntos internos de la Unión Sudafricana en violación del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta.

El 31 de octubre de 1957, 30 Estados Miembros presentaron y patrocinaron un proyecto de resolución por el cual la Asamblea: 1) deploraría que el Gobierno de la Unión Sudafricana no hubiese respondido aún a la exhortación e invitación formuladas en los párrafos 3 y 4 de la resolución 1016 (XI); 2) señalaría de nuevo a la atención del Gobierno de la Unión Sudafricana dicha resolución y, en particular, los párrafos indicados; y 3) movida por el interés de que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas observasen los elevados principios y objetivos consagrados en la Carta, haría un llamamiento a ese Gobierno para que revisase su política tomando en cuenta esos principios y objetivos y la opinión mundial.

Con respecto a las medidas apropiadas y eficaces que la Asamblea podía adoptar, algunos representantes sostuvieron que las Naciones Unidas deberían condenar la política de segregación racial (*apartheid*), en tanto que otros opinaron que la Asamblea debería simplemente interponer su influencia moral en apoyo del principio universalmente reconocido del respeto a los derechos humanos fundamentales. Varios representantes opinaron que toda omisión de la Asamblea en adoptar una resolución ocasionaría más daño a las Naciones Unidas que el reiterado desenlace infructuoso de sus resoluciones. Diversos representantes estimaron que la Asamblea haría mejor en adoptar una política de conciliación y persuasión en vez de recurrir a una política de censura, particularmente teniendo en cuenta el virtual retiro de la Unión Sudafricana de la Asamblea. Asimismo, se sugirió que la Secretaría podría preparar anualmente para la Asamblea un informe concreto sobre las novedades relativas a la situación racial en la Unión Sudafricana.

Otros representantes, aunque objetaron contra la política de segregación racial en general, manifestaron que a las Naciones Unidas les estaba concretamente prohibido, en virtud del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta, adoptar resoluciones que repercutieran sobre la política interna de los Estados Miembros.

El 4 de noviembre de 1957 la Comisión Política Especial aprobó el proyecto de resolución de las treinta Potencias y, el 26 de noviembre de 1957, la Asamblea General lo adoptó por 59 votos contra 6 y 14 abstenciones (resolución 1178 (XII)).

El 1° de marzo de 1958 el Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Sudafricana comunicó al Secretario General que no estaba en situación de tomar nota de las resoluciones 1178 (XII) y 1179 (XII) remitidas por el Secretario General, salvo para acusar formalmente recibo, pues el Gobierno de la Unión Sudafricana había sostenido invariablemente que los asuntos

tratados en estas resoluciones eran, en esencia, de la jurisdicción interna de la Unión Sudafricana.

21. La cuestión India-Pakistán

a) COMUNICACIONES DEL PAKISTÁN Y DE LA INDIA

En agosto y octubre de 1957 el Pakistán y la India dirigieron varias comunicaciones al Presidente del Consejo de Seguridad. En una carta del Pakistán del 5 de agosto de 1957 se formulaba el cargo de que la India había asentado a muchas personas que no eran musulmanas ni residían en Jammu y Cachemira, en la zona ocupada por aquélla, contraviniendo así la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad el 17 de enero de 1948, en la que se instaba a las partes en la controversia a que se abstuvieran de actos que pudieran agravar la situación. En una carta del 9 de agosto el representante de la India rechazó esta afirmación y expuso que a ninguna persona no residente se le autorizaba para radicarse en Jammu y Cachemira. Reiteró que el Pakistán ocupaba territorio de la Unión de la India en virtud de una agresión y en violación de la resolución aprobada por el Consejo el 17 de enero de 1948, y de las dos resoluciones del 13 de agosto de 1948 y de 5 de enero de 1949 aprobadas por la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán.

Las cartas del 21 de agosto y 3 de octubre de 1957 de los representantes de la India y del Pakistán, respectivamente, se referían al proyecto de presa en Mangla, cuya construcción, según el representante de la India, violaba la resolución del Consejo del 17 de enero de 1948 y las garantías dadas a la India por el presidente de dicha Comisión. El representante del Pakistán señaló que la India había realizado diversos proyectos en el sector que le correspondía en virtud de la línea de cesación del fuego. Añadió que si dichos proyectos no agravaban la situación, el Pakistán no comprendía cómo un proyecto de fomento en la región de Cachemira Azad podía surtir tal efecto.

b) EXAMEN DEL INFORME DEL SR. JARRING Y NUEVO DEBATE SOBRE LA CUESTIÓN INDIA-PAKISTÁN

El 29 de abril de 1957, el Sr. Jarring, Presidente del Consejo de Seguridad en febrero de 1957, presentó un informe de su misión en el subcontinente de conformidad con la resolución aprobada por el Consejo el 21 de febrero de 1957. El 21 de agosto de ese año, el representante del Pakistán solicitó que se reuniese el Consejo para examinar el informe del Sr. Jarring y estudiar las nuevas medidas que podían adoptarse. El 27 de septiembre se reunió el Consejo para examinar el informe y estudió la cuestión India-Pakistán en 14 sesiones celebradas entre esa fecha y el 2 de diciembre.

El 18 de noviembre de 1957 Australia, Colombia, Estados Unidos de América, Filipinas y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentaron al Consejo un proyecto de resolución. En éste se proponía que el Consejo: a) expresando su agradecimiento al Sr. Jarring, b) observando que los Gobiernos de la India y el Pakistán reconocían y aceptaban las obligaciones contraídas por ellos en las dos resoluciones aprobadas por la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, en que se preveía la determinación de la condición jurídica futura del Estado de Jammu y Cachemira con arreglo a la voluntad popular expresada mediante el método democrático de un plebiscito libre e imparcial, y c) considerando la importancia que atribuía a la desmilitarización del Estado

como una de las etapas conducentes a un arreglo; resolvía: 1) pedir a los dos Gobiernos abstenerse de actos que pudieran agravar la situación y establecer y mantener un ambiente favorable que permitiera realizar nuevas negociaciones; 2) pedir al representante de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán (Dr. Frank P. Graham) que formulase a las partes todas las recomendaciones relativas a nuevas medidas que estimara convenientes en relación con la parte I de la resolución aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán el 13 de agosto de 1948 (relativa a la cesación del fuego), teniendo en cuenta sus propios informes tercero y quinto y el informe del Sr. Jarring, e iniciara negociaciones con los dos Gobiernos para cumplir la parte II de la resolución del 13 de agosto de 1948 (relativa al acuerdo de tregua y el retiro de las tropas), y especialmente procurase celebrar un convenio destinado a reducir las fuerzas existentes a cada lado de la línea de cesación del fuego a un número determinado, concertado a base de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y habida cuenta del quinto informe del Dr. Graham; y 3) encarecer a los Gobiernos de la India y del Pakistán que colaborasen con el representante de las Naciones Unidas para redactar lo antes posible un convenio sobre los procedimientos de desmilitarización, que se llevaría a cabo en los tres meses siguientes a la concertación de dicho convenio.

El 27 de noviembre, Suecia presentó enmiendas que: 1) reemplazaban la referencia en el preámbulo a los "compromisos", por una alusión a la resolución del Consejo del 17 de enero de 1948, 2) substituían el párrafo 2 de la parte dispositiva por un nuevo texto en que se solicitaba al representante de las Naciones Unidas que formulase a las partes todas las recomendaciones de nuevas medidas apropiadas y encaminadas a poner en práctica las resoluciones aprobadas por la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán y lograr un arreglo pacífico, y 3) se suprimía el párrafo 3 de la parte dispositiva.

El 2 de diciembre, las enmiendas y el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas, fueron adoptados, respectivamente, por 10 votos a favor y 1 abstención (URSS).

c) INFORME DEL REPRESENTANTE DE LAS NACIONES UNIDAS

El 28 de marzo de 1958, el Dr. Graham presentó el informe pedido por el Consejo. En él formuló cinco recomendaciones que había sometido a los Gobiernos de la India y del Pakistán el 15 de febrero de 1958. En ellas se pedía: 1) una nueva declaración de ambos Gobiernos instando a sus respectivos pueblos a coadyuvar en la creación de un ambiente favorable a futuras negociaciones y comprometiéndose a evitar declaraciones y acciones que pudiesen agravar la situación; 2) una refirmación de la integridad de la línea de cesación del fuego; 3) un estudio bajo los auspicios del Dr. Graham acerca de cómo se administraría el territorio que habrían de evacuar las fuerzas del Pakistán en virtud de la parte II de la resolución de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán aprobada el 13 de agosto de 1948, y el examen del estacionamiento de la fuerza de las Naciones Unidas en el lado de la frontera correspondiente al Pakistán; 4) un estudio de cómo se interpretarían la parte III de la resolución del 13 de agosto de 1948 y las partes de la resolución de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán de 5 de enero de 1949 referentes

a un plebiscito; y 5) una conferencia del Primer Ministro de la India con el del Pakistán. El Dr. Graham añadió que el Pakistán había aceptado en principio las recomendaciones. La India declaró no poder aprobar las recomendaciones, que estimaba formuladas sin tener en cuenta el incumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad del 17 de enero de 1948 y de ciertas cláusulas de la resolución de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán del 13 de agosto de 1948, incumplimiento que ella atribuía al Pakistán. Asimismo, se le había comunicado que la India no apoyaba el fondo de sus recomendaciones. Sin embargo, el representante de las Naciones Unidas esperaba que ambos Gobiernos reservarían el examen de su propuesta para una conferencia entre las autoridades superiores de los dos países.

d) NUEVAS COMUNICACIONES DE LA INDIA Y DEL PAKISTÁN

El 20 y el 24 de enero de 1958, la India y el Pakistán, respectivamente, enviaron nuevas cartas al Consejo relativas al proyecto de presa de Mangla.

Varias de las comunicaciones enviadas al Presidente del Consejo por el Pakistán el 28 de marzo, el 11 de abril y el 6 de mayo de 1958, y por la India el 24 de abril, el 1º de mayo y el 11 de junio, se referían a las acusaciones formuladas por el Pakistán en el sentido de que se habían adoptado nuevas medidas para incorporar el Estado de Jammu y Cachemira a la India, a las condiciones existentes en dicho Estado y a la detención del Jeque Abdullah.

22. La cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental)

El 16 de agosto de 1957, 21 Estados de Asia y Africa solicitaron que la cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental) se incluyera en el programa del duodécimo período de sesiones. En un memorándum explicativo se declaró que, puesto que en su anterior período de sesiones la Asamblea no había logrado recomendar a las partes una solución pacífica de la cuestión, aquélla no había contribuido a aliviar la tirantez que existía entre Indonesia y los Países Bajos, como lo habían previsto muchos Estados Miembros. La continuación de la situación actual sólo podía aumentar los peligros inherentes a esa antigua controversia. Por lo tanto, incumbía a la Asamblea General hacer lo posible por lograr una solución pacífica.

El 18 de septiembre, la Asamblea General, por 49 votos contra 21 y 11 abstenciones, decidió incluir el tema en su programa.

La Primera Comisión examinó la cuestión en ocho sesiones celebradas entre el 20 y el 26 de noviembre de 1957. El 19 de noviembre, Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Bolivia, Ceilán, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Nepal, Siria, Sudán, Túnez y Yemen presentaron un proyecto de resolución en virtud del cual la Asamblea General: 1) invitaría a ambas partes a proseguir sus esfuerzos para encontrar una solución de la controversia en conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas; y 2) pediría al Secretario General que ayudara a las partes interesadas, según lo estimase apropiado, a poner en práctica esa resolución y que presentara a la Asamblea General, en su décimotercer período de sesiones, un informe sobre los resultados obtenidos.

El representante de Indonesia declaró que la cuestión era tan urgente ahora como en el momento en que por primera vez fué señalada a la atención de las Naciones Unidas.

El hecho básico era que el Irián Occidental formaba parte integrante de las antiguas Indias Orientales Holandesas y de la entidad política conocida como Indonesia. Por la Carta de Traspaso de Soberanía de 1949, los Países Bajos habían transferido la soberanía sobre Indonesia. Hubo una controversia en torno al *status* político del Irián Occidental, que, según se acordó, debía resolverse por medios pacíficos durante el año 1950. En lugar de permitir que las Naciones Unidas conciliaran las discrepancias entre los dos Estados, se invocaron numerosos pretextos a fin de impedir un arreglo pacífico, especialmente mediante la introducción del lema de "la libre determinación" en el problema del Irián Occidental. Los Países Bajos abusaron de este principio en un esfuerzo por mantener al Irián Occidental bajo su dominación colonial. No se trataba de la transferencia de un pueblo y de un territorio a otro país, sino de liquidar la dominación colonial de los Países Bajos en Indonesia. Indonesia estaba luchando contra la amputación de una parte de su territorio y consideraba que la total reunificación del país era un objetivo nacional primordial. No debía sorprender a nadie que, en caso de que se rechazaran nuevamente las negociaciones, se produjeran como consecuencia acontecimientos imprevisibles e indeseables, y hasta explosivos. La paciencia del pueblo indonesio no era inagotable. El representante de los Países Bajos reseñó los puntos fundamentales de la posición de su Gobierno sobre la cuestión, en los siguientes términos: 1) Los Países Bajos, en su carácter de Potencia encargada de la administración del Territorio de la Nueva Guinea Neerlandesa, habían asumido diversas obligaciones en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; 2) en el caso de que aceptaran transferir a Indonesia ese territorio, que era una región bajo la soberanía de los Países Bajos, sin determinar previamente los deseos de la población, infringiría la obligación contraída con sus habitantes y con las Naciones Unidas; 3) habían prometido solemnemente a los habitantes que les concederían la oportunidad de decidir su propio futuro político tan pronto como estuviesen en condiciones de expresar su voluntad; y 4) no podían atender ni atenderían demanda alguna de Indonesia en relación con la anexión del Territorio, ni entrarían en negociación alguna acerca de la condición futura del Territorio, a menos de que los habitantes no hubieran tomado tal decisión.

A fin de reforzar su petición de que la Asamblea General instara a los Países Bajos a tomar las medidas necesarias para la transferencia del Territorio a Indonesia, este país había declarado repetidamente que la situación podía poner en peligro la paz y, al parecer, hacía poco tiempo ella misma había tratado de crear tal amenaza. Esa conducta constituía una tentativa completamente censurable e intolerable encaminada a intimidar a la Asamblea General. De la cuestión sometida a la Comisión dependía el futuro de una de las islas mayores del mundo y el derecho de su población a elegir su propio camino hacia ese futuro, en conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Los que apoyaron el proyecto de resolución lo hicieron por considerar, entre otras cosas, que la celebración de nuevas negociaciones no podía perjudicar el fondo de la cuestión, sino aliviar la tirantez entre los dos países. Algunos de los que se opusieron a él estimaron

que, en virtud del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta, la Asamblea General no tenía competencia, mientras que otros consideraron que, con arreglo a la Carta de Traspaso de Soberanía, las dos partes habían convenido en que se mantendría el *status quo* y que, en las actuales circunstancias, ésa constituía la mejor manera de proteger el derecho de libre determinación de los habitantes. Asimismo se formularon sugerencias encaminadas a establecer el régimen de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en toda la isla de Nueva Guinea, a fin de que la población en su totalidad pudiera, a su debido momento, decidir su propio futuro.

El 26 de noviembre, la Primera Comisión aprobó el proyecto de resolución de las 19 Potencias por 42 votos contra 28 y 11 abstenciones. La Asamblea General examinó el informe de la Primera Comisión el 29 de noviembre. El proyecto de resolución recomendado por la Comisión recibió 41 votos a favor, 29 en contra y 11 abstenciones, y no fué aprobado por no obtener la mayoría necesaria de dos tercios. Después de la votación, el representante de Indonesia declaró que, como la Asamblea no había podido lograr que las dos partes se pusieran de acuerdo, Indonesia no tenía más alternativa que obrar prescindiendo de las Naciones Unidas. En vista de que no era posible tomar medidas concertadas y como Indonesia tenía la obligación de velar por el bienestar y la seguridad de su pueblo, se vería en la necesidad de adoptar medidas que no conducirían a mejorar sus relaciones con los Países Bajos.

23. La cuestión de Corea

a) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DUODÉCIMO PERÍODO DE SESIONES

De conformidad con la resolución 1010 A (XI) del 11 de enero de 1957, se incluyó la cuestión de Corea en el programa provisional del duodécimo período de sesiones; la Primera Comisión la examinó en seis sesiones celebradas entre el 12 y el 18 de noviembre de 1957.

La Comisión consideró dos informes, uno de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea (CNUURC), que abarcaba el período comprendido entre el 24 de agosto de 1956 y el 14 de agosto de 1957; y el otro, un informe especial presentado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en su carácter de autoridad encargada del Mando Unificado. En el primero se declaraba, *inter alia*, que, por lo que se refería al cumplimiento del objetivo esencial de las Naciones Unidas en Corea, que era el de establecer un gobierno unificado, independiente y democrático para toda la península de Corea, no había habido ningún cambio en las perspectivas fundamentales, y que no había indicaciones de que las autoridades de Corea del Norte o el Gobierno Popular Central de la República Popular de China estuvieran dispuestos a negociar un arreglo a base de los principios establecidos por las Naciones Unidas. El segundo informe declaraba que, con la introducción de mejores armas de distinto tipo, la parte comunista había destruido el relativo equilibrio militar de ambas partes previsto en el Acuerdo de Armisticio. Como los esfuerzos por rectificar la situación no tuvieron éxito, se había anunciado que, a fin de mantener ese equilibrio y preservar la estabilidad del armisticio, el Mando de las Naciones Unidas había estimado que tenía derecho a considerarse relevado de las obligaciones correspondientes contraídas en virtud del inciso d) del párrafo 13 del Acuerdo.

La Primera Comisión decidió invitar a un representante de la República de Corea a participar en el examen de la cuestión sin derecho de voto, y rechazó la propuesta de que se invitara asimismo a un representante de la República Popular Democrática de Corea.

El 13 de noviembre, Australia, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tailandia y Turquía presentaron un proyecto de resolución, en el que se disponía que la Asamblea General instaría a perseverar en los esfuerzos para alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas en Corea, y exhortaría a las autoridades comunistas interesadas a aceptar esos objetivos. Asimismo pediría a la CNUURC que prosiguiese su labor.

El representante de los Estados Unidos declaró que, debido a las flagrantes violaciones cometidas por los comunistas, el Mando de las Naciones Unidas tenía derecho a considerarse relevado de las obligaciones contraídas en virtud del inciso d) del párrafo 13 del Acuerdo de Armisticio. Dijo que había pocas esperanzas de que se llegara a resolver satisfactoriamente la cuestión de Corea, puesto que los comunistas habían rechazado una y otra vez toda propuesta equitativa de solución y continuaban negándose a discutir todo arreglo que se basara en los dos principios formulados en la Conferencia Política sobre Corea, celebrada en Ginebra en 1954. (En resumen, éstos disponían que las Naciones Unidas tenían pleno derecho a tomar medidas colectivas para repeler la agresión, restablecer la paz y la seguridad y ejercer sus buenos oficios a fin de lograr una solución pacífica en Corea. Además, se indicaba que deberían celebrarse elecciones bajo la vigilancia de las Naciones Unidas para elegir representantes en la Asamblea Nacional, fijándose la representación en proporción directa a la población indígena de toda Corea.)

Los representantes que apoyaron el proyecto de resolución conjunto declararon que las medidas tomadas recientemente por el Mando de las Naciones Unidas en relación con la introducción de nuevas armas estaban plenamente justificadas. Atribuyeron suma importancia al hecho de que se habían mantenido las partes esenciales del Acuerdo de Armisticio. Cualesquiera que fueran las dificultades, las Naciones Unidas debían defender sus objetivos en Corea y cumplir sus obligaciones.

El representante de la República de Corea declaró que las medidas tardías que había tomado el Mando de las Naciones Unidas no habían restablecido todavía el peligroso desequilibrio militar. Lamentó que, debido a la división artificial de ese país e hizo un llamado a los portavoces de la "coexistencia pacífica" a fin de que pusieran en práctica su teoría retirando sus fuerzas de la parte septentrional de Corea y aceptando la celebración de elecciones realmente libres bajo la vigilancia de las Naciones Unidas.

Los que se opusieron al proyecto de resolución, inclusive el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, expresaron la opinión de que durante años se había estado tratando de imponer a la Asamblea General resoluciones unilaterales y poco prácticas. Mientras se insistiera en atenerse a la declaración de la Conferencia de Ginebra no había esperanza alguna de llegar a un acuerdo. Corea del Sur había rechazado varias propuestas formuladas por la República Popular Democrática de Corea, inclusive una propuesta presentada conjuntamente con la República Popular de China en junio de 1957, que asimismo fué rechazada por los

Estados Unidos, por la que se proponía la convocatoria inmediata de una conferencia internacional de todos los Estados interesados en la cuestión. Los Estados Unidos habían violado flagrantemente el Acuerdo de Armisticio al organizar las fuerzas armadas de Corea del Sur, mientras que las fuerzas de Corea del Norte estaban reduciendo sus efectivos. Sus violaciones se habían agravado a raíz de la declaración del Mando de las Fuerzas de las Naciones Unidas en el sentido de que éste no se proponía cumplir las disposiciones del inciso d) del párrafo 13 del Acuerdo de Armisticio, y al anunciar los Estados Unidos que sus tropas estacionadas en Corea del Sur iban a ser equipadas con armas que podrían disparar proyectiles atómicos.

El representante de la Unión Soviética declaró que la CNUURC había alentado, en cierto modo, las tendencias agresivas del régimen de Corea del Sur y que sus actividades estaban destinadas a encubrir bajo el respeto a las Naciones Unidas la política agresiva que seguían los Estados Unidos.

Los representantes de Ceilán, India y Nepal declararon que el proyecto conjunto de resolución no podía contribuir a resolver la cuestión de Corea. El representante de la India apoyó el principio de celebrar elecciones bajo vigilancia internacional pero estimó que sería mucho más fácil lograr la unidad nacional sin injerencia del extranjero.

La Primera Comisión aprobó el proyecto de resolución el 18 de noviembre y la Asamblea General aprobó la resolución de la Comisión el 29 de noviembre, por 54 votos contra 9 y 16 abstenciones.

b) OTROS ACONTECIMIENTOS

El 10 de abril de 1958, los Estados Unidos, en su carácter de autoridad encargada del Mando Unificado, transmitieron el texto de una nota del 9 de abril que el Gobierno del Reino Unido, en representación de los gobiernos de los países que habían aportado fuerzas al Mando de la Fuerza de las Naciones Unidas en Corea, había transmitido a las autoridades de la República Popular de China. La nota contestaba a la declaración publicada en Pekín el 7 de abril de 1958, que había sido comunicada a esos gobiernos.

La nota declaraba que esos gobiernos refirmaban que el objetivo que perseguían en Corea era que se estableciera una Corea unificada, independiente y democrática, en conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas, y para ello, deseaban que se celebrasen elecciones libres bajo la vigilancia de las Naciones Unidas a fin de constituir una Asamblea Nacional. Habían tomado nota con satisfacción de que las autoridades de Corea del Norte y la República Popular de China eran también partidarias de unas elecciones libres y acogían con agrado el anuncio de que las fuerzas chinas serían retiradas de Corea del Norte. Sin embargo, consideraban que existían algunas dudas en cuanto a la interpretación precisa que debía darse a las propuestas de Corea del Norte; por ejemplo, si cuando las autoridades de Corea del Norte hablaban de "una organización de naciones neutrales" encargada de vigilar las elecciones, aceptaban que esas elecciones se celebraran bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y si se aceptaba que la representación en la nueva Asamblea Nacional se calculara a base de la población indígena.

c) SOCORRO Y REHABILITACIÓN DE COREA

Informe del Administrador General del Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea

El Administrador General presentó a la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones un informe que abarcaba el período comprendido entre el 1° de julio de 1956 y el 30 de junio de 1957, junto con un addendum correspondiente al período transcurrido entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 1957. Declaró que estaba cerca el momento en que se daría cima con todo éxito al programa de las Naciones Unidas para ayudar al pueblo de Corea a reconstruir su economía devastada por la guerra. El ONURC había llevado a feliz término la gran mayoría de sus proyectos y casi todos los restantes quedarían terminados antes de que finalizara el año 1957. Sólo se prolongaría hasta la primavera de 1958 la ejecución de un escaso número de proyectos. Con excepción de una suma necesaria para el pago de cuentas pendientes, para sufragar los gastos de la asistencia técnica requerida y para la liquidación definitiva de las operaciones del ONURC, se habrían invertido en 30 de junio de 1958 todos los fondos puestos a disposición del Organismo. Para todos los efectos, el programa quedaría terminado en esa fecha y así se cerraría un capítulo muy importante y venturoso de la historia de las Naciones Unidas.

Examen de la cuestión por la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones

El informe del Administrador General fué remitido a la Segunda Comisión, que lo examinó en dos sesiones celebradas el 15 de noviembre de 1957. La Comisión recibió al propio tiempo un proyecto de resolución presentado por Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y Uruguay, con arreglo al cual la Asamblea General: 1) felicitaría al Administrador General del ONURC por la excelente labor que el Organismo había realizado en el cumplimiento de su misión de prestar asistencia al pueblo de Corea para aliviar los sufrimientos y reparar las devastaciones causadas por la agresión; 2) expresaría su convicción de que la labor del Organismo tendría efectos perdurables y trascendentales para la economía de Corea y para el bienestar de su pueblo; 3) expresaría su reconocimiento por la valiosa ayuda prestada al Organismo por los organismos especializados de las Naciones Unidas y por organizaciones voluntarias no gubernamentales; 4) aprobaría la recomendación del Administrador General de que el Organismo debería dejar de ser una organización ejecutiva después del 30 de junio de 1958; y 5) aprobaría asimismo las disposiciones y procedimientos propuestos por el Administrador General en su memorándum de fecha 13 de noviembre de 1957, para seguir atendiendo después del 30 de junio de 1958 los trabajos que el Organismo aún no hubiere terminado y para la consiguiente liquidación de sus cuentas.

Al tomar la palabra ante la Comisión, el Administrador General señaló que la Asamblea General había creado el ONURC el 1° de diciembre de 1950 con objeto de llevar a cabo un programa de socorro y rehabilitación en la República de Corea. Las operaciones militares en Corea impidieron que se iniciara el primer programa importante del Organismo antes de finalizar el año 1952, pero durante los cinco años transcurridos desde entonces las Naciones Unidas habían contribuido considerablemente a la reconstrucción económica de la República. La producción de carbón y de textiles había

aumentado notablemente; estaban funcionando nuevas fábricas de cemento y de vidrio plano, y Kunsan, uno de los mayores puertos comerciales de Corea, estaba nuevamente en plena actividad. La construcción de nuevas presas de riego había elevado la producción de arroz y las obras de hidráulica fluvial habían permitido proteger extensas superficies de tierras de cultivos y millares de personas. Las pequeñas industrias y las corporaciones pesqueras de Corea habían recibido una ayuda importante, se habían construido nuevas clases en más de 1.100 escuelas y edificado unas 10.000 unidades de vivienda de tipo permanente. Asimismo, el Organismo había reconstruido y ampliado los orfanatos, facilitado equipo a los talleres de viudas, renovado un importante centro para formación de médicos y enfermeras y estaba edificando en la actualidad un centro médico moderno. Gracias al programa del ONURC y al de los Estados Unidos, la situación económica de Corea había registrado constantes progresos en el orden material. Además, otros proyectos del ONURC a punto de ser terminados permitirían realizar nuevas mejoras.

El Administrador General señaló que el Organismo había casi cumplido su misión y destacó el apoyo y la colaboración impresionantes que el Gobierno y el pueblo de Corea habían brindado al ONURC. Agradeció a los gobiernos participantes su generosa contribución a la reconstrucción de la economía de Corea, que, sin embargo, todavía necesitaría mucha ayuda del exterior. Las instalaciones permanentes construidas por el Organismo constituían un testimonio de esa generosidad, y, a la vez, una demostración palpable de la eficacia de la acción conjunta de las Naciones Unidas.

Los representantes de Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos, Irán, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Turquía y Uruguay estimaron que los fondos disponibles habían sido utilizados para prestar la máxima ayuda económica y social a la República de Corea y, por lo tanto, se sumaron al proyecto de resolución. Con éxito sorprendente, las Naciones Unidas habían podido ayudar a un país devastado por la guerra.

El representante de la URSS manifestó que, según el informe del Administrador General, la economía de Corea del Sur tenía aún que vencer grandes dificultades a causa de los gastos militares. En su opinión, la ayuda económica extranjera no había permitido aumentar suficientemente la capacidad productiva.

La Segunda Comisión aprobó el proyecto de resolución el 15 de noviembre. Este fué aprobado por la Asamblea General el 26 de noviembre por 54 votos contra ninguno, y 18 abstenciones (resolución 1159 (XII)).

Programa del Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea

En el año terminado el 15 de junio de 1958 se acabó virtualmente con el programa del ONURC. De un total de aproximadamente 148.000.000 de dólares puestos a disposición del Organismo para sus programas, 147.500.000 dólares habían sido ya destinados en esa fecha. Asimismo, habían terminado los trabajos en 4.650 de los 4.908 lugares de ejecución de proyectos en que participaba el Organismo con material o asistencia técnica. Aparte de algunos problemas de ayuda técnica, las principales actividades habían acabado en todos los proyectos principales, salvo diez. En ocho de estos últimos, los trabajos iban muy avanzados, y se

preveía que todos los proyectos se darían por terminados antes de que finalizara el año 1958.

Durante este período comenzaron a funcionar la fábrica de cemento de Mungyong (200.000 toneladas métricas por año), la fábrica de vidrio plano de Inchon (12.000.000 de pies cuadrados por año), dos fábricas de conserva de pescado (capacidad anual conjunta, 300.000 cajas), una nueva hilandería de lino, cáñamo y ramina, las instalaciones ampliadas de la fábrica de papel de Sam Duk y la maquinaria para fabricar telas metálicas en la Electric Wire Company de Taehan. También fueron instalados los últimos de los 2.100 telares (30.000.000 de yardas de capacidad anual), las unidades para desmotar y limpiar el algodón y el equipo para adaptar los husos existentes a los nuevos telares. Asimismo, se terminó la construcción del taller de reparación de automóviles en Seúl. Prosiguiéronse los trabajos en el taller de reparación de automóviles de Pusan y en la fábrica de papel de kraft situada cerca de Seúl. Estos últimos eran los únicos proyectos industriales del Organismo que aún quedaban por terminar al final del período. Completóse la instalación del transportador aéreo de la mina de carbón de Oktong, de propiedad privada, y del equipo para la preparación del carbón en la mina de Kangwon. Además, se recibió casi todo el equipo restante, salvo el de preparación de carbón, que llegará en octubre de 1958, para las minas de la Coal Corporation de Dai Man, que son propiedad del Gobierno, y los grupos de asistencia técnica especializados en la extracción del carbón terminaron su labor en estas últimas minas. Se iniciaron las actividades de dragado de oro en el placer de Taechon-ni y las de la fábrica de trituración de talco cerca de Chungju, creada por el ONURC. Registraron progresos satisfactorios los trabajos en la nueva fábrica de recuperación del grafito cristalino de Sihung, que será terminada en septiembre de 1958, y la reconstrucción de la fundición y refinería de Changhang. Se abrieron los centros de orientación profesional en Kwangju, Nokpo y Yosu, con lo cual se dió término a una empresa del ONURC que, en totalidad, ha facilitado a Corea del Sur siete escuelas modernas de formación profesional. La construcción y reparación de aulas llegó al 99,8% del plan calculado—4.750 aulas acabadas, de un total de 4.776—y al traspasar a la UNESCO las responsabilidades que asumían el Centro de Educación Fundamental y el Instituto de Idiomas Extranjeros, el ONURC concluyó prácticamente su programa de enseñanza. Hacia el 15 de junio, se acabaron también más de 9.550 unidades de vivienda de las 10.073 previstas. Al propio tiempo, se establecieron 34 instituciones infantiles, de las cuales sólo dos quedan por acabar. En esa fecha los trabajos de edificación del Centro Médico Nacional fueron casi concluidos, 83% del plan calculado, y el primer grupo de construcciones para el nuevo laboratorio nacional de vacunas quedó casi terminado, 80% del proyecto definitivo. Durante ese año el Fondo de Préstamos para Pequeñas Industrias establecido por el ONURC prestó asistencia a otras 310 pequeñas fábricas.

Para llevar el programa a feliz término el Organismo pudo contar con la plena colaboración y el apoyo del gobierno de la República de Corea y del pueblo coreano durante todo el período. La importancia del programa de las Naciones Unidas en el restablecimiento y la reconstrucción de la economía nacional fué señalada en repetidas ocasiones durante el año por personajes oficiales y particulares que manifestaron su reconoci-

miento por la generosa ayuda de las Naciones Unidas y el éxito registrado por el Organismo.

24. La cuestión de la representación de China en las Naciones Unidas

El 13 de septiembre de 1957, la India propuso que en el programa del duodécimo período de sesiones se incluyera la cuestión de la representación de China en las Naciones Unidas y declaró que la solución de ese problema era de suma importancia no sólo considerando los derechos legítimos del pueblo y del Gobierno de China, sino también tomando en cuenta la eficacia de la propia Organización, que se veía perjudicada por la ausencia virtual de China.

El 19 de septiembre, la Mesa decidió por 9 votos contra 4 y 2 abstenciones, recomendar a la Asamblea que aprobara un proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos de América y por el cual la Asamblea decidiría rechazar la solicitud de la India relativa a la inclusión del tema en el programa y no examinar, en su duodécimo período de sesiones, ninguna propuesta encaminada a excluir a los representantes del Gobierno de la República de China o admitir a representantes del Gobierno Popular Central de la República Popular de China.

Cuando se examinó el informe de la Mesa en sesión plenaria el 24 de septiembre, India presentó dos enmiendas al proyecto de resolución recomendado por la Mesa, cuya finalidad era la de invertir las dos recomendaciones de la Mesa. Cuando se hubo rechazado la primera enmienda y retirado la segunda, la Asamblea aprobó el proyecto de resolución por 47 votos contra 27, y 7 abstenciones (resolución 1135 (XII)).

La cuestión de la representación de China se planteó nuevamente en el duodécimo período de sesiones y en la Comisión de Verificación de Poderes en la sesión plenaria cuando la Asamblea examinó el informe de esa Comisión.

El problema de la representación de China se planteó asimismo en otros órganos y organismos de las Naciones Unidas durante el período a que se refiere el presente informe.

25. Nombramiento de Secretario General de las Naciones Unidas

El 26 de septiembre de 1957, el Consejo de Seguridad decidió por unanimidad recomendar a la Asamblea General que se nombrara al Sr. Dag Hammarskjöld para Secretario General de las Naciones Unidas por un nuevo período de cinco años.

El Presidente del Consejo de Seguridad informó al Presidente de la Asamblea General y al Sr. Hammarskjöld acerca de la recomendación del Consejo y, el mismo día, la Asamblea General nombró por unanimidad al Sr. Dag Hammarskjöld Secretario General de las Naciones Unidas por un nuevo período de cinco años. El 14 de diciembre, la Asamblea decidió que las condiciones del nombramiento del Secretario General durante su segundo mandato serían las mismas establecidas para el primero (resolución 1229 (XII)).

26. Cuestión de la reforma de la Carta para aumentar el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y el número de miembros del Consejo Económico y Social y de la Corte Internacional de Justicia

Las cuestiones referentes a la ampliación del número de miembros del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y de la Corte Internacional de Justicia se habían incluido en el programa del undécimo período de sesiones de la Asamblea General como tres temas separados, a solicitud de 18 Estados latino-americanos, que manifestaron que el considerable aumento de los Miembros de las Naciones Unidas había hecho necesaria esa ampliación.

El 20 de septiembre de 1957, la Asamblea incluyó los temas en el programa del duodécimo período de sesiones y los remitió a la Comisión Política Especial, que los examinó el 2 y el 3 de diciembre.

El representante de la India opinó que no valdría la pena examinar esos temas sin tener alguna certeza de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad estuvieran dispuestos a aceptar algunas de las propuestas presentadas, y sugirió que se aplazara hasta el siguiente período de sesiones el examen de los tres temas.

El representante del Ecuador, en nombre de las delegaciones que propusieron los temas, dijo que la opinión general reconocía la conveniencia de llegar a un arreglo satisfactorio de la cuestión del aumento del número de miembros de los órganos principales de las Naciones Unidas y de evitar que un debate prematuro malograra la solución del problema.

El 3 de diciembre la Comisión aprobó por 52 votos contra ninguno un proyecto de resolución presentado por Argentina, Bolivia, Brasil, Ceilán, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Egipto, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela, según el cual la Asamblea General decidiría que el examen de los tres temas se prosiguiera en el décimotercer período de sesiones. El 12 de diciembre, la Asamblea General aprobó ese proyecto de resolución por 65 votos contra ninguno (resolución 1190 (XII)).

27. Comunicación referente a la República Árabe Unida

El 24 de febrero de 1958, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida comunicó al Secretario General la creación de la República Árabe Unida, con capital en El Cairo, a raíz de un plebiscito celebrado el 21 de febrero de 1958 en Egipto y Siria, en el que los pueblos de Siria y de Egipto habían manifestado claramente su voluntad de unir sus dos países. Comunicó, también, que en el mismo plebiscito el Presidente, Abdel Nasser, había sido elegido Presidente de la nueva República. El 1° de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida pidió al Secretario General que transmitiera la oportuna

información a todos los Estados Miembros y a todos los órganos de las Naciones Unidas. Según advirtió el Ministerio, el Gobierno de la República Árabe Unida había declarado que de entonces en adelante la Unión constituiría un solo Miembro de las Naciones Unidas, obligado por las disposiciones de la Carta, y que todos los tratados y acuerdos internacionales concertados por Egipto o por Siria con otros países seguirían vigentes dentro de los límites regionales previstos en tales documentos y de conformidad con los principios del derecho internacional.

El 7 de marzo de 1958, el Secretario General transmitió estas notas a todos los Estados Miembros y a los órganos de las Naciones Unidas, y declaró que había

recibido las credenciales del representante permanente de la República Árabe Unida, enviadas por el Ministro de Relaciones Exteriores de esa República. El Secretario General señaló que la aceptación de cartas credenciales constituía un acto que se hallaba dentro de los límites de su autoridad, efectuado sin perjuicio y en espera de las medidas que los demás órganos de las Naciones Unidas pudiesen tomar basándose en la notificación de la constitución de la República Árabe Unida y en la nota del 1° de marzo de 1958.

El 7 de marzo de 1958, en el Consejo de Administración Fiduciaria, el representante de la República Árabe Unida ocupó el puesto que anteriormente correspondía al representante de Siria.

Capítulo II

EVOLUCION ECONOMICA Y SOCIAL

A. ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

1. Estudios económicos

El *Estudio Económico Mundial, 1957*, fué presentado al Consejo Económico y Social en junio de 1958. Conforme a la petición formulada por el Consejo en su resolución 654 D (XXIV) del 30 de julio de 1957, en la parte I del *Estudio Económico* se analizaba el problema de la inflación de 1950 en adelante. En la parte II se examinaba la evolución reciente de la economía mundial. A base de dicho análisis de la experiencia recogida en ese período, y de los hechos más recientes, en la introducción al *Estudio Económico* se exponían las causas y principales características de la inflación en los tres principales grupos de la economía mundial y se establecía la relación entre la experiencia anterior y las tendencias actuales.

El *Estudio Económico* señalaba que el alza de los precios en los países industriales durante el auge económico reciente había sido moderado en relación con períodos anteriores caracterizados por una producción creciente. El aumento de los precios registrados recientemente en los países industriales no se había debido a una demanda total excesiva sino a ciertas características estructurales de la economía. El *Estudio Económico* llegaba a la conclusión de que, en tales circunstancias, las tentativas para estabilizar los precios restringiendo la demanda podían exigir un ritmo de desarrollo más lento que el registrado en el período de posguerra. En los países de producción primaria la inflación había demostrado ser, en general, un problema más grave y difícil de resolver que en los países industriales. A diferencia de éstos, las causas más comunes de inflación habían sido la demanda total excesiva combinada frecuentemente con los esfuerzos realizados para acelerar el ritmo de crecimiento económico. También habían contribuido los desequilibrios estructurales y en particular la tendencia de los suministros de alimentos a aumentar menos que los ingresos. Los gobiernos se han preocupado cada vez más del problema de la inflación, y la política oficial ha tendido en general a adoptar un carácter más restrictivo. En todos los países con economía de planificación centralizada, salvo en la Unión Soviética, surgieron entre 1949 y 1953 fuertes presiones inflacionarias por haber disminuído el porcentaje del producto nacional destinado al consumo personal. La política de grandes aumentos en las inversiones con relación al ingreso nacional fué radicalmente cambiada alrededor de 1953 y el período comprendido entre 1953 y 1956 se caracterizó por un aumento del consumo en relación con el producto nacional y una disminución de las presiones inflacionarias. No obstante incluso durante este período, en el cual disminuyeron substancialmente los precios de los artículos de consumo, se registró una escasez de estos productos en algunos países.

Al examinar la evolución económica reciente se señalaba en el *Estudio* que en 1957 se registró una disminución en la actividad económica de los países industriales. En la América del Norte el sector industrial y comercial decidió reducir sus existencias y un marcado aumento en el volumen de la capacidad productiva no utilizada hizo que disminuyeran las inversiones en instalaciones y equipo en el último trimestre de 1957. No se esperaba que el actual retroceso económico fuera tan breve o tan limitado como los registrados en 1948/1949 y 1953/1954. También en otros países industriales disminuyeron hacia fines de 1957 las inversiones y la producción industrial. En los países productores de productos primarios se registró una marcada baja en los precios de las exportaciones en 1957 y un aumento considerable de las importaciones. A fines de 1957 la amenaza del desequilibrio externo era un problema cada vez más grave. Al evaluar las perspectivas para 1958, en sus respuestas al cuestionario enviado por el Secretario General sobre las tendencias, los problemas y las políticas económicas, los gobiernos de los países industriales sólo esperaban cuando mucho un pequeño aumento en la producción y en general se suponía que la demanda mundial continuaría disminuyendo. En los países productores de productos primarios se prevé una disminución en el valor de las exportaciones totales, si bien algunos países confían aumentar sus ingresos. En los países con economía de planificación centralizada la producción industrial continuó aumentando a un ritmo bastante acelerado y aunque la producción agrícola aumentó en la mayoría de los países, en la Unión Soviética las cosechas fueron inferiores. En general aumentaron el consumo y los salarios reales a pesar de que los precios sólo subieron en algunos países.

Para la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos se preparó un informe titulado *Estudios sobre los productos básicos, 1957*. En él se examinaban los cambios registrados en la producción y el comercio mundiales de los productos primarios en la época de posguerra. Se indicaba que en el período comprendido entre 1936-1938 y 1953-1955, la producción de productos básicos había aumentado más rápidamente que la población, pero menos rápidamente que la producción manufacturera salvo en el caso de los metales no ferrosos. Daba cuenta de las principales influencias ejercidas sobre la oferta y la demanda de los principales grupos y subgrupos de productos básicos y los cambios registrados en la estructura geográfica de la producción. El estudio señalaba luego la evolución de los mercados de productos primarios en 1957, caracterizado por un ligero aumento de la producción mundial de la mayoría de los productos básicos, y por una disminución de la demanda, en especial la directamente

vinculada con la producción industrial. Con algunas excepciones, hacia fines de 1957 los precios de los productos primarios habían descendido al más bajo nivel registrado desde el comienzo de las actividades en Corea.

Para el 26° período de sesiones del Consejo se prepararon dos informes sobre el Oriente Medio. El primero fué el suplemento anual al *Estudio Económico Mundial, 1957*, titulado *La Evolución Económica en el Oriente Medio, 1956-1957*, que al igual que el *Estudio Económico* tenía por tema central el análisis de las tendencias inflacionarias y deflacionarias. Contenía también un apéndice estadístico que abarcaba todas las fases de la actividad económica junto con un breve examen de los cuadros. El segundo informe consistió en un estudio titulado *El desarrollo de la industria manufacturera en Egipto, Israel y Turquía*, versión ampliada y revisada del documento preparado para el 24° período de sesiones del Consejo y titulado *La industrialización en Egipto, Israel y Turquía: crecimiento y estructura de la industria manufacturera*. Las novedades introducidas en la versión ampliada fueron un estudio de la evolución económica general en cada país, un examen del influjo de la industrialización sobre el comercio exterior y una discusión sobre el problema del costo y la eficiencia en las industrias manufactureras.

En ese mismo período de sesiones también se presentó al Consejo, a manera de suplementos al *Estudio Económico*, dos informes sobre África. El primero, *La Evolución Económica en África, 1956-1957*, analizaba los principales cambios económicos registrados en toda la región, a la que dividía en tres zonas principales, a saber, el África del norte, la Unión Sudafricana y el África tropical. El informe analizaba también la influencia de los mercados de los productos básicos en la producción primaria de África. Incluía además un extenso apéndice estadístico que ha sido una de las características de los últimos informes sobre el África, y también cuadros y gráficos. El segundo informe titulado *Estructura y Crecimiento de la Economía en Países Seleccionados del África*, analizaba la estructura económica de Marruecos, el Sudán, la Federación de Rhodesia y Nyasalandia así como la evolución de estos tres países en los últimos años. En la introducción al estudio se analizaban los problemas que planteaba la evolución general de los territorios africanos, tomando como ejemplo los tres países antes mencionados que, en cuanto a ejemplos de distintos niveles de evolución y por entrañar distintos tipos de problemas económicos, constituían una selección representativa de todos los países menos desarrollados del África.

Durante el año que se examina cinco economistas de las Naciones Unidas pasaron bastante tiempo en los países y territorios africanos para conocer sobre el terreno la evolución económica de los mismos. En el segundo semestre de 1957 se efectuaron visitas similares al Oriente Medio.

2. Desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados

a) EL FONDO ESPECIAL

En su 26° período de sesiones el Consejo Económico y Social tuvo ante sí dos informes preparados por el Comité *Ad Hoc* encargado de estudiar la cuestión del establecimiento de un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el desarrollo económico de conformidad

con las resoluciones de la Asamblea General 923 (X) del 9 de diciembre de 1955 y 1030 (XI) del 20 de febrero de 1957. El primer informe comprendía un resumen y análisis de las opiniones presentadas al Secretario General por 57 gobiernos, así como las consiguientes conclusiones, sobre el establecimiento, la función, la estructura y el funcionamiento de un Fondo Especial. El segundo informe, basado en distintas opiniones expresadas por los gobiernos y los expertos en relación con los elementos componentes de un posible estatuto, sugería las diferentes formas de estructura jurídica que podían servir para establecer un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el desarrollo económico y para la elaboración de su estatuto.

El Consejo instó a la Asamblea General a que decidiera establecer el Fondo Especial y tomara para ello las disposiciones necesarias. Recomendó también a la Asamblea General que creara una comisión preparatoria encargada de elaborar las disposiciones necesarias para instituir el Fondo Especial y de seleccionar un número limitado de proyectos que se habrían de financiar a título de ensayo mediante contribuciones voluntarias en espera de que el Fondo funcionase normalmente.

En su duodécimo período de sesiones, la Asamblea General, por resolución 1219 (XII) del 14 de diciembre de 1957, decidió establecer, como ampliación de las actividades que en materia de asistencia técnica y de desarrollo realizaban las Naciones Unidas y los organismos especializados, un Fondo Especial aparte con el que se prestaría una asistencia sistemática y sostenida en esferas básicas para el desarrollo técnico, económico y social integrado de los países menos desarrollados.

La Asamblea decidió que, en vista de que los recursos con que se esperaba contar probablemente no excederían de 100.000.000 de dólares anuales, se orientase el Fondo Especial en el sentido de ampliar el alcance de los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas de manera que se incluyeran en ellos proyectos especiales relativos a ciertas esferas básicas que habría de definir una Comisión Preparatoria integrada por representantes de 16 gobiernos que se creaba en virtud de esta resolución. Encargaba además a dicha Comisión Preparatoria que definiese la organización administrativa y técnica que se recomendaría para el Fondo Especial, así como los cambios que conviniese introducir en la reglamentación y los procedimientos actuales del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y averiguar hasta qué punto los gobiernos estarían dispuestos a contribuir al Fondo Especial.

La Asamblea esperaba que el Fondo Especial pudiera quedar establecido el 1° de enero de 1959.

En dicha resolución, la Asamblea General decidió que, en cuanto ella estimase que los recursos que se esperaba obtener bastaban para emprender actividades de desarrollo de la capitalización, principalmente en el robustecimiento de la estructura económica social, volvería a examinar el alcance y las actividades futuras del Fondo Especial y adoptaría las medidas que juzgara convenientes.

El Presidente de la Asamblea General nombró para integrar la Comisión Preparatoria a los siguientes Estados Miembros: Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India, Japón, México, Pakistán, Países Bajos, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

La Comisión Preparatoria completó su labor en una sesión celebrada de marzo a abril de 1958. El informe y las recomendaciones de dicha Comisión serán presentados al Consejo Económico y Social en su 26º período de sesiones. En cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea General en su resolución 1219 (XII), el Consejo deberá transmitir el informe de la Comisión Preparatoria y sus propias observaciones a la Asamblea General, en su décimotercer período de sesiones, para que ésta tome la decisión definitiva.

b) CORRIENTE INTERNACIONAL DE CAPITALS PRIVADOS

El informe titulado *La corriente internacional de capitales privados, 1957*, preparado para su presentación al Consejo Económico y Social en su 26º período de sesiones, revela que la corriente internacional de capitales privados para inversiones a largo plazo parecía haber alcanzado un nuevo máximo en comparación con 1956, año en el cual dicha corriente llegó a un nivel sin precedentes para el período de posguerra. La corriente parecía haber alcanzado su punto culminante aproximadamente a mediados de 1957 y en el segundo semestre de ese año descendieron las exportaciones de capitales (en cifras brutas), aunque en comparación con los años anteriores a 1956 el nivel alcanzado era bastante elevado.

Los Estados Unidos de América siguieron manteniendo su posición de principal país exportador de capitales privados invertidos a largo plazo en el mundo, unos dos tercios del total. El Reino Unido ocupaba el segundo lugar, una sexta parte aproximadamente, seguido de Bélgica y Luxemburgo, la República Federal de Alemania y los Países Bajos. La salida de capitales de Suiza y del Canadá, en cifras brutas, disminuyó marcadamente en comparación con 1956.

Es muy probable que en 1957 los países insuficientemente desarrollados hayan aumentado su parte respectiva de las importaciones brutas de capital en el mundo. Entre los países desarrollados se registró un notable incremento en las entradas brutas de capitales en los casos de la República Federal de Alemania, Francia y los Países Bajos. Aunque las importaciones de capitales al Canadá descendieron en 1957, este país siguió siendo el mayor importador de capitales privados a largo plazo. En la América Latina, especialmente en Venezuela, Brasil y México, y probablemente también en la zona de la libra esterlina, se registró un cuantioso incremento.

Las inversiones directas siguieron representando la parte principal de las salidas de capitales privados. En 1957, al igual que en años anteriores, la industria petrolera absorbió el grueso de las inversiones internacionales privadas, pero esas inversiones disminuyeron en el segundo semestre de 1957.

El grueso de las inversiones directas en la industria manufacturera se efectuó en los países desarrollados y semidesarrollados, pero había indicios de incremento en esta clase de inversiones en los países insuficientemente desarrollados, especialmente de la América Latina.

Un hecho notable ocurrido en 1957 fué el considerable aumento de las importaciones de bienes de capital a los países insuficientemente desarrollados concediendo al exportador participación en la empresa importadora, o mediante créditos a plazo medio durante un período que por lo general era de cinco años.

Tanto los gobiernos de los países exportadores como de los países importadores de capital concedieron cada

vez más atención a la necesidad de adoptar medidas prácticas tendientes a promover la corriente internacional de capitales privados a largo plazo. En los principales países exportadores se alentó la salida de capitales privados mediante diversas medidas oficiales relativas al establecimiento de garantías de las inversiones, concesión de créditos de exportación y préstamos especiales, reducción de las contribuciones sobre los ingresos obtenidos en el extranjero y liberación del régimen de cambios. Muchos países insuficientemente desarrollados adoptaron medidas, sobre todo con respecto al régimen de cambios y a la promulgación de medidas legislativas que sirvieran de incentivo, que tuvieran el efecto de facilitar las inversiones en esos países. Las medidas adoptadas por esos gobiernos en 1957 se refirieron cada vez con más frecuencia al desarrollo de la industria manufacturera y en menor grado a la industria del petróleo, a la minería y a las empresas de servicios públicos.

c) INDUSTRIALIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

En su 25º período de sesiones, el Consejo Económico y Social tomó nota de los progresos realizados en la ejecución del programa de trabajo de la Secretaría sobre industrialización y productividad de que se daba cuenta en un informe presentado por el Secretario General. El informe describía los progresos realizados en la ejecución de los siguientes proyectos, algunos de los cuales habían sido terminados y presentados al Consejo: estudio general del problema de la intensidad de capital; inversiones de capital en la industria de la construcción; variaciones del costo de producción y de los gastos de inversión, en relación con la magnitud de las instalaciones de producción de determinadas industrias; medidas para fomentar las industrias en pequeña escala; relación que guardan el desarrollo de la comunidad y las cooperativas con el proceso de la industrialización; resumen y evaluación de la experiencia adquirida en virtud del programa de asistencia técnica que se refiere a los problemas de administración industrial en los países insuficientemente desarrollados, proyecto que incluía, en especial, la reunión de un grupo de expertos en la administración industrial; planificación del medio físico; urbanización; publicación de un boletín de industrialización y productividad; estudio de la industrialización en el Cercano Oriente. El informe contenía además una descripción de los trabajos realizados con respecto a los servicios para las actividades de asistencia técnica en el campo industrial.

El Consejo subrayó la necesidad de ampliar y acelerar en lo posible los trabajos emprendidos en virtud de dicho programa. En particular señaló la conveniencia de ampliar las actividades en ciertos campos, como son las cuestiones sociales y demográficas, los aspectos fiscales y financieros del desarrollo industrial, la planificación de la industrialización y los problemas de las industrias en pequeña escala.

Al mismo tiempo, el Consejo aprobó varias propuestas formuladas por el Secretario General en un informe sobre los servicios de organización y administración requeridos para llevar a cabo el programa de trabajo. El Consejo apoyó una propuesta para ampliar los servicios orgánicos de las operaciones de asistencia técnica de las Naciones Unidas en materia de industrialización y recomendó que se aumentara el personal que se ocupaba del programa de trabajo en materia de industrialización. Consideró que debía darse mayor importancia a los proyectos de asistencia técnica que tenían por objeto asesorar en materia de economía.

El Consejo decidió también establecer un comité de expertos para examinar el programa de trabajo y formular recomendaciones al Secretario General acerca del futuro desarrollo de ese programa y de su ejecución. Se tiene proyectado convocar a dicho comité antes de que el Consejo celebre su 27° período de sesiones.

El primer número del *Boletín de Industrialización y Productividad* contenía un artículo dedicado al problema de la densidad de capital en la industria de los países insuficientemente desarrollados, preparado a base de informes presentados por los expertos de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, y otros dos artículos dedicados, respectivamente, a la selección de técnicas en la planificación industrial y a la densidad de capital en la construcción de grandes obras de ingeniería.

El *Boletín* contenía también dos artículos preparados por expertos de asistencia técnica, un resumen de las actividades que se realizan actualmente en materia de industrialización y una bibliografía sobre la materia.

d) UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS

En su 24° período de sesiones el Consejo pidió al Secretario General que continuase estudiando las relaciones que existían entre todas las formas de energía, tanto las tradicionales como la atómica y las procedentes de otras nuevas fuentes, con el desarrollo económico, y, en particular, con el de los países insuficientemente desarrollados, y además que, en consulta con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otros organismos especializados, preparase para el 27° período de sesiones del Consejo un informe sobre la evolución en el proceso de crear nuevas fuentes de energía distintas del átomo, especialmente la energía solar y la energía eólica, así como recomendaciones acerca del programa de una conferencia internacional, sobre esas nuevas fuentes y sobre sus aplicaciones económicas, que habría de reunirse lo antes posible.

A fines de noviembre de 1957 se celebró en Nueva York la cuarta reunión de funcionarios de las organizaciones de las Naciones Unidas para examinar distintos aspectos de la cooperación y coordinación internacional de las actividades relativas al desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Teniendo en cuenta la resolución 665 A (XXIV) aprobada por el Consejo el 1° de agosto de 1957, examinó la posibilidad de realizar una acción concertada en la materia, y discutió la forma de aplicar la resolución 614 C (XXII) aprobada por el Consejo el 9 de agosto de 1956 relativa a estudios sobre los recursos y las necesidades.

El Secretario General informó al Consejo, en su 25° período de sesiones, sobre la cooperación internacional en materia de aprovechamiento de los recursos hidráulicos. En dicho informe se sugería que había llegado el momento oportuno para que las Naciones Unidas, en cooperación con los organismos especializados interesados, iniciara una acción con respecto a los problemas de las aguas subterráneas, lucha contra la contaminación de las aguas, coordinación de las actividades en materia de hidrología e integración de los servicios que se ocupan de los recursos hidráulicos.

En su 25° período de sesiones el Consejo examinó otros tres informes sobre cuestiones hidráulicas.

En cumplimiento de la resolución 599 (XXI), aprobada por el Consejo el 3 de mayo de 1956, se presentó un informe titulado *Encuesta preliminar sobre los servi-*

cios hidrológicos existentes preparado por la Secretaría en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial. En dicho informe se analizaba la organización de los servicios hidrológicos existentes, se examinaban los problemas corrientes de las actividades hidrológicas y se reseñaban algunas medidas que podrían adoptarse en la actualidad.

En el informe *Usos industriales del agua*, preparado por la Secretaría en cumplimiento de la resolución 533 (XVIII) aprobada por el Consejo el 2 de agosto de 1954, se examinaban los problemas que planteaba la demanda de agua de las industrias, se analizaban los aspectos cuantitativos y cualitativos de los usos industriales del agua, los costos de abastecimiento de agua y la conservación de la misma, y se presentaban conclusiones con respecto a las medidas adecuadas en las distintas etapas. Se incluían también cuadros estadísticos con datos transmitidos por los gobiernos.

También en cumplimiento de la resolución 599 (XXI) fué preparado el tercer informe *Desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas*, por un grupo de expertos con la colaboración de la FAO, la UNESCO, la OMM y la OMS. Se examinaban en dicho informe el alcance, fines y principales aspectos y problemas del desarrollo de las cuencas hidrográficas, así como el problema de la colaboración entre dos o más países interesados de una cuenca hidrográfica internacional. Se formulaban también recomendaciones, entre otras cosas, para mejorar los servicios hidrológicos básicos, habilitar los medios necesarios para analizar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y adoptar disposiciones concretas a tal efecto, fomentar las investigaciones científicas y técnicas, prestar ayuda a los países para que desarrollen sus cuencas hidrográficas y conciliar los conflictos de intereses en las cuencas hidrográficas de carácter internacional.

Después de examinar los cuatro informes, el Consejo señaló a la atención de los gobiernos y de los organismos especializados interesados la importancia que revestía el desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas; invitó a la OMM a examinar las recomendaciones relativas a sus funciones formuladas en el informe sobre los servicios hidrológicos y a tomar las medidas adecuadas; subrayó la importancia de aprovechar las aguas subterráneas y de la lucha contra la contaminación de las aguas particularmente en los países industrializados, e impedir dicha contaminación en los países que se encontraban en las primeras fases de la industrialización. El Consejo pidió además al Secretario General que tomase las medidas adecuadas para establecer, dentro de la estructura de la Secretaría, un centro para la promoción de la labor coordinada de desarrollo de los recursos hidráulicos y, que con tal objeto, facilitase la coordinación de la labor de compilación de datos sobre dichos recursos y su utilización.

e) PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL EMPLEO

En la Sede de las Naciones Unidas se inició un curso de formación profesional en el empleo para economistas de África concediéndose becas de asistencia técnica por un período de seis meses. El primer curso de formación profesional, que se dió en inglés, se celebró del 18 de noviembre de 1957 al 20 de mayo de 1958. Participaron en el mismo cinco funcionarios públicos de África, expertos en economía, nombrados por sus respectivos gobiernos y aprobados por la Junta de Selección de Becas (AAT), dos de los cuales procedían de Libia y

los otros tres de Etiopía, Liberia y Somalia, respectivamente.

El curso tiene por objeto proporcionar formación profesional a economistas jóvenes de los gobiernos del Africa para ayudarles a crear un grupo de economistas calificados en las funciones públicas, especialmente en materia de desarrollo económico. Esto permitirá también a los participantes obtener experiencia en problemas económicos internacionales, métodos de consultas internacionales así como en la labor de las Naciones Unidas y de sus distintos órganos.

Se tiene proyectado continuar este programa de formación profesional y ya se han adoptado las medidas necesarias para que otros dos grupos inicien sus estudios en la Sede en 1958.

3. Desarrollo de la cooperación económica internacional

a) CONSULTAS INTERNACIONALES

El 30 de julio de 1957 el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 654 E (XXIV) con el objeto de fomentar las consultas internacionales sobre cuestiones económicas. El Consejo recordó su labor fundamental de fomentar la cooperación internacional con objeto de lograr una expansión continua y equilibrada de la economía mundial. El Consejo tomó nota de las observaciones formuladas por el Secretario General (en su discurso de apertura del 24° período de sesiones) acerca de los beneficios que se podrían obtener de unas consultas más sistemáticas entre los gobiernos siguiendo los principios generales de sus políticas económicas.

En dicha resolución el Consejo: 1) pedía al Secretario General que preparase un informe sobre los medios y los métodos que actualmente existían para organizar y fomentar las consultas entre los gobiernos en cuestiones económicas y que lo transmitiese a los Estados Miembros; 2) invitaba a los Estados Miembros a presentar al Secretario General observaciones sobre los métodos que podrían permitir que se efectuasen consultas más eficaces entre los gobiernos a fin de promover un desarrollo equilibrado de la economía mundial y de acelerar, en particular, el ritmo de la expansión económica de los países insuficientemente desarrollados; y 3) pedía al Secretario General que presentase al Consejo, en su 26° período de sesiones, un informe que contuviese la información solicitada en el punto 1), las observaciones transmitidas por los Estados Miembros y sus propias observaciones. La resolución autorizaba además al Secretario General a utilizar los servicios de expertos para realizar esa labor y señalaba a la atención de los gobiernos la conveniencia de fomentar los contactos y las reuniones extraoficiales entre economistas de diferentes países.

Prevía consulta con varios organismos internacionales, el Secretario General preparó el primer informe pedido por el Consejo. El informe se limita estrictamente a describir los hechos. En la carta transmitiendo el informe a los Estados Miembros, el Secretario General observó que el informe señalaba a la atención los diversos factores que favorecían las consultas así como los procedimientos empleados con arreglo a los medios y elementos que actualmente existían para realizar consultas y sugirió que acaso los gobiernos considerasen oportuno prestar especial atención a ese aspecto.

b) SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN COMERCIAL

El Secretario General preparó para presentar al Consejo Económico y Social, en su 26° período de sesiones, un análisis de los comentarios sobre un sistema internacional de cooperación comercial transmitido por 32 Estados Miembros, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones del Consejo 614 A (XXII) del 9 de agosto de 1956 y 654 A (XXIV). Las principales cuestiones planteadas en las respuestas se referían a la composición, alcance y coordinación de las organizaciones existentes en la esfera del comercio. Algunos gobiernos consideraron adecuada la estructura actual y otros apoyaron la creación de una nueva organización comercial internacional.

4. Problemas internacionales relativos a los productos básicos

Durante el período que se examina bajaron en general los precios de los productos básicos causando graves dificultades a las economías de muchos países insuficientemente desarrollados, debido en especial a que el valor de las importaciones continuó subiendo. Fué causa de gran preocupación la posibilidad de reducir las fluctuaciones excesivas de los precios de estos productos. En general se adoptaron medidas con respecto a determinados productos básicos.

En el segundo semestre de 1957 se aplicaron medidas de estabilización en virtud del Convenio Internacional sobre el Estaño concertado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estaño celebrada en 1953. Se pidieron contribuciones para crear las reservas de estabilización, se fijaron cuotas de exportación y se creó un fondo especial. Al parecer el Convenio ha permitido controlar de manera efectiva la caída de los precios del estaño que desde octubre de 1957 hasta junio de 1958 se han mantenido estables.

En el segundo semestre de 1957 mejoró la oferta de azúcar y las cuotas de exportación, que habían sido suspendidas en enero de 1957, fueron fijadas nuevamente en noviembre de 1957 al caer los precios por debajo del nivel señalado en el Convenio Internacional del Azúcar para ese período. Dicho Convenio expira a fines de 1958 y el Consejo Internacional del Azúcar pidió al Secretario General que convocase a una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azúcar en septiembre de 1958 a fin de negociar un nuevo convenio.

A solicitud de los gobiernos signatarios del Convenio Internacional sobre el Aceite de Oliva, en septiembre de 1957, el Secretario General se dirigió a cada uno de los gobiernos comprendidos en la definición de gobiernos de los "principales países importadores" dada en el Convenio propuesto, para que expresaran sus opiniones con respecto a la posibilidad de participar en esa conferencia. La segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Aceite de Oliva se celebró en Ginebra del 31 de marzo al 3 de abril de 1958; en esa oportunidad se redactó un protocolo por el cual se introducían ciertas enmiendas al procedimiento fijado en el Convenio propuesto. Dicho protocolo fué firmado por un número de gobiernos suficiente para asegurar su entrada en vigor, por lo que el Convenio, con las enmiendas introducidas, quedó abierto a la firma.

Los precios de los metales no ferrosos disminuyeron por lo cual se pidió al Secretario General que convocase a los gobiernos interesados a dos reuniones de estudio,

una para tratar el problema del cobre y la otra sobre el plomo y el zinc.

El Secretario General realizó estudios para la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos (CIPB) y la Comisión Interina de Coordinación de los Convenios Internacionales sobre Productos Básicos (CICCIPB) y les proporcionó los servicios requeridos. Durante el período que se examina, el Comité Administrativo de Coordinación creó una Subcomisión de Productos Básicos. A solicitud de la CIPB y de la CICCIPB el Secretario General ha continuado publicando periódicamente los memorándum titulados *Hechos más recientes en materia de productos básicos*.

La Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos celebró su sexto período de sesiones en mayo de 1958. Preparó un estudio del comercio internacional de productos básicos utilizando para ello el *Estudio sobre los productos básicos, 1957*, preparado por el Secretario General, y recomendó que continuase el estudio de las fluctuaciones de los precios de productos básicos y del volumen de su intercambio.

La Comisión Interina de Coordinación de los Convenios Internacionales sobre Productos Básicos formuló ciertas sugerencias al Secretario General con respecto a varias reuniones sobre la materia. El informe de dicha Comisión titulado, *Estudio de 1958 sobre los problemas internacionales relativos a los productos básicos*, contiene un resumen de las consultas y medidas intergubernamentales relativas a problemas de productos básicos en el período de posguerra.

5. Problemas fiscales y financieros

a) PROBLEMAS PRESUPUESTARIOS

La labor en curso siguió dedicándose principalmente sobre la reclasificación de los datos presupuestarios en forma apropiada para formular la política fiscal y sobre el mejoramiento de los métodos de la contabilidad presupuestaria del Estado.

Los sistemas de clasificación de las transacciones del gobierno, según el carácter económico de las mismas y la función, fueron presentados en el *Manual para la clasificación de las transacciones del gobierno según su carácter económico y su función*, publicado a principios de 1958. El Manual fué presentado a la Comisión de Estadística en su 10° período de sesiones y ahora se distribuye entre las autoridades fiscales y las oficinas de estadística de Estados Miembros para que hagan las observaciones pertinentes.

El interés de los gobiernos en las técnicas y fines de reclasificación presupuestaria se estimula mediante cursos prácticos regionales organizados por las Naciones Unidas. El segundo curso práctico regional se reunió en Bangkok en septiembre de 1957; uno de los principales objetivos del mismo fué examinar los progresos realizados para aplicar las clasificaciones de las transacciones del gobierno según su carácter económico y su función. Un resumen de las experiencias en determinados países fué presentado en el documento de la Secretaría *Reclassification of Government Expenditures and Receipts in Selected Countries* (Reclasificación de los gastos e ingresos del gobierno en países seleccionados) que será publicado en un volumen impreso en 1958. En ese curso práctico también se discutió la preparación de presupuestos por programa y por funciones. La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, en su 14° período de sesiones, recomendó que se convocara en 1960 un tercer curso práctico en cuyo

programa se señalarían especialmente los problemas relativos a la formulación, fiscalización y administración del presupuesto, con particular referencia a la evaluación del presupuesto en términos reales.

Se han iniciado los preparativos para organizar un curso práctico regional de los países de América del Sur que se celebrará probablemente en 1959.

Como en años anteriores, el *Anuario Estadístico* de las Naciones Unidas para 1957 contiene información sobre la deuda pública y las principales categorías de ingresos y gastos públicos, a la vez que proporciona datos globales sobre las operaciones en efectivo de los Estados.

La asistencia técnica otorgada a determinados gobiernos en materia de presupuestos y cuentas del Estado versó especialmente sobre problemas de clasificación y técnicas de administración y ejecución del presupuesto. En algunos casos también se proporcionó asesoramiento sobre la fiscalización y formulación de problemas presupuestarios.

b) PROBLEMAS TRIBUTARIOS

Se completó el volumen VII de los *Acuerdos Fiscales Internacionales* que contiene el texto de unos 70 acuerdos nuevos celebrados a partir de junio de 1955. En el futuro se mantendrán al día los volúmenes utilizando para ello hojas perforadas con encuadernación movable. El volumen VIII que aparecerá en breve con el título de *Guía Mundial de Acuerdos Fiscales Internacionales* (proyectado como revisión del volumen V), proporcionará información tabulada sobre el estado en que se encuentran todos los acuerdos fiscales y será también completado y revisado anualmente.

Teniendo en cuenta el estudio preparado por la Secretaría con el título de *La política tributaria y el desarrollo económico en Centroamérica*, el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano pidió que continuasen los estudios sobre problemas fiscales, haciendo especial referencia a los problemas que plantea la integración económica.

En cumplimiento de lo solicitado por la Asamblea General en su resolución 1032 (XI) del 26 de febrero de 1957, la Secretaría preparó un estudio titulado *La política tributaria sobre las inversiones extranjeras en los países exportadores e importadores de capital* para ser examinado por el Consejo Económico y Social en su 26° período de sesiones. El estudio incluye un examen de las medidas impositivas adoptadas recientemente para fomentar la corriente de inversiones privadas extranjeras, así como también una discusión de los principales problemas que plantea la aplicación de las mismas. El estudio sirve de suplemento a un estudio anterior que fué presentado al Consejo en su 22° período de sesiones.

En la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre planificación y desarrollo económico de la CEALO (Bangkok, septiembre de 1957) se presentó un estudio sobre *Taxation and Development of Agriculture in Under-Developed Countries with Special Reference to Asia and the Far East* (La política tributaria y el desarrollo de la agricultura en los países insuficientemente desarrollados con especial referencia a Asia y el Lejano Oriente).

La mayor parte de las solicitudes de asistencia técnica en materia de impuestos se refirieron a la política y administración de los ingresos. Se facilitó a los gobiernos la asistencia de expertos en asuntos tales como sistemas para adaptar los impuestos a las necesidades

del desarrollo económico, mejoramiento de la organización y funcionamiento de la administración tributaria y racionalización de las leyes impositivas. También se trabajó para sistematizar la formación de los funcionarios encargados de los impuestos, muchos de los cuales participaron en programas especiales de formación profesional en la materia mediante becas otorgadas por la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

c) PROBLEMAS FINANCIEROS

Ya se ha mencionado el estudio sobre las corrientes de capital que constituye esencialmente una reseña de las importaciones y exportaciones de capital durante el año que se examina, y de las medidas legislativas y administrativas adoptadas al respecto. Se han iniciado los preparativos para emprender un estudio que ha de abarcar un período más amplio y será de carácter más analítico y que deberá estar terminado antes de que el Consejo Económico y Social celebre su 28° período de sesiones. Además se prevé la posibilidad de realizar estudios especiales sobre determinados aspectos de las corrientes de capital.

Ya se han iniciado estudios sobre financiamiento de la industria, por países y por categoría de problemas, pero pasará algún tiempo antes de que puedan darse a conocer los resultados. No obstante, algunas de las conclusiones sirven ya de base a ciertas actividades de asistencia técnica.

Varios países que no son miembros del Fondo Monetario Internacional reciben asistencia técnica sobre problemas de bancos centrales y de política monetaria. También se ha proporcionado asesoramiento sobre la reglamentación y fiscalización de los bancos y compañías de seguros.

6. Cooperación internacional en cuestiones de cartografía

El seminario de las Naciones Unidas sobre levantamiento de planos topográficos para el desarrollo económico, celebrado en Teherán del 14 al 24 de octubre de 1957 en conformidad con el programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y en cooperación con el Gobierno del Irán, contó con la presencia de funcionarios competentes de Afganistán, Irán, Irak, Jordania, Pakistán y Turquía. Se examinó mucha información técnica de especial interés para la zona y se perfeccionó la cooperación con dichos países y con los organismos cartográficos de otras regiones.

Se terminó el proyecto manuscrito de mapa geológico regional de Asia y el Lejano Oriente, que por primera vez proporciona un documento geológico básico de dicha región para el estudio de los recursos minerales.

En lo que se refiere al *Mapa Internacional del Mundo a Escala de un Millonésimo*, se recibieron en 1957 ejemplares de 388 hojas, lo que pone prácticamente al día el archivo del *Mapa* en lo que se refiere a las hojas publicadas en los últimos años. Determinados organismos han dado nuevo impulso al proyecto con la publicación de hojas que siguen las características de las preparadas por el *Mapa Internacional del Mundo a Escala de un Millonésimo* en cuanto a las regiones de sus países respectivos no comprendidas en los mapas anteriores. La Secretaría ha preparado un proyecto de reforma de las actuales especificaciones del *Mapa Internacional del Mundo* teniendo en cuenta las hojas publicadas y las propuestas formuladas por los organismos

nacionales y las conferencias internacionales, que será sometido a los gobiernos interesados para que formulen sus observaciones en conformidad con la resolución 600 (XXI) del Consejo Económico y Social, aprobada el 2 de mayo de 1956.

En virtud de la misma resolución, se distribuyó entre los gobiernos, para que formularan sus observaciones, un proyecto de programa cuyo objeto era lograr máxima uniformidad internacional en la ortografía de los nombres geográficos, tomando en cuenta las opiniones expresadas por los gobiernos y las sugerencias enviadas por los expertos.

7. Transportes y comunicaciones

a) CUESTIONES MARÍTIMAS

La Convención relativa a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (Ginebra, 1948) entró en vigor el 17 de marzo de 1958, al ser aceptada por el Japón. Con anterioridad a ello, tuvo efecto la aceptación del Ecuador y se recibió la aceptación del Irán y de la República Árabe Unida (ratificando la anterior aceptación de Egipto).

La Comisión Preparatoria de la Organización se reunió en junio de 1958 para formular recomendaciones y efectuar las preparaciones preliminares al primer período de sesiones de la Asamblea de la Organización que, según lo establecido, se iniciará en Londres el 6 de enero de 1959. Mientras tanto y hasta que la Organización comience a funcionar, el Secretario General sigue encargándose de la responsabilidad, asumida a solicitud de la Conferencia Internacional sobre la Prevención de la Contaminación de las Aguas de Mar por el Petróleo (Londres, 1954), de reunir y difundir información técnica sobre la contaminación por el petróleo. En la misma forma y en espera de que la nueva Organización entre en funcionamiento, el Secretario General está estudiando el asunto de la unificación de las medidas del tonelaje marítimo, y el nombramiento de un grupo de expertos que se encargará de analizar los principales reglamentos vigentes en materia de medición del tonelaje, para presentar un informe sobre las diferencias y deficiencias que se advierten en esos reglamentos.

b) COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN CUESTIONES DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Además de los asuntos de transporte marítimo señalados precedentemente, se ha seguido trabajando, en lo que se refiere a transportes y comunicaciones, sobre dos temas principales. La Secretaría ha prestado importante apoyo a los proyectos nacionales y regionales de los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas actualmente en vigor y ha continuado el estudio de las diferentes cuestiones derivadas de la acción internacional necesaria para complementar la Convención sobre la Circulación por Carretera de 1949, así como el estudio de ciertos aspectos del problema del transporte de mercaderías peligrosas.

El número de Estados Partes en la Convención sobre la Circulación por Carretera de 1949 aumentó de 27 en 1957 a 36 en junio de 1958. Las cuestiones estudiadas en el plano mundial para completar las disposiciones de la Convención se refieren a la forma de lograr la conveniente unificación universal de las señales de carretera, al establecimiento de normas relativas al grado de aptitud exigido a los conductores de vehículos automotores y a una mayor difusión, en la circulación

internacional, del uso de permisos nacionales válidos para la conducción de vehículos automotores.

Los gobiernos de varios países interesados en el transporte internacional de mercaderías peligrosas han ofrecido facilitar expertos, costeados por los gobiernos respectivos, para que presten servicios en el nuevo comité permanente, que no contará con más de 9 miembros, que designará el Secretario General. El comité se encargará de completar y mantener al día la lista de mercaderías peligrosas, y, en general, continuará el trabajo iniciado por el anterior comité de expertos que se reunió en Cinebra en 1954 y 1956. Se cuenta con los servicios de un consultor que está realizando un estudio de los sistemas de reglamentos de embalaje para uso del nuevo comité de expertos. Los gobiernos, las comisiones económicas regionales y las organizaciones internacionales interesados comunican al Secretario General hasta qué punto pueden ajustar, en general, sus propias prácticas a las recomendaciones formuladas por el anterior comité de expertos en 1956.

c) FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PERSONAS Y MERCADERÍAS

Las Naciones Unidas continuaron examinando los problemas relativos a la facilitación del transporte internacional, entre ellos la simplificación, reducción y unificación de las formalidades en materia de pasaporte y paso de fronteras. La reacción de los gobiernos a las recomendaciones formuladas sobre este asunto por el Consejo Económico y Social en su 23° período de sesiones parece ser favorable y los gobiernos continúan transmitiendo información al Secretario General sobre las actividades desarrolladas para promover el turismo internacional y para poner en práctica las recomendaciones de la Reunión de Expertos sobre Pasaportes y Formalidades de Frontera celebrada en 1947.

Han entrado en vigor todos los acuerdos internacionales formalizados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos automotores de carretera y para el turismo. La Convención sobre formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera entró en vigor el 15 de diciembre de 1957 y ha obtenido la ratificación o aceptación de 22 Estados. Hay 24 Estados Partes en la Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo, que entró en vigor el 11 de septiembre de 1957. El protocolo adicional a esta última Convención, relativo a la importación de documentos y de material de propaganda turística, entró en vigor el 28 de junio de 1956, y hay 19 Estados Partes en dicho protocolo adicional.

8. Servicios de estadística de las Naciones Unidas

a) MEJORAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS NACIONALES

Durante el año transcurrido se ha prestado especial atención a la organización de centros regionales de formación profesional para estadígrafos en relación con el Programa del Censo Mundial que abarcará los censos de población y agricultura que muchos países levantarán entre 1959 y 1961. Con la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación se han organizado dos centros, uno de ellos en Lima y el otro en Tokio; ambos durarán unas 15 semanas a partir de septiembre de 1958. Se calcula que asistirán a cada centro entre 40 y 60 participantes. Los centros se financiarán princi-

palmente con fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y contarán con la generosa ayuda de los dos países en que funcionarán; los servicios de personal técnico serán suministrados por la FAO y las Naciones Unidas. El centro latinoamericano será patrocinado además por el Instituto Interamericano de Estadística, que ha ofrecido 20 becas de formación profesional.

El centro asiático contará con un subsidio otorgado por la Fundación Ford a las Naciones Unidas. Este subsidio, con el que se contará hasta fines de 1960, incluye principalmente ayuda financiera para grupos de expertos a los que se podrá consultar, en los países de Asia y el Lejano Oriente, acerca de la organización y levantamiento de los censos, inclusive sobre la preparación de estadísticas por el método de la muestra y sobre los métodos de tabulación.

Conforme al programa de asistencia técnica, 41 expertos prestaron asesoramiento directo en materia de estadística a 19 países que lo solicitaron. Se concedieron 41 becas a estadígrafos procedentes de 21 países para estudios superiores de estadística. Además, se encomendó a varios expertos la misión de colaborar en los programas de formación profesional en los centros e institutos de estadística de las Filipinas, Viet-Nam, Egipto, la India y México.

Se tomaron nuevas medidas para celebrar consultas regionales sobre el perfeccionamiento de los métodos de estadística y para la adaptación de las normas internacionales de estadística a las condiciones y exigencias de cada región. Se asignó a personal de la Sede a la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, a fin de continuar la labor de la Conferencia de Estadígrafos Asiáticos. La Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales del Instituto Interamericano de Estadística representó a las Naciones Unidas como órgano consultivo regional en relación con el proyecto de recomendaciones internacionales sobre censos de población y vivienda. La Conferencia de Estadígrafos Europeos continuó su programa mediante grupos de trabajo integrados por expertos nacionales en estadísticas del ahorro, censos de población y de vivienda, indicadores de cambios económicos a corto plazo y definición de la unidad estadística en las estadísticas económicas. Un grupo de relatores se encargó de la clasificación socioprofesional de la población. En su décimo período de sesiones (abril-mayo de 1958), la Comisión de Estadística reconoció el valor general de las consultas regionales e incluyó, entre los proyectos de alta prioridad, el siguiente: "Desarrollar progresivamente, según sea necesario, los medios disponibles para efectuar consultas regionales sobre cuestiones estadísticas... especialmente en lo que se refiere a las necesidades estadísticas de los países menos desarrollados".

b) ESTABLECIMIENTO DE NORMAS ESTADÍSTICAS

Una de las funciones más importantes de la Oficina de Estadística es formular y difundir el empleo de normas, conceptos, definiciones y clasificaciones, y adoptar métodos uniformes para elaborar y presentar estadísticas para fines internacionales.

El número de países que utilizan o han decidido utilizar la *Clasificación uniforme para el comercio internacional* (CUCI) asciende actualmente a 85, y 42 países están haciendo uso de la *Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas* (CIIU) para elaborar sus estadísticas

industriales. De un estudio reciente sobre la aplicación de estas clasificaciones en los distintos países se dedujo que más de 50 países utilizaban las recomendaciones internacionales sobre estadísticas industriales o se ajustaban a ellas en la práctica. En lo que respecta a las estadísticas de las cuentas nacionales, un número cada vez mayor de países presenta sus cálculos de conformidad con las recomendaciones que figuran en el informe de las Naciones Unidas titulado *Un sistema de cuentas nacionales y correspondientes cuadros estadísticos*.

Aunque en su décimo período de sesiones, la Comisión de Estadística estimó que las revisiones propuestas al *Sistema de cuentas nacionales y correspondientes cuadros estadísticos*, se ajustaban a las necesidades actuales, recomendó que prosiguieran los esfuerzos por adaptarlos a las condiciones prevalentes en los países que se encontraban en una etapa incipiente de desarrollo económico, por vincularlo con un sistema integrado de estadísticas de las corrientes financieras y por coordinar los sistemas de cuentas utilizados por los países de economías planificadas y no planificadas. Se preparó un informe sobre *Estadísticas de la distribución de los ingresos personales* para que sirviera de guía a los países que proyectaban preparar estudios sobre distribución de los ingresos; además, a petición de la Comisión, se preparó un informe técnico preliminar sobre índices de precios y de cantidades para las cuentas nacionales.

En su décimo período de sesiones, la Comisión aprobó en general el tercer proyecto de *Principios y recomendaciones relativos a los censos nacionales de población* preparado para que sirviera de guía a los Estados Miembros en el levantamiento de los censos de población que han de organizarse próximamente. Desde hace varios años están en preparación los *Principios* y el correspondiente *Manual de métodos de censos de población*. Los *Principios* ya han sido examinados por la Comisión de Estadística y por la Comisión de Población, y han sido estudiados detenidamente por varios grupos regionales a fin de que las propuestas puedan ser aceptadas por el mayor número de países posible entre los 100, aproximadamente, que levantarán censos de población en los próximos años. Los *Principios* y el *Manual* formarán la base de la instrucción que, en materia de estadística de población, se habrá de impartir en los dos centros regionales de formación profesional mencionados en la sección anterior.

Se ha realizado una labor análoga en relación con las normas para los censos de habitación que generalmente se levantan junto con los censos de población. La Comisión de Estadística recomendó que se publicara cuanto antes una versión revisada del documento titulado *Principios generales para un censo de habitación* a fin de que pudiera ser utilizado en la planificación de los censos de habitación.

En su décimo período de sesiones, la Comisión de Estadística aprobó asimismo la distribución de una versión revisada de la *Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas*. Esta revisión se emprendió debido a que los países y las organizaciones internacionales utilizaban ampliamente esa *Clasificación* y a la necesidad de contar con una clasificación internacional puesta al día para los censos de población de 1960, así como para continuar la labor emprendida en materia de estadísticas industriales, de la distribución, del empleo y de otras actividades económicas.

En vista de que unos 60 países se proponen compilar información amplia sobre establecimientos industriales para 1963 o alrededor de esa fecha, y consciente de la necesidad urgente de reunir datos sobre establecimientos industriales, la Comisión de Estadística decidió preparar un programa de censo mundial industrial para 1963 y sugirió que el Consejo Económico y Social recomendara a los Estados Miembros que participasen en dicho programa. La Comisión consideró asimismo que debía proseguir la labor sobre las revisiones propuestas a las normas para la preparación de estadísticas industriales básicas, en consulta con los gobiernos y las organizaciones regionales.

Continuó la labor exploratoria en relación con los datos que se pueden obtener de los balances y de las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas comerciales y su definición, clasificación y preparación para las declaraciones a efectos de determinar el grado de liquidez de los distintos sectores de la economía, el ahorro y las inversiones y las corrientes de capital. Como los datos deben sacarse de las cuentas de las empresas comerciales, durante este período, la atención se concentró en un estudio de las prácticas de contabilidad teniendo en cuenta la información que se necesita para el análisis económico.

En cuanto a las sugerencias que puedan servir como guía a los países menos adelantados estadísticamente para el desarrollo de sus programas de estadística, la Comisión de Estadística aprobó una lista de series estadísticas que eran de suma utilidad para analizar los problemas de desarrollo económico y social y que en general eran fáciles de reunir. Aprobó asimismo un memorándum en el que se analizaba el empleo de estas series en la programación y evaluación del desarrollo económico y social, los métodos y fuentes para la preparación de las series y el relativo orden de prioridad al compilarlas.

Continuaron las investigaciones en cuanto a métodos de estadística, especialmente en relación con el empleo del método de la muestra estadística en las distintas etapas de un censo de población. Se está preparando otro estudio sobre los problemas prácticos que se plantean en la aplicación del método de la muestra a los diferentes tipos de estudios económicos y sociales.

c) RECOPIACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS

La Oficina de Estadística ha continuado la tarea de recopilar y publicar datos sobre comercio exterior, producción y precios, transportes, ingreso nacional, población y estadísticas vitales, y también sobre otros temas especiales según se necesite, y ha mantenido al día los resúmenes de datos para obtener totales regionales y mundiales en la forma descrita en un informe anterior del Secretario General.

Se computó una nueva serie de números índice a fin de ordenar los datos a los efectos del análisis económico. Estos incluyen, por ejemplo, nuevos índices mundiales de producción industrial en los que se indican las principales regiones del mundo y las subdivisiones importantes de la minería y la manufactura; estos índices ya han sido publicados. Se están preparando estadísticas para señalar la estructura de las actividades industriales para un determinado número de años. Se ha preparado un índice de precios de los artículos básicos en el comercio exterior del mundo, junto con subíndices para alimentos, productos agrícolas no alimenticios y minerales, así como un índice de precios de las exportaciones mundiales de metales no ferrosos en el que se mencionan seis metales principales.

En su décimo período de sesiones, la Comisión examinó los problemas que presentaba la adaptación de las estadísticas del comercio exterior para que permitieran hacer determinados tipos de análisis económicos y consideró que la Oficina de Estadística debía investigar los métodos que utilizaban los países para clasificar los productos básicos en bienes de consumo y bienes de capital.

Durante el período que se examina, se publicaron los siguientes documentos anuales ordinarios: el *Statistical Yearbook, 1957* (Anuario Estadístico), una compilación general de las series económicas y sociales más importantes; el *Demographic Yearbook, 1957* (Anuario Demográfico), en el que se incluyen las principales series demográficas, prestando especial atención a las estadísticas de mortalidad; el *Yearbook of International Trade Statistics, 1956* (Anuario de Estadísticas del Comercio Internacional), que da estadísticas anuales detalladas para 115 países que representan el 98% del comercio mundial. Además, se publicó el primer número del *Yearbook of National Accounts Statistics, 1957* (Anuario de Estadísticas de Cuentas Nacionales). En este volumen figuran cálculos detallados de los ingresos nacionales y totales conexos para 70 países.

Las siguientes publicaciones, que aparecen mensual o trimestralmente, complementan los Anuarios, que tienen por objeto servir como libros básicos de consulta: el *Boletín Mensual de Estadística*, que contiene estadísticas mensuales sobre más de 60 materias referentes a 140 países y territorios y datos trimestrales sobre los totales mundiales y regionales más importantes, así como artículos especiales sobre las tendencias económicas y sociales de importancia; *Commodity Trade Statistics* (Estadísticas del comercio de mercaderías) (trimestral) contiene cuadros de productos básicos internacionales conforme a la *Clasificación uniforme para el comercio internacional* (CUCI), e indica las importaciones y exportaciones de los países que presentan sus datos, con arreglo a los 150 grupos de la CUCI, así como resúmenes dispuestos con arreglo a las 10 secciones de la Clasificación; *Direction of International Trade* (Orientación de comercio internacional) (números mensuales con un resumen anual, publicados conjuntamente por las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), que contienen estadísticas de las exportaciones e importaciones totales de unos 110 países; *Population and Vital Statistics Reports* (Estadísticas de población y vitales) (trimestral) donde figuran los últimos datos disponibles sobre las tasas de natalidad, mortalidad y defunción infantiles, los totales de los censos de población y los cálculos corrientes de población concernientes a más de 200 países y territorios, así como los totales conexos correspondientes a la población continental y mundial; y *Statistical Notes* (Notas estadísticas), en que se describen los acontecimientos de actualidad en materia de estadísticas internacionales.

9. Comisiones económicas regionales

El reconocimiento cada vez mayor, con el transcurso de los años, de la utilidad de las actividades económicas de la Organización en las diversas regiones ha dado por resultado la expansión gradual y la consolidación del trabajo realizado por las comisiones económicas regionales, particularmente en las regiones en que los países económicamente poco desarrollados han necesitado más

El período a que se refiere esta memoria se ha caracterizado por la decisión del Consejo Económico y Social, adoptada por recomendación de la Asamblea General, de establecer la Comisión Económica para África. Tanto la Asamblea como el Consejo hicieron constar su satisfacción por la labor de las actuales comisiones económicas regionales y reconocieron la importancia de dedicar mucha mayor atención que hasta ahora al desarrollo económico y social de África.

Por otra parte, las actuales comisiones económicas regionales han prestado especial atención a las cuestiones comerciales y sobre todo a las relativas a la integración económica. La Comisión Económica para Europa continuó actuando de órgano de la cooperación económica para toda Europa y dedicó mayor atención a los recursos y necesidades en materia de energía y a otros problemas económicos urgentes. Se consolidaron los progresos realizados por la Comisión Económica para África y el Lejano Oriente en relación con el programa para el aprovechamiento de los recursos de la cuenca del bajo Mekong. Los cuatro países ribereños constituyeron el Comité de Coordinación de las Investigaciones de la Cuenca del Bajo Mekong, que cuenta con los servicios de la Secretaría de la Comisión y que, siguiendo las recomendaciones de la Misión de Estudio de las Naciones Unidas presidida por el General Wheeler, aprobó un programa de trabajo para cuya ejecución dieron su apoyo financiero varios países no pertenecientes a la región. La constante preocupación de la CEALO por resolver los problemas comerciales condujo a la decisión de celebrar, a título experimental, conversaciones para el fomento del comercio intrarregional entre varios países miembros de la región.

También la Comisión Económica para América Latina ha logrado progresar en su labor encaminada a resolver los problemas comerciales a que hace frente la región. Una reunión de expertos, convocada por la CEPAL, formuló varias recomendaciones relativas a las bases para establecer el mercado regional latinoamericano. El programa de integración económica en la América Central trazado por la CEPAL mereció el apoyo general de los países interesados. Se firmó un tratado bilateral de comercio libre y de integración económica así como un acuerdo sobre integración industrial, ambos de gran trascendencia.

La planificación y el desarrollo económicos siguieron siendo la preocupación principal de la CEALO y la CEPAL. Por lo que se refiere a la CEALO, el Grupo de Trabajo sobre Planificación y Desarrollo Económicos comenzó a concentrar sus actividades en importantes sectores de la economía, empezando por la agricultura, y a preparar una reunión sobre industrialización. La CEPAL ha terminado varios estudios por países destinados a servir de ayuda a los países interesados en la formulación de sus planes de desarrollo económico.

a) COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA

Después de examinar la situación económica en Europa la CEE, en su 13º período de sesiones, celebrado en abril de 1958, aprobó resoluciones que enfocaban los siguientes asuntos: el proyectado acuerdo general europeo de cooperación económica; la documentación económica, técnica y científica; la intensificación de las relaciones entre los países; las materias plásticas y las fibras artificiales y sintéticas; la productividad de la mano de obra; el problema de la energía en Europa; el problema de la lucha contra la conta-

minación de las aguas en Europa; la energía nuclear; la cooperación interregional; la asistencia técnica; los bienes de consumo; las actividades del Comité de Fomento del Comercio y los programas de trabajo de la Comisión para 1958/1959.

La Comisión examinó asimismo la propuesta de la URSS relativa a la convocación de la conferencia de ministros de los países miembros sobre el comercio internacional.

La secretaría de la CEE ha seguido cooperando con la Administración de Asistencia Técnica, las demás comisiones económicas regionales, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Se mantuvieron los contactos con los funcionarios del Consejo de Europa, el Consejo de Ayuda Económica Mutua, la Comisión del Danubio con sede en Budapest, la Conferencia Europea de Ministros del Transporte, la Alta Autoridad de la Mancomunidad Europea del Carbón y del Acero y la Organización Europea de Cooperación Económica (incluido el Organismo Europeo de Productividad). Se establecieron relaciones de trabajo entre la Secretaría y el Organismo Internacional de Energía Atómica. También se establecieron oficiosamente relaciones de trabajo con los funcionarios de la Organización de Cooperación de Administraciones Ferroviarias con sede en Varsovia.

Agricultura

La actividad principal del Comité de Problemas Agrícolas consistió en examinar la situación del mercado en lo que respecta a los principales productos agrícolas y en realizar el canje de información sobre la política seguida por los gobiernos en materia de agricultura. El Comité prosiguió sus trabajos sobre las normas uniformes para los productos alimenticios perecederos, el establecimiento de condiciones de venta uniformes para determinados productos agrícolas, y los problemas que plantea la mecanización de la agricultura. Se inició un estudio de los factores que afectan la demanda de los principales productos alimenticios.

Carbón

El Comité del Carbón emprendió un estudio preliminar de los problemas a largo plazo que plantean el desarrollo de la industria del carbón y el comercio en la región. El Subcomité del Comercio del Carbón continuó su examen trimestral de las tendencias a corto plazo y de los problemas del mercado del carbón. Por conducto de sus grupos de trabajo sobre utilización y clasificación, el Comité también estudió ciertos problemas relacionados con la utilización del carbón; llegó a un acuerdo preliminar sobre un sistema de clasificación internacional para carbones pardos y lignitos y prosiguió sus actividades para establecer un sistema de clasificación del coque de hulla fabricado a alta temperatura. Prosiguió la labor encaminada a la creación de condiciones generales para la importación y exportación de los combustibles sólidos.

Gas

El Grupo de Trabajo especial sobre los problemas del gas estudió temas seleccionados de gran importancia, tales como la flexibilidad de la industria del gas, el método de calcular la demanda probable de gas en el futuro, los problemas relacionados con la producción, el transporte, la distribución y utilización del gas natural, así como la manipulación y la comercialización del gas licuado.

Energía eléctrica

El Comité de Energía Eléctrica prosiguió el examen de la situación de la energía eléctrica en Europa y siguió prestando ayuda a los gobiernos para que éstos utilizaran del modo más racional posible los recursos de sus respectivos países. El Comité estudió la posibilidad de un intercambio de electricidad entre los países del centro y del sudeste de Europa; la posibilidad de reducir los gastos de construcción de centrales de energía hidroeléctrica y los efectos de la mecanización en dicho campo; los métodos para determinar los recursos hidroeléctricos explotables, así como los problemas de la electrificación rural. El Grupo de Estudio creado para llevar a cabo el plan de Yugoslavia de exportar energía eléctrica desde dicho país efectuó investigaciones técnicas relacionadas con el primer proyecto seleccionado para el estudio.

Vivienda

El Comité de la Vivienda examinó la situación actual de la vivienda y sus perspectivas, incluso, los programas a largo plazo de construcción de viviendas, así como la administración y el financiamiento de la vivienda. Se siguió estudiando el problema de reducir el costo de la construcción. Se llevó a cabo un estudio sobre la utilización del espacio en las viviendas de tipo corriente. Los relatores iniciaron sus trabajos sobre cuestiones concretas de cooperación práctica en materia de viviendas entre algunos de los países menos industrializados de Europa meridional. El Comité aprobó un programa a largo plazo de visitas colectivas a distintos países, así como un programa de documentación preparado por el Consejo Internacional de Investigaciones, Estudios y Documentos relativos a la Edificación (organización no gubernamental que mantiene estrechas relaciones de trabajo con el Comité) y decidió celebrar una reunión especial sobre la uniformación de la coordinación modular.

Industrias y materiales

Continuaron las actividades de los Grupos de Trabajo especiales sobre prácticas contractuales en lo referente a la industria mecánica y a la maquinaria agrícola. Los relatores gubernamentales del Reino Unido y de la URSS continuaron preparando un informe sobre las consecuencias económicas de la automación.

Transportes interiores

Varios acuerdos y convenciones sobre transporte, preparados bajo los auspicios del Comité de Transportes Interiores, fueron firmados o quedaron abiertos para ser firmados por Estados europeos; entre ellos, el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercaderías Peligrosas por Carretera, un acuerdo sobre las señales de carretera, una convención encaminada a facilitar la reparación de los vagones pertenecientes a las administraciones ferroviarias que integran el grupo "EUROP", y un acuerdo sobre normas uniformes para la aprobación de accesorios de vehículos automóviles. Como resultado de la labor del Comité, varios países ya no exigen documentación de aduanas para la importación temporal de vehículos automóviles privados.

Acero

El Comité del Acero examinó las características más salientes del mercado siderúrgico en Europa y especialmente la situación de las materias primas y las tendencias de las demandas. Se inició una amplia en-

cuesta sobre las perspectivas a largo plazo de la industria siderúrgica en Europa. El Comité siguió patrocinando el canje de información sobre cuestiones técnicas relativas al acero.

Madera

El Comité de la Madera examinó la evolución en 1957 del mercado europeo de la madera blanda aserrada, de los maderos para entibar y de la madera para pulpa, e hizo una evaluación de las perspectivas para 1958; estudió también la situación de la madera dura. El Comité examinó asimismo varios problemas relacionados con la utilización de la madera. El Comité Mixto de la FAO y de la CEE sobre técnicas de explotación forestal y capacitación de obreros forestales continuó sus actividades por conducto de los relatores y de los grupos de estudio en los que participó activamente la Organización Internacional del Trabajo, particularmente en lo relativo a la capacitación, la higiene y la seguridad de los trabajadores forestales.

Comercio

El Comité de Fomento del Comercio continuó su examen periódico de la evolución del comercio intra-europeo, particularmente entre el este y oeste. Decidió convocar nuevamente al Grupo de Trabajo sobre Ferias Internacionales a fin de estudiar ciertos problemas relativos a las ferias y las exposiciones técnicas internacionales. Solicitó de la Secretaría que investigara hasta qué punto se podía facilitar el comercio intraeuropeo mediante la cooperación internacional en el campo del seguro. Simultáneamente con la sexta reunión del Comité, se celebraron una consulta de expertos en compensaciones multilaterales y la quinta consulta de expertos sobre el comercio entre los países del este y del oeste de Europa. El Comité decidió examinar en su próxima reunión la cuestión de las consecuencias económicas de la creación de la Comunidad Económica Europea. En el 13º período de sesiones de la Comisión varias delegaciones, entre ellas las de países miembros de dicha comunidad, propusieron que el Comité estudiara las repercusiones en el comercio entre los países del este y del oeste debidas a otros esfuerzos encaminados a lograr una integración económica subregional en Europa.

La Conferencia de Estadígrafos Europeos examinó los informes preparados por los grupos de trabajo, los relatores, ciertos organismos especializados y otras organizaciones internacionales, así como por la Secretaría, sobre diversos temas, a saber: censos, consumo de capital, ahorro, precios, comparación de salarios reales y cuentas nacionales, y las actividades estadísticas llevadas a cabo por los diversos comités de la CEE.

Los Comités de Energía Eléctrica, Vivienda, Transportes Interiores, Acero y Comercio prosiguieron la aplicación de varios proyectos relacionados con la resolución 7 (XI) de la Comisión que se refiere al desarrollo económico de Europa meridional. Siguiendo una recomendación de la Conferencia de Estadígrafos Europeos, se celebró en Grecia un seminario sobre estadísticas industriales.

La Secretaría siguió publicando estudios y análisis periódicos entre los que figuran el *Quarterly Economic Bulletin for Europe* (Boletín Económico Anual para Europa) y la publicación anual *Economic Survey of Europe* (Estudio Económico de Europa) así como una serie de boletines estadísticos.

b) COMISIÓN ECONÓMICA PARA ASIA Y EL LEJANO ORIENTE

En su 14º período de sesiones, celebrado en marzo de 1958 en Kuala Lumpur (Federación Malaya), la CEALO examinó los graves problemas inherentes a los crecientes déficit comerciales, las relaciones de intercambio desfavorables y la continua disminución de la parte correspondiente a la región en las exportaciones mundiales. Decidió seguir de cerca las posibles repercusiones de la creación del Mercado Común Europeo y sus posibles efectos en las economías de los países de la región. Aprobó resoluciones conducentes al aprovechamiento de los recursos de la cuenca del bajo Mekong, decidió celebrar conversaciones para el fomento del comercio intrarregional y aprobó un programa de trabajo en el que se dió destacada importancia a los aspectos regionales y a largo plazo del desarrollo económico, de la industrialización, de los problemas demográficos y del desarrollo económico y social equilibrado; el programa preveía una creciente cooperación con los organismos especializados el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Organismo Internacional de Energía Atómica y varias organizaciones no gubernamentales. La Comisión recomendó la admisión de Irán como un nuevo miembro y su inclusión en la esfera geográfica de las actividades de la Comisión.

Planificación y desarrollo económicos

El Grupo de Trabajo sobre Planificación y Desarrollo Económicos se reunió para examinar los problemas y la política de la planificación del desarrollo agrícola en relación con la economía en general y en particular con la industrialización. La Comisión aprobó un programa a largo plazo para el Grupo de Trabajo, según el cual se debía comenzar con el estudio de los problemas de la industrialización en relación con la planificación y el desarrollo económicos (1958) el desarrollo social y económico equilibrado (1959) y, más tarde, la planificación del desarrollo del transporte.

La Secretaría de la CEALO llevó a cabo estudios sobre demografía y desarrollo de la comunidad.

Industrias y recursos naturales

El Subcomité del Hierro y el Acero examinó la evolución de la industria siderúrgica en la región y analizó los problemas relativos a las industrias transformadoras del acero, los trenes de laminación, la unificación y simplificación de las especificaciones del hierro y el acero y la evaluación de la futura demanda de acero en la región. Bajo los auspicios aunados de la CEALO y de la AAT, un grupo de expertos en hierro y acero, procedentes de Asia, visitó a Bélgica, Francia, la República Federal de Alemania, Suecia y el Reino Unido. Este grupo formuló varias recomendaciones sobre varios aspectos de los procedimientos más recientes para fabricar el hierro y el acero.

El Grupo de Trabajo sobre Industrias en Pequeña Escala y Comercialización de los Productos de la Artesanía examinó los aspectos técnicos y económicos de la producción de pellejos y pieles, así como los de la industria del cuero. Recomendó medidas encaminadas a aumentar la productividad, mejorar la calidad, utilizar materiales locales, intensificar la investigación y coordinar la producción en pequeña y en gran escala.

El Subcomité de Recursos Minerales examinó los progresos realizados en materia de producción mineral, legislación minera, conservación y exploración de los

yacimientos, levantamientos topográficos aéreos y prospecciones aéreas para localizar minerales radioactivos, y la clasificación y utilización de los carbones pobres. Tomó nota de los progresos realizados por el Grupo de Trabajo integrado por expertos geólogos con miras a la terminación del mapa geológico regional y conoció los planes para el levantamiento de mapas regionales mineralógicos y tectónicos. El Subcomité también formuló planes para que se reuniera en diciembre de 1958 un simposio sobre explotación de los recursos petroleros de Asia y el Lejan Oriente.

El Subcomité de Energía Eléctrica examinó la situación de la energía eléctrica en la región y los problemas de la electrificación rural, así como los relativos a la uniformidad de normas en esta materia y a la formación de personal técnico. Apoyó las recomendaciones de un grupo de trabajo sobre los diversos métodos para evaluar el potencial hidroeléctrico, teórico, técnico y económico, de los países de la región.

El Comité de Industria y Recursos Naturales examinó el desarrollo general de las industrias de la región así como el progreso de las industrias en pequeña escala y de la artesanía, el aprovechamiento de los recursos minerales, la energía eléctrica y la industria del hierro y el acero. Sugirió que la cooperación regional podría ser eficaz al establecer industrias en gran escala que podrían abastecer a un mercado mucho más amplio. En cooperación con la AAT, decidió organizar un viaje de estudios de expertos en minería de la región que visitarían a los Estados Unidos y al Canadá, convocar en 1958 un grupo de trabajo de expertos en legislación minera, y en fecha ulterior, un seminario sobre prospecciones aéreas. Recomendó la concesión de becas y la contratación de expertos encargados de instruir al personal técnico en el aprovechamiento de la energía nuclear.

Comercio

El Comité de Comercio examinó la evolución reciente en materia de comercio, política comercial, normas y procedimientos relativos a los permisos de importación y exportación, técnicas y procedimientos para el fomento de las exportaciones y la capacitación para el fomento del comercio mediante seminarios regionales. Examinó las posibles consecuencias para los países de la región del Mercado Común Europeo y de la proyectada zona europea de libre intercambio; sugirió que se mantuviese en estudio esta cuestión y que los países miembros preparasen estudios sobre las posibles repercusiones del Mercado Común Europeo en sus principales productos de exportación. También recomendó que en los contratos de exportación se introdujera una cláusula de arbitraje de tipo uniforme, que se implantara un seguro contra el riesgo de las exportaciones y se adoptaran medidas encaminadas a mejorar la clasificación, el control de la calidad y la uniformación de los productos exportables tradicionales de la región. Recomendó un estudio acerca del comercio de minerales y de productos minerales.

Transportes interiores

El Grupo de Trabajo Especial sobre Puertos Interiores estudió el diseño, la construcción, la administración y el desarrollo de los puertos interiores y puso de relieve la importancia de contar con servicios portuarios adecuados con el fin de activar el despacho de los buques. El Subcomité de Vías de Navegación Interior estudió las medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de las organizaciones oficiales encar-

gadas del transporte por vías de navegación interior, modernizar las embarcaciones y utilizar de modo más eficaz los medios de transporte de las vías de navegación interior. Tomó nota de los progresos alcanzados en la implantación de un sistema uniforme de boyas y señales costeras.

El Subcomité de Ferrocarriles estudió los aspectos técnicos y económicos del transporte por ferrocarril, las locomotoras Diesel, las técnicas de los talleres ferroviarios, las medidas de seguridad en los ferrocarriles, la uniformación y conservación de las traviesas de madera para ferrocarriles, la utilización económica del material rodante y los servicios de formación profesional de funcionarios de las administraciones ferroviarias.

Un seminario sobre la seguridad de las carreteras examinó cuestiones administrativas y técnicas. Un seminario sobre construcción y conservación de carreteras de costo reducido y estabilización del terreno estudió los aspectos técnicos, administrativos y económicos de la construcción de dichas carreteras.

El Comité de Transportes Interiores, cuyo nombre cambió la Comisión por el de "Comité de Transportes Interiores y Comunicaciones", examinó las actividades en materia de ferrocarriles, carreteras, vías de comunicación interior y telecomunicaciones. Decidió convocar un grupo de trabajo sobre la coordinación del transporte y, en cooperación con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un grupo de trabajo sobre telecomunicaciones. Recomendó que se incrementaran en la región los servicios de formación del personal de telecomunicaciones.

Alimentación y agricultura

La División Mixta de Agricultura de la CEALO y la FAO prosiguió el examen de los hechos recientes en el campo de la agricultura y siguió desarrollando sus actividades encaminadas a reunir y difundir información sobre sistemas de crédito agrícola y comercialización. Inició estudios por casos sobre la utilización de los excedentes agrícolas para el desarrollo económico y ayudó a preparar estudios por países en la India e Indonesia sobre los aspectos agrícolas del desarrollo de la comunidad. El Centro Mixto de la FAO y la CEALO sobre políticas destinadas a garantizar y estabilizar los precios e ingresos agrícolas en Asia y el Lejano Oriente examinó los objetivos generales y los medios para hacer efectivas la garantía y la estabilización de los precios de los productos agrícolas y sus efectos en la producción, los ingresos agrícolas, los precios al por menor, la demanda de los consumidores, el comercio exterior, el nivel general de los precios y desarrollo económico en general.

Hidráulica fluvial y aprovechamiento de los recursos hidráulicos

Después de establecido, celebró tres períodos de sesiones el Comité de Coordinación de las investigaciones para el aprovechamiento de los recursos de la cuenca del bajo Mekong, integrado por representantes de Camboja, Laos, Tailandia y Viet-Nam y al que presta sus servicios la secretaría de la CEALO. A petición de los países ribereños, una Misión de Estudio de las Naciones Unidas llevó a cabo extensas investigaciones sobre el terreno y recomendó un programa quinquenal de estudio e investigaciones con miras a la planificación de proyectos específicos sobre el río principal. Varios gobiernos de Estados no pertenecientes a la región expresaron su interés en

ejecutar el proyecto del río Mekong. En su tercer período de sesiones, el Comité de Coordinación formuló planes para utilizar la ayuda ofrecida en la labor preparatoria del proyecto del río Mekong, particularmente para establecer estaciones hidrológicas.

La Tercera Conferencia Técnica Regional sobre aprovechamiento de los recursos hidráulicos, al estudiar esta cuestión, examinó las ventajas relativas de emplear trabajadores manuales o equipo mecánico, así como los servicios de organismos públicos o de compañías contratistas particulares para la ejecución de las obras previstas en los proyectos y las medidas encaminadas a mejorar los datos sobre energía hidroeléctrica.

La Oficina de Servicios Hidráulicos y Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos continuó publicando la *Flood Control Series* y el *Flood Control Journal* (trimestral) y distribuyendo entre los países de la región informes sobre los proyectos y publicaciones técnicas.

Investigación y estadística

La Conferencia de Estadígrafos Asiáticos examinó, en cooperación con la FAO, el proyecto de programa preparado por dicho organismo especializado para los censos agrícolas mundiales de 1960. En la reunión técnica sobre problemas de reclasificación y administración presupuestaria se examinaron los progresos realizados y las dificultades halladas al aplicar el sistema simplificado de clasificación; a la vez se estudió la formulación de presupuestos por programas y por actividades. Se decidió concentrar el trabajo futuro en la preparación, fiscalización y administración de presupuestos.

Se elaboran planes para facilitar la prestación de la asistencia técnica de las Naciones Unidas y de la FAO a los países de la región para la realización del censo mundial de 1960 y para que se estableciera un centro de formación profesional para funcionarios censales. Se publicó un informe preliminar titulado "Las tendencias demográficas y los problemas relacionados con el desarrollo económico en los países de la CEALO". En cooperación con la FAO, continuó el trabajo sobre las tendencias y perspectivas de la madera y que contendría proyecciones hasta 1965 y 1975 de la producción, comercio y consumo de los productos forestales.

Se continuó publicando el *Economic Survey of Asia and the Far East* (Estudio Económico de Asia y el Lejano Oriente, anual) y el *Economic Bulletin for Asia and the Far East* (Boletín Económico para Asia y el Lejano Oriente, trimestral).

Servicios de asesoramiento y de asistencia técnica

La secretaría de la CEALO continuó prestando a los gobiernos servicios de asesoramiento y de asistencia técnica para la solución de cuestiones relacionadas con la labor que realiza la Comisión, en cooperación con la AAT y los organismos especializados. Continuó la difusión y canje de información científica, técnica y económica mediante la publicación de revistas y periódicos y la organización o la participación en exposiciones, demostraciones visuales y viajes de estudio. A petición de los interesados, se facilitaron servicios de asesoramiento en cuestiones técnicas y económicas de la competencia especial de la secretaría. La secretaría continuó prestando ayuda a los gobiernos en la formulación de peticiones de asistencia técnica y a la AAT en

la contratación e instrucción preliminar de los expertos y en el estudio de los informes de éstos.

c) COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA

El Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina celebró su sexto período de sesiones en Santiago de Chile del 7 al 8 de abril de 1958. Para conmemorar el décimo aniversario de la Comisión, el Comité aprobó una resolución en la que hacía constar su gratitud para con las Naciones Unidas por el establecimiento de la Comisión y solicitaba que continuase la cooperación de los gobiernos de los países miembros para la mejor realización de sus propósitos y objetivos. El Comité también reiteró su agradecimiento al Gobierno de Chile por su ofrecimiento de donar un terreno para la construcción del edificio destinado a las oficinas de las Naciones Unidas y expresó su esperanza de que el edificio proyectado se convirtiera pronto en realidad. El Comité Plenario examinó y aprobó los progresos alcanzados en la ejecución del programa de trabajo. En el curso de las deliberaciones, las posibilidades de crear un mercado regional latinoamericano despertaron considerable interés entre los gobiernos de los países miembros, pues se consideró que este proyecto, junto con el Programa de Integración Económica del Istmo Centroamericano, respondería a necesidades de orden práctico y podría beneficiar directamente a los países interesados.

Continuaron publicándose regularmente el *Estudio Económico de América Latina* (anual) y el *Boletín Económico para América Latina*.

Mercado regional latinoamericano

Conforme a los deseos del Comité de Comercio y de la Comisión, expresados en su séptimo período de sesiones, la secretaría ha estudiado con especial interés los problemas relacionados con el posible establecimiento del mercado regional latinoamericano. Se dió un paso importante en dicho sentido en la primera reunión del Grupo de Trabajo del Mercado Regional, celebrada en Santiago en febrero de 1958 con la asistencia de destacadas personalidades latinoamericanas. El Grupo estudió la documentación sobre antecedentes preparada por la secretaría y, después de detenidas deliberaciones, emitió un informe en el que se consignaban las "Bases para la Formación de un Mercado Regional Latinoamericano". La segunda reunión del grupo ha sido prevista para fines de 1958, y se espera que en ella se estudien propuestas concretas para presentarlas a los gobiernos de los países miembros y al Comité de Comercio. El Comité Plenario examinó el informe del Grupo de Expertos y expresó su vivo interés en el proyecto de mercado regional. El consenso general de los miembros de la Comisión fué que este proyecto era acaso el más importante de los que se hallaban en curso de realización; se aprobó una resolución en la que se recomendaba a la secretaría que siguiera promoviéndolo por todos los medios posibles, y dando alta prioridad a los estudios sobre el mercado regional latinoamericano. También ha continuado la labor preparatoria de la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Bancos Centrales que, según se espera, ha de estudiar ciertos aspectos de la liberalización del intercambio comercial y la adopción de un régimen multilateral de pagos. Prosiguió el análisis de los actuales regímenes arancelarios con objeto de establecer una nomenclatura arancelaria uniforme para toda la América Latina, análoga a la ya establecida para América Central. También se analizó la incidencia de los derechos aduaneros en ciertos países seleccionados, y

se estudiaron los problemas relacionados con el establecimiento de industrias dentro del proyectado mercado regional.

Programa de Integración Económica Centroamericana

Del 5 al 10 de junio, se celebró en Tegucigalpa la quinta reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, órgano auxiliar de la Comisión integrado por los Ministros de Economía de los cinco países centroamericanos. En dicha reunión se firmaron un tratado sobre régimen multilateral de comercio libre e integración económica y un acuerdo sobre desarrollo industrial integrado de la región. El tratado contiene una lista de productos básicos y artículos manufacturados que quedarán exentos de derechos aduaneros y otros gravámenes o restricciones al comercio entre los cinco países. El Comité estimó que el tratado constituía el primer paso indispensable hacia la unificación del régimen arancelario, el comercio libre multilateral y el desarrollo integrado de las industrias centroamericanas, lo que constituía una base para el establecimiento gradual del mercado común. El acuerdo relativo al desarrollo industrial integrado persigue la finalidad de establecer actividades manufactureras centroamericanas que hasta ahora no podían emprenderse dada la reducida magnitud de los mercados de cada país. Los Ministros de Economía también firmaron acuerdos relativos a señales y reglamentos comunes del tránsito por carretera, a fin de facilitar el intercambio comercial entre los países. También llegaron a un acuerdo respecto de planes sobre una fábrica centroamericana de pulpa de papel y de papel que abastecería a los cinco países centroamericanos. Además se establecieron subcomités de vivienda y de electrificación. Continuaron desarrollándose sobre una base más firme las actividades y la organización del Instituto Central de Investigaciones y Tecnología Industrial, y la Escuela Superior de Administración Pública prestó nuevos y valiosos servicios en relación con la formación profesional.

Actividades relativas al desarrollo económico

En lo concerniente al Programa de Integración Económica Centroamericana, se han iniciado estudios sobre el desarrollo económico de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá, siguiendo de manera general la metodología aplicada a los estudios por países llevados a cabo anteriormente por la Secretaría en los casos de Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y México. Estos estudios se han emprendido conjuntamente por la secretaría y los grupos de trabajo integrados por técnicos de los países interesados.

Luego de examinar detenidamente el material estadístico, se publicó el *Estudio sobre el Desarrollo Económico de la Argentina*, en el que se consigna uno de los análisis más detallados llevados a cabo hasta la fecha por la Secretaría. Prosiguieron los trabajos relativos a un estudio de los efectos de la política fiscal en el desarrollo económico de Chile.

De abril a diciembre de 1957 se puso en práctica el sexto programa ordinario de capacitación para el desarrollo económico organizado conjuntamente por la CEPAL y la AAT con la participación de 14 becarios. Además del curso ordinario que funcionó en Santiago, se organizaron cursos intensivos en Río de Janeiro y en Caracas. Asistieron a cada uno de estos cursos más de 80 estudiantes, muchos de ellos destacados funcionarios públicos. El séptimo curso ordinario comenzará el 30 de junio de 1958.

En cuanto a las actividades de asistencia técnica, las diversas divisiones de la secretaría de la CEPAL siguieron cooperando estrechamente con la Oficina de la AAT en América Latina. El Comité Plenario compartió la opinión del Secretario General, quien, en su exposición hecha en el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General, dijo que el haber destacado personal de la AAT a la América Latina había dado resultados provechosos, por lo que solicitó que la descentralización de la AAT tuviese carácter permanente.

Agricultura, industria y energía

Las actividades relacionadas con la agricultura se llevaron a cabo en su mayor parte con arreglo al programa mixto de la CEPAL y de la FAO, que dedica especial atención a los estudios sobre la productividad del café en los países latinoamericanos, seleccionados para este trabajo. En el Brasil se ha iniciado un estudio análogo a los ya realizados en El Salvador y Colombia. Continuó el estudio sobre la producción ganadera, y los funcionarios adscritos al programa mixto colaboraron en la redacción de los capítulos sobre agricultura que figuran en el *Estudio Económico* y en el *Estudio sobre Desarrollo Económico de la Argentina*.

El grupo de la CEPAL que hizo una visita al Perú para estudiar el desarrollo económico de dicho país concluyó su trabajo de campo a fines de 1957, contando con la plena cooperación de los funcionarios del gobierno y de los industriales. Se espera que el estudio quedará terminado en el segundo semestre de 1958. Se emprendió un estudio sobre la industria de vehículos automóviles del Brasil, con el fin de analizar el efecto probable del establecimiento de esta industria en el resto de la economía del país, y se consideró la posibilidad de ampliar este estudio a otras industrias. Se ha venido estudiando la industria del acero desde el punto de vista del mercado regional; se han iniciado estudios sobre el mercado del acero, la producción real de acero y las características y capacidad productiva de las instalaciones siderúrgicas existentes. Prosiguieron los estudios sobre la industria del papel y de la pulpa de papel en la Argentina, el Brasil y el Perú, y se inició la labor para determinar el lugar que ocuparía esta industria en el proyectado mercado regional.

Bajo el patrocinio conjunto de la CEPAL y de la AAT y con la participación de la Organización Meteorológica Mundial se inició un estudio de los recursos hidráulicos de América Latina. Se ha terminado la primera parte del estudio de carácter experimental que se refiere a Chile, y han comenzado los trabajos para este fin en la Argentina a los que seguirán los que se realizarán a fines de 1958 en el Ecuador. El estudio experimental ha permitido obtener un cuadro general de los recursos hidráulicos, basado en la información sobre las condiciones meteorológicas, las aguas superficiales y las aguas subterráneas; además, ha permitido hacer un balance de los recursos hidráulicos y de su utilización en lo concerniente a las principales cuencas hidrográficas de Chile. El estudio comprende sugerencias para el mejoramiento de los servicios hidrológicos y para introducir modificaciones en la legislación sobre utilización de aguas.

d) COMISIÓN ECONÓMICA PARA AFRICA

El Consejo en su 25° período de sesiones, examinó la resolución 1155 (XII) de la Asamblea General, de fecha de 26 de noviembre de 1957, en la que se recomendó que el Consejo Económico y Social estudiara pronta y favorablemente la creación de una Comisión

Económica para África. El Consejo aprobó por unanimidad la resolución 671 (XXV) por la que creó la Comisión y se fijaron sus atribuciones.

Participaron en el debate siete Estados africanos Miembros de las Naciones Unidas que no eran miembros del Consejo y varios Estados metropolitanos no representados en el Consejo. Etiopía, Ghana, Liberia, Libia, Marruecos, la República Árabe Unida, Sudán y Túnez presentaron conjuntamente un proyecto de atribuciones de la Comisión y, con el mismo fin, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentó separadamente otro proyecto. El Secretario General presentó la documentación pertinente a fin de facilitar las deliberaciones del Consejo. El debate sobre las atribuciones versó principalmente sobre las funciones y la composición de la nueva Comisión y sobre la cuestión de los miembros asociados. En cuanto a las funciones, hubo acuerdo general sobre el alcance de las labores de la Comisión; el único punto controvertible fué el de determinar si la promoción del desarrollo social debía incluirse entre los objetivos de la Comisión especificados en sus atribuciones o si sería preferible no hacer referencia alguna a cuestiones sociales. En las atribuciones finalmente aprobadas se establece que la Comisión debe interesarse en los aspectos sociales del desarrollo económico y en la relación mutua entre los factores económicos y los sociales.

En cuanto a la composición de la Comisión, los ocho países africanos sugirieron que debía preverse la posibilidad de que llegaran a ser miembros de ella los países africanos Miembros de las Naciones Unidas y otros Miembros responsables de las relaciones internacionales de Territorios de África, así como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. Sin embargo, varios miembros del Consejo opinaron que únicamente los países de África o con responsabilidades directas en África debieran formar parte de la Comisión. Después de largo debate, el Consejo decidió que podían ser miembros de la Comisión: Bélgica, España, Etiopía, Francia, Ghana, Italia, Liberia, Libia, Marruecos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Unida, Sudán, Túnez y Unión Sudafricana, así como cualquier Estado de la región que en adelante llegase a ser Miembro de las Naciones Unidas, pero que ni la URSS ni los Estados Unidos de América debían figurar entre los miembros de la Comisión.

En cuanto a los miembros asociados, se convino en que cualquier territorio o parte o grupo de los territorios situados dentro de la esfera geográfica de actividades de la Comisión podía, previa presentación de una solicitud por el Estado Miembro responsable de sus relaciones internacionales, ser admitido por la Comisión como miembro asociado de la misma. No obstante, hubo divergencia de opiniones sobre si los miembros asociados tendrían competencia para votar en cualquier órgano auxiliar que pudiese crear la Comisión. Algunos miembros del Consejo y los ocho países africanos opinaron que los miembros asociados no deberían, por ahora, tener el derecho de voto en los órganos auxiliares de la Comisión; otros opinaron, sin embargo, que ese derecho de voto debía concederse a todos los miembros asociados. De conformidad con las atribuciones finalmente aprobadas, los representantes de los miembros asociados podrán participar en las reuniones de la Comisión, ser nombrados miembros de sus órganos auxiliares y formar parte de la Mesa de tales órganos. Después de aprobar la resolución 671 (XXV) por la que se creó la Comisión, el Consejo

decidió que la Sede de la Comisión se estableciera en Addis Abeba.

Como consecuencia de la decisión del Consejo, la Secretaría de las Naciones Unidas en la Sede inició la labor preparatoria del primer período de sesiones de la Comisión previsto para fines de 1958.

10. Derechos humanos

a) PROYECTOS DE PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

La Asamblea General, desde su noveno período de sesiones de 1954, ha venido examinando el proyecto de pacto de derechos civiles y políticos y el proyecto de pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Cada proyecto contiene un preámbulo, un artículo relativo al derecho de libre determinación, disposiciones generales, artículos de fondo, medidas de aplicación y cláusulas finales.

La Tercera Comisión ha aprobado hasta ahora el preámbulo y el artículo 1 de cada pacto, los artículos fundamentales del pacto de derechos económicos, sociales y culturales y el primero de los artículos de fondo del pacto de derechos civiles y políticos.

b) INFORMES PERIÓDICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Con arreglo al nuevo procedimiento de informes periódicos sobre la evolución general y los progresos realizados en materia de derechos humanos y las medidas adoptadas para proteger la libertad humana, el Secretario General presentó a la Comisión de Derechos Humanos en su 14° período de sesiones un resumen, por materias, de los 31 informes de los Gobiernos, junto con los informes recibidos de los organismos especializados, que abarcaban los años 1954 a 1956. La Comisión debatió en general los informes y decidió examinarlos a fondo en su próximo período de sesiones. Elogió la labor del Secretario General y de los organismos especializados en relación con los informes, expresó la esperanza de que los gobiernos que todavía no lo habían hecho enviasen informes antes del 15° período de sesiones de la Comisión, y pidió al Secretario General que, en consulta con los organismos especializados, presentara sugerencias para un plan más detallado que sirviese de guía a los gobiernos en la preparación de sus futuros informes trienales.

c) ESTUDIO DEL DERECHO DE TODO INDIVIDUO A NO SER ARBITRARIAMENTE DETENIDO, PRESO NI DESTERRADO

En su 12° período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos nombró un comité para que preparara un estudio sobre el derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

El Comité presentó a la Comisión, en su 14° período de sesiones, un informe sobre la labor realizada. Según se indicaba en este informe, el Comité había decidido preparar, con la ayuda de la Secretaría, monografías sobre la situación en cuanto a este derecho en todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de los organismos especializados; como norma, no utilizaba en su informe ninguna información ni documentación respecto de la cual el gobierno interesado no hubiese tenido la oportunidad de formular sus comentarios. En el informe figuraban comentarios explicativos, de carácter provisional, sobre las expresiones "detención", "prisión", "destierro" y "arbitrariamente", como así

mismo un plan provisional de las monografías por países y del informe definitivo del Comité.

d) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Durante el año que se examina, el Secretario General ha organizado tres seminarios regionales con arreglo al programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos: 1) un seminario sobre deberes cívicos y mayor participación de la mujer asiática en la vida pública, celebrado en Bangkok, Tailandia, en agosto de 1957; 2) un seminario sobre la protección de los derechos humanos en el derecho y el procedimiento penales, celebrado en Baguio, Filipinas, en febrero de 1958; y 3) un seminario sobre la protección de los derechos humanos en el derecho y el procedimiento penales, celebrado en Santiago, Chile, en mayo de 1958.

A petición de la Comisión de Derechos Humanos, el Secretario General presentó un plan de actividades para 1959. En este plan, sugirió que podrían organizarse tres seminarios: 1) un seminario sobre la condición jurídica y social de la mujer; 2) un seminario sobre la protección de los derechos humanos en el derecho y el procedimiento penales; y 3) un tercer seminario sobre un tema no determinado. Asimismo, insinuó la conveniencia de adoptar alguna disposición para servicios de asesoramiento de expertos y para becas de estudios y de ampliación de estudios.

e) DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA ADOPCIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

En el año 1958 se cumple el décimo aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social adoptó el 24 de julio de 1957 la resolución 651 B (XXIV), en que se invitaba a los Estados Miembros, organismos especializados, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a que participasen en la celebración del aniversario. Se pidió al Secretario General que, en colaboración con un comité de seis miembros y en consulta con los organismos especializados, tomara las disposiciones necesarias para el aniversario.

El Comité presentó un informe al Consejo en el que se enuncian los diversos preparativos y actividades para la celebración. Recomendaba que la Asamblea General dedicase una sesión plenaria especial a celebrar el aniversario el 10 de diciembre de 1958; y que el Consejo: 1) instara a los Estados Miembros a que celebraran el aniversario en sus propios países y promovieran el respeto de los derechos enunciados en ella "a fin de que fuese posible alcanzar universalmente "este ideal común", y 2) pidiera a las organizaciones no gubernamentales que organizaran conferencias y debates sobre los derechos humanos a fin de que "los hombres y mujeres de todo el mundo pudieran disfrutar mejor de sus derechos y todos aprendieran a respetar los derechos de los demás".

f) PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIONES Y PROTECCIÓN A LAS MINORÍAS

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en su décimo período de sesiones celebrado en enero-febrero de 1958, concentró su atención sobre los problemas relativos a la manera

de eliminar la discriminación en diversas esferas. La Comisión de Derechos Humanos, en su 11.º período de sesiones, examinó, sin completar su estudio, las recomendaciones relativas a la discriminación en materia de educación formuladas por la Subcomisión en su noveno período de sesiones.

La labor de la Subcomisión se basaba principalmente en un primer proyecto de estudio sobre la discriminación en materia de libertad de religión y de prácticas religiosas, presentado por el Sr. Arcot Krishnaswami; y en un informe provisional sobre el estudio de discriminación en materia de derechos políticos, preparado por el Sr. Hernán Santa Cruz. La Subcomisión expresó la esperanza de que el estudio de la discriminación en materia de libertad de religión y de prácticas religiosas estuviese terminado en fecha oportuna para que pudiera examinarlo en su 11.º período de sesiones. Asimismo, en ese período de sesiones esperaba recibir un proyecto de informe sobre el estudio de la discriminación en materia de derechos políticos.

La Subcomisión examinó igualmente un informe sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, preparado por la Oficina Internacional del Trabajo para la 42a. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 1958. Este informe, junto con otro nuevo sobre la misma materia, fué también examinado por la Comisión de Derechos Humanos. Los informes contenían: 1) el texto de la propuesta convención sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación; 2) el texto de la recomendación propuesta sobre esta materia; y 3) las observaciones acerca de estos textos transmitidas por los Gobiernos. Tanto la Subcomisión como la Comisión expresaron a la Organización Internacional del Trabajo su reconocimiento por la labor realizada en esta materia, y sus observaciones fueron enviadas a la OIT.

La Subcomisión pidió a uno de sus miembros que preparase para el 11.º período de sesiones de la Subcomisión un estudio preliminar sobre la discriminación en materia del derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, según se enuncia en el párrafo 2 del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Después de examinar un informe del Secretario acerca de los resultados de sus consultas con organizaciones no gubernamentales sobre la celebración de una segunda conferencia de organizaciones no gubernamentales interesadas en la supresión de los prejuicios y las discriminaciones, la Subcomisión unánimemente propuso que la conferencia se celebrase en 1959, y la Comisión de Derechos Humanos por unanimidad aprobó esta opinión. Por lo tanto, el Secretario General recomendó al Consejo Económico y Social que se le autorizara para convocar la conferencia en Ginebra durante una semana, del 22 al 26 de junio de 1959.

g) LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Dos problemas principales relativos a la libertad de información han ocupado la atención de las Naciones Unidas: 1) la libertad de información como derecho humano y las restricciones legítimas al ejercicio de la misma; y 2) el desarrollo de los medios de información en los países insuficientemente desarrollados.

Con respecto al primer problema, la Asamblea General ha venido examinando un proyecto de convención sobre libertad de información. En su resolución 1189 A (XII) del 11 de diciembre de 1957, la Asamblea Ge-

neral invitaba a los Estados Miembros a presentar sus opiniones y sugerencias acerca del proyecto de convención y a preparar una enunciación de las disposiciones legales de cada país relacionadas con la libertad de información.

La Comisión de Derechos Humanos, en su 14º período de sesiones, examinó un informe del Comité de Libertad de Información. La Comisión resolvió pedir al Consejo Económico y Social y a los organismos especializados que se sirvieran iniciar medidas a fin de ayudar a los países insuficientemente desarrollados a crear medios adecuados de información. Otras materias contenidas en el informe del Comité serían examinadas en el próximo período de sesiones de la Comisión.

Quince Estados partes en la Convención Internacional relativa al empleo de la Radiodifusión en Beneficio de la Paz (Ginebra, 1936) han expresado hasta ahora su asentimiento al traspaso a las Naciones Unidas de las funciones atribuidas a la Sociedad de las Naciones en virtud de la Convención.

h) ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS

En su 14º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos propuso al Consejo Económico y Social que: 1) la edición del *Anuario* se limitara a 330 páginas; 2) las informaciones sobre derechos o grupos de derechos específicos se publicaran en forma de un volumen suplementario; 3) el *Anuario* contuviera los textos de las constituciones, las leyes y decretos, decisiones judiciales, convenciones y acuerdos internacionales relativos a los derechos humanos, o extractos de los mismos; y 4) en los informes trienales sobre derechos humanos, los Gobiernos evaluaran e interpretarían los acontecimientos, indicaran las dificultades con que habían tropezado y examinaran los métodos que resultasen de especial utilidad y se remitieran, cuando fuere conveniente, a la información suministrada al Anuario.

El *Anuario de Derechos Humanos* para 1956, que debe completarse en 1958, es el undécimo volumen de esta serie.

i) REPATRIACIÓN DE PRISIONEROS DE GUERRA

La Comisión Especial para los Prisioneros de Guerra celebró su séptimo período de sesiones en Ginebra en septiembre de 1957. Preparó un informe detallado sobre la marcha de los trabajos en materia de obtención de informes y repatriación de prisioneros de guerra a partir de 1950. Expuso que hasta ahora habían sido repatriados 28.535 prisioneros alemanes (y 3.088 civiles), 69 italianos y 33.778 nacionales japoneses.

Los Gobiernos de Italia, del Japón y de la República Federal de Alemania informaron a la Comisión que aun quedaban varios miles de prisioneros de guerra y civiles sin repatriar o respecto de cuya situación no se había obtenido información alguna. La Comisión instó a los Gobiernos interesados a resolver la cuestión de los prisioneros de guerra con espíritu puramente humanitario, directamente, o con la ayuda de los buenos oficios de las sociedades de la Cruz Roja.

j) OTROS ASUNTOS

De conformidad con la resolución 75 (V), tal como fué enmendada, aprobada por el Consejo Económico y Social el 5 de agosto de 1947, el Secretario General presentó a la Comisión de Derechos Humanos en su

14º período de sesiones una lista pública de cuatro comunicaciones y una lista confidencial de 6.930 comunicaciones. Señaló a la atención de la Comisión 31 respuestas de los Estados Miembros relativas a 57 comunicaciones. Asimismo presentó listas análogas de comunicaciones a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 12º período de sesiones y a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su décimo período de sesiones. La Comisión de Derechos Humanos designó un comité para que estudiase la cuestión de las comunicaciones a fin de establecer un procedimiento que permitiera promover más eficazmente la observancia de los derechos humanos.

Veintiuna comunicaciones relativas al trabajo forzoso y dos denuncias referentes a infracciones de los derechos sindicales, fueron remitidas a la OIT.

El Secretario General transmitió al Gobierno de la República Federal de Alemania antecedentes relativos a 22 personas que afirmaban haber sido víctimas de supuestos experimentos científicos en campos de concentración nazis. Hasta junio de 1958, se habían señalado a la atención de la República Federal de Alemania 552 casos. El Secretario General, además distribuyó a título informativo en el 25º período de sesiones del Consejo Económico y Social un informe del Gobierno de la República Federal de Alemania en que se daba cuenta de las medidas adoptadas con respecto a este asunto.

11. Condición jurídica y social de la mujer

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su 12º período de sesiones, adoptó un programa de trabajo que comprendía varios nuevos proyectos, especialmente un estudio sobre el acceso de la mujer a los servicios y funciones públicos basado en información reciente que había de obtenerse de los gobiernos y organizaciones no gubernamentales, un proyecto de convención sobre la edad para contraer matrimonio, el libre consentimiento de los contrayentes como condición del matrimonio y el registro obligatorio de los matrimonios, así como una encuesta emprendida por la Organización Mundial de la Salud sobre ciertas prácticas rituales a que se somete a las muchachas.

a) DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER

Durante el año se prepararon tres informes relativos a los derechos políticos de la mujer. El memorándum anual del Secretario General sobre las constituciones, leyes electorales y otros instrumentos legales referentes a los derechos políticos de la mujer, fué preparado para el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General. Asimismo, se elaboraron informes suplementarios relativos a la condición jurídica y social de la mujer en los territorios en fideicomiso y en los territorios no autónomos.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer decidió poner al día su estudio sobre el acceso de la mujer a las funciones y los cargos públicos y al desempeño de estos cargos y funciones, e invitó a los gobiernos de los Estados Miembros y a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas a que transmitieran al Secretario General los datos complementarios para este fin.

b) NACIONALIDAD DE LA MUJER CASADA

La Comisión estudió un memorándum preparado por el Secretario General para el 12º período de sesiones

de ésta, que contenía información sobre los recientes cambios legislativos que afectaban a la nacionalidad de la mujer casada, y un cuadro complementario del efecto del matrimonio en la nacionalidad de la mujer.

c) CONDICIÓN DE LA MUJER EN EL DERECHO PRIVADO

El Secretario General preparó para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, a base de la información actualmente disponible, un informe sobre el consentimiento en el matrimonio y la edad mínima para contraerlo, que incluía un cuadro de la edad mínima para contraer matrimonio en 110 países y territorios.

Algunos miembros de la Comisión expresaron su preocupación por la costumbre de celebrar matrimonios entre niños, existente en ciertas regiones del mundo, así como ante el hecho de que el libre consentimiento de ambos contrayentes no se exigía universalmente como condición para la validez del matrimonio. La Comisión pidió al Secretario General que redactase para el 14º período de sesiones de la Comisión un nuevo informe, basado en las informaciones recibidas de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas, sobre el consentimiento en el matrimonio y los requisitos en cuanto a edad y registro del matrimonio. Asimismo, le pidió que preparase un proyecto de convención que fijara la edad mínima necesaria para poder contraer matrimonio, impusiera como condición del matrimonio el libre consentimiento de los contrayentes e hiciera obligatorio el registro de los matrimonios.

La Comisión exteriorizó su intensa preocupación por la persistencia en algunas regiones del mundo de prácticas rituales que repercutían en la integridad física de las jóvenes. Solicitó del Consejo que pidiese a la OMS que realizara una encuesta sobre estas prácticas y comunicara sus resultados a la Comisión en 1959.

La Comisión manifestó además su satisfacción por la publicación del folleto *Legal Status of Married Women*, preparado por el Secretario General.

d) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, RELACIONADOS CON LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

La Comisión tuvo ante sí dos informes preparados por el Secretario General, uno sobre los programas de asistencia técnica relacionados con la condición jurídica y social de la mujer, y el otro sobre los servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos. Asimismo, estudió el informe del seminario reunido en Bangkok durante agosto de 1957 sobre los deberes cívicos de la mujer asiática y su mayor participación en la vida pública (véase también *Servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos, supra*).

e) POSIBILIDADES DE INSTRUCCIÓN PARA LA MUJER

La Comisión examinó dos informes preparados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, referentes a las posibilidades de enseñanza superior para la mujer, y a las actividades de especial interés para la mujer realizadas por esta Organización en 1957. Además, los miembros de la Comisión recibieron varias publicaciones y una nota de la UNESCO relativa a las posibilidades de enseñanza secundaria para la mujer.

f) PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA

El Secretario General preparó para el 12º período de sesiones de la Comisión un informe sobre las trabajadoras, inclusive las madres trabajadoras con obligaciones familiares, y otro informe sobre la edad de jubilación y el derecho a pensión. Además, la Comisión examinó dos informes preparados por la Oficina Internacional del Trabajo, uno sobre situación de las trabajadoras con responsabilidades familiares y el otro sobre el derecho al descanso y el derecho a la seguridad material en caso de vejez, enfermedad o invalidez.

La Comisión pidió al Consejo que: 1) señalara a la atención de los Estados Miembros las posibilidades que existían de utilizar la asistencia que pudieren prestar los organismos especializados para mejorar las condiciones de las trabajadoras, inclusive las madres trabajadoras, con obligaciones familiares; 2) rogara a los organismos especializados que examinasen favorablemente todas las solicitudes de asistencia que recibieran en relación con esto, y que informaran a la Comisión acerca de los servicios así prestados; y 3) subrayara el interés del estudio que realizará el Centro Internacional de la Infancia sobre las casas cunas y las guarderías infantiles. Con respecto a la edad de jubilación y el derecho a pensión, la Comisión pidió al Consejo que instase a las organizaciones no gubernamentales a que continuaran sus esfuerzos a favor de la igualdad de derechos de la mujer y a que recomendara a los Estados Miembros que facilitaran la igualdad de trato a las trabajadoras en este respecto.

g) SALARIO IGUAL POR TRABAJO IGUAL

La Comisión examinó un proyecto de folleto sobre salario igual por trabajo igual preparado por el Secretario General en consulta con la Oficina Internacional del Trabajo. Además, recibió un informe preparado por este organismo sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, que contenía antecedentes sobre la aplicación del Convenio No. 100 y de la Recomendación No. 90 de la OIT entre los que se indicaba que 24 Estados habían ratificado el Convenio.

La Comisión pidió al Secretario General que preparara, en consulta con la Oficina Internacional del Trabajo, para el próximo período de sesiones de la Comisión, un texto revisado del proyecto de folleto habida cuenta de los debates de la Comisión y de los comentarios escritos dirigidos por sus miembros a ambas Secretarías antes del 31 de julio de 1958.

h) OTRAS CUESTIONES REFERENTES A LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

La Comisión examinó la participación de la mujer en los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas a base de un informe preparado por el Secretario General. Se expresó inquietud ante el hecho de que el número de expertas y titulares de becas continuaba siendo relativamente bajo y que dichas asignaciones tendían a concentrarse demasiado en campos que tradicionalmente se consideraban propios de la mujer.

Por último, examinó la cuestión de la participación de la mujer en la labor de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. Se señaló a la atención la importancia de la participación de la mujer no sólo

en los empleos en las secretarías de las organizaciones internacionales sino también en las delegaciones de los Gobiernos en la Asamblea General y en otros órganos de las Naciones Unidas.

12. Fiscalización internacional de estupefacientes

La campaña internacional contra la toxicomanía y problemas conexos (que está entrando en su 50° año pues empezó en 1909 con la Comisión del Opio, de Shanghai) se ha caracterizado por dos hechos importantes: uno funcional y el otro constitucional. La asistencia técnica, que ha demostrado su valor en tantos otros campos, se ha incorporado también a esta campaña y ya ha llegado a ser un elemento eficaz, cuya contribución es cada vez más solicitada por los gobiernos en su empeño por eliminar la toxicomanía y los males que la acompañan. En segundo lugar, la Comisión de Estupefacientes terminó este año el examen del proyecto de Convención Unica sobre Estupefacientes, de modo que la codificación del derecho de los tratados relativos a la fiscalización internacional de estupefacientes — actualmente disperso en nueve tratados distintos, concertados a lo largo de un período de más de 40 años — está ahora más próxima a terminarse.

a) ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Como en otros campos, la asistencia técnica para resolver los problemas de los estupefacientes se ha dirigido casi exclusivamente a los países insuficientemente desarrollados, en particular a los que tienen gran número de toxicómanos, que algunas veces suman millones, donde ese vicio constituye un problema social que requiere urgente solución. Afghanistan, Irán y Tailandia ya reciben o están a punto de recibir ayuda de ese tipo y ciertas resoluciones del Consejo Económico y Social han preparado el camino para que se preste una asistencia similar a la India, Marruecos y otros países.

En los países insuficientemente desarrollados se reconoce cada vez más la importancia que puede tener en el desarrollo económico y social general rescatar a grandes sectores de la población del vicio del opio, la cannabis y los estupefacientes manufacturados. El caso del Irán tal vez sea típico. Ese país era, en orden de importancia, el tercer productor de opio lícito para los mercados mundiales, y el ingreso en efectivo obtenido con ese opio era importante para los agricultores que lo cultivaban y para el país en general. Sin embargo, grandes cantidades de opio iban también a parar a manos de los toxicómanos de Irán y del extranjero a través del tráfico ilícito. En 1955, el Gobierno del Irán promulgó una ley que prohibió totalmente la producción del opio y movilizó recursos para ayudar a los cultivadores de la adormidera, para curar a los opiomanos y, al mismo tiempo, para aplicar la ley suprimiendo el cultivo y el tráfico ilícitos. En la ejecución de este programa de largo alcance, el Gobierno contó con la ayuda de la Administración de Asistencia Técnica, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud.

En mayo de 1958, el representante del Irán informó a la Comisión de Estupefacientes sobre los progresos realizados. Por ejemplo, el opio costaba 40 veces más

que en 1955, y muchos toxicómanos se habían librado del vicio sin tratamiento médico; además habían sido hospitalizados 65.000 casos más graves. Se progresaba en la eliminación del cultivo y el tráfico ilícitos y se había llevado a cabo una amplia campaña de propaganda para explicar las razones de la prohibición y las ventajas que produciría.

A fines de 1957, el Gobierno de Afganistán también promulgó una ley que prohibió la producción de opio, y en marzo y abril de 1958 se envió al país una misión investigadora para que estudiase en qué forma podía emplearse la asistencia técnica para ayudar a Afganistán a poner en práctica esa política.

Pese a un comienzo favorable, la asistencia técnica en materia de estupefacientes se ve entorpecida por un factor que ha limitado hasta ahora su alcance. Los problemas relativos a los estupefacientes rara vez terminan en las fronteras nacionales: los estupefacientes que se producen en un país pueden estar destinados principalmente a los toxicómanos de países vecinos y hasta de otras partes del mundo. Por lo tanto, algunas veces, la asistencia técnica puede ser más beneficiosa para la comunidad internacional en conjunto que para el país que la recibe. El Consejo Económico y Social examinará este problema en su 26° período de sesiones.

b) PROYECTO DE CONVENCIÓN UNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES

La Comisión de Estupefacientes ha transmitido ahora al Consejo Económico y Social el proyecto de la propuesta Convención Unica sobre Estupefacientes, en cuya preparación ha trabajado durante nueve años. De conformidad con las instrucciones iniciales del Consejo, el proyecto es principalmente una codificación del derecho de los tratados multilaterales sobre estupefacientes ya existentes; no obstante, también amplía el alcance de las disposiciones actuales de las maneras siguientes: 1) extendiendo la fiscalización internacional plena a ciertas materias primas utilizadas en la fabricación de estupefacientes, como el opio y la hoja de coca, que son origen de estupefacientes extensamente usados (morfina, codeína y cocaína); 2) declarando ilícitos, después de determinado período de transición, ciertos usos de los estupefacientes, como el hábito de fumar opio, la masticación de la hoja de coca, fumar marihuana o cannabis; y 3) reduciendo de tres a dos el número de los órganos internacionales de fiscalización, pues los actuales Comité Central Permanente del Opio (CCPO) y el Órgano de Fiscalización (Estupefacientes) (OFE) serían reemplazados por un órgano único. Con arreglo al proyecto, este nuevo órgano tendría una secretaría separada, como el actual Comité Central Permanente del Opio (CCPO).

Mientras el CCPO y el OFE desempeñan, conforme a los instrumentos actuales, funciones específicas relacionadas principalmente con las medidas de fiscalización cuantitativa, el proyecto establece que el nuevo Comité desempeñará además ciertas funciones de fiscalización general, y extiende sus funciones en otros aspectos.

c) ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN CONFORME A LOS INSTRUMENTOS ACTUALES

Mientras adelantan los preparativos para aprobar una Convención Unica sobre Estupefacientes que reemplaza a los nueve instrumentos actuales, sigue aumentando el número de los gobiernos que se adhieran a

éstos. Por supuesto el objetivo que se persigue es que la participación en la fiscalización internacional de estupefacientes sea universal. El grado que ha alcanzado hasta ahora esa participación se refleja en el hecho de que 77 (hace un año eran 76) de los 81 Estados Miembros de las Naciones Unidas están obligados por uno o más de esos tratados. En lo que se refiere a los más recientes, el número de los Estados participantes en el Protocolo de París de 1948 (que sometió a fiscalización a los estupefacientes sintéticos) aumentó de 46 a 49 Estados Miembros; y los participantes en el Protocolo de 1953 (relativo al opio y al cultivo de la adormidera) pasó de 22 a 31 Estados Miembros. Este último instrumento entrará en vigor cuando se adhieran tres de los siete Estados principales productores de opio.

Con arreglo a los tratados, los gobiernos están obligados a enviar al Secretario General un informe anual con datos completos sobre la forma como cumplen sus obligaciones, con los cuales se contesta un cuestionario preparado por la Comisión de Estupefacientes. El 31 de diciembre de 1957, 62 Estados y 72 territorios habían enviado su informe anual correspondiente a 1956, y la información contenida en ellos figura en el *Resumen de los informes anuales de los gobiernos para 1956*.

Las disposiciones de los tratados relativas a la fiscalización del abastecimiento lícito de estupefacientes para fines médicos y científicos, se siguen aplicando satisfactoriamente.

No obstante, el tráfico ilícito de estupefacientes continúa siendo un problema muy grave y, en muchas partes del mundo donde la toxicomanía está más extendida, es casi el único conducto por el cual los toxicómanos reciben las drogas. En consecuencia, se sigue dedicando gran atención a los medios y métodos para combatir el tráfico ilícito y la Comisión de Estupefacientes tiene un comité permanente que se ocupa de este problema.

Durante el último año sobre el que se dispone de información, se recibieron y transmitieron a los gobiernos 530 informes correspondientes a 1.705 decomisos, así como listas de personas, y barcos mercantes complicados en el tráfico ilícito, y de los lugares donde éste se realizó. Los informes de carácter general recibidos sobre dicho tráfico procedieron de 105 Estados y territorios. Continuaron el intercambio de informaciones y las consultas previstas en los arreglos permanentes concertados con la Organización Internacional de Policía Criminal. También prosiguió la cooperación con la Oficina Permanente de Lucha contra la Toxicomanía de la Liga de Estados Arabes.

El Secretario General preparó una reseña analítica del tráfico ilícito de estupefacientes en 1957. El opio y los opiáceos preponderaron en alto grado en el tráfico interno e internacional. Al parecer aumentó el uso de la diacetilmorfina. No se advirtió ninguna disminución en el extenso tráfico de la cannabis. Según los informes sobre decomisos de cocaína este tráfico es pequeño pero persistente. Continuaron los decomisos de drogas sintéticas; la cantidad total fué pequeña. Regionalmente, los mayores decomisos de opio, opiáceos y cannabis siguieron efectuándose en el Lejano Oriente, y en el Cercano Oriente y en Oriente Medio. En virtud de esto, la Comisión recomendó al Consejo el envío de una misión de estudio al Oriente Medio.

Con este problema está vinculado estrechamente el proyecto especial de investigación sobre el opio ten-

diente a hallar procedimientos para determinar, mediante una combinación de pruebas químicas y físicas, el origen geográfico del opio que se decomisa en el tráfico ilícito. En enero de 1958, un comité de expertos examinó el progreso que se había hecho en esta investigación y llegó unánimemente a la conclusión de que ya se podían aplicar prácticamente esos procedimientos, aunque en muchos casos las conclusiones tendrían aún que ser consideradas provisionales. En lo futuro, la investigación y la aplicación práctica se harán simultáneamente en los laboratorios nacionales que participan en este programa y en el Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas.

13. Asuntos sociales

a) INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES SOCIALES

Durante el período que se examina se prestó constante atención a los aspectos sociales del desarrollo económico, a la interdependencia que existe entre el desarrollo económico y social y los factores sociales que acompañan a la industrialización y la urbanización.

De conformidad con las recomendaciones del Consejo Económico y Social, se ha prestado creciente atención al equilibrio e integración del desarrollo económico y social. Para ello se ha emprendido un examen de la literatura existente sobre esta materia, como medida preliminar para estudiar más detenidamente la experiencia adquirida por los gobiernos de determinados países en la distribución de recursos entre los sectores económicos y sociales y entre los diversos tipos de programas de carácter social. Se han hecho preparativos para un seminario sobre los aspectos sociales del desarrollo económico que ha de celebrarse en la América Latina en 1960, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización de los Estados Americanos. En otros aspectos del programa social de las Naciones Unidas, tales como la planificación regional y el desarrollo de la comunidad, se ha puesto de manifiesto la tendencia general a dar un carácter equilibrado al programa.

Se ha dado mayor importancia a las normas y los programas destinados a resolver los problemas de los pueblos que se hallan en un período de evolución y transición rápidas, especialmente por medio de la urbanización, dedicándose especial atención a los problemas que plantea esta última en el campo. En el segundo *Estudio internacional de los programas de desarrollo social*, que se ha de publicar a fines de 1958, ocuparán un lugar destacado los programas y medidas que se han adoptado para resolver esos problemas. Servirá de suplemento al estudio sobre urbanización que figura en la parte II del *Informe sobre la situación social en el mundo*. Se han hecho preparativos para celebrar en diciembre de 1958 un seminario sobre urbanización en la América Latina, con la participación de la UNESCO; también se proyecta un seminario análogo para la región del Oriente Medio a principios de 1960.

Se ha seguido destacando la importancia de mejorar la calidad de los datos disponibles para realizar un estudio sobre la situación social en el mundo. En virtud de una petición hecha por el Consejo Económico y Social en su 24º período de sesiones (resolución 663 E (XXIV) del 31 de julio de 1957), se ha emprendido un programa para mejorar la información disponible mediante contactos con los centros locales de investiga-

ción y nuevos trabajos sobre la medición del nivel de vida. Se está examinando la posibilidad de utilizar estudios sobre formas de vida familiar para mejorar la información sobre las condiciones sociales. Al mismo tiempo, se ha iniciado un examen sobre el alcance y organización de los futuros informes sobre la situación social en el mundo, las materias en que los datos son más escasos y los tipos de datos y análisis que deben incluirse en esos informes. Continuará la labor del Comité de Expertos para la Definición y Medición Internacional del Nivel de Vida, que se reunió en 1953, y se prestará especial atención a la medición de los factores inmateriales del nivel de vida.

b) POBLACIÓN

Ya se ha reconocido en repetidas ocasiones el efecto que ejercen los problemas demográficos sobre las posibilidades de desarrollo económico y social en diversas partes del mundo. A medida que se van conociendo los resultados de los primeros planes de desarrollo económico y social comprendidos en la posguerra en los diversos países insuficientemente desarrollados, se va poniendo de manifiesto que, pese a los notables progresos materiales alcanzados, se han producido pocos cambios en el nivel de vida de esos países. En general, el aumento de la producción apenas ha bastado para cubrir las necesidades de una población creciente al nivel antes existente.

Los centros regionales demográficos de formación profesional y de investigación para Asia y el Lejano Oriente en Bombay, y para América Latina en Santiago de Chile, iniciaron el primer año de instrucción en los métodos para estudios demográficos. Se espera que los estudiantes constituyan, al regresar a sus países, el núcleo que permita formar grupos nacionales de expertos demográficos. En el 14º período de sesiones de la CEALO (1958) se presentó un informe general sobre los problemas demográficos en Asia y se propuso que esta cuestión se incluyera como tema especial en el programa del período de sesiones de la Comisión en 1959. Por falta de documentación sigue siendo imposible realizar un estudio general semejante para el Oriente Medio, región donde los trabajos demográficos se hallan todavía en una fase inicial. En la América Latina, esos trabajos se han concentrado sobre todo en problemas de mano de obra y urbanización.

Se ha reconocido nuevamente la necesidad de realizar investigaciones especiales, adaptadas a las diversas condiciones locales, tales como estudios demográficos experimentales, emprendidos por la Secretaría en colaboración con los gobiernos interesados. A principios de 1951 se comenzó un estudio de esta clase en el Estado de Misore, India; últimamente el Gobierno de este país ha hecho una importante aportación a los gastos de imprenta del informe sobre ese estudio. En 1958, se ha emprendido, en colaboración con el Gobierno de Filipinas, un estudio experimental de la mano de obra, en relación con las características de la población y los movimientos migratorios en ese país.

En virtud de la resolución 642 B (XXIII) del Consejo aprobada el 25 de abril de 1957, relativa a la necesidad de realizar un estudio más atento de los problemas demográficos en Africa, un miembro de la Secretaría realizó últimamente un viaje a Africa para estudiar las necesidades de la región y las posibilidades de efectuar una investigación demográfica en ella, con la ayuda de las Naciones Unidas.

En la Sede prosigue el trabajo recomendado por la Comisión de Población y el Consejo. Se ha publicado un diccionario demográfico plurilingüe; ya han aparecido las versiones inglesa, francesa y española y están preparándose las traducciones en alemán e italiano. Se ha publicado un estudio titulado *Recent Trends in Fertility in Industrialized Countries* (Recientes tendencias de fertilidad en los países industrializados) y se está preparando otro estudio en el que se recopila toda la información disponible sobre las características económicas de los migrantes internacionales. Atendiendo a las frecuentes peticiones, que se reciben de organismos internacionales y empresas privadas, se ha publicado un informe titulado *El Futuro Crecimiento de la Población Mundial*, en el que se exponen las tendencias previstas de la población hasta fines de siglo para el mundo en general y para sus regiones principales.

c) DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

El desarrollo de la comunidad, como programa en el que el esfuerzo combinado del Gobierno y de la población se encauza hacia el mejoramiento del nivel de vida, ha merecido la atención de un número creciente de países. Además, los que ya están llevando a cabo esos programas han tratado de revisar, ampliar y seguir desarrollando sus actividades. Por ejemplo, durante el período que se examina, los Gobiernos de Camboja, Costa Rica, Guatemala, Liberia, Somalia bajo administración italiana y Viet-Nam se han mostrado interesados en esta materia al solicitar el asesoramiento de expertos y tomar las medidas necesarias para cooperar en algunas actividades de desarrollo de la comunidad con la ayuda de las Naciones Unidas.

Han seguido aplicándose los acuerdos adoptados por el Comité Administrativo de Coordinación sobre el concepto de desarrollo de la comunidad, sus relaciones con el desarrollo económico y social integrado y equilibrado y la función de los diferentes servicios en esta materia. Como esfuerzo especial para dar cumplimiento a estos acuerdos se ha atendido a la petición de asistencia técnica en desarrollo de la comunidad hecha por el Gobierno de Marruecos. Durante el período que se examina se celebraron tres nuevas reuniones dentro de una serie de conferencias regionales oficiosas de los diversos organismos interesados.

Ha proseguido la labor de investigación sobre los factores que influyen en la planificación y aplicación de programas nacionales de desarrollo de la comunidad, iniciándose un estudio sobre los aspectos de administración pública en esta esfera. En una reunión mixta celebrada en abril se examinó el primer proyecto de este estudio y se propusieron nuevas actividades mediante la organización de un curso práctico para participantes nacionales e internacionales.

Se ha iniciado un estudio sobre el papel del desarrollo de la comunidad en el proceso de industrialización; ya están en curso algunos estudios particulares en la India y se están proyectando otros para China (Taiwán) y el Pakistán y otros países de carácter representativo.

Para hacer frente a la demanda creciente de documentación relativa a las actividades de formación profesional, se ha publicado una *Colección de estudio: Formación de personal para el desarrollo de la comunidad*. Dentro de la serie de publicaciones de las Naciones Unidas sobre organización y desarrollo de la comunidad pueden citarse, además, las siguientes: *Sur-*

vey before Development in Thai Villages y Report of the Eastern Mediterranean Study Tour of Community Development.

En su duodécimo período de sesiones (resolución 1162 (XII) del 26 de noviembre de 1957) la Asamblea General recomendó la plena participación de la mujer en los programas de desarrollo de la comunidad. Dos mujeres fueron enviadas, en calidad de expertas, a Bolivia, como parte de la misión andina, y una ha sido adscrita a Afganistán; asimismo, están avanzados los preparativos para la celebración de un curso práctico sobre participación de la mujer en el desarrollo de la comunidad que se ha de celebrar en el Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes.

Funcionarios de asistencia técnica de las Naciones Unidas expertos en desarrollo de la comunidad han colaborado en la elaboración de programas de capacitación, en la preparación del material necesario y en el desarrollo de una metodología basada en su experiencia práctica. Las Naciones Unidas han seguido prestando asistencia a los centros regionales de educación fundamental creados en colaboración con la UNESCO. Los viajes de estudio también han servido de método de formación. Así, por ejemplo, cinco países de la región del Caribe participaron en un viaje de estudio mixto durante el cual se visitaron proyectos de desarrollo de la comunidad en México, Costa Rica, Jamaica y Puerto Rico; se han recibido solicitudes para participar en viajes de estudio mixtos similares en países de la América del Sur y en países y territorios de África. En vista de la importancia que la Comisión de Asuntos Sociales y el Consejo Económico y Social han atribuido a las consultas realizadas regionalmente, se ha celebrado un seminario sobre formación profesional para el desarrollo de la comunidad en la región de Asia y el Lejano Oriente en combinación con un seminario sobre formación profesional para el trabajo social.

d) VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

En virtud del programa en materia de vivienda, construcción y planificación se sigue prestando ayuda a los gobiernos asesorándoles sobre la elaboración, el financiamiento y la ejecución de programas nacionales. Se ha prestado especial atención a los problemas que afectan a los grupos de ingresos reducidos. También se prestó asistencia directa a los gobiernos para la creación de instituciones de investigación y de formación, para aumentar la productividad en las industrias de la construcción y de materiales de construcción, con miras a reducir los costos de construcción de viviendas y mejorar su calidad, así como para destacar la importancia de una política de vivienda adecuada en el conjunto del desarrollo económico y social.

Del 10 al 17 de noviembre de 1957 se celebró en San José de Costa Rica una reunión sobre financiamiento de los programas de construcción de viviendas e integración de las industrias de la construcción y de materiales de construcción en la América Central y Panamá. Durante esa reunión se examinaron y recomendaron métodos apropiados para reducir el costo de construcción de viviendas.

Se ha publicado el número 10 de la serie *Housing, Building and Planning*. Trata de la construcción de viviendas mediante la formación de sociedades sin fines de lucro y está basado en las averiguaciones y conclusiones de un seminario organizado bajo los auspicios de las Naciones Unidas y del Gobierno de Dinamarca, en colaboración con la Organización de los Estados Americanos.

Se ha hecho hincapié en la necesidad de preparar personal para la planificación práctica de los programas a fin de asegurar su continuidad. Se está estableciendo una escuela de construcción de viviendas y planificación en Ankara (Turquía) y están en curso las negociaciones para la creación de una escuela de planificación en Indonesia. El número 11 de la serie *Housing, Building and Planning* trata de la preparación del personal de planificación.

Los gobiernos están dando gran importancia a la planificación práctica especialmente en relación con los problemas de urbanización, industrialización y planes de desarrollo regional. Se han preparado varios estudios sobre un programa de industrialización solicitados por el Consejo Económico y Social (resolución 618 (XXII) del 6 de agosto de 1956) para el seminario regional asiático sobre planificación, que se celebrará en Tokio en julio de 1958 y tratará del papel de la planificación regional en el proceso general del desarrollo económico y social. Gracias a estos estudios se ha destacado la importancia de evitar o reducir los efectos sociales desfavorables de una urbanización demasiado rápida y, al mismo tiempo, de permitir que la industrialización prosiga sin que se multipliquen las zonas descuidadas y los barrios malsanos en las ciudades y centros industriales.

e) BIENESTAR SOCIAL

Planificación, organización y administración de servicios sociales

Las recientes tendencias y la rápida evolución ocurrida en el campo de los servicios sociales han planteado muchos problemas de planificación, organización y administración en los programas de servicios sociales; algunos de ellos se consignarán en el segundo *Estudio internacional de los programas de desarrollo social*. El interés que despiertan estos problemas entre los gobiernos, especialmente en los países de economía insuficientemente desarrollada, se manifiesta en el número creciente de solicitudes de asesores en bienestar social general y en la preocupación que muestran esos gobiernos por la formación profesional del personal mediante becas de ampliación de estudios y el mejoramiento o desarrollo de sus propios programas de formación profesional. Además de los estudios relacionados con algunos de estos problemas, tales como la concesión de subsidios de ayuda para el fomento de programas de bienestar social, se está preparando una serie de seminarios regionales sobre planificación, organización y administración de los servicios sociales; estos seminarios brindarán a las autoridades encargadas del bienestar social la oportunidad de intercambiar los conocimientos adquiridos y de examinar los problemas de interés común.

El tercer número de la *Revista Internacional de Servicio Social* se consagró principalmente al tema de la organización y administración de los servicios sociales.

Formación profesional para el servicio social

Durante el período que se examina, algunos gobiernos han solicitado ayuda para llevar a cabo encuestas sobre las instalaciones de formación existentes, para desarrollar los servicios de que disponen los trabajadores sociales que ya están en funciones y para organizar cursos de capacitación sobre temas de administración, planificación, formación práctica e inspección, así como sobre selección de estudiantes.

A petición del Consejo Económico y Social (resolución 390 B (XIII) del 9 de agosto de 1951), se está preparando la tercera encuesta internacional sobre información profesional para el trabajo social, la cual estará terminada a fines de 1958; versará sobre la formación profesional de trabajadores sociales profesionales y auxiliares en los diversos niveles de instrucción y sobre métodos de preparación.

En virtud del programa de asistencia técnica, se ha prestado ayuda para el desarrollo de los programas de formación profesional del personal para los servicios sociales mediante una serie de seminarios regionales celebrados durante el período de 1956 a 1958; en este último año se celebraron seminarios en Montevideo, Lahore y Atenas. Las conclusiones de estas reuniones se tendrán en cuenta para preparar la encuesta sobre formación profesional.

El cuarto número de la *Revista Internacional de Servicio Social* se ha dedicado al tema de la formación profesional para el trabajo social.

Protección a la familia y a la infancia

Las actividades de las Naciones Unidas en bienestar social han seguido destacando la importancia primordial de la familia como unidad fundamental de la sociedad y se han encaminado a la adopción de medidas y la creación de servicios destinados a mejorar el nivel de vida familiar y a atender las necesidades originadas por rápidos cambios sociales y técnicos.

Al respecto tiene especial importancia el *Informe sobre una política coordinada relativa al nivel de vida familiar*, en el que se destaca la necesidad de adoptar una política de carácter general destinada a mejorar el nivel de vida familiar, y se presta especial atención a los muchos problemas de política y administración que interesan a los países insuficientemente desarrollados, y en particular el del establecimiento de un orden de prioridades. En su 24º período de sesiones (resoluciones 663 B (XXIV)) el Consejo decidió de acuerdo con la Comisión de Asuntos Sociales, que el informe debería constituir la base para proseguir el estudio conjunto con la Organización Internacional del Trabajo y los demás organismos especializados interesados y recomendó que se prepararan ciertos informes y estudios concretos sobre planificación en materia de bienestar social. Las observaciones de los gobiernos, de las comisiones económicas regionales y de las organizaciones no gubernamentales interesadas deberán enviarse antes de que se presente recomendación alguna al Consejo en su 28º período de sesiones.

Entre los problemas planteados en el *Informe* que requieren un examen más detallado figuran los referentes a las relaciones que existen entre los servicios sociales y los demás servicios, y a los programas destinados a mejorar los niveles de vida de la familia. En vista de este *Informe* y de los debates celebrados en la Comisión de Asuntos Sociales en relación con la necesidad de establecer principios rectores para el desarrollo de programas de servicios sociales, el Consejo pidió que se convocara lo antes posible a un grupo de expertos altamente calificados en materia de servicios sociales y procedentes de países en diversas etapas de desarrollo económico, para que asesorasen sobre el alcance y el contenido de los programas nacionales de servicio social y la determinación del orden de prioridad para la ejecución de dichos programas, así como sobre la contribución particular que pueden aportar los servicios sociales a los programas relativos al desarrollo de la comunidad, a la urbanización y a la

elevación del nivel de vida de la familia. Esta reunión se celebrará a principios de 1959.

Colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

En marzo de 1958 la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó un procedimiento para reforzar y dar carácter oficial a los contactos con el UNICEF relativos a los aspectos de sus programas relacionados con el bienestar social. Ese procedimiento es sumamente importante porque el UNICEF se interesa cada vez más en este campo al facilitar ayuda destinada al desarrollo de la comunidad. Entre los otros tipos de asistencia del UNICEF que están relacionados con la protección a la familia y a la infancia figuran la asistencia en zonas suburbanas y la asistencia para la formación profesional de trabajadores polivalentes de aldea, así como de personal auxiliar o profesional de otra índole. La Junta Ejecutiva del UNICEF acordó asimismo examinar en qué forma podría el UNICEF ayudar más directamente a la infancia mediante los servicios sociales; para ello se está estudiando actualmente la manera de ayudar a los niños que viven en instituciones o que frecuentan guarderías infantiles.

Rehabilitación de los impedidos

Se ha seguido prestando especial atención a los programas prácticos de rehabilitación de los impedidos en los países de economía insuficientemente desarrollada, especialmente a la formación profesional de personal. Se crearon proyectos de demostración y capacitación en Birmania, el Brasil, Corea del Sur, Guatemala, India, Indonesia, Uganda, Venezuela y Viet-Nam; el UNICEF asignó a Indonesia, Japón y Yugoslavia créditos para la adquisición de equipo de rehabilitación; asimismo se realizaron encuestas y misiones de asesoramiento en la Argentina, Austria y Bolivia. Uno de los hechos más importantes fué la creciente participación de los organismos especializados interesados y de las organizaciones no gubernamentales, los cuales prestaron asistencia técnica en este campo, en colaboración con las Naciones Unidas y el UNICEF. Ejemplo de esta colaboración fué el seminario regional sobre rehabilitación para Asia y el Lejano Oriente celebrado en agosto y septiembre de 1957 en Solo (Indonesia).

Aspectos sociales de la migración

En agosto de 1957 se celebró en Ginebra la sexta Conferencia de las Organizaciones no Gubernamentales interesadas en las migraciones, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la OIT. En esta Conferencia se examinaron cuestiones tales como la integración de los inmigrantes, la asistencia social y el asesoramiento jurídico a los migrantes y la emigración de los físicamente impedidos. Prosiguió la colaboración con las organizaciones no gubernamentales, dedicándose especial atención a la preparación de la séptima Conferencia que deberá celebrarse en junio de 1959 en la Sede. La Secretaría siguió participando en el estudio sobre mejora de la investigación sobre migraciones emprendido en 1957 por el Grupo Técnico de Trabajo sobre Migraciones del Comité Administrativo de Coordinación.

Defensa social

En su 24º período de sesiones (resolución 663 C (XXIV) del 31 de julio de 1957) el Consejo Económico y Social aprobó las Reglas Mínimas para el

Tratamiento de los Reclusos adoptadas en 1955 por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, e hizo suyas las recomendaciones sobre selección y formación del personal penitenciario, sobre los establecimientos penales y correccionales abiertos y sobre los principios generales del trabajo penitenciario, aprobadas por el Congreso. Asimismo recomendó a los gobiernos que considerasen con ánimo favorable la adopción de dichas reglas, y que dispusieran la más amplia difusión posible de las mismas. La Secretaría envió en diciembre de 1957 una circular a todos sus corresponsales y organizaciones no gubernamentales en materia de defensa social, pidiéndoles que difundiesen esas recomendaciones. Las recomendaciones del Congreso, en particular las relativas a las Reglas Mínimas, ya han sido objeto de considerable publicidad e incluso se están aplicando. En diversas publicaciones ha aparecido casi un centenar de artículos sobre el Congreso, muchos de los cuales reproducen o resumen esas recomendaciones.

Del 25 de noviembre al 7 de diciembre de 1957 se celebró en Tokio el Segundo Seminario de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en Asia y el Lejano Oriente, al que asistieron representantes de 15 países y territorios. Este seminario examinó las cuestiones de la delincuencia de menores, de la aplicación de las recomendaciones del Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena.

En cumplimiento de la recomendación hecha por el Primer Seminario de las Naciones Unidas sobre Pre-

vención del Delito y Tratamiento del Delincuente en Asia y el Lejano Oriente, celebrado en 1954, se han llevado a cabo negociaciones con el Gobierno de Pakistán a fin de crear en 1958 un instituto regional de prevención del delito y tratamiento del delincuente en Lahore (Pakistán). Los objetivos principales de este instituto serían la formación profesional de personal y la realización de estudios e investigaciones en materia de defensa social en la región. Asimismo, en 1957 y 1958 se celebraron negociaciones semejantes con el Gobierno del Brasil para crear un instituto para la América Latina, por recomendación del Primer Seminario sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en la América Latina celebrado en 1953 con los mismos objetivos.

Del 5 al 15 de mayo de 1958 se reunió el Comité Asesor Especial de Expertos en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente para estudiar el programa y política futuros de las Naciones Unidas en el campo de la defensa social y la organización del Segundo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente que se celebrará en 1960.

Actualmente ascienden a 22 las ratificaciones y adhesiones al Convenio para Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

Durante el período que se examina se publicaron dos números de la *Revista Internacional de Policía Criminal*. Cada número se dedica, en lo posible, a temas especiales de defensa social y contiene también información legislativa seleccionada; las notas bibliográficas figuran en números alternos.

B. ASISTENCIA TECNICA

1. Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico

a) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Promesas y pagos de contribuciones

Como contribución a las actividades del Programa Ampliado de 1957, 84 gobiernos prometieron sumas por un total equivalente a 30.837.533 dólares. Tanto el número de gobiernos contribuyentes como las sumas prometidas son mayores que en lo pasado; éstas exceden en 2.000.000 de dólares de la cifra correspondiente al año anterior. Por primera vez la Junta de Asistencia Técnica pudo iniciar el ejercicio económico distribuyendo casi todos los créditos necesarios para la total ejecución del programa aprobado, con el consiguiente mejoramiento de la calidad y cantidad del servicio prestado.

Se calcula que los gastos en que incurrieron los gobiernos participantes por concepto de aportación paralela a los proyectos del Programa Ampliado, sin contar las inversiones de capital a largo plazo, fueron tres veces mayores que los gastos de ejecución de las organizaciones participantes. Además, durante 1957-1958 muchos gobiernos recibieron asistencia por valor total aproximado de 1.000.000 de dólares que debían ser reintegrados.

Las contribuciones de los gobiernos para 1958 representan un nuevo aumento y se espera que sean de 31.250.000 dólares una vez que se resuelva el problema de la proporción que deben tener ciertas contribuciones.

El pago de contribuciones, que siguió un ritmo satisfactorio en los últimos años, disminuyó considerablemente a fines de 1957. Sin embargo, la situación se remedió en gran parte a principios de 1958 y al terminar el primer trimestre de ese año se había pagado el 91,2% de las contribuciones prometidas para 1957.

Utilización de las divisas

Durante la ejecución del programa de 1957 y la planificación de las actividades de 1958, la Junta prestó particular atención a la necesidad de utilizar en la mayor medida posible todas las divisas en que se pagaban las contribuciones, como expresaba el Consejo Económico y Social en su resolución 623 B III (XXII) de 9 de agosto de 1956. Al fin de 1957 no existían saldos sin asignar que excedieran de 500.000 dólares en ninguna moneda.

Pago de gastos locales

De conformidad con las disposiciones aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 470 (XV) de 15 de abril de 1953, cada gobierno beneficiario debía contribuir con una cantidad determinada, que podía pagar en su propia moneda, a los gastos locales de subsistencia de los expertos de asistencia técnica. A base de la asistencia técnica facilitada en 1957, el total de las obligaciones en efectivo de los gobiernos beneficiarios ascendió a un equivalente de 1.912.993 dólares, además del valor del alojamiento proporcionado, que fué de un equivalente de 273.944 dólares. Al 1° de marzo de 1958 los pagos de esas obligaciones sumaron 1.639.176 dólares.

En cuanto a 1958, las obligaciones en moneda local de 83 gobiernos participantes se han fijado en un total equivalente a 2.921.465 dólares; aparte de esta suma, que representa las obligaciones en efectivo, se espera que los gobiernos proporcionarán alojamiento por un valor equivalente a 397.116 dólares.

b) ACTIVIDADES

Programa de 1957

La asistencia técnica suministrada con arreglo al Programa Ampliado en 1957 ascendió a 31.500.000 dólares, superando en 1.000.000 de dólares aproximadamente la marca mayor alcanzada en 1956. De este total, 25.800.000 corresponden a gastos directos de proyectos. Se prestó asistencia a 98 países y territorios de conformidad con el procedimiento de formulación de programas nacionales; otros 34 países participaron en proyectos regionales e interregionales, beneficiándose así también del programa.

Como en años anteriores, la asistencia proporcionada ha consistido principalmente en servicios de expertos, lo que representa las 3/4 partes de los gastos del programa. El resto consistió en becas y subsidios de estudios así como en equipo y suministros para los proyectos de capacitación, demostración e investigación.

En total se proporcionaron durante el año los servicios de 2.513 expertos procedentes de 67 países y territorios. Al mismo tiempo se concedieron 2.061 becas y subsidios para trabajadores aprendices a nacionales de 107 países y territorios; 75 países y territorios acogieron a los interesados proporcionando los medios de capacitación necesarios. Los gastos de equipo y suministros de los proyectos dependientes del Programa Ampliado sumaron 2.500.000 dólares.

La distribución de la asistencia técnica entre las distintas regiones siguió las mismas líneas generales que en años anteriores. Sin embargo se observó un apreciable aumento en los gastos totales correspondientes a África y continuó aumentando ligeramente la proporción destinada a Asia y el Lejano Oriente. Estos cambios se deben sobre todo a que se han emprendido programas de mayor importancia en los países de esas regiones que han alcanzado recientemente la independencia. Por ejemplo, en África aumentó el gasto total de los programas para Ghana, Marruecos, el Sudán y Túnez, pasando de 309.000 dólares en 1956 a 734.000 en 1957; en Asia se registró un aumento semejante con respecto a los programas de Camboja, la Federación Malaya, Laos y Viet-Nam, pasando los gastos de 591.000 dólares a 750.000.

El 11% del costo total del programa ejecutado en 1957, o sea 2.850.000 dólares, fué destinado a proyectos regionales. Todos los países y territorios que recibieron asistencia, en número de 132, participaron por lo menos en uno de esos proyectos; además, la mayoría de esos países tenían sus propios programas nacionales. Cuarenta fueron los países invitantes. Como en años anteriores, la mayor proporción corresponde a América Latina, representando casi la mitad de los gastos totales de las actividades regionales e interregionales.

Programa de 1958

En el programa para 1958, aprobado por el Comité de Asistencia Técnica (CAT), se prevé que los gastos totales a cargo de las organizaciones participantes y de la Junta de Asistencia Técnica (JAT) ascenderán a 32.000.000 de dólares, o sea aproxima-

damente la misma cuantía que en 1957. De esa suma unos 26.000.000 corresponderán a gastos directos de los proyectos.

Proyectos continuos

En vista de que el CAT expresó su inquietud porque parecía haber una elevada proporción de "proyectos continuos" en el Programa Ampliado, la JAT volvió a estudiar detenidamente esta cuestión. El estudio mostró que, de los proyectos del programa de 1958, la cuarta parte aproximadamente eran nuevos, cerca de la mitad llevaban menos de tres años en ejecución, y sólo la cuarta parte restante estaba en ejecución desde hacía más de tres años. La Junta manifestó su convencimiento de que la duración relativamente larga de esos proyectos se justificaba debido a la índole de los trabajos; los proyectos de que se trata se refieren a campañas de erradicación del paludismo, institutos de capacitación, proyectos de aprovechamiento de la tierra y de los recursos hidráulicos, y centros de productividad. La Junta no halló pruebas de que la existencia de tales proyectos imprimiera al programa en su conjunto un carácter de excesiva rigidez; al contrario, esos proyectos dan generalmente la impresión de evolución y desarrollo.

Proyectos nuevos — Asignaciones para imprevistos

Además, en 1957 y 1958 se emprendieron algunos nuevos proyectos de importancia, como parte del programa aprobado o con la ayuda de las asignaciones para imprevistos del Presidente Ejecutivo de la JAT.

El Programa Ampliado ha dado pruebas de desarrollo y flexibilidad, particularmente en los países africanos que lograron recientemente la independencia, en donde los expertos internacionales han tenido que realizar en los últimos años importantes funciones de asesoramiento, misiones de capacitación, estudios de los recursos naturales y otros proyectos básicos para el plan de desarrollo de los diversos países. En el Lejano Oriente, el nuevo proyecto del Programa Ampliado que ofrece mayor interés es el del aprovechamiento de los recursos hidráulicos en la cuenca inferior del Río Mekong, que fué costado inicialmente con asignaciones para imprevistos de la JAT en 1957. Asimismo se ha utilizado el Fondo para Imprevistos a fin de financiar los gastos de fiscalización de los estupefacientes y la introducción de nuevos cultivos destinados a reemplazar el opio.

En 1958, el Presidente Ejecutivo de la JAT podrá asignar créditos para imprevistos hasta la suma de 1.600.000 dólares.

Evaluación de los trabajos

La evaluación de la asistencia técnica proporcionada en virtud del Programa Ampliado es objeto de la mayor atención por parte de la JAT. Se trató de ello por vez primera en el informe anual de la JAT correspondiente a 1956, y el Comité expresó la opinión de que, a pesar de ciertas limitaciones, el problema había sido tratado en forma útil. La Junta, por consiguiente, emprendió una labor de evaluación más intensa de los trabajos de 1957, siguiendo las mismas líneas generales y ocupándose además por primera vez en cuestiones tales como la evaluación de los proyectos regionales a interregionales, las opiniones de los gobiernos respecto de los procedimientos seguidos en la planificación de los programas, y la incorporación de la asistencia técnica que se recibe en virtud del Programa Ampliado con la asistencia procedente de otras

fuentes. En el estudio sobre este particular figuraron 38 países beneficiarios, en comparación con 30 en 1956, exponiéndose los resultados de la encuesta en el informe anual de la JAT correspondiente a 1957.

Los estudios de evaluación mostraron que se habían logrado considerables progresos con respecto a la coordinación en los diversos departamentos gubernamentales, la coordinación de los proyectos de asistencia técnica con los planes nacionales de desarrollo, y la coordinación de estos planes con los demás programas de asistencia económica y técnica. En el estudio se llega claramente a la conclusión de que en el sistema de programas nacionales se obtienen los mejores resultados cuando se dispone de un plan de desarrollo bien trazado y de un órgano oficial que se encargue eficazmente de la labor de coordinación; de esta manera se consigue prestar una ayuda técnica internacional en consonancia con las necesidades más urgentes del país.

c) ADMINISTRACIÓN

Oficinas locales de la Junta de Asistencia Técnica

En 1957 se inauguraron oficinas locales en la Argentina, Ghana, el Perú y el Sudán y se nombró a un representante especial para Marruecos y Túnez. En 1958 se inauguró una oficina regional en El Salvador que prestará servicios a las cinco Repúblicas centro-americanas. A mediados de 1958 existían 35 oficinas locales de la JAT que atendían a 50 países y territorios en donde se ejecutaba más del 90% del programa.

Gastos administrativos y de los servicios de ejecución

En 1957 la aplicación del régimen revisado de sueldos y subsidios a los funcionarios de la Sede trajo consigo un aumento de los gastos administrativos y de ejecución respecto de los cálculos originales; la proporción de estos gastos a cargo de las organizaciones participantes aumentó ligeramente pasando de 12,4% en 1956 a 13,3% en 1957.

En noviembre de 1957, el CAT efectuó un estudio preliminar de un informe provisional de la JAT titulado "Distribución de los gastos administrativos y de los gastos de los servicios de ejecución entre los presupuestos del programa ordinario y el Programa Ampliado", y señaló que los órganos directivos de la mayoría de las organizaciones participantes no habían tenido todavía la oportunidad de presentar sus opiniones sobre la posibilidad de aplicar diversas soluciones. La JAT presentará un nuevo informe en el período de sesiones que celebrará el CAT en el verano de 1958. Por su parte la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto también informará sobre la materia.

2. Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas

Además, de su participación en el Programa Ampliado, las Naciones Unidas administran proyectos de asistencia técnica, usualmente conocidos con el nombre de "programa ordinario", a solicitud de los gobiernos y de conformidad con las siguientes resoluciones de la Asamblea General: 200 (III) de 4 de diciembre de 1948 sobre desarrollo económico; 471 (V) de 1º de diciembre de 1950 sobre bienestar social; 723 (VIII) de 23 de octubre de 1953 sobre administración pública; y 926 (X) de 14 de diciembre de 1955 sobre derechos

humanos. La administración del programa está centralizada.

Los gastos totales de las Naciones Unidas por concepto de asistencia técnica prestada a los gobiernos en 1957 ascendieron a 9.450.919 dólares, de los cuales 7.235.804 procedían del Programa Ampliado, 2.123.429 del programa ordinario suministrados en virtud de las cuatro resoluciones de la Asamblea General, y 91.686 de fondos extrapresupuestarios para asistencia a los gobiernos, a título reembolsable. El total de gastos correspondientes a 1956 fué de 9.764.114 dólares.

A pesar de ser menores los gastos totales en ese año, 800 expertos, número superior al alcanzado en cualquier año anterior, prestaron servicios durante 1957 en 68 países y territorios. En cambio disminuyó considerablemente el número de becas, pasando de 1.017 en 1956 a 782 en 1957, y asimismo se redujeron los gastos destinados a la adquisición de suministros y equipo para los proyectos, pasando de 1.151.781 dólares en 1956 a 715.356 en 1957. Con destino a los programas de administración pública, la Asamblea General concedió 300.000 dólares en 1957 y otros tantos en 1958, mientras que en 1956 esa suma fué de 145.000 dólares.

En el año 1957 se iniciaron en África numerosas actividades de asistencia técnica completamente nuevas, la mayor parte de ellas en los países que habían alcanzado recientemente la independencia. Al formular sus solicitudes, los gobiernos subrayaron especialmente la necesidad de mejorar la planificación económica. Se han enviado a Ghana expertos en economía general, administración pública, desarrollo de los recursos naturales y hacienda pública. Marruecos y Túnez han elaborado proyectos de desarrollo económico, industrialización, turismo, bienestar social y desarrollo de la comunidad. La Secretaría de las Naciones Unidas, aprovechando las facilidades que posee en la Sede, ha proporcionado medios de capacitación en el servicio en materia de planificación del desarrollo económico a un grupo de becarios procedente de Etiopía, Somalia bajo administración italiana, Liberia y Libia. Además se tiene el propósito de ofrecer estas facilidades a otros grupos.

Algunos gobiernos del Cercano Oriente que tienen que hacer frente a problemas semejantes solicitaron que, además de los servicios de los expertos de asistencia técnica que habitualmente se les asigna durante varios meses, se organicen breves visitas periódicas a esos países por parte de consultores encargados de colaborar en el examen de las cuestiones que interesan a la planificación económica. Se proporcionó asistencia técnica al Irán, de conformidad con las recomendaciones del Consejo relativas a la fiscalización del tráfico del opio.

Continuaron prestándose servicios de asistencia técnica en Europa, aunque en escala modesta debido a lo limitado de los recursos financieros.

Como en lo pasado, en la América Latina se prestó particular atención a la asistencia técnica con miras al desarrollo de los recursos naturales, del transporte y comunicaciones y de ciertas industrias. Se llevaron a cabo proyectos regionales en materia de investigación geológica e hidrológica, cartografía y capacitación con fines de desarrollo económico. Se continuó prestando apoyo al Programa de integración económica de Centroamérica. Con respecto al desarrollo de los recursos naturales, materia de particular interés para los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, se efectuaron estudios acerca de la explotación más eficaz de los depósitos carboníferos,

el mejoramiento del tratamiento metalúrgico de ciertos minerales y la preparación de encuestas geológicas en gran escala. Se proporcionaron los servicios de expertos en transporte y comunicaciones a la Argentina, Bolivia, Paraguay y las Repúblicas de la América Central. Los gobiernos han utilizado cada vez más los servicios del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, que fué establecido con la ayuda de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

En Asia y el Lejano Oriente, un grupo de expertos efectuó un estudio preliminar de los recursos de la cuenca inferior del Río Mekong. A fin de coordinar las actividades relativas a este proyecto y cooperar estrechamente con la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, se formó un comité integrado por representantes de Camboja, Laos, Tailandia y Viet-Nam. En esa región, en general, continúa prestándose particular atención a los estudios que tienen por objeto la evaluación y desarrollo de los recursos naturales y la asistencia que se debe prestar para la ejecución de los trabajos prácticos correspondientes. Se dió impulso a las actividades relacionadas con el transporte y comunicaciones. El Gobierno del Pakistán se hizo cargo del funcionamiento del Centro regional de formación profesional ferroviaria y de señales.

Las Naciones Unidas continuaron actuando de agente administrativo para las actividades de asistencia técnica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Meteorológica Mundial. Como en años anteriores, el arreglo permitió que se realizaran notables economías en los gastos de los servicios administrativos.

En esta Memoria no se exponen más detalles sobre las actividades de asistencia técnica realizadas en 1957, debido a que el Programa Ampliado se describe completamente en el Informe anual de la Junta de Asistencia Técnica correspondiente a 1957 y el programa ordinario en un informe del Secretario General al Consejo Económico y Social en su 26° período de sesiones. Se han publicado informes especiales relativos a la asistencia técnica en materia de fiscalización de los estupefacientes y administración pública; un informe relativo a los servicios consultivos en el campo de los derechos humanos contiene datos acerca de los servicios de asistencia técnica que se han proporcionado. Asimismo, en otras secciones de esta Memoria se hallarán datos sobre los proyectos de asistencia técnica.

3. Cuerpo de funcionarios administrativos internacionales

De conformidad con lo solicitado por el Consejo Económico y Social en su resolución 661 (XXIV) de 30 de julio de 1957, el Secretario General preparó un informe relativo a la propuesta de crear un cuerpo de funcionarios administrativos internacionales, a fin de

que el Consejo la examine en su 26° período de sesiones. Conforme a dicha resolución, el informe se redactó teniendo en cuenta las observaciones que al respecto hicieron los Estados Miembros y los organismos especializados, y se prestó particular atención a las solicitudes de asistencia de ese tipo formuladas por los países insuficientemente desarrollados.

De 57 gobiernos que enviaron sus observaciones, 47 manifestaron que estaban de acuerdo con el principio en que se inspiraba la propuesta y ningún gobierno se mostró opuesto a ello. Un gobierno, sin dejar de convenir en el fondo de la cuestión, formuló reservas con respecto a los métodos que habrían de emplearse en la ejecución del plan.

Quince gobiernos de países menos desarrollados indicaron que estaban efectivamente interesados en recibir tal asistencia y se recibieron solicitudes concretas de países de Asia y el Lejano Oriente, Africa y América Latina, que se referían a funciones muy diversas. Se trataba de nuevas solicitudes, además de los servicios de expertos de asistencia técnica que se habían facilitado para ejercer funciones de dirección o ejecución en virtud de los programas que llevaban a cabo actualmente las Naciones Unidas.

Los jefes ejecutivos de cinco organismos especializados apoyaron en términos generales el principio en que se inspiraba el plan. Algunos organismos manifestaron que estaban interesados y dispuestos a cooperar en el programa, en la forma modesta y a título experimental que proponía el Secretario General. Un organismo indicó que, a su parecer, un servicio como el que se proponía no era necesario para aplicar los programas propios de sus atribuciones.

Teniendo en cuenta estas observaciones, el Secretario General propuso en su informe que se le autorizara a atender las solicitudes de los gobiernos relativas a la prestación de ayuda de carácter administrativo o de ejecución, en forma limitada y a título experimental, independientemente de los programas corrientes de asistencia técnica de las Naciones Unidas y con cargo al presupuesto ordinario de la Organización. Por lo tanto el Secretario General pedirá a la Asamblea en su décimotercer período de sesiones que aumente para 1959 los créditos asignados a la asistencia técnica en materia de administración pública. Durante el período experimental, el nuevo servicio se llevará a cabo utilizando los medios de que dispone la Secretaría de las Naciones Unidas, sin causar gastos administrativos adicionales, de manera que los créditos asignados puedan ser utilizados en su totalidad para atender las solicitudes de los gobiernos. Las Naciones Unidas están dispuestas a negociar acuerdos con los gobiernos, a fin de estipular las condiciones con arreglo a las cuales se ha de dar curso a las solicitudes, y en particular las relaciones precisas que deben establecerse entre las Naciones Unidas, los expertos y los gobiernos interesados.

C. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA

Actualmente, el UNICEF contribuye en un total de 322 programas en 100 países y territorios y en tres programas interregionales. En el cuadro A figura la distribución de esta ayuda.

Cuadro A. Programas que reciben ayuda

	Servicios básicos de protección a la madre y al niño	Lucha contra las enfermedades transmisibles	Alimentación infantil	Emergencia	Total
<i>Africa</i>					
23 países y territorios.....	14	36	6	—	56
<i>Asia</i>					
23 países y territorios.....	28	45	11	1	85
<i>Mediterráneo oriental</i>					
13 países y territorios.....	18	21	14	1	54
<i>Europa</i>					
7 países y territorios.....	11	5	5	—	21
<i>América</i>					
34 países y territorios.....	34	37	35	—	106
Programas interregionales.....	2	—	1	—	3
TOTAL	107	144	72	2	325

Durante el período que se examina la Junta Ejecutiva del UNICEF asignó créditos por un total de 23.500.000 dólares cuya distribución figura en el cuadro B.

Cuadro B. Asignaciones del UNICEF

Septiembre de 1957 y marzo de 1958

(En dólares de los Estados Unidos)

	<i>Africa</i>	<i>Asia</i>	<i>Mediterráneo Oriental</i>	<i>Europa</i>	<i>América</i>	<i>Programas interre- gionales</i>	<i>Total</i>
Servicios básicos de protección a la madre y al niño.....	690.500	5.567.000	147.000	236.000	704.800	333.000	7.678.300
Erradicación del paludismo y lucha contra dicha enfermedad.....	767.200	489.000	1.702.000	—	3.625.000	—	6.583.200
Lucha contra el pian y la sífilis.....	505.000	51.000	—	—	26.500	—	582.500
Vacunación con BCG y otras campañas anti-tuberculosas.....	—	525.891	954	—	104.000	—	630.845
Lucha contra el tracoma.....	100.000	7.000	44.000	56.500	—	—	207.500
Lucha contra la lepra.....	142.000	62.500	18.000	—	—	—	222.500
Producción de penicilina.....	—	25.521	—	—	—	—	25.521
Nutrición ^a	28.000	1.337.000	331.000	710.000	1.221.100	—	3.627.100
TOTAL DE LA AYUDA DE CARÁCTER DURADERO	2.232.700	8.064.912	2.242.954	1.002.500	5.681.400	333.000	19.557.466
Ayuda de carácter urgente.....							232.000
TOTAL GENERAL DE LA AYUDA QUE REPRESENTAN LOS PROGRAMAS							19.789.466
Cálculo de los servicios de ejecución para 1958.....							1.874.660
Cálculo de los gastos administrativos para 1958.....							1.682.310
Asignación suplementaria para 1957.....							175.000
TOTAL GENERAL DE LOS CRÉDITOS APROBADOS							23.521.436

^a Incluye las asignaciones para alimentación infantil y para la elaboración de leche y otros alimentos encaminados a mejorar la alimentación infantil. El Gobierno de los Estados Unidos suministra excedentes de leche descremada en polvo para los programas de alimentación; el UNICEF sufraga únicamente el costo del flete marítimo, que alcanza aproximadamente a 2½ centavos por libra.

En 1957, unos 48.000.000 de niños, madres lactantes y mujeres embarazadas fueron los beneficiarios de las principales campañas en gran escala contra las enfermedades y de los programas de alimentación materno-infantil realizados con la ayuda del UNICEF. El objetivo para 1958 es ayudar a más de 50.000.000 de beneficiarios.

Los ingresos del UNICEF, que aumentaron en 2.500.000 dólares durante el ejercicio económico de 1955 y en 2.300.000 dólares en 1956, aumentaron sólo en 900.000 dólares en 1957, ascendiendo a 20.700.000 dólares. Esta reducción en la proporción de aumento anual es motivo de honda preocupación para la Junta Ejecutiva del UNICEF, particularmente

si se tiene en cuenta que se han facilitado las oportunidades para hacer efectivas las asignaciones aprobadas como ayuda del UNICEF debido a que los gobiernos han preparado mejor sus programas. También preocupa el alza en los precios de suministros proporcionados por el UNICEF. Los créditos asignados en 1957, así como en 1956, excedieron de los ingresos; en 1956, en 2.600.000 dólares, y en 1957, en 3.400.000 dólares. Fué posible realizar asignaciones en cantidades mayores — que reflejaron el mayor número de solicitudes de ayuda presentadas por los gobiernos — mediante la utilización de fondos no asignados y de saldos no utilizados de ciertas asignaciones provenientes de años anteriores.

Durante el período que se examina, la Junta Ejecutiva del UNICEF ha concentrado sus esfuerzos ayudando a los gobiernos a establecer servicios básicos de protección a la madre y al niño, inclusive redes de centros de higiene maternoinfantil que se incorporan, siempre que sea posible, a la organización sanitaria de cada país. En 1957, el UNICEF asignó 6.400.000 dólares para servicios básicos de protección a la madre y al niño, en comparación con 3.400.000 dólares asignados en 1956. Dicha cifra representó en 1957 el 31% de las asignaciones para programas, la más alta proporción registrada desde la creación del UNICEF. A fin de mejorar la calidad de estos servicios, la ayuda del UNICEF se utiliza cada vez más para reforzar la dirección, fiscalización y formación profesional del personal encargado de los programas. Al mismo tiempo, continúa la ayuda prestada por el UNICEF en la lucha contra las principales enfermedades endémicas que atacan a los niños (paludismo, pian, tracoma y lepra) o para su erradicación. La ayuda financiera más importante que presta el UNICEF se destina a la lucha contra el paludismo; en 1957 el UNICEF asignó más de 8.000.000 de dólares para estas campañas y entre 1958 y 1960 espera asignar de 8 a 10.000.000 de dólares por año para las mismas.

Durante el período que se examina, la Junta Ejecutiva del UNICEF ha tomado medidas encaminadas a aumentar la ayuda del UNICEF para programas

especiales destinados a mejorar la nutrición infantil, particularmente en las aldeas rurales. Durante algún tiempo, el UNICEF ha venido contribuyendo en los programas de alimentación complementaria para niños por conducto de los centros de protección infantil y de las escuelas. También ha suministrado equipo para centrales de pasteurización y deshidratación de leche, y recientemente ha fomentado el desarrollo de otros alimentos locales ricos en proteínas distintos de la leche. En septiembre de 1957, la Junta Ejecutiva aprobó, en principio, que se aumentara la ayuda a varias actividades conexas, tales como las encuestas nutriólogicas destinadas a sentar las bases en que podrían fundarse programas prácticos en determinadas poblaciones; la capacitación del personal nacional encargado de la ejecución de dichos programas, la educación en materia de nutrición de los habitantes de las aldeas, y actividades conexas tales como el establecimiento de hueras escolares y comunales.

Al UNICEF le interesa el bienestar de los niños. Sin embargo, cada vez es más evidente que la ayuda del UNICEF, además de sus valores de carácter humanitario, puede hacer una importante contribución para acrecentar la economía vital. Su Junta Ejecutiva reconoce que las necesidades de los niños no son problemas aislados, sino que deben ser considerados teniendo en cuenta las condiciones del medio ambiente. Por lo tanto, siempre que sea posible, el UNICEF apoya las medidas concretas encaminadas a fomentar la higiene, la nutrición y el bienestar de los niños, que deberán formar parte de disposiciones más amplias para elevar el nivel de vida de la familia y de la comunidad. Al respecto, se refuerzan constantemente los procedimientos de coordinación entre el UNICEF y los distintos organismos de los que éste depende para su orientación técnica. En marzo de 1958, la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó un procedimiento para reforzar en el futuro la colaboración con la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, así como el establecimiento de un Comité Mixto FAO-UNICEF sobre Políticas de Nutrición.

D. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha continuado su tarea fundamental de asegurar la protección internacional de los refugiados. En conformidad con la resolución 1166 (XII), aprobada por la Asamblea General el 26 de noviembre de 1957, se ha intensificado el programa del Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Oficina se ha ocupado asimismo con el problema de los refugiados húngaros. Gracias a la cooperación entre los gobiernos, el Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas, el Programa de Ayuda de los Estados Unidos para los Fugitivos y los organismos de beneficencia de carácter voluntario, fué posible resolver totalmente ese problema en Yugoslavia en enero de 1958. Se está haciendo lo posible por lograr soluciones permanentes mediante la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración de los refugiados húngaros que todavía se encuentran en Austria. Además, la Oficina ha debido encargarse de los problemas de grupos especiales de refugiados en Africa del Norte y en el Cercano Oriente.

a) EL PROBLEMA DE LOS REFUGIADOS HÚNGAROS

El número total de refugiados húngaros llegados a Austria y Yugoslavia fué de aproximadamente 200.000.

Durante el período que se examina no ha ocurrido ninguna otra migración considerable. Casi 11.000 refugiados fueron repatriados a Hungría directamente de Austria o Yugoslavia; unos 171.000 fueron reasentados en países de segundo asilo, mientras que al 15 de junio de 1958 había en Austria unos 18.000 refugiados. El número total de refugiados que regresaron a Hungría se calcula en unos 16.000 inclusive los que se repatriaron de países de segundo asilo.

La repatriación desde Austria, que recibió a unos 180.000 refugiados, ha continuado sin mayores dificultades, y un total de 7.800 refugiados regresó a Hungría. El reasentamiento, en cambio, se ha reducido considerablemente, y, del total de 155.000 refugiados reasentados procedentes de Austria, sólo unos 8.000 salieron durante el período que se examina. De los 18.000 refugiados que todavía se encuentran en Austria, se calcula que de 8.000 a 9.000 desean el reasentamiento, y es preciso que los países de inmigración realicen un nuevo esfuerzo. En Austria se puede considerar resuelto el problema financiero de cuidado, mantenimiento y alojamiento, gracias a las contribuciones hechas al Gobierno por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a la operación en gran escala de cuidado y mantenimiento de la Liga de Sociedades

de la Cruz Roja y a la asistencia proporcionada directamente al Gobierno de Austria.

El programa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados húngaros en Austria, se está poniendo en práctica, con la mayor celeridad posible, subdividido en programas a largo plazo cuyo costo asciende a unos 500.000 dólares, y en un programa de soluciones permanentes, evaluado en 3.500.000 dólares. Los proyectos de construcción de viviendas proporcionarán unas 360 unidades que estarán terminadas este año o a comienzos de 1959. Con arreglo a otros proyectos, se están concediendo pequeños préstamos para facilitar la adaptación de los refugiados. Además se presta ayuda financiera a un amplio programa de educación y se proporciona asistencia para grupos especiales de refugiados.

En Yugoslavia, el total de refugiados llegados fué de 19.857. Al finalizar enero de 1958, se había encontrado una solución para todos los individuos de este grupo: 2.773 eligieron la repatriación voluntaria; 16.409 el reasentamiento y 675 la integración en Yugoslavia. Aplicando criterios liberales de inmigración, los gobiernos aceptaron a refugiados ancianos, enfermos o incapacitados, impidiendo así que se creara un problema de campamentos duradero y costoso. Sin embargo, en lo que se refiere a sus gastos para los refugiados húngaros, el Gobierno de Yugoslavia aún cuenta con un déficit de más de 6.600.000 dólares.

El total de los fondos recaudados por el Secretario General o el Alto Comisionado, en respuesta a sus llamamientos en pro de los refugiados húngaros, en virtud de la resolución 1129 (XI) aprobada por la Asamblea General el 21 de noviembre de 1956, ascendió a más de 12.200.000 dólares.

Si se incluyen además las contribuciones en efectivo o en especie hechas por conducto de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja para ser utilizadas en Austria o Yugoslavia, y la ayuda suministrada directamente al Gobierno de Austria, la cifra total excede de 40.000.000 de dólares.

b) PROBLEMAS ESPECIALES DE LOS REFUGIADOS

Se ha pedido a la Oficina del Alto Comisionado que preste asistencia a las personas que salieron del Oriente Medio a consecuencia de los sucesos ocurridos en esa región y que recibieron asilo temporal en ciertos países de Europa hasta que se resolviera su reasentamiento. Durante el período que se examina, se hicieron contribuciones por 200.000 dólares para ayudar al cuidado y mantenimiento y al reasentamiento de dichos refugiados.

Por conducto de la Oficina también se ha prestado asistencia por valor de 116.000 dólares a los refugiados en Túnez. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja también ayuda a este grupo y ha hecho un llamamiento juntamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

c) PROTECCIÓN INTERNACIONAL

La Oficina del Alto Comisionado ha seguido tratando de obtener para los refugiados los beneficios que confieren la legislación nacional y las convenciones internacionales. El número de Estados partes en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados asciende actualmente a 22 al anunciar el Gobierno de Túnez en noviembre que se había adherido a dicha Convención. De particular importancia es el Acuerdo destinado a regularizar la condición jurídica de los marinos refugiados, aprobado por ocho gobiernos en

una conferencia que se celebró en La Haya en 1957. El Acuerdo entrará en vigor 90 días después de que esos ocho países lo ratifiquen. El Consejo de Europa está considerando un acuerdo multilateral para eximir a los refugiados de la obtención de visados. La Organización Europea de Cooperación Económica ha preparado una recomendación a los Estados Miembros que, de ser aprobada, facilitará el traslado de trabajadores refugiados entre los países miembros.

La Oficina ha continuado fomentando, en todos los casos necesarios, aquellas medidas destinadas a mejorar la situación de los refugiados, particularmente con respecto al derecho al trabajo, a la seguridad social, a los viajes y a la naturalización. Asimismo, ha colaborado con los gobiernos para determinar si las personas que han buscado asilo son refugiados en el sentido fijado por la Convención de 1951. Para ello se ha establecido en Austria un nuevo procedimiento que dispone la celebración de consultas con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en distintas etapas.

Entre los problemas concretos que la Oficina sigue estudiando detenidamente, cabe mencionar en particular el de la indemnización a las víctimas de la persecución nazi.

Facilitación de la repatriación voluntaria

De conformidad con los términos del Estatuto y las disposiciones de la resolución 925 (X) aprobada por la Asamblea General el 25 de octubre de 1955, se han aplicado las garantías necesarias para proteger la repatriación voluntaria. En las misiones de repatriación en Austria y Yugoslavia ha colaborado un observador, designado por el Alto Comisionado, a fin de vigilar que nadie ejerza influencia indebida en los refugiados. Los refugiados que desean repatriarse han sido remitidos a las autoridades de su país de origen. En el caso de los refugiados húngaros, algunos gobiernos de los países de asilo han declarado que estaban dispuestos a sufragar los gastos de viaje de los refugiados que regresen a Hungría. Cuando surgieron dificultades, el Alto Comisionado gestionó el asunto por vía diplomática. En 1957 unos 2.000 refugiados, aparte de los de Hungría, regresaron a sus países de origen.

Promoción del reasentamiento

Durante el ejercicio económico de 1957, 35.082 refugiados (además de los procedentes de Hungría) fueron reasentados bajo los auspicios del Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas (CIME). La mayoría se dirigieron a Australia, Canadá, Israel y los Estados Unidos. Otros 2.500 refugiados, entre los que se contaban casos difíciles y refugiados físicamente impedidos, fueron reasentados en países de Europa mediante la ayuda de diversos programas, en su mayoría en Bélgica, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados está estudiando con particular atención la emigración de familias que por tener un caso difícil o de incapacitación física no pueden ser aceptadas en los programas corrientes. También se está haciendo lo posible por reunir a miembros de una misma familia, cuando algunos de ellos no hayan podido viajar con los parientes a los países de inmigración a causa de haber sido rechazados por razones médicas.

d) APLICACIÓN DEL PROGRAMA DEL FONUR

En 1958 el programa del FONUR entró en su cuarto y último año de actividades. Del objetivo de 16.000.000

de dólares fijado a las contribuciones de los gobiernos al FONUR se habían pagado o prometido, hasta el 15 de junio, 13.922.482 dólares; faltaban, pues, 2.077.518 dólares para alcanzar el objetivo señalado. Estas contribuciones fueron completadas con contribuciones privadas e ingresos varios que alcanzaron un total de 2.018.877 dólares.

Hasta el 31 de marzo de 1958, habían sido asentados en forma permanente, con arreglo al programa, 22.039 refugiados, de los cuales 7.123 vivían antes en campamentos. Otros 12.864 refugiados (en esta cifra no se incluyen los beneficiarios de la ayuda de urgencia) habían recibido también considerable ayuda del programa. Este número será apreciablemente más alto cuando se hayan terminado los programas en curso.

Hasta el 31 de marzo de 1958, el programa de soluciones permanentes había asentado con carácter fijo a un total de 16.014 refugiados, la mayoría en Austria (9.989), Alemania (3.749), Bélgica (781), Italia (738), Grecia (488) y Francia (230). Los esfuerzos se concentran principalmente en el suministro de vivienda: en Austria se están construyendo 2.821 unidades (935 terminadas); en Alemania, 1.578 unidades (348 terminadas) y en Grecia 612 unidades (67 terminadas). Otras actividades del programa se dedican a la rehabilitación de los refugiados impedidos y al suministro de ayuda para los refugiados jóvenes.

Con arreglo al programa para casos difíciles, 936 refugiados que pertenecen a esta categoría, incluso las personas a cargo, han podido reasentarse en su país de residencia o en instituciones de otros países. En virtud de los proyectos para facilitar ayuda de urgencia a los grupos de refugiados más necesitados, en 1957 se prestó ayuda a 5.390 refugiados.

En virtud del Plan de Actividades del Lejano Oriente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados colabora con el Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas para el reasentamiento de refugiados europeos del Lejano Oriente, y también suministra ayuda de urgencia a los refugiados que viven en China. El CIME está encargado de los gastos de transporte y la Oficina del Alto Comisionado financia el cuidado y mantenimiento de los refugiados durante su tránsito por Hong Kong. En 1957, un número excepcionalmente alto de refugiados llegaron a Hong Kong, y los fondos de que disponía el CIME para el pago del transporte no fueron suficientes. Con la autorización del Comité Ejecutivo del FONUR, el Alto Comisionado, junto con el Director del CIME, dirigieron un llamamiento a los gobiernos solicitando fondos para el transporte de los refugiados, mientras que el Comité Ejecutivo del FONUR tomó asimismo medidas especiales para aumentar las asignaciones destinadas al cuidado y mantenimiento de refugiados en Hong Kong. En 1957, el número de refugiados trasladados ascendió a 2.979. Para 1958, hasta el 15 de junio, la cifra fué de 1.211. Se informó al Comité Ejecutivo del FONUR, en su octavo período de sesiones,

que en 1958 se trasladaría un total de aproximadamente 3.600 refugiados.

Aunque el programa del FONUR contribuirá apreciablemente a resolver el problema de los refugiados que viven en campamentos, se calcula que, aun si se cuenta con fondos suficientes para poner en práctica todos los proyectos aprobados, habrá todavía unos 11.600 refugiados en campamentos que necesitarán ayuda del FONUR. A fin de dar cumplimiento a la solicitud que figura en la resolución 1166 (XII) de la Asamblea General de que se intensifique el programa, se presentó al Comité Ejecutivo del FONUR, en su octavo período de sesiones, un programa provisional para clausurar los campamentos, que requiere la suma de 4.800.000 dólares. Este programa será examinado por un grupo de trabajo establecido por el Comité Ejecutivo. Hasta la fecha, las contribuciones prometidas para este programa ascienden a más de 570.000 dólares.

e) MEDIDAS ADOPTADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES 1166 (XII) Y 1167 (XII) DE LA ASAMBLEA GENERAL

De conformidad con la resolución 1166 (XII), el Alto Comisionado ha tratado de intensificar el programa del FONUR y ha dirigido un llamamiento a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados a fin de obtener los fondos adicionales necesarios para sacar de los campamentos a todos los refugiados comprendidos en su jurisdicción que han permanecido en ellos más de 10 años.

Por la misma resolución, la Asamblea General pidió al Comité Ejecutivo del FONUR que ejerciera durante 1958 las funciones adscritas al organismo que lo reemplazará, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, en la medida en que estimara necesario, con objeto de asegurar la continuidad de la asistencia internacional a los refugiados. En su octavo período de sesiones, el Comité Ejecutivo del FONUR examinó un programa para la clausura de los campamentos y una Nota sobre futura asistencia internacional presentada por el Alto Comisionado. Un grupo de trabajo compuesto de nueve gobiernos preparará propuestas concretas para que el Comité tome medidas, y prestará particular atención a programas concretos y a sus objetivos financieros; sus propuestas serán examinadas por el Comité en un período especial de sesiones que se celebrará a más tardar el 26 de septiembre de 1958.

En lo que se refiere a la resolución 1167 (XII) aprobada por la Asamblea General el 26 de noviembre de 1957, sobre los refugiados chinos en Hong Kong, el Alto Comisionado informó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, así como a las organizaciones no gubernamentales, que estaba dispuesto a emplear sus buenos oficios con miras a obtener nuevas contribuciones para estos refugiados. En su séptimo período de sesiones, el Comité Ejecutivo del FONUR expresó la esperanza de que se atendería en forma amplia y generosa al llamamiento formulado por la Asamblea General.

E. CUESTIONES DE COORDINACION Y RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Entre las medidas más importantes adoptadas en materia de coordinación, cabe mencionar la solicitud formulada por el Consejo Económico y Social en su 24º período de sesiones al Comité Administrativo de Coordinación de que preparara una lista preliminar de las

esferas de actividad que requieren acción concertada entre varias organizaciones y propusiera procedimientos para la elaboración de planes para dicha acción concertada.

El CAC, en su informe al 26° período de sesiones del Consejo, interpretó las palabras "acción concertada" en el sentido de una actuación con arreglo a un plan concebido y unificado conjuntamente para el logro de un amplio objetivo común. Declaró que "la acción concertada" debía aplicarse únicamente si los programas eran tan complejos que exigieran los esfuerzos procedentes de diferentes direcciones; tan específicos que permitieran combinar dichos esfuerzos dentro de una esfera determinada; y que permitieran definirlos en tales términos que las diversas partes interesadas convinieran en aceptarlos como marco de sus actividades conjuntas.

El CAC estimó que las posibilidades de acción concertada variaban considerablemente. En lo relativo al desarrollo de la comunidad, se trazó un plan de acción concertada a largo plazo, cuyos detalles se establecían y ajustaban de año en año entre los organismos interesados. En lo que se refiere al control y la utilización de los recursos hidráulicos en general, el CAC consideró que en la presente etapa no era posible establecer un programa unificado, aunque ciertos campos de actividad podrían prestarse para una acción concertada, como por ejemplo el desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas, los problemas de las aguas subterráneas y las medidas preventivas de la contaminación de las aguas, los problemas de las regiones tropicales húmedas y los programas para las zonas áridas. En lo que se refiere a la vivienda, construcción y planificación, un grupo de trabajo del CAC preparará un programa a largo plazo que, después de ser examinado en ese órgano, será presentado a la Comisión de Asuntos Sociales, al Consejo y a los órganos directivos de los organismos especializados interesados. En lo que se refiere a la industrialización, productividad y urbanización se consideró que los programas eran todavía en gran parte de carácter exploratorio y que parecía más apropiado en esta etapa perfeccionar las disposiciones de cooperación existentes que emprender una acción concertada. Se señaló, en relación con ciertos aspectos importantes del Proyecto de Fomento de la Región del Mediterráneo, que se habían hecho gestiones para llevar a cabo una acción concertada entre la FAO y las Naciones Unidas.

Se examinaron diversos procedimientos para elaborar y ejecutar planes de acción concertada. Se recomendó que las consultas acerca de los nuevos programas concertados que se propusieran se celebraran con la atención necesaria para que, en calidad de temas especiales, pudieran ser señalados a la atención de los órganos rectores de los organismos especializados que hubieran de examinarlos, considerando tanto su importancia intrínseca como las consecuencias financieras de los mismos.

El Consejo pidió asimismo al Secretario General que hiciera una evaluación del alcance, de las tendencias y del costo de los programas ordinarios de las Naciones Unidas en materia económica, social y de derechos humanos para el período 1959-1964 y que invitara a la Organización Internacional del Trabajo, a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Meteorológica Mundial a que hicieran otro tanto. Sugirió además que el CAC examinara los métodos más apropiados y prácticos para preparar esas evaluaciones e informara al respecto de manera que facilitara la comparación.

En respuesta a esta solicitud, el CAC informó en mayo de 1958 que inevitablemente habría diferencias en cuanto al método y a la cantidad de detalles en las evaluaciones, y que no abarcarían el mismo número de años en todos los casos. Asimismo, expresó la opinión de que, para enfocar el problema con sentido de la realidad, las evaluaciones tendrían que tomar en consideración las actividades realizadas en virtud del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial establecido por la Asamblea General en su resolución 1219 (XII), aprobada el 14 de diciembre de 1957. El Comité recomendó además que los diversos informes de los organismos enfocaran especialmente las principales esferas de actividad, en la forma que más facilitara la comparación y que, dentro de esas esferas principales, los informes se limitaran a los aspectos previstos más importantes del desarrollo, así como a los nuevos puntos de convergencia del esfuerzo principal. Los informes debían incluir también las finalidades del programa, la naturaleza de los problemas que se presentaran y los métodos adoptados para resolver esos problemas. En lo que se refiere al cálculo de los costos futuros de los programas, el CAC consideró que, si bien se haría todo lo posible por satisfacer los deseos del Consejo, era imposible pronosticar los costos futuros con exactitud.

En su 26° período de sesiones, el Consejo examinará las recomendaciones detalladas del CAC sobre "acción concertada" así como sobre estas evaluaciones. A fin de facilitar los debates del Consejo, el CAC ha preparado además una reseña de las medidas de carácter práctico para asegurar la cooperación y coordinación elaboradas en los últimos años para las actividades más diversas. Esta reseña pone al día el material que sobre la materia fue presentado al Consejo en 1954.

Como en años anteriores, el CAC examinó también los progresos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y señaló que se habían celebrado consultas sobre la coordinación de diversas actividades económicas y sociales, como por ejemplo el desarrollo de la comunidad, el control y aprovechamiento de los recursos hidráulicos y las cuestiones relativas a los productos básicos. Asimismo, informó al Consejo en su 26° período de sesiones acerca de la coordinación entre los programas del UNICEF y los programas ordinario y ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

El Organismo Internacional de Energía Atómica participó en el CAC por primera vez en el período de sesiones de mayo de 1958. El Comité menciona las consultas celebradas recientemente y las que se están celebrando en la actualidad entre ese Organismo y varios de los organismos especializados que se interesan en las cuestiones de energía atómica.

Con arreglo a lo solicitado por el Consejo en su 22° período de sesiones, el Secretario General ha preparado un informe sobre los métodos adoptados por los gobiernos para asegurar la coordinación de sus actividades en distintas organizaciones internacionales. Este informe deberá ser examinado por el Consejo en su 26° período de sesiones.

Como parte del examen general de las actividades de las Naciones Unidas en materia económica, social y de derechos humanos, el Consejo consideró en su 24° período de sesiones un informe con las recomendaciones y sugerencias formuladas por el Secretario General para perfeccionar esas actividades. Se preparó otro informe para el 26° período de sesiones del Consejo. Ambos forman parte de una serie de informes presentados al Consejo en anteriores períodos de sesiones y que han

pasado a ser una característica permanente de la labor del Consejo. Están concebidos como parte de un proceso constante para examinar minuciosamente las activida-

des a fin de que el Consejo pueda decidir la mejor manera de utilizar los limitados recursos de que dispone teniendo en cuenta las necesidades futuras.

Capítulo III

ASUNTOS RELATIVOS AL REGIMEN DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA Y A LOS TERRITORIOS NO AUTONOMOS

A. TERRITORIOS EN FIDEICOMISO

1. Funcionamiento del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria

El acontecimiento más importante en el funcionamiento del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria durante el período que se examina fué el amplio reconocimiento por parte de los órganos interesados, compartido y en algunos casos hasta propuesto por las propias Autoridades Administradoras, de que cinco de los diez territorios en fideicomiso han logrado tal adelanto que en breve será necesario adoptar medidas de importancia poco menos que decisiva para su futura condición jurídica.

En Africa Oriental, Somalia tendrá próximamente que considerar la aprobación de la Constitución que la regirá como Estado independiente. En Africa Occidental se espera saber muy pronto cuáles son los deseos del pueblo del Togo bajo administración francesa acerca de sus propios destinos, mediante elecciones celebradas bajo la fiscalización de las Naciones Unidas. La Autoridad Administradora del Camerún bajo administración francesa opina que dicho Territorio estará en breve en condiciones de elaborar un calendario razonable relativo a la terminación del Acuerdo de Administración Fiduciaria. Las aspiraciones de Nigeria de obtener su independencia en 1960 han suscitado las cuestiones relativas al porvenir del Camerún bajo administración británica, administrado como parte integrante de Nigeria, y a la forma en que podría expresarse la voluntad de su población respecto de sus propios destinos. En el Pacífico, ha empezado ya a transcurrir el plazo fijado para la evolución gradual de Samoa Occidental para llegar en 1960 al sistema de gobierno parlamentario a base de un gabinete ministerial.

Aunque dichas situaciones han provocado especial interés en el Consejo de Administración Fiduciaria en la Asamblea General, estos órganos han continuado aplicando los procedimientos habituales de fiscalización tanto a los territorios de fideicomiso políticamente más adelantados como a aquellos que no han llegado aún al umbral de su autonomía. El Consejo terminó en julio de 1957 su 20° período de sesiones, en el cual examinó principalmente la situación de los Territorios del Océano Pacífico, la de Tanganyika y la de Somalia; celebró en septiembre un séptimo período extraordinario de sesiones, para considerar el informe de la Comisión enviada por la Asamblea General al Togo bajo admi-

nistración francesa; se reunió nuevamente de enero a marzo de 1958 para celebrar su 21° período de sesiones, en el cual su tema principal fué el examen de la situación de los territorios africanos, e inauguró en junio de 1958 su 22° período de sesiones para ocuparse nuevamente en particular de los Territorios del Pacífico y de Somalia. Durante el año en cuestión, envió por cuarta vez una misión visitadora al Africa Oriental y nombró a otra para que fuese al Africa Occidental a fines de 1958.

La revisión anual del funcionamiento del régimen de administración fiduciaria, efectuada por la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones, se caracterizó por la atención prestada nuevamente a la cuestión del porvenir del Togo bajo administración francesa. En el examen de este tema, volvieron a desempeñar un papel preponderante las audiencias concedidas a representantes de los grupos políticos del Territorio. También fueron escuchados varios peticionarios de los dos territorios en fideicomiso del Camerún. Además, la Asamblea se ocupó nuevamente de los problemas específicos de Somalia, es decir, el de su porvenir económico y financiero y el de la demarcación de su frontera con Etiopía.

En la breve reseña de la situación actual en los territorios que figura en la sección siguiente se mencionan las resoluciones aprobadas por la Asamblea sobre estas cuestiones, junto con ciertas observaciones y recomendaciones del Consejo de Administración Fiduciaria acerca de la administración en general de los territorios en fideicomiso.

La Asamblea aprobó asimismo varias resoluciones de carácter más general. Confirmó resoluciones anteriores por las cuales invitaba a las Autoridades Administradoras a que calcularan el período de tiempo en que los territorios en fideicomiso podrían conseguir la autonomía o la independencia y recomendaba que se tomaran medidas en los territorios africanos para alcanzar este objetivo en un futuro próximo. También pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que prosiguiera su estudio del desarrollo económico rural de los territorios en fideicomiso, que le informara debidamente sobre la utilización de las becas ofrecidas por los Estados Miembros a habitantes de los territorios, y que estudiara los efectos de la Comunidad Económica Europea en el desarrollo de los territorios por ella afectados.

2. Condiciones existentes en los territorios en fideicomiso

1) Territorios en fideicomiso del Africa occidental

a) TOGO BAJO ADMINISTRACIÓN FRANCESA

El destino de la población de más de 1.000.000 de habitantes del Togo bajo administración francesa ha continuado siendo motivo de gran preocupación para los órganos interesados en cuestiones de administración fiduciaria. La Comisión creada por la Asamblea General según resolución 1046 (XI) de 23 de enero de 1957 para hacer un examen completo de la situación originada por la aplicación práctica del nuevo Estatuto concedido al Togo en 1956 permaneció en el Territorio del 29 de mayo al 30 de junio de 1957 y presentó su informe al Consejo de Administración Fiduciaria en septiembre de 1957. En esencia, el informe de la comisión dijo que, si bien había aún restricciones importantes en virtud de la retención de ciertos poderes y competencias por la Autoridad Administradora, el Togo poseía un alto grado de autonomía interna, y que era evidente que se había iniciado una evolución que hacía inevitable que se delegaran en el Gobierno del Togo poderes aún más amplios. La futura evolución de la condición jurídica del Territorio y de sus relaciones con Francia debía ser regulada conforme a los deseos del pueblo togolés; mientras tanto, sería conveniente que el Territorio asumiera responsabilidad completa por la modificación del Estatuto en lo que se refería a la organización interna del país, y que se celebraran elecciones por sufragio universal; y finalmente, en cuanto a la terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, sería oportunamente necesario consultar al pueblo, en la forma que fuera más apropiada y mediante un acuerdo oficial con las Naciones Unidas, con respecto a sus deseos sobre la futura condición jurídica del Territorio.

Después de examinarlo en su séptimo período extraordinario de sesiones, el Consejo remitió a la Asamblea General el informe de la Comisión junto con su opinión de que el informe y las declaraciones sobre el mismo formuladas por representantes de los Gobiernos francés y togolés suministraban una base útil y positiva para el examen de cualquier medida que la Asamblea decidiera adoptar. En el duodécimo período de sesiones de la Asamblea, durante el cual se escuchó también a los dirigentes de los partidos de oposición del Territorio, los representantes de Francia y del Gobierno del Togo propusieron finalmente el siguiente programa de acción: primero: la Asamblea Legislativa togolesa actual aprobaría un texto modificado del Estatuto, que contendría nuevas transferencias de poderes; segundo: la Asamblea Legislativa sería renovada por sufragio universal y el Estatuto revisado entraría en pleno vigor, y por último: se pondría fin al Acuerdo de Administración Fiduciaria simultáneamente con la primera reunión de la nueva Asamblea Legislativa.

Durante el debate celebrado en la Cuarta Comisión, este criterio fué modificado mediante la evolución del texto de un proyecto de resolución que, según sus patrocinadores, se basaba en la siguiente serie de acontecimientos: primero: todos los poderes que Francia conservaba, salvo los relativos a la defensa nacional, las relaciones exteriores y la moneda, serían transferidos al Togo; segundo: se celebrarían elecciones en 1958, fiscalizadas por las Naciones Unidas, para elegir una nueva Asamblea Legislativa; tercero: la nueva Asamblea Legislativa estaría en libertad de presentar cual-

quier propuesta que deseara relativa a nuevas modificaciones del Estatuto y a la terminación del régimen de fideicomiso; y finalmente: toda propuesta de esta naturaleza sería comunicada al Consejo de Administración Fiduciaria y luego a la Asamblea General.

El proyecto de resolución, modificado y aprobado por la Cuarta Comisión, fué aprobado por la Asamblea el 29 de noviembre de 1957 como resolución 1182 (XII). Conforme a los términos de la misma, la Asamblea decidió elegir a un Comisionado para que supervisara las elecciones a la Asamblea Legislativa, a quien prestarían su concurso observadores y funcionarios que nombraría el Secretario General previa consulta con dicho Comisionado, y el 14 de diciembre eligió al Sr. Max H. Dorsinville, de Haití, para desempeñar dicho cargo. Entre varias otras disposiciones, la resolución pedía a la Autoridad Administradora y al Gobierno del Togo que tomaran, en consulta con el Comisionado de las Naciones Unidas, las disposiciones para la organización y el desarrollo de las elecciones a la Asamblea Legislativa. Se pidió también al Comisionado que presentara al Consejo de Administración Fiduciaria, para que éste lo examinara y lo transmitiera a la Asamblea General en su décimotercer período de sesiones, un informe sobre la organización, la realización y el resultado de las elecciones. Al mismo tiempo, se invitó a la Autoridad Administradora a informar al Consejo sobre el mencionado traspaso de nuevos poderes, los resultados de las elecciones, la convocación de la nueva Asamblea Legislativa, y sobre cualesquiera deseos que pudiere expresar la Asamblea Legislativa acerca del nuevo Estatuto y la terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, y se pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que, a su vez, se sirviera examinar esas cuestiones e informar al respecto a la Asamblea General a fin de que, si la nueva Asamblea Legislativa del Togo y la Autoridad Administradora lo solicitaran, la Asamblea General pudiera adoptar una decisión, a la luz de las circunstancias que prevalecieran en ese momento, acerca de la terminación de dicho Acuerdo.

El Consejo espera (junio de 1958) los informes del Comisionado de las Naciones Unidas y de la Autoridad Administradora. Figura asimismo en su programa el examen anual de la situación existente en el Territorio en fideicomiso y de las peticiones referentes al mismo.

b) CAMERÚN BAJO ADMINISTRACIÓN FRANCESA

En el curso de su 21° período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria estudió con interés particular los resultados del primer año de funcionamiento de las nuevas instituciones políticas establecidas en el Camerún bajo administración francesa en virtud del Estatuto que se puso en vigor por el Decreto del 16 de abril de 1957. El Consejo alabó a la Autoridad Administradora y al Gobierno del Camerún por el progreso realizado en general y también felicitó a las instituciones territoriales por la habilidad con que habían hecho uso de los considerables poderes que les fueron concedidos. Expresó el convencimiento de que la Autoridad Administradora acogería favorablemente todas las nuevas peticiones de transferencia de poderes que pudiera presentarle la Asamblea Legislativa del Camerún.

En algunas zonas del Territorio siguió manifestándose cierto descontento político durante el año anterior a la revisión de las condiciones allí existentes realizada por el Consejo. Este descontento político se concretó en peticiones (de las cuales más de 6.000 fueron recibidas durante 1957), en protestas presentadas ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General durante su duodécimo

periodo de sesiones por representantes de varios grupos y en varios otros incidentes dentro del propio Territorio. Varios grupos siguieron haciendo demandas de amnistía política y de independencia y unificación de los dos Camerunes. En su resolución 1211 (XII), aprobada el 13 de diciembre de 1957, la Asamblea General expresó la esperanza de que con la aplicación de medidas adecuadas, especialmente con la pronta promulgación de la ley de amnistía y el renunciamento por todos los partidos al uso de la violencia, sería posible alcanzar condiciones apropiadas para el pronto restablecimiento de la normalidad en la región perturbada. Posteriormente, en su 21º periodo de sesiones, el Consejo deploró que en ciertas zonas del Territorio parte de la población hubiera seguido recurriendo al uso de la violencia e hizo un llamamiento a las personas interesadas para que cooperaran con el resto de la población en la labor de promover una vida política normal. Tras haber notado con interés la reciente promulgación de una ley de amnistía, el Consejo expresó la esperanza de que el llamamiento en favor de relaciones armoniosas hecho por el nuevo jefe del Gobierno (que asumió el cargo tras una crisis ministerial en febrero de 1958) así como una aplicación liberal de la ley, contribuirían a mejorar considerablemente la situación.

En lo que se refiere a la futura condición jurídica internacional de los dos Territorios del Camerún, la Asamblea General, en su resolución 1211 (XII) expresó la confianza de que, por medio de las medidas apropiadas que deberían adoptar las Autoridades Administradoras, se facilitaría más en ambos Territorios la realización de los objetivos finales del régimen de administración fiduciaria, conforme a la libre expresión de los deseos de las poblaciones interesadas, considerando todas las alternativas concernientes a su condición jurídica futura. Ulteriormente el Consejo de Administración fiduciaria manifestó también su confianza acerca del Camerún bajo administración francesa. Al respecto el Consejo también tomó nota de las manifestaciones del representante de Francia, quien afirmó que, indudablemente, estaba cerca la hora en que la Autoridad Administradora, de completo acuerdo con el Gobierno del Camerún, fijaría una serie de plazos razonables que conduciría al Territorio hacia la terminación del régimen de fideicomiso.

El Consejo comprobó con satisfacción los esfuerzos realizados por la Autoridad Administradora y por el Gobierno del Camerún para desarrollar y diversificar la economía del Territorio; recomendó el fomento de las inversiones por todos los medios posibles y que el Gobierno del Camerún participara lo más plenamente posible en la preparación y realización de programas de intercambio comercial con el extranjero. También se expresó satisfacción por el progreso realizado en cuestiones sociales, especialmente respecto a la condición jurídica de la mujer, la vivienda y la sanidad. Los adelantos realizados en la educación también merecieron las alabanzas del Consejo, el cual reiteró su esperanza de estudiar la posible creación de una universidad en un futuro relativamente próximo.

c) CAMERÚN BAJO ADMINISTRACIÓN BRITÁNICA

El Consejo de Administración Fiduciaria comprobó que el Camerún bajo administración británica está en vísperas de cambios considerables a raíz de la Conferencia celebrada en Londres en 1957, entre representantes de Nigeria y del Territorio en fideicomiso y el Secretario de Estado para las Colonias, para estudiar los arreglos constitucionales que se han venido realizando para los dos Territorios. La Conferencia aprobó

cambios que extenderían el alcance de la autonomía interna de la Federación de Nigeria tanto en su conjunto como en el nivel regional, en el Camerún meridional y en la región septentrional de Nigeria (con la cual es administrado el Camerún septentrional).

También se informó al Consejo de que un nuevo Parlamento nigeriano, que será elegido en 1959-1960, discutirá una resolución en la que se pide al Gobierno del Reino Unido que permita la autonomía total de Nigeria dentro del *Commonwealth* británico para 1960. El Secretario de Estado había hecho una declaración sobre la situación del Territorio en fideicomiso cuando Nigeria alcanzase su independencia, en el sentido de que una de las posibilidades consistiría en que el Camerún siguiese siendo parte de Nigeria, pero que en ningún caso se impondría dicha integración al Territorio en fideicomiso contra sus propios deseos y que, antes de que Nigeria alcanzase su independencia, la población de las zonas norte y sur del Camerún tendría que declarar libremente su deseo. El Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota de estas garantías, pidió a la Autoridad Administradora que le informase en una fecha no lejana de las nuevas medidas necesarias para que el Territorio alcance el objetivo final del fideicomiso y, en particular, las disposiciones que se piensa tomar para consultar a la población, y decidió demorar su evaluación de los cambios constitucionales inmediatos hasta que haya informado la Misión Visitadora de 1958.

Ocupándose luego de la situación del Territorio, el Consejo aprobó varias observaciones y recomendaciones en las que se refleja la conveniencia de desarrollar los recursos de importancia principalmente agrícola y pastoral a fin de mejorar el nivel de vida de la población africana y se aumente también el nivel de los ingresos públicos, especialmente en el Camerún Meridional que es semiautónomo. El Consejo confía en que, mediante la expansión de las facilidades de crédito, el desarrollo del movimiento cooperativo y el fomento de la formación técnica, los habitantes indígenas participarán cada vez más directamente en el desarrollo de los recursos económicos.

El Consejo expresó la esperanza de que: se fomentarán las relaciones entre los pueblos de los Camerunes septentrional y meridional; se tomarán todas las medidas apropiadas, sobre todo mediante la expansión de los servicios sociales y educativos, para permitir a las mujeres que gocen dentro de poco de la misma condición que el hombre en todas las actividades; se ampliarán aún más los servicios médicos; se mejorarán las condiciones laborales y se fomentará la actividad sindical; se avanzará constantemente hacia el objetivo de proporcionar educación primaria gratuita; y se entenderán las facilidades para la educación y técnica.

2) Territorios en fideicomiso del Africa oriental

a) SOMALIA BAJO ADMINISTRACIÓN ITALIANA

El Consejo de Administración Fiduciaria informó en su 21º periodo de sesiones que bajo administración italiana Somalia había seguido progresando hacia el objetivo de alcanzar la independencia en 1960. El próximo paso de importancia por ese camino de adelanto político debía consistir en la celebración de elecciones, durante la segunda mitad de 1958, para la formación de una Asamblea Legislativa y Constituyente, la cual conduciría al establecimiento, para fines del mismo año, de cuatro instituciones básicas de todo Estado soberano, a saber, una Constitución, un jefe de Estado, un Gobierno y un Parlamento.

Al estudiar la situación actual durante su 22º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tiene ante sí reciente información procedente de tres fuentes principales: la Autoridad Administradora, el Consejo Consultivo de las Naciones Unidas, y la Misión Visitadora de 1957. Durante su 22º período de sesiones el Consejo se enteró de que la Asamblea Legislativa actual había preparado el camino para promulgar varios cuerpos de legislación básica, inclusive los códigos penal, civil, de trabajo y marítimo. Entre los preparativos para la celebración de elecciones en 1958, se ha realizado un censo de las poblaciones rurales y nómadas, calculadas en 1953 en cerca de 1.250.000 personas. Al respecto el Consejo expresó la esperanza de que las autoridades somalis examinarán urgentemente la cuestión de extender a las mujeres el derecho de voto.

Además de dar a conocer su opinión respecto a otros aspectos del desarrollo del Territorio, el Consejo, en su 21º período de sesiones y después la Asamblea General dedicaron especial atención a la situación económica y financiera de Somalia como Estado independiente. El informe de la misión de estudio enviada al Territorio en 1956 por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento fué examinado por el Consejo teniendo en cuenta las observaciones que respecto al mismo hicieron la Autoridad Administradora, el Gobierno de Somalia y el Consejo Consultivo. El Consejo observó que se había realizado un constante progreso gracias a la aplicación de los planes existentes para el desarrollo económico y que, en todas las esferas en que existían posibilidades de desarrollo, se habían preparado planes hasta 1960 por lo menos. Naturalmente, el Territorio seguirá, sin embargo, necesitando asistencia técnica y financiera procedente del exterior por un período indeterminado después del año 1960 si se desea evitar que Somalia sufra reducciones importantes en los servicios públicos y en los planes de desarrollo económico. Se calcula que las sumas requeridas oscilan entre cuatro y seis millones de dólares. El Gobierno de Italia anunció que estaba dispuesto a seguir enviando técnicos a Somalia después de 1960 y, por su parte, el Gobierno de Somalia se comprometió a estimular y garantizar debidamente las inversiones privadas de capital extranjero. El Consejo acogió bien estas garantías y señaló éstas a la atención de la Asamblea General sugiriéndole también otras varias posibilidades que podrían estudiarse para hacer frente a la situación que se plantee después de 1960. La Asamblea dió un paso más cuando, en el curso de su duodécimo período de sesiones, en la resolución 1206 (XII) del 13 de diciembre de 1957, tomó nota de que la Autoridad Administradora, en consulta con el Gobierno de Somalia, continuaría investigando las formas posibles de satisfacer las necesidades que tendrá que atender Somalia como Estado independiente y pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que, en consulta con ellos, estudiase la cuestión e investigase en particular las posibilidades que el propio Consejo había sugerido. El Gobierno de Somalia ha seguido insistiendo cerca de las Naciones Unidas sobre la urgente necesidad de resolver otro de los problemas del Territorio, el de definir su frontera con Etiopía. En su 20º período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria recordó la opinión ya expresada por la Asamblea General el mismo año, en la resolución 1068 (XI) del 26 de febrero de 1957, en el sentido de que, en caso de que las negociaciones no alcanzaran resultados concretos antes de celebrarse el duodécimo período de sesiones de la Asamblea, fuese necesario que los

Gobiernos de Etiopía e Italia se sometiesen a procedimientos de mediación o arbitraje. Al celebrarse el duodécimo período de sesiones, y a pesar de que se había realizado algún progreso, las negociaciones no habían resuelto algunas de las diferencias fundamentales. Por su resolución 1213 (XII), aprobada el 14 de diciembre de 1957, la Asamblea opinó que un procedimiento de arbitraje era el medio más rápido de llegar a un arreglo definitivo y recomendó a las partes que estableciesen, a ser posible dentro de un plazo de tres meses, un tribunal de arbitraje para delimitar la frontera, de conformidad con el mandato que los dos Gobiernos le confirieran de común acuerdo, con la asistencia de una persona independiente que los mismos nombrarían de común acuerdo. Este tribunal estaría integrado por tres juristas, uno de los cuales sería nombrado por Etiopía, otro por Italia y el tercero por acuerdo entre los juristas así nombrados, o en caso de que éstos no llegasen a un acuerdo, por Su Majestad el Rey de Noruega. En la misma resolución se pide a los Gobiernos de Etiopía y de Italia que informen a la Asamblea General respecto a este asunto en su décimotercer período de sesiones.

b) TANGANYIKA

La existencia de relativamente pequeñas minorías de origen europeo y asiático junto a la gran población africana, calculada actualmente en casi 9.000.000, continúa ejerciendo gran influencia en la política general de la Autoridad Administradora relativa al desarrollo constitucional y otros aspectos. Este Territorio, el mayor de los comprendidos en el régimen de administración fiduciaria, plantea, más que ningún otro, problemas de adaptación de grupos raciales en un ambiente de acelerada actividad política.

La Autoridad Administradora ha declarado que tiene el propósito de establecer oportunamente una sociedad multirracial con instituciones gubernamentales multirraciales o, mejor dicho, no raciales. La composición de las instituciones gubernamentales refleja la importancia especial que se atribuye a los grupos no africanos, no por su número, sino por su contribución al progreso económico y de otra índole. El Consejo de Administración Fiduciaria estudió dos veces durante el período que se examina la situación en Tanganyika y tiene interés en que se comprenda que la representación separada de los grupos raciales es simplemente una fase de la transición. La Autoridad Administradora había subrayado, sobre todo en una declaración al Consejo reunido en su 20º período de sesiones, que toda la política, los antecedentes y realizaciones y la conducta tradicional de la Autoridad Administradora, así como las disposiciones de la Carta y del Acuerdo de Administración Fiduciaria, eran garantía de que la evolución del Territorio hacia el gobierno propio o la independencia sería democrática. La Misión Visitadora de 1957 comunicó ulteriormente que muchos africanos abrigan dudas respecto al futuro del sistema multirracial y habían pedido que la Autoridad Administradora declarara que el Territorio llegaría a ser un Estado democrático fundamentalmente africano. Convencida de que la política de la Autoridad Administradora, descrita ante el Consejo, armonizaba con este objetivo, la Misión encareció que se adoptaran las medidas posibles para informar a la población sobre tal política.

La Autoridad Administradora aseguró al Consejo, en su 21º período de sesiones, que siempre había dado la mayor publicidad a su política y que continuaría dándosela. Señaló a la atención del Consejo, especial-

mente, la reciente declaración del Gobernador sobre lo que la Autoridad Administradora consideraba su deber: preparar al Territorio lo mejor y más pronto posible para el gobierno propio en cumplimiento de los objetivos del régimen de administración fiduciaria. El Consejo acogió con satisfacción esta nueva declaración e instó a la Autoridad Administradora a que estudiara nuevos métodos para informar a todos los grupos de la población del significado de su política e intenciones en términos fácilmente comprensibles.

Sobre la cuestión de representación en el Consejo Legislativo, compuesto de igual número de representantes africanos asiáticos y europeos, el Consejo de Administración Fiduciaria había expresado previamente la esperanza de que aumentara la representación de africanos. En vista de ello y de que la Misión Visitadora había comunicado la existencia de gran oposición al sistema paritario, el Consejo acogió con satisfacción el anuncio de que se establecería un comité de revisión constitucional después de las elecciones de septiembre de 1959, y se le autorizaría para estudiar este asunto. Dichas elecciones se celebrarían bajo el sistema paritario y cada votante deberá, en el caso relativo a puestos vacantes, votar a favor de tres candidatos, uno de cada raza. La oposición de los africanos a esta disposición, y además al carácter restrictivo de los requisitos para votar, fué comunicada por la Misión al Consejo, que, no obstante, tomó nota de las explicaciones de la Autoridad Administradora, al efecto de que las elecciones constituirían *inter alia* un experimento y que cualquier modificación de las disposiciones vigentes causaría demoras poco deseables.

El Consejo tomó nota con interés del mejoramiento general del desarrollo económico del Territorio y, sobre todo, del continuo aumento de la productividad agrícola africana. Al comentar varios aspectos económicos, el Consejo expresó la esperanza de que la aplicación de una nueva política de tenencia de tierras de africanos, entonces en perspectiva, conduciría a una transformación progresiva de las formas tradicionales de tenencia, expresó confianza en que la Autoridad Administradora continuaría una política cautelosa respecto a la enajenación de tierras; propuso que se interesara a las compañías industriales mineras y comerciales en la preparación de africanos para puestos administrativos y que se les asociara en la medida de lo posible a las empresas; y expresó satisfacción por la iniciación de negociaciones que quizá resultaran en la visita de una misión del Banco Internacional al Territorio.

Al observar el rápido desarrollo del movimiento sindical en el Territorio, el Consejo elogió a la Autoridad Administradora por tratar de facilitar la formación de dirigentes sindicales. Respecto a cuestiones de enseñanza, se interesó nuevamente en la conveniencia de unificar el sistema docente, subdividido ahora en distintos grupos raciales, y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora daría muestras de mayor energía e implantaría la enseñanza interracial lo más pronto posible.

c) RUANDA URUNDI

El Consejo de Administración Fiduciaria, en su 21º período de sesiones, elogió a la Autoridad Administradora y a la población de Ruanda Urundi (calculada en 4.490.000 en 1956), por los importantes resultados logrados, y expresó la opinión de que el Territorio había llegado al punto decisivo de su evolución. Reiteró la opinión de la Misión Visitadora de 1957 de que el Territorio estaba en situación de asimilar cada vez más

reformas trascendentales, y expresó la esperanza de que la transición hacia el establecimiento de instituciones democráticas se inspiraría en la Carta.

Entre sus observaciones particulares, el Consejo tomó nota con satisfacción de que el órgano territorial consultivo llamado Consejo del Vicegobernador General se había transformado en Consejo General y de que el funcionamiento era excelente, lo que a su juicio constituía un cambio muy alentador. Esperaba que la Autoridad Administradora y la población, en estrecha cooperación, ampliarían aún más la esfera y responsabilidad de los poderes legislativo y ejecutivo. El Consejo hizo suya la recomendación de la Misión Visitadora de que las nuevas reformas debían tender a aumentar el número de elecciones por sufragio universal; investir a las autoridades y consejos locales de mayores responsabilidades; integrar gradualmente las administraciones europea e indígena. Especialmente el Consejo recomendó que la Autoridad Administradora continuara aumentando la representación de la población indígena en el Consejo General; que le confiriera gradualmente poderes legislativos para que este órgano pudiera transformarse oportunamente en legislatura; y que se estableciera una delegación del Consejo General como órgano asesor que celebrara consultas con la Administración.

El Consejo consideró que Ruanda Urundi era fundamentalmente pobre, que tenía exceso de población y exceso de ganado improductivo y que su único producto de exportación verdaderamente importante era el café. El Consejo de Administración Fiduciaria elogió los vigorosos esfuerzos de la Autoridad Administradora para dotar de equipo al Territorio. Señaló, sobre todo, las medidas adoptadas para reformar radicalmente el sistema de posesión de ganado y tenencia de tierras; para aumentar la producción de cultivos comestibles, café y otros cultivos lucrativos; y, para promover la industrialización, explorando depósitos minerales y desarrollando la energía hidroeléctrica.

El Consejo tomó nota de que la mayoría de las restricciones impuestas en el pasado al movimiento de indígenas, sobre cuya abolición se venía insistiendo desde hace tiempo, habían sido anuladas recientemente. También tomó nota de ciertas ordenanzas laborales relativas al derecho de asociación, a la solución de conflictos y a la creación de un plan de pensiones, y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora implantara otras medidas para proteger los intereses de los trabajadores. Tomando nota con satisfacción del trabajo realizado, tanto en medicina curativa como preventiva, instó a la Autoridad Administradora a continuar mejorando los servicios de formación de personal médico. El Consejo expresó también satisfacción por el aumento en el presupuesto de educación aunque tomó nota de la opinión de la Misión Visitadora de que la expansión de la enseñanza primaria era aún una tarea enorme, sobre todo en el caso de las niñas, y de que los servicios de educación secundaria, pese al progreso considerable de años recientes, estaban lejos de ser adecuados.

3) Territorios en fideicomiso del Pacífico

a) SAMOA OCCIDENTAL

Samoa Occidental, que es el más adelantado de los Territorios en fideicomiso del Océano Pacífico, está poniendo en práctica en la actualidad el programa acordado de reformas constitucionales encaminadas a instituir para 1960 un sistema de gobierno parlamentario

a base de un gabinete ministerial responsable. La primera etapa de dichas reformas, de la cual tomó nota con satisfacción el Consejo de Administración Fiduciaria en su 20° período de sesiones, fué la de encargar a los miembros elegidos del Consejo Ejecutivo, así como a los miembros funcionarios del mismo, la gestión administrativa de ciertos departamentos gubernamentales, a lo que seguirá, cuando se establezca el nuevo órgano legislativo a fines de 1957, la transformación de este Consejo en un Consejo de Ministros presidido por el Alto Comisionado. El Consejo de Administración Fiduciaria expresó su confianza en que la tercera etapa de las reformas — es decir, la institución de un régimen parlamentario de gabinete en el que habrá un Primer Ministro que presidirá el Consejo de Ministros y orientará la gestión parlamentaria — será llevada a cabo dentro del plazo previsto. La siguiente etapa de importancia será la de atribuir un nuevo carácter al representante de Nueva Zelandia y hacer que el Jefe del Estado asuma los poderes y funciones propios de su cargo; el Consejo tomó nota de que ulteriormente el nuevo Gobierno de Samoa Occidental y el Gobierno de Nueva Zelandia celebrarán negociaciones acerca de la fecha en que habrá de ponerse en práctica esta etapa.

Uno de los aspectos de este plan cronológico de la reforma constitucional de carácter progresista que ha retenido la atención del Consejo de Administración Fiduciaria, es el de que la representación en los órganos que se crearán con arreglo a la reforma no se basa en el sufragio universal sino en el sistema de sufragio de los *matais* (jefes de amplios grupos familiares), atendiendo a los deseos de los propios dirigentes samoanos. El Consejo reiteró su esperanza de que el pueblo samoano llegará a aceptar el régimen del sufragio universal y tomó nota de que ya se estaba discutiendo por lo menos la posibilidad de adoptar disposiciones legales con miras a instituir ese régimen de sufragio.

La evidente necesidad de aumentar la producción agrícola y diversificar la economía en general ha llevado al Consejo en ocasiones anteriores a manifestarse a favor de formular un plan global de desarrollo económico a largo plazo para el Territorio, y en su 20° período de sesiones reiteró una recomendación en tal sentido. El crecimiento del movimiento cooperativista en el Territorio es un ejemplo concreto del interés de los samoanos por el desarrollo económico, por lo cual el Consejo felicitó tanto a la Autoridad Administradora como al pueblo samoano por el progreso realizado en este campo. En otras observaciones y recomendaciones, el Consejo volvió a señalar que era necesario promulgar una legislación laboral, si bien acogió con satisfacción ciertas medidas adoptadas en esta materia, tomó nota con satisfacción de que habían mejorado los servicios de sanidad para la población y felicitó a la Autoridad Administradora por los progresos realizados en el Territorio en materia de educación.

b) NUEVA GUINEA

En su 20° período de sesiones, el Consejo tomó nota con satisfacción de que en Nueva Guinea se había extendido aún más la Autoridad de la Administración y de que se había aprobado un programa para completar el traspaso de autoridad para 1959. Ha continuado el progreso político de los habitantes indígenas — cuyo número se calcula en 1.250.000 aproximadamente — en particular en el plano local; el número de aldeas que cuentan con consejos de gobierno local ha aumentado hasta 150, con unos 31.100 habitantes. El Consejo tomó nota con satisfacción del progreso que

entrañaba dicho aumento y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora seguiría estableciendo consejos de gobierno local en otras regiones del Territorio. También expresó la esperanza de que en un porvenir próximo aumentaría la representación de la población indígena en el Consejo Legislativo para Papua y Nueva Guinea, del que entonces eran miembros sólo dos indígenas del Territorio.

La Autoridad Administradora tiene que aportar anualmente una importante suma al presupuesto del Territorio, que no cuenta con otros ingresos principales aparte de los procedentes de los aranceles de importación y exportación. El Consejo había sugerido anteriormente que se implantara la tributación directa como medio de aumentar los ingresos locales, y en su 20° período de sesiones tomó nota de que se estaba estudiando la cuestión. También expresó su satisfacción en cuanto a otros aspectos del desarrollo económico. En materia social, el Consejo continuaba abrigando dudas acerca de la necesidad de mantener las restricciones a la libre circulación de los indígenas durante la noche en las zonas urbanas. Observó con satisfacción que se habían efectuado gastos apreciables con destino a los servicios de sanidad y la construcción de hospitales, e igualmente expresó satisfacción por las medidas adoptadas para elevar el nivel de la enseñanza en las escuelas de las misiones, y por el notable aumento en el número de alumnos matriculados en las escuelas.

c) NAURU

Cuando el Consejo estudió en su 20° período de sesiones el asunto del destino de la pequeña población indígena de la isla de Nauru al agotarse los depósitos de fosfatos dentro de un plazo aproximado de 40 años, la cuestión seguía sin resolverse. Continúa examinándose la posibilidad de evacuar a la población a alguna otra región, y se ha creado una comisión especial del Consejo de Administración Local de Nauru. El Consejo de Administración Fiduciaria recomendó a la Autoridad Administradora que continuara sus esfuerzos para encontrar una solución práctica y que sometiera al Consejo propuestas concretas para resolver el problema de acuerdo con los deseos de la población y en conformidad con las disposiciones de la Carta y del Acuerdo de Administración Fiduciaria.

Mientras tanto, el Consejo recomendó a la Autoridad Administradora que continuara alentando al Consejo de Administración Local de Nauru a que utilizara más sus facultades, que son de carácter legislativo con respecto al gobierno local pero que sólo son consultivas en la esfera territorial; la Autoridad Administradora manifestó que consideraría la posibilidad de concederle nuevos poderes a medida de que dicho órgano hiciera mayor uso de sus facultades actuales. En la rama administrativa y de dirección, así como en la industria de extracción del fosfato, todos los cargos principales, salvo uno en la administración, todavía estaban en manos de personas no indígenas. Por lo tanto el Consejo recomendó a la Autoridad Administradora que continuara sus esfuerzos para desarrollar y poner en práctica los planes de formación.

Aunque la economía del Territorio continuaba dependiendo totalmente de las exportaciones del fosfato, se estaba haciendo lo posible para desarrollar la industria de la pesca y para localizar aguas subterráneas para la agricultura. El Consejo expresó la esperanza de que estos trabajos proseguirían activamente. También reiteró su deseo, expresado hace mucho tiempo, de recibir información más completa sobre las actividades

de los Comisionados Británicos del Fosfato. Otras de las observaciones y recomendaciones aprobadas por el Consejo se referían a la necesidad de mejorar aún más las condiciones de trabajo y a los progresos satisfactorios logrados en proporcionar casas para los nauruanos y en el fomento de la sanidad y de la educación.

d) TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

En su informe al Consejo de Seguridad sobre las condiciones existentes en el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, considerado zona estratégica, el Consejo de Administración Fiduciaria elogiaba tanto a la Autoridad Administradora como a la población micronesia (aproximadamente 65.000 habitantes) por el progreso general alcanzado en el período anterior a su 20° período de sesiones.

Volvió a ser motivo de estudio la situación de los varios grupos indígenas desalojados de sus hogares en las islas a causa de los experimentos con armas nucleares. El Consejo tomó nota con satisfacción de que la población de Rongelap, que había sufrido efectos nocivos a consecuencia de los experimentos de 1954, sería reintegrada a su isla próximamente, y también de

que se había logrado un acuerdo para indemnizar a la población desalojada de Bikini y Eniwetok en 1946-1947.

En 1956 se celebró una conferencia a la que fueron invitados los dirigentes elegidos de las comunidades de las islas sumamente dispersas, y en 1957 debía haberse celebrado una conferencia análoga. El Consejo expresó su satisfacción por estos acontecimientos, y manifestó la esperanza de que la celebración de tales reuniones con la mayor frecuencia posible constituiría un paso importante para fomentar la conciencia territorial de la población. También elogió la labor de los municipios, que constituían la unidad básica del gobierno local, y los esfuerzos que realizaba la Autoridad Administradora a fin de ampliar las atribuciones de dichos municipios y de mejorarlas por otros medios. Reiteró la esperanza de que la sede de la Administración se trasladara de la Isla de Guam a algún lugar situado en el propio Territorio.

En el campo económico, el Consejo tomó nota con satisfacción de los esfuerzos que realizaba la Autoridad Administradora para crear granjas experimentales y de demostración y para contratar nuevos agrónomos. El Consejo elogió también los progresos realizados en cuestiones de sanidad y de educación.

B. TERRITORIOS NO AUTONOMOS

1. Transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta

Durante el período que se examina se transmitió información sobre 55 territorios, en comparación con 58 territorios el año anterior. Esto se debió a: la independencia de Ghana y de la Federación Malaya; a la falta de información sobre dos territorios; a que por primera vez se envió información sobre las islas de los Cocos, administrada por Australia desde el 23 de noviembre de 1955 (anteriormente las islas eran administradas como parte de Singapur).

Como en años anteriores, la mayoría de los Estados Miembros que transmiten información utilizó como guía el Formulario revisado que la Asamblea General aprobó en su resolución 551 (VI) y enmendó por resolución 930 (X). Además, varios Estados Miembros también transmitieron información voluntariamente utilizando el Formulario revisado (Gobierno), de acuerdo con las resoluciones 144 (II), 327 (IV) y 848 (IX).

Con arreglo a la resolución 218 (III) el Secretario General preparó para el duodécimo y para el décimo-tercer período de sesiones de la Asamblea General dos series de resúmenes acerca de las condiciones existentes en los territorios no autónomos sobre los cuales recibió información relativa al año civil 1955 o al año administrativo 1955-1956, y al año civil 1956 o al año administrativo 1956-1957, respectivamente. La primera serie de dichos resúmenes, que contiene un análisis de determinados aspectos de las condiciones económicas, fué sometida a la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos en su octavo período de sesiones de julio-agosto de 1957, y la segunda, que contiene un análisis de los diferentes aspectos de las condiciones sociales, fué presentada a la Comisión en su noveno período de sesiones, en abril-mayo de 1958. En ambos períodos de sesiones, varios Estados Miembros asignaron consejeros especialistas a sus delegaciones,

conforme a las resoluciones de la Asamblea General 745 (VIII) y 933 (X).

2. Examen de la información transmitida

a) INFORMACIÓN GENERAL

A petición de la Asamblea General en su undécimo período de sesiones (resolución 1052 (XI)), el Secretario General presentó a la Asamblea en su duodécimo período de sesiones un informe en el que se comparaba el costo de los diversos medios de reproducción de los resúmenes de información. El informe decía que, aunque el sistema de reproducción de los fascículos por el procedimiento *offset* (que se había propuesto para reemplazar a la edición impresa en dos años de cada tres) no se había aplicado todavía lo suficiente como para poder emitir un juicio definitivo, debiera permitir una mejor distribución de la información, y que las demoras que se habían producido podrían desaparecer el año siguiente, cuando probablemente se contaría con más elementos para que la Asamblea pudiera llegar a una opinión definitiva. En el duodécimo período de sesiones la Cuarta Comisión decidió aplazar el estudio de la cuestión.

El problema de las demoras en la transmisión de información por parte de algunos Estados Miembros administradores se planteó tanto en el octavo como en el noveno período de sesiones de la Comisión para la Información, y se expresó la esperanza de que los Miembros harían lo posible para cumplir con lo dispuesto en la resolución 218 (III).

Debido a la expiración del mandato del Perú, la Cuarta Comisión, en nombre de la Asamblea General, en el curso del duodécimo período de sesiones eligió a Brasil como miembro de la Comisión para la Información por un período de tres años.

Con arreglo a la resolución 933 (X) aprobada por la Asamblea General la Comisión en su noveno período

de sesiones estudió la cuestión de su reconstitución. La Comisión recomendó a la Asamblea un proyecto de resolución en virtud del cual: 1) la Comisión seguiría existiendo por un período de tres años en las mismas condiciones y con la misma composición y atribuciones que las establecidas en las resoluciones 332 (IV), 646 (VII) y 933 (X), de 2 de diciembre de 1949, 10 de diciembre de 1952 y 8 de noviembre de 1955, respectivamente; 2) se invitaría a los miembros de la Comisión a que siguieran adscribiendo a sus delegaciones a personas con conocimientos especiales en los campos técnicos y de la competencia de la Comisión; y 3) se invitaría a los Estados Miembros a que adscribieran a sus delegaciones a personas indígenas especialmente calificadas para hablar sobre la política seguida en materia económica, social y educativa en los territorios no autónomos.

b) CONDICIONES ECONÓMICAS

Conforme al programa de trabajo establecido en la resolución 333 (IV) aprobada por la Asamblea General el 2 de diciembre de 1949, y confirmada por la resolución 933 (X), la Comisión para la Información prestó especial atención, en su octavo período de sesiones, a la situación económica de los territorios no autónomos. Se sometió a la consideración de la Comisión un informe especial sobre las condiciones económicas, preparado por una subcomisión compuesta de ~~Céleán, China, los~~ Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, India, los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En el informe especial la Comisión estudió la información sometida a su consideración teniendo en cuenta los principios generales contenidos, en su anterior informe especial sobre las condiciones económicas, presentado en 1954. En dicho informe se afirmaba que la finalidad fundamental de la política económica en los territorios no autónomos debía ser desarrollar dichos territorios en interés de todos los sectores de la población; elevar el nivel de vida mediante el aumento real del poder adquisitivo individual y aumentar la riqueza total de cada territorio para hacer posible un nivel más elevado en los servicios sociales y en la administración. La Comisión tomó nota de que la política económica, tal como había sido expuesta en declaraciones hechas en nombre de los Estados Miembros administradores, seguía respondiendo a los objetivos derivados de esta finalidad fundamental, tal como había sido definida en 1954 por la Comisión.

En general, las condiciones económicas de los territorios no autónomos habían seguido evolucionando conforme a las tendencias observadas después de la guerra. Aunque no se habían producido cambios estructurales notables, se había avanzado más hacia una economía monetaria. Se habían continuado y ampliado los planes de desarrollo a largo plazo, cuyo objetivo no era tanto hacer una contribución financiera a programas convenientes como poner en marcha un proceso de fomento equilibrado basado en investigaciones científicas y con ayuda material y técnica. Las autoridades locales y los habitantes indígenas tuvieron mayor participación en la planificación y en la puesta en práctica de los programas de desarrollo. A juicio de la Comisión, la industrialización no debía considerarse como un fin en sí, sino como uno de los medios de aumentar los ingresos y elevar el nivel de vida de la población. La industrialización no modificaría en un futuro inmediato la economía básica de la mayor parte de los territorios y el adelanto rural seguiría siendo la clave de su inte-

gración económica y de la estabilidad nacional. Por lo tanto, los gobiernos deberían seguir fomentando la diversificación agrícola y la producción de alimentos de mayor valor nutritivo. Además, la Comisión señaló que el desarrollo económico se había de buscar como parte integrante de un programa general de acción, y sugirió que el progreso económico debería fomentarse haciendo el máximo uso posible de los elementos de la sociedad tradicional que pudieran adaptarse a los nuevos fines. El desarrollo de las sociedades cooperativas, estrechamente vinculadas a las necesidades básicas de los pueblos, debería ser un importante factor de progreso social y preparar al pueblo para la transición a la economía moderna. El desarrollo de la comunidad era otra esfera de la actividad económica y social combinada muy prometedora. La Comisión tomó nota de que este movimiento, así como los sistemas de *paysannat*, proporcionaba muchísimos incentivos sociales al esfuerzo económico y hacía que los pequeños objetivos económicos quedasen subordinados a propósitos y objetivos sociales de mayor amplitud. Por último, la Comisión opinó que la evolución satisfactoria de una sociedad en vías de transformación dependía en gran medida de la colaboración de las Autoridades Administradoras con los elementos representativos de la población, y de la formación de dirigentes en la mayor escala posible.

En el duodécimo período de sesiones de la Asamblea, la Cuarta Comisión discutió el informe especial de la Comisión para la Información sobre territorios no autónomos relativo a las condiciones económicas, que fué aprobado por la Asamblea General en su resolución 1152 (XII) del 26 de noviembre de 1957, como complemento a los informes aprobados en 1951 y 1954.

Durante el examen de las condiciones económicas en el octavo período de sesiones de la Comisión para la Información, algunos miembros se refirieron al Tratado relativo a la Comunidad Económica Europea y propusieron que la Comisión estudiase su posible repercusión sobre las economías de los territorios no autónomos. La Comisión decidió que se distribuyese un documento con las disposiciones del Tratado por el que se establecía la Comunidad Económica Europea y las disposiciones del Convenio de Aplicación relativo a la asociación de los territorios no autónomos. Varios miembros expresaron sus temores acerca de la integración de los territorios no autónomos en la Comunidad Económica Europea y propusieron que esta cuestión se debería estudiar con más detenimiento. Los miembros que participaban en la Comunidad Económica Europea opinaron que el asunto no podía ofrecer un interés inmediato para la Comisión porque la Comunidad no se establecería hasta 1958. También expresaron su convicción de que los territorios asociados con la comunidad obtendrían importantes beneficios.

La cuestión fué discutida por la Cuarta Comisión cuando estudió el informe de la Comisión para la Información, en el duodécimo período de sesiones de la Asamblea. El representante de Francia, hablando también en nombre de los Estados signatarios del Tratado que establecía la Comunidad Económica Europea, reservó la posición de los Estados participantes con respecto a un debate sobre este asunto en el duodécimo período de sesiones. Muchos Miembros hicieron referencia a las posibles repercusiones que tendría sobre el desarrollo económico de los territorios no autónomos su asociación con la Comunidad, conforme a lo dispuesto en el Tratado y en el Convenio de Aplicación.

En la Cuarta Comisión se discutió un proyecto de resolución presentado por 18 Potencias; en su forma

revisada disponía que la Asamblea: 1) invitaría a los Estados Miembros administradores interesados a transmitir al Secretario General, de conformidad con el inciso e del Artículo 73 de la Carta, información sobre la asociación de los territorios no autónomos que ellos administraban, con la Comunidad Económica Europea; 2) pediría al Secretario General que preparase para el próximo período de sesiones de la Asamblea un informe sobre los acontecimientos relacionados con la asociación de territorios no autónomos con la Comunidad Económica Europea tomando en cuenta los estudios que pudieran efectuar al respecto el Consejo Económico y Social, la Comisión Económica para Europa, la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, la Comisión Económica para América Latina y otros órganos internacionales, en la medida en que esos estudios se refirieran al desarrollo económico de los territorios no autónomos; y 3) decidiría reanudar el examen de esta cuestión en su décimotercer período de sesiones.

El proyecto de resolución fué aprobado por la Cuarta Comisión y adoptado por la Asamblea General el 26 de noviembre de 1957 en su resolución 1153 (XII).

c) CONDICIONES SOCIALES

Durante su estudio de las condiciones económicas, la Comisión para la Información, en su octavo período de sesiones, opinó que uno de los temas especiales era el de los aspectos sociales del desarrollo económico, y se insistió en la relación existente entre los problemas del desarrollo económico y los del desarrollo social.

En su noveno período de sesiones la Comisión dedicó especial atención a las condiciones sociales. Con arreglo al programa de estudios aprobado por la Comisión en su anterior período de sesiones, la Secretaría de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud habían preparado varios estudios especiales relativos a los problemas de la familia y de la comunidad examinados dentro del cuadro de las transformaciones económicas y sociales y en relación con aspectos más amplios de la sanidad pública.

Una Subcomisión compuesta de Ceilán, China, los Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, India, los Países Bajos y el Reino Unido preparó, para estudio de la Comisión, un informe especial acerca de las condiciones sociales, que será presentado a la Asamblea General en su décimotercer período de sesiones. En este informe la Comisión reafirmaba el concepto fundamental de desarrollo social adoptado en 1955. En el informe se manifestaba que debería hacerse hincapié en la coordinación de los servicios para el desarrollo económico, social y educativo. El mejor medio de lograr un progreso constante era que los pueblos de los territorios no autónomos participaran plenamente en la formulación de políticas económicas y en la planificación y aplicación de programas de desarrollo. Las responsabilidades de los gobiernos iban más allá del desarrollo de los recursos económicos; era asimismo importante desarrollar los recursos humanos y dirigir las fuerzas y los métodos de transformación. En este concepto, el desarrollo de la comunidad debía desempeñar una función de importancia primordial, y la Comisión tomó nota con satisfacción de que en muchas regiones se estaban tomando medidas para propagar el movimiento de desarrollo de la comunidad. La Comisión opinó que, debido al rápido crecimiento de la

urbanización en los territorios no autónomos, la pre-ocupación de la política social debía cifrarse en la creación de las condiciones indispensables para que ese crecimiento fuese equilibrado. Un requisito previo era la estabilización de la población urbana, fenómeno que podía facilitarse con el mejoramiento de las condiciones materiales de la vida urbana, la concesión de salarios suficientes para mantener a la familia y la implantación de medidas adecuadas de seguridad y bienestar sociales. La delincuencia de menores era uno de los problemas originados por la rápida urbanización; la Comisión opinó que las medidas destinadas a eliminar y prevenir la delincuencia de menores quizás resultasen insuficientes a la larga para lograr el propósito previsto, a menos que fuesen adoptadas como parte de un programa planificado que incluyera la adopción de diversas medidas de carácter social y económico que tuvieran como objetivo fortalecer a la familia como unidad básica de la sociedad.

La Comisión examinó también algunos de los problemas relativos a la tenencia de tierras. Tomó nota de que en los territorios no autónomos la tierra era la fuente de riqueza fundamental de las comunidades indígenas; e insistió en que la legislación y la política en materia agraria debían tener en cuenta todos los factores sociales, económicos y políticos, pues de otro modo podría fracasar la modernización de los sistemas existentes. Los Gobiernos deberían fijar la pauta para poner en práctica una reorganización básica del régimen de tenencia de tierras mediante una legislación que debería incluir disposiciones apropiadas para remediar los defectos más comunes de las formas de tenencia individual en una economía de intercambio. La Comisión opinó que, en vista del rápido aumento de la población, debía procederse con especial cuidado al efectuar futuras enajenaciones de tierras de los indígenas.

Con respecto a sanidad y nutrición, la Comisión reiteró lo ya expuesto en el sentido de que había que mejorar la compilación de datos estadísticos. Al parecer las condiciones sanitarias mejoraban constantemente, pero seguía siendo considerable la incidencia de las enfermedades transmisibles. La Comisión subrayó la importancia del saneamiento. La formación profesional del personal indígena era esencial para la ampliación de los servicios sanitarios. Había aumentado el número de hospitales y de camas, pero había que ampliar los servicios sanitarios en muchos territorios. El buen comienzo de los servicios de maternidad había puesto de relieve la falta urgente de pediatras. Se habían hecho progresos apreciables en el estudio de los problemas de la nutrición deficiente y en las medidas adecuadas para combatirlos, pero era evidente que todavía quedaba mucho por hacer. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia había prestado asistencia en la higiene materno-infantil, en la nutrición y en las campañas de lucha contra las enfermedades que atacan a los niños. La educación sanitaria era un problema de importancia capital y a este respecto se insistió en el posible papel que podrían desempeñar las escuelas y el movimiento de desarrollo de la comunidad. La Organización Mundial de la Salud ofreció ayuda para realizar los estudios sobre planificación general que se efectúen en dos o tres territorios no autónomos no muy extensos. La Comisión tomó nota de que la tasa de fecundidad aventajaba cada vez más a la tasa de mortalidad, con lo que se corría el peligro de que el crecimiento de la población excediera con mucho de los aumentos logrados en la producción.

Al estudiar la materia de las relaciones raciales la Comisión reiteró su opinión de que los medios eficaces de eliminar los prejuicios raciales y de establecer relaciones raciales armónicas deberían buscarse en la legislación, las prácticas administrativas, la educación, así como en una opinión pública bien informada. Apoyó la declaración de la Comisión de Expertos en Política Social en los Territorios no Metropolitanos de la OIT, que en 1957 manifestó que si se deseaba que el desarrollo social no entrañara conflictos entre los diferentes elementos de las colectividades de ese continente sería necesario aplicar medidas prácticas para hacer desaparecer la discriminación. La Comisión tomó nota de que en la 42a. sesión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo se discutiría un proyecto de convenio y un proyecto de recomendación sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, y un proyecto de resolución relativo a la aplicación del Convenio propuesto en los territorios no metropolitanos.

En su informe especial la Comisión tomó también nota de otros asuntos entre los que figuraban los siguientes: la importancia creciente del movimiento sindical en los territorios no autónomos y su tendencia hacia la consolidación; un aumento en el número de los conflictos entre empleadores y obreros resueltos por varias formas de negociación; y la necesidad de dedicar atención especial a la construcción de viviendas para los trabajadores.

d) SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Puesto que la Comisión, en sus octavo y noveno periodos de sesiones, se ocupó principalmente de las condiciones económicas y de las condiciones sociales respectivamente, sólo examinó brevemente la situación de la enseñanza. En su noveno período de sesiones estudió la cuestión de la información para las masas. Señaló que en 1959, sin perjuicio de lo que pudiera decidir la Asamblea General acerca de la prórroga del mandato de la Comisión, los resúmenes informativos del Secretario General sobre los Territorios no Autónomos deberían conceder de nuevo atención preferente a los problemas de la enseñanza.

3. Cuestiones generales relativas a la transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta

CUESTIÓN DERIVADA DE LA CARTA DEL SECRETARIO GENERAL DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 1956

A raíz de la admisión en las Naciones Unidas de 16 nuevos Miembros, en diciembre de 1955, el Secretario General envió una comunicación a cada uno de ellos el 24 de febrero de 1956, señalando a su atención el Capítulo XI de la Carta e invitándoles a que, en el caso de ser responsables por la administración de algunos de los Territorios mencionados en el Artículo 73, lo pusieran en su conocimiento. Se dirigieron preguntas parecidas, a raíz de su admisión, al Japón, Marruecos, Sudán, Túnez, Ghana y a la Federación de Malaya.

Desde el informe anterior se recibieron respuestas de España, del Japón, de Ghana y de la Federación de Malaya. España comunicó al Secretario General que tenía en estudio una respuesta cuyos términos se ajustarían al espíritu de la Carta. Los otros tres Estados Miembros manifestaron que no tenían a su cargo la

administración de ninguno de los mencionados Territorios.

En el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General se señaló a la atención de la Cuarta Comisión la respuesta del Japón. Igual que en los anteriores periodos de sesiones, surgió el debate acerca de la competencia de la Asamblea para interpretar la aplicación del Capítulo XI de la Carta. Por una parte se sostuvo que la Carta era un tratado multilateral y que las obligaciones que imponía el Capítulo XI eran de naturaleza idéntica a las otras obligaciones asumidas por los Estados Miembros al ser admitidos en las Naciones Unidas. Por lo tanto, la Asamblea General tenía competencia para decidir acerca de los Territorios sobre los que debería transmitirse información. Esta competencia se derivaba del Artículo 10 de la Carta y se había reafirmado en las resoluciones de la Asamblea General 222 (III) de 3 de noviembre de 1948, 334 (IV) de 2 de diciembre de 1949 y 742 (VIII) de 27 de noviembre de 1953. Por otra parte se declaró que el examen de la situación constitucional de los Estados Miembros de las Naciones Unidas sería contrario al párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. Puesto que el inciso e del Artículo 73 de la Carta disponía la transmisión de información dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requirieran, sólo los Estados Miembros tenían el poder de determinar, de acuerdo con sus propias constituciones, si debiera transmitirse o no la información.

En vista de las divergencias de opinión acerca de la aplicación del Capítulo XI, se propuso que la Asamblea General estableciera un comité para examinar la cuestión relativa a la transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73, y para estudiar un resumen, preparado por el Secretario General, de las opiniones consignadas en las respuestas de los Estados Miembros a las comunicaciones del Secretario General relativas a la transmisión de información, en los correspondientes debates realizados, en las sesiones plenarias de la Asamblea General o en las Comisiones competentes, y en los estudios pertinentes sobre la interpretación de la Carta. La Cuarta Comisión aprobó un proyecto de resolución presentado al respecto, por 17 Potencias por 42 votos contra 27 y 8 abstenciones. En la sesión plenaria de la Asamblea General celebrada el 26 de noviembre de 1957 se expresó la opinión de que la cuestión era "cuestión importante" según las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 18 de la Carta y que por lo tanto debería decidirse por mayoría de dos tercios. La Asamblea General aceptó esta opinión. El proyecto de resolución recibió 41 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones; fué desechado por no haber alcanzado la mayoría de dos tercios.

4. La cuestión del procedimiento de votación en la Asamblea General en los asuntos relativos a territorios no autónomos

En el debate general sobre territorios no autónomos que tuvo lugar en la Cuarta Comisión en el duodécimo período de sesiones, Costa Rica, Grecia, Irak, Marruecos, México y Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución proponiendo que la Asamblea General pidiera a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre el procedimiento de votación aplicable en los asuntos relativos a territorios no autónomos. En la versión modificada de acuerdo con los patrocinadores, y aprobada por la Cuarta Comisión, la resolución pedía a la Sexta Comisión que considerase las cuestiones

siguientes: a) ¿Cuál era la mayoría de votación aplicable a las resoluciones de la Asamblea General sobre asuntos relativos a territorios no autónomos? y b) Considerando que los asuntos relativos a territorios no autónomos no estaban enumerados en el párrafo 2 del Artículo 18, ¿sería procedente en los términos de la Carta someter a un voto de dos tercios una resolución sobre territorios no autónomos si no se ha establecido de antemano una categoría a tal efecto para los territorios no autónomos en los términos del párrafo 3 del Artículo 18? Cuando la Sexta Comisión estudió el asunto, hubo un debate acerca de su competencia en la materia. Mientras tanto, la Asamblea General en una sesión plenaria tomó una decisión sobre el tema que comprendía a la cuestión planteada ante la Sexta Comisión (véase la sección 3 *supra*). Se informó a la Cuarta Comisión de que, puesto que el tema de los territorios no autónomos no se hallaba ya sometido a la Asamblea General, la Sexta Comisión opinaba que no era oportuno contestar a la petición de la Cuarta Comisión en el presente período de sesiones.

5. Información sobre el progreso alcanzado por los territorios no autónomos

Conforme a la resolución 1053 (XI) de 20 de febrero de 1957, el Secretario General dió cuenta a la Comisión para la Información, en sus octavo y noveno períodos de sesiones, de las medidas adoptadas en la preparación del informe sobre el progreso alcanzado en los territorios no autónomos desde la creación de las Naciones Unidas. El informe constaría de tres partes principales. La introducción señalaría las tendencias generales existentes en los territorios, en conformidad con la información transmitida y los debates celebrados en la Asamblea General; la segunda parte consistiría de un análisis de los progresos realizados en las esferas económico-social y educativa; la tercera parte consistiría en resúmenes separados de la información transmitida sobre la situación de cada territorio, con referencia especial a los cambios ocurridos entre 1946 y 1956. Se llegó a un acuerdo con los organismos especializados interesados acerca de un programa provisional y acerca de la distribución de las diversas secciones del informe. Se propuso que, si se prorrogaba el mandato de la Comisión en las mismas condiciones, ésta concedería atención preferente en 1959 a la situación de la enseñanza, y examinaría también los resúmenes sobre la información transmitida, resúmenes que, en vez de un período de tres años, abarcarían todo el período transcurrido desde la creación de las Naciones Unidas. Se propuso que la primera y la segunda parte del informe se sometieran a la consideración de la Asamblea General en su décimocuarto período de sesiones.

6. Colaboración internacional para el progreso económico y social

a) COLABORACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA

En su octavo período de sesiones la Comisión para la Información estudió un informe del Secretario General sobre la colaboración internacional para el progreso económico, social y educativo en los territorios no autónomos, un informe sobre la asistencia técnica proporcionada a los territorios por las Naciones Unidas y por los organismos especializados, e informes sobre las actividades de la UNESCO y de la OMS preparados

por estas organizaciones. Los representantes de la FAO, de la OIT y de la UNESCO informaron también a la Comisión acerca de las actividades más recientes de sus organizaciones de interés para los territorios no autónomos.

El informe del Secretario General sobre la colaboración internacional resumía las decisiones del Consejo Económico y Social, de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, así como la cooperación científica y técnica alcanzada en el plano regional por medio de la Comisión de Cooperación Técnica en el África al Sur del Sahara, la Comisión del Caribe, la Comisión del Pacífico Meridional, la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente y el Plan Colombo.

El informe sobre asistencia técnica internacional hacía un resumen de los programas de asistencia que beneficiaron a los territorios no autónomos durante el período 1955-1957 encomendados a la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y a los organismos especializados, dentro de sus programas ordinario y ampliado, así como la ayuda facilitada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

También en su noveno período de sesiones, la Comisión para la Información estudió un informe del Secretario General relativo a la asistencia técnica internacional y los informes preparados por la UNESCO, por el UNICEF y por la OMS sobre sus actividades en los territorios no autónomos. Los representantes de la FAO, de la OIT y de la OMS hicieron varias exposiciones complementarias sobre las actividades de sus organizaciones en los territorios no autónomos.

Los Estados Miembros administradores expresaron su reconocimiento por la ayuda prestada a los territorios no autónomos por las Naciones Unidas, por el UNICEF, y por los organismos especializados, y facilitaron a la Comisión información adicional sobre las actividades de sus gobiernos dentro del marco de las organizaciones intergubernamentales.

Otros Estados Miembros comentaron el hecho de que si bien la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y los organismos especializados habían desarrollado nuevos programas, los gastos globales de asistencia a los territorios no autónomos habían sido menores que en el año anterior.

Se expresó la esperanza de que se pudiera prestar asistencia cada vez mayor a los territorios en establecer servicios de carácter duradero y programas integrados en los planes nacionales de desarrollo.

b) BECAS

En su octavo período de sesiones la Comisión para la Información estudió un informe del Secretario General dirigido a la Asamblea General, presentado de conformidad con la resolución 931 (X) de 8 de noviembre de 1955, relativo a las ofertas de facilidades de estudio y formación profesional, recibidas en virtud de la resolución 845 (IX), que invitaba a los Estados Miembros a facilitar becas a los habitantes de los territorios no autónomos.

Al 28 de enero de 1957 el Secretario General había recibido un total de 247 ofertas de becas, procedentes de 15 Estados Miembros. La mayoría de las becas eran para estudios de enseñanza superior. Se recibió un total de 123 solicitudes, la mayoría procedentes de territorios administrados por el Reino Unido. Se noti-

ficó al Secretario General de 14 concesiones hechas por los Estados que formularon las ofertas.

La Comisión recomendó un proyecto de resolución que, con algunos cambios de redacción, fué aprobado por la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones, el 26 de noviembre de 1957, en su resolución 1154 (XII). En esta resolución la Asamblea: 1) invitaba a los Estados Miembros a presentar observaciones sobre la idoneidad de los candidatos y a los Miembros que ofrecieran las facilidades a examinar las solicitudes con la mayor rapidez posible; 2) invitaba al Secretario General a prestar toda la ayuda que pudieran requerir los Estados Miembros interesados y los solicitantes; 3) invitaba a los Estados Miembros oferentes a informar al Secretario General acerca del uso que se hubiera hecho de las becas ofrecidas por ellos; y 4) pedía al Secretario General que en sus informes anuales a la Asamblea General incluyera información sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de dicha resolución.

En el duodécimo período de sesiones fué presentado un informe complementario poniendo al día el informe anterior. Contenía también información relativa a las becas ofrecidas por los Estados Miembros administradores. Al 1° de octubre de 1957 el Secretario General

había recibido ofertas por un total de 250 becas, de 16 Estados Miembros, de conformidad con la resolución 845 (IX). Los Estados que ofrecieron estas facilidades fueron: Birmania, Ceilán, Checoslovaquia, los Estados Unidos de América, Filipinas, Grecia, India, Irán, México, Polonia, Rumania, Tailandia, Túnez, Turquía, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

Se recibió un total de 140 solicitudes; se concedieron 21 becas y dejaron de concederse otras 17.

En el curso del debate en la Cuarta Comisión de la Asamblea, Israel anunció que también ofrecería becas según los términos de la resolución 845 (IX).

En el noveno período de sesiones de la Comisión para la Información algunos de los Estados Miembros administradores informaron detalladamente a la Comisión sobre las becas concedidas por los gobiernos a los habitantes de los territorios no autónomos, y el representante del Secretario General dió cuenta de las ofertas, solicitudes y concesiones de becas, según los términos de la resolución 845 (IX), comprendidas en el período entre el 2 de octubre de 1957 y el 6 de mayo de 1958. Durante este período se ofrecieron 10 becas, se recibieron 50 solicitudes y se concedieron 11 becas.

C. CUESTION DEL AFRICA SUDOCCIDENTAL

En el curso del año la Asamblea General trató de nuevo de conseguir un arreglo de la cuestión del Africa Sudoccidental.

En la resolución 1143 (XII) de 25 de octubre de 1957, la Asamblea, haciendo hincapié en la responsabilidad que incumbía a cada uno de los Estados Miembros de intentar la solución de los problemas internacionales, por todos los medios posibles de negociación y conciliación a su alcance, decidió establecer un Comité de Buenos Oficios para el Africa Sudoccidental formado por los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y un tercer Miembro (Brasil) designado por el Presidente para que estudiara con el Gobierno de la Unión Sudafricana "las bases de un acuerdo por el cual se siguiera confiriendo al territorio del Africa Sudoccidental una condición jurídica internacional". Se pidió al Comité que presentara a la Asamblea, en su décimotercer período de sesiones, un informe sobre sus actividades para consideración y decisión de la Asamblea, conforme a la Carta.

El Comité de Buenos Oficios celebró una serie de reuniones en Londres durante el mes de mayo, con objeto de realizar un estudio preliminar de su labor y de ponerse en comunicación con el Gobierno de la Unión. Este último invitó al Comité a ir a Pretoria para celebrar conversaciones a partir del 12 de junio de 1958.

En su duodécimo período de sesiones la Asamblea General adoptó varias medidas sobre el problema aprobando seis resoluciones el 25 de octubre de 1957. La Comisión del Africa Sudoccidental había presentado un cuarto informe anual que comprendía el estudio de las condiciones en el Territorio y de las peticiones en la medida en que había podido disponer de información. La Comisión había manifestado de nuevo su gran pre-

ocupación por las políticas y los sistemas de administración del Territorio. La Asamblea adoptó una resolución (1140 (XII)) aprobando este informe, y otras dos (1138 (XII) y 1139 (XII)) redactadas por la Comisión, relativas a las peticiones. En otra resolución (1142 A (XII)), felicitó a la Comisión del Africa Sudoccidental por el estudio realizado a petición de la Asamblea, y contenido en un informe especial, relativo a las acciones jurídicas que podían iniciarse por los órganos de las Naciones Unidas, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, o los antiguos miembros de la Sociedad de las Naciones. Después de señalar a la atención de los Estados Miembros la falta de presentación por la Unión Sudafricana de informes anuales, y las acciones jurídicas previstas en el artículo 7 del Mandato combinado con el Artículo 37 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea resolvió reanudar, en su décimotercer período de sesiones, el examen del informe especial. En la resolución 1142 B (XII), pidió a la Comisión que prosiguiera el examen de la cuestión de obtener opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia con respecto a la administración del Territorio, y que hiciera recomendaciones sobre los actos de la administración que conviniera someter a la consideración de la Corte para que ésta dictaminara si dichos actos eran o no compatibles con las disposiciones del artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, con las del Mandato y con las de la Carta.

En su resolución 1141 (XII), la Asamblea General reiteró la actitud adoptada ya en 1946 en el sentido de que el Territorio debería ser colocado bajo el régimen internacional de administración fiduciaria, afirmando que, en vista de las condiciones actuales de desarrollo político y económico del Territorio, éste sería el modo normal de modificar su situación jurídica.

Capítulo IV

ASUNTOS JURIDICOS

1. Corte Internacional de Justicia

a) COMPETENCIA DE LA CORTE

Aceptación de la jurisdicción obligatoria

Desde la presentación de la última Memoria anual, tres Estados que antes no habían reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia han depositado declaraciones aceptando dicha jurisdicción de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto.

Por declaración de 18 de julio de 1957, depositada en poder del Secretario General el 22 de julio de 1957, el Gobierno de Egipto reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte para todos los litigios que pudieran surgir, en virtud del inciso b) del párrafo 9 de la declaración hecha por dicho Gobierno el 24 de abril de 1957, en relación con el Canal de Suez y los arreglos concertados con miras a la explotación del mismo.

Por declaración de 9 de septiembre de 1957, depositada en poder del Secretario General el 19 de septiembre de 1957, el Gobierno de Camboja aceptó, en condiciones de reciprocidad y con algunas reservas, la jurisdicción obligatoria de la Corte para todos los litigios, por un plazo de 10 años a partir de la fecha de entrega de la declaración y, después de ese período, hasta que sea denunciada.

Por declaración de 30 de diciembre de 1957, depositada el 2 de enero de 1958 en poder del Secretario General, el Gobierno del Sudán aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte, en condiciones de reciprocidad y con algunas reservas, hasta que sea denunciada la declaración.

Instrumentos que confieren competencia a la Corte

Los siguientes tratados y otros instrumentos registrados en la Secretaría de las Naciones Unidas, o depositados e inscritos en la misma, contienen cláusulas que confieren competencia a la Corte Internacional de Justicia en ciertos casos:

Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero (multilateral—hecha en Nueva York el 20 de junio de 1956).

Tratado de amistad, comercio y navegación firmado en Washington entre los Estados Unidos de América y la República Federal de Alemania (29 de octubre de 1954).

Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (multilateral—hecho en la Sede de las Naciones Unidas el 26 de octubre de 1956, entrado en vigor el 29 de julio de 1957).

Acuerdo entre las Cancillerías de Honduras y de Nicaragua sobre el procedimiento para elevar a la Corte Internacional de Justicia su diferendo en torno al laudo

emitido por Su Majestad el Rey de España el 23 de diciembre de 1906 (firmado en Tegucigalpa y en Managua el 21 y el 22 de junio de 1957).

Convenio entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de la República Dominicana para el establecimiento de estaciones de loran destinada a facilitar la navegación (firmado en Washington el 19 de marzo de 1957).

Tratado de comercio y navegación entre Noruega y Japón (firmado en Tokio el 28 de febrero de 1957).

Acuerdo concertado entre Bélgica y los Países Bajos para someter a la Corte Internacional de Justicia su litigio acerca de la soberanía sobre determinados terrenos situados en la frontera de Bélgica y los Países Bajos (firmado en La Haya el 7 de marzo de 1957).

Tratado de amistad, relaciones económicas y derechos consulares entre los Estados Unidos de América e Irán (firmado en Teherán el 15 de agosto de 1955).

Tratado de amistad, comercio y navegación entre los Países Bajos y los Estados Unidos de América (firmado en La Haya el 27 de marzo de 1956).

Tratado de amistad entre Filipinas y Suiza (firmado en Manila el 30 de agosto de 1956).

Competencia de la Corte en materia consultiva

El artículo XVII del Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica, entrado en vigor el 29 de julio de 1957, dispone que tanto la Conferencia General como la Junta de Gobernadores estarán facultadas para solicitar de la Corte Internacional de Justicia, previa autorización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, opiniones consultivas sobre cualesquiera cuestiones jurídicas que se planteen dentro del ámbito de las actividades del organismo. En su resolución 1146 (XII) de 14 de noviembre de 1957, la Asamblea General autorizó al Organismo Internacional de Energía Atómica para que solicitara de la Corte Internacional de Justicia opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas que se planteasen con motivo de las actividades del organismo, salvo las cuestiones que se refiriesen a las relaciones entre el Organismo y las Naciones Unidas o cualquier organismo especializado.

La Convención sobre la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, hecha en Ginebra el 6 de marzo de 1948, entró en vigor el 17 de marzo de 1958, fecha en que 21 Estados vinieron a ser Partes en la Convención mediante el depósito de instrumentos de aceptación en poder del Secretario General. El artículo 56 de la Convención dispone que toda cuestión jurídica que no pueda resolverse por los medios indicados en el artículo 55 será sometida por la OCMI a la Corte para recabar de ésta una opinión consultiva, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta. Por resolu-

ción 204 (III), la Asamblea autorizó a esa organización para que recabara tales opiniones consultivas.

b) ASUNTOS PLANTEADOS ANTE LA CORTE

1. *Litigio sobre ciertos empréstitos noruegos* (Francia — Noruega)

El 6 de julio de 1957, la Corte Internacional de Justicia falló el litigio sobre determinados empréstitos noruegos (entre Francia y Noruega).

La Corte recordó que los mencionados empréstitos habían sido emitidos entre 1885 y 1909; en la solicitud, el Gobierno de Francia alegaba que los títulos contenían una cláusula oro, de forma variable según los casos, pero suficiente, a juicio de ese Gobierno, para garantizar el pago en oro de cada bono, afirmación que rechazaba el Gobierno de Noruega. Suspendida la convertibilidad de los billetes del Banco de Noruega en varias ocasiones después de 1914, una ley noruega de 15 de diciembre de 1923 dispuso que "cuando el deudor hubiere aceptado legalmente pagar en oro una deuda pecuniaria en coronas y el acreedor se negare a recibir el pago en billetes del Banco de Noruega basándose en el valor nominal en oro, el deudor podrá solicitar que se aplase el pago mientras el Banco se halle exento de la obligación de comprar los propios billetes con arreglo a su valor nominal". Entre 1925 y 1955 se verificó un nutrido canje de correspondencia diplomática; el Gobierno de Francia afirmaba que no parecía posible hacer valer una decisión unilateral contra acreedores extranjeros y pedía se reconociesen los derechos ostentados por los portadores franceses de los títulos. El Gobierno de Noruega no estaba dispuesto a aceptar las diversas propuestas de solución internacional presentadas por Francia y sostenía que los tribunales noruegos eran competentes para conocer de las reclamaciones de los tenedores de bonos, ya que sólo se trataba de la interpretación y aplicación de la ley noruega. Los portadores franceses se abstuvieron de someter el caso a los tribunales noruegos. En tales circunstancias el Gobierno francés retirió el litigio a la Corte.

En estas circunstancias, la Corte fijó la atención, en un principio, sobre las excepciones preliminares presentadas por el Gobierno de Noruega, empezando con la primera de éstas, que se refería directamente a la competencia de la Corte y ofrecía dos aspectos. En primer lugar, se afirmaba que la Corte, cuya función estribaba en fallar, de conformidad con el derecho internacional, los asuntos que se le sometieran, sólo podía conocer, por conducto de una solicitud unilateral, de los litigios comprendidos en una de las cuatro categorías enumeradas en el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto y referentes al derecho internacional. A juicio del Gobierno de Noruega, los contratos de empréstito estaban regidos por el derecho interno y no por el internacional. En segundo lugar, el Gobierno de Noruega declaró que si todavía subsistiere alguna duda al respecto, se atendería a las reservas hechas en la forma siguiente por el Gobierno francés, en la declaración por la que aceptaba la jurisdicción obligatoria de la Corte: "Esta declaración no se aplica a los casos referentes a asuntos que incumban esencialmente a la jurisdicción nacional, tal como la entiende el Gobierno de la República Francesa." El Gobierno de Noruega estimó que, en virtud de la cláusula de reciprocidad incorporada al párrafo 3 del Artículo 36 del Estatuto y consignada en la correspondiente declaración de Noruega, este último país tenía el derecho de atenerse a las restricciones formuladas por Francia acerca de

sus propias empresas. Convencido de que el asunto era de jurisdicción interna, el Gobierno de Noruega pidió a la Corte que, por no tener competencia en la materia, rechazase la misión que el Gobierno de Francia le encomendara.

Al examinar el segundo argumento de esa excepción, la Corte señaló que su competencia para conocer del asunto dependía de las declaraciones hechas por las Partes en condiciones de reciprocidad; y que, tratándose de dos declaraciones unilaterales, sólo existía esa competencia en la medida en que las declaraciones coincidían para conferir la a la Corte. Por consiguiente, la común voluntad de las Partes, base de la competencia de la Corte, existía dentro de los límites más estrechos indicados en la reserva de Francia. La Corte reafirmó este método de definir los límites de su competencia, que ya fuera adoptado por la Corte Permanente de Justicia Internacional. De conformidad con la condición de reciprocidad, Noruega, al igual que Francia, podía excluir de la jurisdicción obligatoria de la Corte los litigios que, a su entender, correspondían esencialmente a la jurisdicción nacional.

El Gobierno de la República Francesa señaló que entre Francia y Noruega existía un tratado, según el cual el pago de toda deuda contractual representaba un problema de derecho internacional y que, por tanto, ambos Estados no podían invocar la jurisdicción interna en ese caso. Mas la finalidad de dicho tratado, la Segunda Convención de La Haya de 1907 sobre la limitación del empleo de la fuerza para recuperar las deudas contractuales, no era la de introducir el arbitraje obligatorio; la única obligación impuesta por la Convención consistía en que ninguna de las Potencias interesadas debía emplear la fuerza antes de haber recurrido al arbitraje. Por lo tanto, la Corte no hallaba motivo para decidir que el hecho de que ambas partes fueran signatarias de la Segunda Convención de La Haya privara al Gobierno de Noruega de su derecho a invocar la reserva consignada en la declaración de Francia. El Gobierno francés mencionó asimismo el Convenio Franco-Noruego sobre Arbitraje, firmado en 1904, y el Acta General de Ginebra, de fecha 26 de septiembre de 1928. Ninguno de esos textos, sin embargo, podía considerarse suficiente para justificar la opinión de que la solicitud del Gobierno de Francia se basaba en la Convención o el Acta General: no había motivo fundado para que la Corte estableciera su competencia basándose en consideraciones distintas de las que el propio Gobierno francés había invocado en la solicitud y con arreglo a las cuales ambas partes habían sometido el litigio a la Corte.

La Corte señaló que cabía decir, en cierto modo, que el segundo argumento de la primera excepción, basado en la reserva contenida en la declaración francesa, era subsidiario. Pero, a juicio de la Corte, el segundo argumento no podía considerarse subsidiario, en el sentido de que Noruega sólo había invocado la reserva francesa en el caso de que el primer argumento de su excepción resultara falto de fundamento jurídico. La competencia de la Corte se hallaba impugnada por ambos motivos y la Corte quedaba libre de fundar su decisión en el argumento que le pareciera más directo y concluyente. El Gobierno de Noruega no sólo se había acogido a la reserva de Francia, sino que había mantenido el segundo argumento de su primera objeción durante todas las actuaciones. La eliminación de ese argumento no podía presumirse o inferirse; había que indicarla expresamente.

La Corte no estimó que estuviera obligada a examinar si la reserva de Francia era compatible con la aceptación de una obligación jurídica y con el párrafo 6 del Artículo 36 del Estatuto. Las partes no habían impugnado la validez de la reserva. Era evidente que Francia mantenía resueltamente su declaración, incluida la reserva, y que Noruega se acogía a esa reserva. La Corte, pues, estaba examinando una estipulación que ambas partes en el litigio consideraban como una expresión de su común voluntad en cuanto a la competencia de la Corte. Esta aplicó la reserva tal como se hallaba redactada y las partes la habían aceptado.

Basándose en esas razones, la Corte decidió, por 12 votos contra 3, que no era competente para fallar el caso que le sometiera el Gobierno de Francia en su demanda.

El Magistrado Moreno Quintana unió al fallo una declaración para indicar que, a su juicio, la Corte era incompetente por una razón distinta de la que se aducía en los considerandos. El Vicepresidente Badawi y el Magistrado Sir Hersch Lauterpacht acompañaron al fallo de la Corte con la exposición de sus opiniones individuales. Los Magistrados Guerrero, Basdevant y Read agregaron como apéndice la exposición de sus opiniones disidentes.

2. *Asunto de la Interhandel*

(Suiza - Estados Unidos de América)

El asunto de la Interhandel fué planteado ante la Corte a solicitud del Gobierno de Suiza, el 2 de octubre de 1957; este último pedía a la Corte se sirviera declarar que el Gobierno de los Estados Unidos de América violaba la obligación de restituir a la Interhandel, compañía inscrita en el registro comercial de Basilea, el activo invertido en los Estados Unidos desde 1942 y, alternativamente, que el litigio podía someterse a arreglo judicial, arbitraje o conciliación. El 3 de octubre, el Gobierno de Suiza pidió a la Corte se sirviera indicar, como medida provisional de protección y mientras estuviera pendiente el caso, que los Estados Unidos no enajenaran dichos bienes y, en particular, vender acciones de la General Aniline and Film Corporation que pertenecían a la Interhandel.

El 11 de octubre de 1957 el Gobierno de los Estados Unidos alegó una excepción preliminar, en virtud del artículo 62 del Reglamento de la Corte, fundándose en que la decisión de vender o enajenar esas acciones era esencialmente un asunto de competencia interna. La declaración hecha por los Estados Unidos al aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte figuraba a reserva que excluía los litigios referentes a cuestiones que eran esencialmente de la competencia interna de los Estados Unidos de América, tal como la entenden los Estados Unidos de América.

La Corte decidió examinar con carácter de prioridad la solicitud relativa a las medidas provisionales y escuchó a las Partes el 12 y el 14 de octubre de 1957. También tomó conocimiento de comunicaciones escritas presentadas después por las Partes. Entre ellas se hallaba una comunicación redactada en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, en que se indicaba el procedimiento seguido por algunos tribunales norteamericanos en relación con la Interhandel y se declaraba que el Gobierno de los Estados Unidos "no estaba dispuesto, en la actualidad, medidas encaminadas a fijar un plazo para la venta de las acciones de la General Aniline and Film Corporation".

La Corte dictó su fallo en una providencia de 24 de octubre de 1957. Afirmó que la solicitud de medidas provisionales debía examinarse según el procedimiento previsto en el Artículo 61 del Reglamento de la Corte, mientras que la excepción alegada por los Estados Unidos requería la aplicación de un procedimiento distinto, a saber, el que se prevé en el Artículo 62 del Reglamento. Por lo tanto, si bien indicó que no prejuzgaba en modo alguno la cuestión de su competencia, la Corte pasó a examinar la solicitud referente a las medidas provisionales de protección, a cuyo fin era necesario "averiguar las medidas exigidas por las circunstancias para proteger los respectivos derechos de las partes en espera del fallo de la Corte".

Considerando que, según se desprendía de la información presentada a la Corte, la venta de las acciones no podía efectuarse, de conformidad con la ley de los Estados Unidos, sino después de terminado un procedimiento judicial que entonces se hallaba pendiente en ese país y cuya solución no cabía prever en un futuro inmediato; considerando que dicha venta estaba, por lo tanto, supeditada a una decisión judicial que rechazara las demandas de la Interhandel, y teniendo en cuenta la declaración del Gobierno de los Estados Unidos, de que, en la actualidad, no tenía el propósito de tomar medidas encaminadas a fijar un plazo para la venta de las acciones, la Corte llegó a la conclusión de que las circunstancias no requerían la adopción de las medidas provisionales solicitadas por Suiza, y estimó que no era necesario adoptar tales medidas.

Como apéndices a la providencia figuraban una opinión separada del Magistrado Klaestad (al que se sumaron el Presidente Hackworth y el Magistrado Read), quien estimó que la Corte era incompetente; una opinión separada del Magistrado Sir Hersch Lauterpacht, que si bien admitió la parte dispositiva de la providencia, consideró, no obstante, que la Corte no tenía competencia; una declaración del Magistrado Wellington Koo, quien aprobó la parte dispositiva, pero no las consideraciones en que ésta se fundaba; y una declaración del Magistrado Kojevnikov, que no pudo hacer suya la providencia.

Se ha fijado plazo para la presentación de la memoria y de la contramemoria o de las excepciones preliminares, si las hubiere. La memoria ha sido depositada en la Secretaría de la Corte.

3. *Litigio relativo al paso por territorio de la India* (Portugal - India)

El 26 de noviembre de 1957 la Corte falló el litigio relativo al paso por territorio de la India (excepciones preliminares) entre Portugal y la India.

El litigio fué presentado por solicitud del Gobierno de Portugal para pedir a la Corte que reconociera y declarase que Portugal era titular o beneficiario de un derecho de paso entre su territorio Damão (Litoral de Damão) y los enclavados de Dadra y Nagar-Aveli y entre cada uno de estos últimos, y que este derecho comprendía la facultad de transitar aplicada a mercaderías y personas, inclusive a las fuerzas armadas, sin restricciones o dificultades y en la forma y medida requerida para el ejercicio de la soberanía portuguesa en dichos territorios; que la India había impedido y continuaba impidiendo el ejercicio del derecho mencionado, cometiendo así un atentado contra la soberanía portuguesa sobre los enclavados y violando sus obligaciones internacionales; y ordenara que la India pusiera fin inmediatamente a esa situación, permitiendo que

Portugal ejerciese el mencionado derecho de paso. La solicitud citaba explícitamente el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto y las declaraciones por las cuales Portugal y la India habían aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte.

Por su parte, el Gobierno de la India alegó seis excepciones preliminares contra la competencia de la Corte.

La *primera excepción preliminar* señalaba que en una de las condiciones de la declaración de 19 de diciembre de 1955, por la que Portugal aceptaba la jurisdicción de la Corte, este Gobierno se reservaba "el derecho de excluir del alcance de la presente declaración, en cualquier momento, durante su vigencia, cualesquiera categoría o categorías de litigios, mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas y con efecto a partir de la fecha de tal notificación"; tal condición era incompatible con la finalidad y los propósitos de la cláusula de opción, y, por tanto, la aceptación no era válida.

Por 14 votos contra 3, la Corte rechazó esta excepción, y sostuvo que los términos empleados en la condición, interpretados en su sentido ordinario, significaban sencillamente que una notificación hecha a tal efecto se aplicaría sólo a los litigios elevados a la Corte *después* de la fecha de la notificación. Por consiguiente, no se podía atribuir ningún efecto retroactivo a la notificación. Al respecto, la Corte mencionó el principio que había sentado en el asunto *Nottebohm* en la forma siguiente: "Un hecho extrínseco, tal como la caducidad de la declaración por haber expirado el plazo o por simple denuncia, no puede privar a la Corte de la competencia ya establecida". La Corte agregó que ese principio se aplicaba tanto a la denuncia total como a la denuncia parcial, caso que se presentaba en la condición impugnada de la declaración de Portugal.

Al alegar el Gobierno de la India que esa condición había introducido en la declaración un grado de incertidumbre en cuanto a los derechos y obligaciones recíprocos, lo cual restaba todo valor práctico a la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte, ésta afirmó que, como las declaraciones y sus respectivas modificaciones efectuadas de conformidad con el Artículo 36 del Estatuto habían de depositarse en poder del Secretario General, siempre se podía averiguar, presentado un caso ante la Corte, cuáles eran en ese momento las obligaciones recíprocas de las partes, habida cuenta de sus respectivas declaraciones. Era cierto que en el intervalo que mediaba entre la fecha de la notificación al Secretario General y el recibo de la misma por las partes en el Estatuto podía existir algún elemento de incertidumbre, pero éste era inherente al funcionamiento del sistema de la cláusula de opción y no afectaba a la validez de la condición insertada en la declaración de Portugal. La Corte advirtió que, con respecto al elemento de incertidumbre implícito en el derecho de Portugal a recurrir en cualquier momento a la condición mencionada en su aceptación, la situación era, en el fondo, la misma que en el caso del derecho, proclamado por muchos signatarios de la cláusula de opción, entre ellos la India, de denunciar sus declaraciones, sin obligación alguna de previo aviso. Recordó que la India había actuado en el mismo sentido el 7 de enero de 1956, cuando notificó al Secretario General la denuncia de su declaración de 28 de febrero de 1940 (a la que se acogiera Portugal en su solicitud), y simultáneamente la substituyó por otra declaración con reservas que se hallaban ausentes de la anterior. Al hacer esto,

la India no había hecho sino realizar, en substancia, la finalidad de la condición mencionada en la declaración de Portugal.

Además, a juicio de la Corte, no existía diferencia fundamental en cuanto al grado de incertidumbre entre la situación provocada por el derecho de denuncia total y la que entrañare la condición mencionada en la declaración de Portugal, que preveía la posibilidad de una denuncia parcial. La Corte prosiguió afirmando que no era posible admitir como un factor de diferencia el hecho de que mientras en el caso de la denuncia total el Estado que la hiciera no podía seguir invocando los derechos acumulados en virtud de su declaración, en el caso de una denuncia parcial, conforme a los términos de la declaración de Portugal, este país podía seguir reclamando los beneficios de su aceptación. Antes bien, el principio de reciprocidad permitía a los demás Estados, incluso a la India, invocar contra Portugal todos los derechos que pudiese continuar reclamando.

Según otro argumento aducido contra la validez de la condición de Portugal, ésta violaba el principio fundamental de la reciprocidad, en que se basaba la cláusula de opción, en cuanto atribuía a Portugal un derecho que, en la práctica, no tenían los signatarios cuyas declaraciones no contuviesen semejante condición. La Corte no pudo aceptar tal argumento. Sostuvo que la situación de las partes en lo que respectaba al ejercicio de sus derechos no se hallaba en modo alguno afectada por el intervalo inevitable que mediare entre el recibo de la oportuna notificación por el Secretario General y el recibo de la misma por los demás signatarios, ya que ese plazo transcurriría igualmente a favor o en contra de todos los signatarios de la cláusula de opción.

Asimismo, la Corte se negó a admitir que la condición mencionada en la declaración de Portugal fuese incompatible con el principio de reciprocidad, ya que haría inaplicable la parte del párrafo 2 del Artículo 36 referente a la aceptación de la cláusula de opción con respecto a los Estados que admitían "la misma obligación". No era necesario que "la misma obligación" quedase irrevocablemente definida en el momento de la aceptación durante toda la vigencia de ésta; esa expresión sólo significaba que, entre los Estados que aceptasen la cláusula de opción, todos y cada uno estarían sujetos a cuantas obligaciones idénticas existieran en cualquier momento, mientras la aceptación fuese recíprocamente obligatoria.

Al hallar la Corte que la condición de la declaración portuguesa no era incompatible con el Estatuto, decidió que era innecesario examinar si, a no ser válida aquella condición, tal circunstancia afectaría la declaración en su conjunto.

La *segunda excepción preliminar* se fundaba en que, al presentar la solicitud el 22 de diciembre de 1955, antes que el Secretario General pudiera transmitir a las demás partes en el Estatuto una copia de la declaración hecha por el Gobierno de Portugal para aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte, de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 36 del Estatuto, dicho Gobierno había violado los principios de igualdad y reciprocidad a que la India podía acogerse con arreglo a la cláusula de opción y a la condición expresa de reciprocidad estipulada en su propia declaración de 28 de febrero de 1940, por la que aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte.

Sobre este punto, la Corte declaró que debían examinarse dos problemas; primero: al presentar su solicitud el día siguiente al depósito de su declaración de acepta-

ción, ¿Portugal había actuado de manera contraria al Estatuto? Segundo: en caso negativo, ¿había violado por ello algún derecho de la India previsto en el Estatuto o en su declaración?

La India afirmó que, antes de presentar su solicitud, Portugal debiera haber esperado suficiente tiempo para permitir que los demás signatarios de la cláusula de opción recibieran del Secretario General notificación de la declaración de Portugal.

La Corte no pudo admitir esa afirmación. La relación contractual entre las partes y la jurisdicción obligatoria de la Corte que de ella se desprendía quedaban establecidas "*ipso facto* y sin convenio especial", por el mero hecho de hacer la declaración. Un Estado que aceptaba la jurisdicción de la Corte debía estar preparado a que una solicitud contra él fuese presentada a la Corte por un nuevo Estado el mismo día en que éste depositaba su aceptación en poder del Secretario General.

La India había sostenido que la aceptación de la jurisdicción de la Corte sólo surtía efectos una vez que el Secretario General hubiera transmitido copia de la misma a las Partes. La Corte afirmó que al Estado que presentaba su declaración sólo le correspondía preocuparse por el depósito de la misma en poder del Secretario General y no por la misión del Secretario General o la manera como éste la desempeñaba. La Corte no acertaba a ver en la cláusula de opción la condición implícita de que había de transcurrir un intervalo después del depósito de la declaración. Semejante requisito introduciría un elemento de incertidumbre en el sistema de la cláusula de opción.

Como la India no había precisado, entre los derechos que le correspondían en virtud del Estatuto y de su declaración, cuál era el que había sido violado por la forma de presentar la solicitud, la Corte no podía descubrir qué derecho había sido realmente violado.

Al llegar a la conclusión de que la solicitud había sido presentada en forma que ni era contraria al Estatuto ni violaba ningún derecho de la India, la Corte rechazó la segunda excepción preliminar por 15 votos contra 2.

Acto seguido, la Corte examinó la *cuarta excepción preliminar*, que también se refería a la manera en que había sido presentada la solicitud. En esa excepción se afirmaba que, como la India no había tenido conocimiento de la declaración de Portugal antes que se presentara la solicitud de ese país, no había podido hacer valer, con arreglo al principio de reciprocidad, la condición mencionada en la declaración de Portugal, que le hubiese permitido excluir de la jurisdicción de la Corte el litigio a que se refería la solicitud. La Corte recordó simplemente lo que había dicho con respecto a la segunda excepción, en particular, que el Estatuto no prescribía ningún intervalo entre el depósito de una declaración de aceptación y la presentación de una solicitud, y rechazó esa excepción por 15 votos contra 2.

La *tercera excepción preliminar* se basaba en que antes de presentar la solicitud no se habían verificado negociaciones diplomáticas que hubiesen permitido definir el objeto de la reclamación. La Corte halló que una parte considerable del cambio de opiniones verificado entre las Partes antes de la presentación de la solicitud se había dedicado al problema del acceso a los enclavados, que la correspondencia y las notas presentadas a la Corte demostraban las repetidas reclamaciones de Portugal concernientes a las facilidades de tránsito que la India había negado, y que, según demos-

traba la correspondencia mencionada, las negociaciones habían llegado a un punto muerto. En el supuesto de que el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto, al referirse a los litigios jurídicos, exigiese una definición del litigio mediante negociaciones, la condición había sido satisfecha. Por consiguiente, la Corte rechazó esta excepción por 16 votos contra 1.

La *quinta excepción preliminar* se fundaba en una reserva mencionada en la declaración de aceptación de la India, según la cual quedaban excluidos de la jurisdicción de la Corte los litigios referentes a cuestiones que, en virtud del derecho internacional, era exclusivamente de la competencia del Gobierno de la India. Este Gobierno sostuvo que los hechos y las consideraciones jurídicas aducidos ante la Corte no permitían razonablemente afirmar que la causa del litigio se hallara fuera de su jurisdicción.

La Corte señaló que Portugal no admitía los hechos en que se basaban las afirmaciones de la India, y que la aclaración de esos hechos y de sus consecuencias jurídicas implicaría el examen de la práctica de las autoridades británicas, indias y portuguesas en materia de derecho de paso para determinar, en especial, si de conformidad con esa práctica, cabía considerar tal paso como un problema que, según el derecho internacional, era de la incumbencia exclusiva del soberano territorial. Estas y otras cuestiones similares no podían examinarse en esa etapa preliminar sin prejuzgar el fondo de la cuestión. Por lo tanto, por 13 votos contra 4, la Corte decidió incorporar la quinta excepción al fondo del problema.

Por último, en su *sexta excepción preliminar*, el Gobierno de la India afirmó que la Corte no tenía competencia, porque la declaración de aceptación de la India se limitaba a "los litigios surgidos después del 5 de febrero de 1930 con respecto a situaciones o hechos posteriores a esa fecha". El Gobierno de la India alegó, primero, que el litigio presentado ante la Corte por Portugal no había surgido después del 5 de febrero de 1930 y, segundo, que constituía, de todos modos, un litigio referente a situaciones y hechos anteriores a esa fecha.

Al examinar esa excepción, la Corte afirmó que para averiguar la fecha en que se había planteado el conflicto era necesario determinar si el litigio era o no una mera continuación del conflicto relativo al derecho de paso, surgido antes de 1930. Después de escuchar argumentos contradictorios acerca de la naturaleza del derecho de paso antiguamente ejercido, la Corte no podía resolver esas dos cuestiones en esa etapa de la cuestión.

Tampoco disponía la Corte, en esos casos, de pruebas suficientes para fallar sobre la cuestión de si el litigio se refería a situaciones o hechos anteriores a 1930. Por lo tanto, la Corte incorporó la sexta excepción preliminar al fondo del problema, por 16 votos contra 2.

El Gobierno de Portugal, si bien no tenía la más mínima intención de invocar las disposiciones del Artículo 41 del Estatuto (relativo a la adopción de medidas provisionales), había presentado a la Corte, junto con sus argumentos, una petición de que recordara a las partes el principio universalmente admitido de que debían facilitar la misión de la Corte absteniéndose de toda medida que pudiera tener un efecto perjudicial sobre la ejecución de su decisión o entorpecer una agravación o una extensión del litigio. Vistas las circunstancias del caso, la Corte no consideró que hubiera de satisfacer esta petición del Gobierno de Portugal.

A continuación la Corte declaró que se reanudaban los debates sobre el fondo de la cuestión y fijó plazo para las actuaciones posteriores.

El Magistrado Kojevnikov manifestó que no podía aceptar la parte dispositiva ni los considerandos del fallo porque, a su juicio, en el estado actual del procedimiento, la Corte debía haber aceptado varias de las excepciones preliminares. El Vicepresidente Badawi y el Magistrado Klaestad agregaron al fallo una exposición de sus opiniones disidentes. El Sr. Fernández, Magistrado *ad hoc*, hizo suya la opinión del Magistrado Klaestad, y el Sr. Chagle, Magistrado *ad hoc*, agregó al fallo una exposición de su opinión disidente.

4. *Asunto relativo a la aplicación del Convenio de 1902 sobre la tutela de los niños* (Países Bajos - Suecia)

Iniciáronse las actuaciones en este asunto con la presentación de una solicitud del Gobierno de los Países Bajos, el 10 de julio de 1957. La solicitud se refería al caso de una niña, nacida en Suecia en 1945 de padre holandés y de madre de nacionalidad sueca antes de su matrimonio. Se declaraba que la niña tenía la nacionalidad holandesa y que, después de la muerte de su madre en 1953, las autoridades de Suecia tomaron medidas acerca de su tutela, llamada "skyddsopfostran", al propio tiempo que las autoridades de los Países Bajos tomaron igualmente disposiciones con el mismo objeto, de conformidad con la ley de este último país. Pese a los recursos interpuestos por los holandeses y a las observaciones formuladas por el Gobierno de los Países Bajos, esas medidas siguieron en vigor. El Gobierno de los Países Bajos alegaba que las autoridades de Suecia habían actuado contrariamente a las disposiciones del Convenio de 1902 sobre la tutela de los niños y pedía a la Corte se sirviera declarar que Suecia estaba obligada a revocar tales medidas.

La solicitud fundaba la competencia de la Corte en ese caso en la aceptación por ambas partes de la jurisdicción obligatoria de la Corte, en virtud de las declaraciones hechas con arreglo al Artículo 36 del Estatuto (declaración de Suecia de 6 de abril de 1957 y declaración de los Países Bajos de 1º de agosto de 1956).

Se ha fijado plazo para las audiencias y ya se han presentado la memoria y la contramemoria. Se prevé que el asunto estará listo para las audiencias en el otoño de 1958.

5. *Asunto relativo al incidente de aviación del 27 de julio de 1955* (Israel-Bulgaria)

El 16 de octubre de 1957 el Gobierno de Israel presentó una solicitud para entablar un procedimiento contra Bulgaria.

El asunto se refería a un incidente de aviación ocurrido el 27 de julio de 1955, fecha en que una aeronave de una compañía de aviación israelí fué derribada en territorio de Bulgaria por unidades de las fuerzas de seguridad de dicho país, resultando muertos sus 51 pasajeros y 7 tripulantes. Por vía diplomática, el Gobierno de Israel había reclamado una indemnización por daños y perjuicios al Gobierno de Bulgaria. En vista del fracaso de estas negociaciones, pedía a la Corte que declarase a Bulgaria responsable, de conformidad con el derecho internacional, de las pérdidas y los daños causados y que determinase la suma de la indemnización debida.

Con objeto de establecer la competencia de la Corte, la solicitud invocaba las declaraciones de ambos Esta-

dos, que habían aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte, a saber: la declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria por Israel, de fecha 3 de octubre de 1956 y la aceptación de la jurisdicción obligatoria por Bulgaria el 29 de julio de 1921, con motivo del depósito del instrumento mediante el cual este país ratificaba el Protocolo de Firma del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional.

Se ha fijado plazo para la memoria y la contramemoria, y aquélla ha sido ya presentada.

6. *Asunto relativo al incidente de aviación de 27 de julio de 1955* (Estados Unidos de América - Bulgaria)

El 28 de octubre de 1957, se presentó una solicitud en nombre del Gobierno de los Estados Unidos de América para iniciar un procedimiento contra Bulgaria.

Se trataba de un incidente de aviación ocurrido el 27 de julio de 1955, fecha en que una aeronave perteneciente a una compañía de aviación israelí fué derribada en territorio búlgaro por fuerzas búlgaras. Perecieron todos los pasajeros, entre los cuales figuraban varios ciudadanos de los Estados Unidos.

Como se indicaba en la solicitud y en los documentos adjuntos a la misma (canje de notas entre los dos Gobiernos interesados), el Gobierno de Bulgaria admitió, en un principio, su responsabilidad para con el de los Estados Unidos en cuanto a los daños causados a sus nacionales y prometió pagar una indemnización, pero rechazó posteriormente toda responsabilidad. El Gobierno de los Estados Unidos deseaba obtener de la Corte que declarase al Gobierno búlgaro responsable de los daños causados y reclamaba una sentencia por daños y perjuicios.

Con respecto a la competencia de la Corte, el Gobierno de los Estados Unidos señalaba que el litigio se refería a asuntos de la naturaleza estipulada en el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte, y se sometía a la jurisdicción de la Corte para los fines del presente caso. Invocaba, además, el hecho de que Bulgaria aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte cuando su representante suscribió el Protocolo de Firma del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y alegaba que esa aceptación surtió efectos en cuanto a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en virtud del párrafo 5 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte el día en que ingresó Bulgaria en las Naciones Unidas.

Se ha fijado plazo para la presentación de la memoria y de la contramemoria.

7. *Asunto relativo al incidente de aviación del 27 de julio de 1955* (Reino Unido - Bulgaria)

El 21 de noviembre de 1957, se presentó una solicitud en nombre del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para iniciar procedimiento contra Bulgaria.

El asunto se refería a un incidente de aviación ocurrido el 27 de julio de 1955, fecha en que una aeronave perteneciente a una compañía de aviación israelí fué derribada en territorio búlgaro por fuerzas búlgaras. Perecieron todos los pasajeros y tripulantes, entre ellos algunos súbditos británicos.

Como se indicaba en la solicitud y en los documentos adjuntos a la misma (canje de notas entre los dos Gobiernos interesados), el Gobierno de Bulgaria reconoció su responsabilidad para con el Gobierno del Reino Unido por los daños y perjuicios causados a sus nacionales y prometió una indemnización, pero rechazó

posteriormente toda responsabilidad. El Gobierno del Reino Unido trataba de obtener que la Corte declarase al Gobierno de Bulgaria responsable, de conformidad con el derecho internacional, de las pérdidas humanas y de los daños causados, y reclamaba una sentencia por daños y perjuicios.

Con objeto de establecer la competencia de la Corte, la solicitud invocaba las declaraciones por las que ambos Estados aceptaron la jurisdicción obligatoria de la Corte, a saber: la declaración del Reino Unido de fecha 18 de abril de 1957 y la declaración por la que Bulgaria aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte, el 29 de julio de 1921, fecha en que ese país depositó su instrumento de ratificación del Protocolo de Firma del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Se afirmaba que esa aceptación empezó a surtir efectos en cuanto a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en virtud del párrafo 1 del Artículo 93 de la Carta y el párrafo 5 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte, en el momento en que Bulgaria fué admitida como Miembro de las Naciones Unidas.

Se ha fijado plazo para la presentación de la memoria y de la contramemoria.

8. *Asunto relativo a la soberanía sobre determinados terrenos fronterizos (Bélgica - Países Bajos)*

El 27 de noviembre de 1957, la Corte recibió notificación de un Acuerdo Especial concertado entre el Reino de Bélgica y el Reino de los Países Bajos, firmado en La Haya el 7 de marzo de 1957, y ratificado en Bruselas el 19 de noviembre de 1957. En virtud de ese Acuerdo Especial, los Países Bajos y Bélgica sometían a dictamen de la Corte un litigio relativo a la soberanía sobre determinados terrenos situados en la región fronteriza de Baerle-Nassau y Baerle-Duc.

Se solicitaba de la Corte que determinara a cuál de los dos Estados pertenecía la soberanía sobre la región mencionada.

Se ha fijado plazo para la memoria y la contramemoria y la primera ya ha sido presentada.

c) OTRAS ACTIVIDADES

En varios de los instrumentos registrados o inscritos ante el Secretario General de las Naciones Unidas durante el período que se reseña figuraban estipulaciones por las que se confería al Presidente de la Corte la facultad de efectuar ciertos nombramientos en los casos previstos en los instrumentos. Esta facultad solía ser la de nombrar árbitros o árbitros terceros para los tribunales de arbitraje que se crearían en caso de controversia entre las partes. Ejemplos de estas estipulaciones podían encontrarse en los instrumentos siguientes:

Acuerdos concertados por las Naciones Unidas (mediante canje de correspondencia) acerca del servicio prestado en la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas por contingentes nacionales facilitados por los Gobiernos de Finlandia, Suecia, Noruega, Canadá, Dinamarca, Brasil, India y Yugoslavia.

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la India sobre transporte aéreo (firmado en Nueva Delhi el 3 de febrero de 1956).

Acuerdo entre los Gobiernos de la República del Paraguay y de los Estados Unidos de América sobre la garantía de las inversiones privadas (firmado en Asunción el 28 de octubre de 1955).

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la República Federal de Alemania sobre la explotación de

determinadas instalaciones de radio dentro de la República Federal (firmado en Bonn el 11 de junio de 1952).

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la República Federal de Alemania sobre transporte aéreo (firmado en Washington el 7 de julio de 1955).

Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo (multilateral — hecha en Nueva York el 4 de junio de 1954).

Canje de notas que constituyen un acuerdo entre los Estados Unidos de América y Jordania sobre las garantías previstas en la Ley de Seguridad Mutua de 1954 (firmado en Ammán el 10 de julio y el 24 de septiembre de 1956).

Convención sobre formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera (multilateral — hecha en Nueva York el 4 de junio de 1954).

Acuerdo entre Francia e Italia referente a la construcción y a la explotación de un túnel debajo del Mont Blanc (firmado en París el 14 de marzo de 1953).

Acuerdo entre Filipinas y Japón sobre pago de indemnizaciones (firmado en Manila el 9 de mayo de 1956).

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y Corea sobre transporte aéreo (firmado en Washington el 24 de abril de 1957).

Acuerdo sobre garantías y acuerdos sobre préstamos concertados por varios Estados con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

d) COMPOSICIÓN DE LA CORTE Y DE LA SALA DE PROCEDIMIENTO SUMARIO

El 1º de octubre de 1957, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad eligieron a cinco Magistrados para cubrir las vacantes causadas al terminar, el 5 de febrero de 1958, el período de funciones de los Magistrados Winiarski (Polonia), Zoricic (Yugoeslavia), Badawi (Egipto), Read (Canadá), y Wellington Koo (China). Fueron elegidos los siguientes Magistrados: Winiarski (Polonia), Badawi (Egipto), Wellington Koo (China), Sir Percy Spender (Australia) y Spiropoulos (Grecia).

El Presidente de la Corte es el Sr. Helge Klaestad; el Vicepresidente, Sir Muhammad Zafrulla Khan. Fueron elegidos el 17 de abril de 1958, para un período de tres años.

El mismo día, la Corte constituyó su Sala de Procedimiento Sumario para el período siguiente. La Corte eligió a los siguientes Magistrados para formar dicha Sala:

Miembros titulares: Presidente, Sr. Klaestad; Vicepresidente, Sir Muhammad Zafrulla Khan; Magistrados, Basdevant, Winiarski y Armand-Ugon.

Miembros suplentes: Magistrados Hackworth y Badawi.

2. Comisión de Derecho Internacional

a) NOVENO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

La Comisión de Derecho Internacional celebró su noveno período de sesiones en Ginebra, desde el 23 de abril hasta el 28 de junio de 1957; a continuación se da información adicional a la que figura en el informe anterior, que abarca la etapa inicial de ese período de sesiones.

Después de terminar su debate sobre las relaciones e inmunidades diplomáticas a base de un informe presentado por el señor A. E. F. Sandström, relator especial, la Comisión aprobó con carácter provisional, un proyecto acompañado de comentarios que ulteriormente, a petición de la Comisión, fué transmitido a los gobiernos para que comunicaran sus observaciones. La Comisión pidió al relator especial que le presentara un informe sobre la cuestión de la "diplomacia *ad-hoc*", que comprende las misiones especiales, las conferencias diplomáticas y los enviados especiales.

La Comisión celebró un debate general sobre el segundo informe que trata de la responsabilidad de los Estados, preparado por el relator especial, Sr. F. V. García Amador, y le pidió que continuara su labor sobre la materia.

En lo que se refiere al procedimiento arbitral, un Comité compuesto de 9 miembros, designado por la Comisión para que informase acerca de las cuestiones planteadas en la resolución 989 (X) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1955, llegó a la conclusión de que para poder realizar una labor útil y precisa era necesario que la Comisión decidiera si el proyecto preparado por la Comisión en su quinto período de sesiones (1953) había de tomar la forma de una convención o si había de constituir sólo un conjunto de normas que podrían guiar a los Estados cuando redactasen las disposiciones destinadas a figurar en los tratados internacionales o en los compromisos. La Comisión en pleno se pronunció a favor de la segunda solución. A continuación, la Comisión procedió a examinar algunos de los artículos fundamentales del proyecto revisado presentado por el relator especial Sr. Georges Scelle. Se tomaron algunas decisiones provisionales y la cuestión fué remitida al décimo período de sesiones para el examen definitivo.

La Comisión pidió a los relatores especiales sobre el derecho de los tratados y las relaciones e inmunidades consulares, Sir Gerald Fitzmaurice y Sr. Jaroslav Zourek, respectivamente, que prosiguieran su labor.

En lo que se refiere a la colaboración con otros organismos, el Secretario de la Comisión de Derecho Internacional señaló que se le había informado que la cuarta reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, que tendría lugar en 1958 en Santiago de Chile, y a la cual debía asistir como observador por petición de la Comisión, tendría que aplazarse hasta 1959.

En respuesta al Comité Consultivo Jurídico Asiático, creado en 1956 por los Gobiernos de Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Irak, Japón y Siria, que había solicitado colaborar con la Comisión, la Comisión autorizó al Secretario para que 1) declarara que la Comisión pediría al Secretario General que incluyera al Comité Consultivo Jurídico Asiático entre las organizaciones a las que se remitían los documentos de la Comisión; 2) pidiera al Comité Consultivo que enviara sus observaciones acerca de las cuestiones que la Comisión estuviera estudiando; y 3) manifestara el gran interés que sentía por los trabajos del Comité.

b) EXAMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE LA LABOR DE SU NOVENO PERÍODO DE SESIONES

En el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comisión examinó el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor de su noveno período de sesiones. Casi todos los debates de la Sexta Comisión se vincularon con el proyecto de

artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas aprobado por la Comisión (véase la sección a) *supra*). Se tomaron en consideración, entre otras cosas, la relación del proyecto con las siguientes cuestiones: 1) "diplomacia *ad hoc*"; 2) relaciones diplomáticas entre los Estados y los organismos internacionales; y 3) relaciones e inmunidades consulares, cuestión sometida al estudio de la Comisión. En vista de que la Comisión estaba integrada por un mayor número de miembros, varios representantes estimaron que la Comisión debía adoptar nuevos métodos de trabajo que fuesen más eficaces, como por ejemplo, estableciendo dos o más subcomisiones que independientemente se ocupasen de distintos problemas, mientras que otros representantes opinaron que la Comisión debía estudiar algún procedimiento mediante el cual el relator especial de un tema pudiese actuar entre los períodos de sesiones con carácter de coordinador de un pequeño subcomité, cuyos miembros comentarían por escrito la labor preliminar de dicho coordinador. Otros representantes se opusieron a la idea de que la Comisión se dividiese en subcomités. El 11 de diciembre de 1957, la Asamblea General aprobó la resolución 1185 (XII) por la cual tomó nota del informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su noveno período de sesiones, expresó su reconocimiento por la labor realizada por la Comisión y pidió al Secretario General que le transmitiera las actas de los debates dedicados por la Sexta Comisión a dicho informe.

c) PREPARACIÓN DEL DÉCIMO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

Tomando en consideración los debates sobre procedimiento arbitral celebrados en el noveno período de sesiones de la Comisión (véase la sección a) *supra*) el Sr. Georges Scelle, relator especial, presentó un informe que contenía, entre otras cosas, un proyecto modelo de procedimiento arbitral.

El Sr. A. E. F. Sandström, relator especial sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, presentó a la Comisión un informe que contenía un resumen de las observaciones recibidas de los gobiernos (véase la sección a) *supra*) y sus conclusiones. Como adición a este informe, presentó asimismo una serie revisada de artículos provisionales propuestos por él.

Sir Gerald Fitzmaurice, relator especial sobre el derecho de los tratados, presentó un tercer informe sobre esta materia, dedicado especialmente a la cuestión de la validez esencial de los tratados.

El Sr. F. V. García Amador, relator especial, presentó un tercer informe sobre la responsabilidad del Estado por daños causados en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros — Parte II: La reclamación internacional.

d) DÉCIMO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

El décimo período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional se inauguró en Ginebra el 28 de abril de 1958. En el programa del período de sesiones figuraron los siguientes temas: Provisión de una vacante que se ha producido en la Comisión (artículo 11 del Estatuto); procedimiento arbitral: resolución 989 (X) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1955; relaciones e inmunidades diplomáticas; derecho de los tratados; responsabilidad del Estado; relaciones e inmunidades consulares.

La Comisión eligió la siguiente mesa: Sr. Radhabinod Pal, Presidente; Sr. Gilberto Amado, Primer

Vicepresidente; Sr. Grigory Tunkin, Segundo Vicepresidente; Sir Gerald Fitzmaurice, Relator General.

La Comisión eligió al Sr. Ricardo Alfaro, de Panamá, como miembro de la Comisión para cubrir la vacante producida por la elección del Sr. Jean Spiropoulos para la Corte Internacional de Justicia.

La Comisión examinó en primer lugar el tema "Procedimiento arbitral" teniendo en cuenta un nuevo proyecto del relator especial, Sr. Georges Scelle (véase la sección c) *supra*) y después de una primera lectura remitió el proyecto a su comité de redacción.

A continuación, la Comisión comenzó a examinar el tema "Relaciones e inmunidades diplomáticas" a base del segundo informe del relator especial, Sr. Sandström (véase la sección c) *supra*).

3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

El informe del año pasado se refirió a la decisión tomada por la Asamblea General, en su resolución 1105 (XI) de 21 de febrero de 1957, de convocar a una conferencia internacional de plenipotenciarios para examinar el derecho del mar, teniendo presentes no solamente los aspectos jurídicos del problema, sino también sus aspectos técnicos, biológicos, económicos y políticos, e incorporar el resultado de sus trabajos en una o más convenciones internacionales o en los instrumentos que juzgara apropiados.

La Asamblea General remitió a la Conferencia los artículos relativos al derecho del mar aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en su octavo período de sesiones, en 1956, como base para la consideración de los diversos problemas que suscitaba el desarrollo y la codificación del derecho del mar. También remitió a la Conferencia las actas taquigráficas de los correspondientes debates de la Asamblea General, para que la Conferencia los examinase juntamente con el informe de la Comisión.

Con anterioridad a la Conferencia, la Secretaría, después de celebrar consultas con un grupo de 10 expertos invitados por el Secretario General para asesorar y colaborar en la preparación de la Conferencia, publicó más de 30 documentos preparatorios a fin de ayudar a la Conferencia en su labor.

En el informe de la Comisión de Derecho Internacional no se había considerado la cuestión del libre acceso al mar de los Estados sin litoral. La Conferencia preliminar de los Estados sin litoral, reunida en Ginebra del 10 al 14 de febrero de 1958, presentó a la Conferencia un memorándum sobre esta cuestión.

La Conferencia sobre el Derecho del Mar se reunió en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, en Ginebra, del 24 de febrero al 27 de abril de 1958. De los 86 Estados representados, 79 eran Estados Miembros de las Naciones Unidas y 7 eran miembros de organismos especializados, pero no de las Naciones Unidas.

La Conferencia constituyó cinco Comisiones Principales, además de una Mesa de la Conferencia, un Comité de Redacción y una Comisión de Verificación de Poderes.

Las Comisiones eran: Primera Comisión (Mar Territorial y Zona Contigua); Segunda Comisión (Alta Mar: Régimen General); Tercera Comisión (Alta Mar: Pesca; Conservación de los Recursos Vivos); y la Cuarta Comisión (Plataforma Continental). La Quinta Comisión (Cuestión del Libre Acceso al Mar

de los Países sin Litoral) basó su labor en el memorándum presentado por la Conferencia Preliminar de los Estados sin Litoral y en otras propuestas presentadas por los Estados durante las sesiones. A las demás Comisiones Principales se asignaron secciones de los artículos preparados por la Comisión de Derecho Internacional. Cada Comisión Principal presentó a la Conferencia un informe resumiendo los resultados de su labor y, en el caso de las cuatro primeras Comisiones Principales, se incluyeron los artículos aprobados por cada una de ellas.

La Conferencia decidió incluir estos artículos en cuatro convenciones diferentes, a saber: una Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua; una Convención sobre la Alta Mar; una Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar; y una Convención sobre la Plataforma Continental.

Las recomendaciones de la Quinta Comisión de la Conferencia aprobadas por ésta quedaron incluidas en el artículo 14 de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, y en los artículos 2, 3 y 4 de la Convención sobre la Alta Mar.

Como lo propuso la Comisión de Derecho Internacional, en la convención pertinente se incluyó un procedimiento especial para el arbitraje de controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de los artículos referentes a la Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar.

Además de este procedimiento, la Conferencia aprobó un Protocolo de firma facultativo sobre la jurisdicción obligatoria en la solución de las controversias. El Protocolo está abierto a la firma de todos los Estados que lleguen a ser partes en cualquiera de las Convenciones aprobadas por la Conferencia, y sujeto a ratificación cuando sea procedente.

La Conferencia aprobó asimismo nueve resoluciones sobre las siguientes materias: experimentos nucleares en alta mar; contaminación de la alta mar por los desperdicios radiactivos; convenciones internacionales para la conservación de las pesquerías; cooperación en las medidas de conservación; procedimientos humanos de sacrificio de la fauna marina; situaciones especiales relativas a pesquerías ribereñas; régimen de las aguas históricas; convocatoria de una segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; homenaje a la Comisión de Derecho Internacional.

Como en la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua la Conferencia no aprobó disposición alguna para determinar la anchura del mar territorial, por la resolución sobre la convocatoria de una segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se pidió a la Asamblea General que estudiara la conveniencia de convocar otra conferencia para que siguiera estudiando ésta y otras cuestiones que quedaron sin resolver.

El 29 de abril de 1958 se firmó el Acta Final de la Conferencia. Las convenciones aprobadas por la Conferencia están abiertas a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de los organismos especializados, y de cualquier otro Estado al que la Asamblea General invite a ser parte en ellas, hasta el 31 de octubre de 1958. Después de esa fecha, todos los Estados mencionados podrán adherirse a las convenciones.

Hasta el 15 de junio de 1958, el Acta Final, las distintas convenciones y el Protocolo de firma facultativo contaban con las siguientes firmas:

Acta Final	72
Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua	21
Convención sobre la Alta Mar	24
Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar	21
Convención sobre la Plataforma Continental	22
Protocolo de firma facultativo	18

4. Cuestión de la definición de la agresión y asuntos relacionados con ella

a) CUESTIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA AGRESIÓN

En su duodécimo período de sesiones, la Asamblea General examinó el informe de la Comisión Especial de 1956 para la Cuestión de la Definición de la Agresión.

Durante el debate en la Sexta Comisión se vió que la mayoría de las delegaciones no eran partidarias de que se definiera la agresión por el momento, sino que deseaban que se aplazase esta cuestión ya fuese indefinidamente o por lo menos hasta el décimocuarto período de sesiones de la Asamblea General. Entre las delegaciones partidarias de esta última solución, muchas sugirieron que a los Estados últimamente admitidos en las Naciones Unidas, así como a aquellos otros Miembros que todavía no hubiesen presentado sus observaciones, se les diera la oportunidad de hacerlo. Varias delegaciones se mostraron partidarias de que se estableciese de nuevo la Comisión Especial y de que se aumentase el número de sus miembros, en particular agregando algunos Estados seleccionados entre los nuevos Miembros.

Otra propuesta formulada hacia el final de los debates recibió apoyo considerable y quedó aprobada por la Asamblea General el 29 de noviembre de 1957 como resolución 1181 (XII). Por esa resolución, se pidió al Secretario General que solicitara de los nuevos Estados Miembros su opinión sobre la materia y que remitiera las respuestas a una comisión compuesta de aquellos Estados Miembros que hubieran formado parte de la Mesa de la Asamblea General durante el más reciente período ordinario de sesiones. La nueva Comisión debía estudiar dichas respuestas con el fin de determinar cuándo sería conveniente que la Asamblea General examinara de nuevo la cuestión de la definición de la agresión.

Se pidió al Secretario General que incluyera la cuestión en el programa provisional de la Asamblea General, no antes del décimocuarto período de sesiones, cuando la Comisión le hubiera informado que consideraba que había llegado el momento oportuno para hacerlo, y que convocara a la Comisión para su primera reunión con anterioridad al décimocuarto período de sesiones.

En consecuencia, el 10 de marzo de 1958, el Secretario General pidió a los Estados Miembros nuevos, y reiteró su petición a los demás Estados Miembros, que le transmitieran antes del 1° de marzo de 1959 las observaciones que desearan formular sobre la cuestión relativa a la definición de la agresión.

b) PROYECTO DE CÓDIGO DE DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LA HUMANIDAD

La Asamblea General examinó esta cuestión en su duodécimo período de sesiones. En su resolución 1186 (XII), de 11 de diciembre de 1957, expresó la opinión de que el proyecto de código de delitos contra

la paz y la seguridad de la humanidad planteaba problemas relacionados con el de la definición de la agresión y decidió aplazar el examen de la cuestión hasta que la Asamblea General se ocupara nuevamente de la cuestión de la definición de la agresión.

Se pidió al Secretario General que transmitiera el texto del proyecto de código a los Estados Miembros, para que éstos formularan sus observaciones y que presentara las respuestas de los gobiernos a la Asamblea General oportunamente, cuando el tema se hallara inscrito en el programa provisional de la Asamblea.

En consecuencia, el 14 de marzo de 1958 el Secretario General transmitió a los Estados Miembros el texto del proyecto de código y los invitó a enviarle, antes del 1° de marzo de 1959, las observaciones que desearan formular.

c) JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL

En su resolución 1187 (XII), del 11 de diciembre de 1957, la Asamblea General decidió aplazar el examen de la cuestión hasta que la Asamblea General examinara nuevamente la cuestión de la definición de la agresión y la cuestión del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad.

5. Tratados y convenciones multilaterales

a) REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

En el año que terminó el 15 de junio de 1958 se registraron en la Secretaría un total de 715 tratados y acuerdos internacionales, 640 por 29 gobiernos, 39 por seis organismos especializados y 36 de oficio. Fueron presentados y registrados un total de tres tratados y acuerdos—uno por la Secretaría, uno a instancias de un gobierno y uno a solicitud de un organismo especializado. Esto eleva a 6.560 el total de tratados y acuerdos registrados o depositados e inscritos desde el 14 de diciembre de 1946 al 15 de junio de 1958. Además, en el año terminado el 15 de junio de 1958, se registraron 206 declaraciones certificadas, lo que lleva a 1.467 el total de las declaraciones certificadas registradas o depositadas e inscritas hasta el 15 de junio de 1958.

Durante el período que se examina en la presente Memoria, la Secretaría ha publicado 36 tomos de la *Compilación de Tratados (Treaty Series)* (hasta el tomo 225, más los tomos 244, 245 y 246).

De conformidad con la resolución 1092 (XI), del 27 de febrero de 1957, se ha puesto en práctica un plan acelerado de impresión de la *Series*, a razón de 48 tomos por año, encaminado a reducir en un plazo de tres años el intervalo entre el registro y la publicación. Conforme al programa de publicaciones para 1957, los 48 tomos se publicaron en la fecha prevista. De los 48 tomos que aparecerán con arreglo al programa de publicaciones para 1958, ya se han publicado cinco y 41 se encuentran en diversas etapas de desarrollo.

b) NUEVAS CONVENCIONES CELEBRADAS BAJO LOS AUSPICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Desde que se publicó la última Memoria, se han concertado bajo los auspicios de las Naciones Unidas los siguientes instrumentos de los cuales es depositario el Secretario General:

Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercaderías peligrosas por carretera (ADR), con

protocolo de firma, hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957;

Acuerdo europeo sobre señales de carretera, hecho en Ginebra el 14 de diciembre de 1957;

Convención sobre formalidades aduaneras para los repuestos para reparación de vagones EUROP, hecha en Ginebra, el 15 de enero de 1958;

Protocolo que modifica el Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 1956, hecho en Ginebra el 3 de abril de 1958;

Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, hecha en Ginebra el 29 de abril de 1958;

Convención sobre la Alta Mar, hecha en Ginebra el 29 de abril de 1958;

Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar, hecha en Ginebra el 29 de abril de 1958;

Convención sobre la Plataforma Continental, hecha en Ginebra el 29 de abril de 1958;

Protocolo de forma facultativo sobre la jurisdicción obligatoria en la solución de las controversias, hecho en Ginebra el 29 de abril de 1958;

Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958.

c) ESTADO DE LAS FIRMAS, RATIFICACIONES Y ADHESIONES: ENTRADA EN VIGOR

El número de acuerdos internacionales de los cuales es depositario el Secretario General ha aumentado a 147.

Se ha añadido un total de 172 firmas a estos acuerdos y se han transmitido al Secretario General 254 instrumentos de ratificación, adhesión o notificación. De estos acuerdos, 95 han entrado en vigor, los cuatro siguientes desde el 16 de junio de 1957:

Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo, hecha en Nueva York el 4 de junio de 1954 (entró en vigor el 11 de septiembre de 1957);

Convención sobre formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera, hecha en Nueva York el 4 de junio de 1954 (entró en vigor el 15 de diciembre de 1957);

Convención relativa a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, hecha en Ginebra el 6 de marzo de 1948 (entró en vigor el 17 de marzo de 1958);

Protocolo del 3 de abril de 1958, que modifica el Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 1956, hecho en Ginebra el 3 de abril de 1958 (entró en vigor el 11 de abril de 1958).

d) ACTA GENERAL REVISADA PARA EL ARREGLO PACÍFICO DE LAS CONTROVERSIAS INTERNACIONALES

Las siguientes listas correspondientes a las tres modalidades de adhesión a que se refiere el artículo 38 del Acta General Revisada para el Arreglo Pacífico de las Controversias Internacionales, aprobada por la Asamblea General el 28 de abril de 1947, se publican de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 43 de dicha Acta:

ADHESIONES

A. A todas las disposiciones del Acta (capítulos I, II, III y IV)

Bélgica 23 de diciembre de 1949
Noruega 16 de julio de 1951
Dinamarca 25 de marzo de 1952

B. A las disposiciones sobre la conciliación y el arreglo judicial (capítulos I y II), conjuntamente con las disposiciones generales referentes a esos procedimientos (capítulo IV)

Suecia 22 de junio de 1950

Con la reserva a que se refiere el inciso a) del párrafo 2 del artículo 39, destinada a excluir de los procedimientos descritos en la presente Acta las controversias originadas en hechos anteriores a la adhesión de la parte que formule la reserva.

C. A las disposiciones referentes a la conciliación (capítulo I) y a las disposiciones generales concernientes a ese procedimiento (capítulo IV)

Ninguna.

e) CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional se celebró en la Sede del 20 de mayo al 10 de junio de 1958 y asistieron a ella representantes plenipotenciarios de 45 gobiernos y observadores de tres gobiernos. Participaron asimismo en la Conferencia, sin derecho de voto, representantes de tres organizaciones intergubernamentales y de 10 organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social.

Para la preparación de la Conferencia, el Secretario General distribuyó un informe global sobre las actividades de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en materia de arbitraje comercial internacional, así como dos notas. En la primera de estas notas, se pusieron de relieve algunos de los problemas que se planteaban en relación con el proyecto de convención preparado en marzo de 1955 por el Comité sobre la Ejecución de Sentencias Arbitrales Internacionales. La segunda nota contenía una reseña de otras medidas que podrían adoptarse para hacer más eficaz el arbitraje en la solución de las controversias de derecho privado.

El 10 de junio de 1958, la Conferencia aprobó y abrió a la firma la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. En virtud de la Convención, los Estados Contratantes se comprometían a reconocer y ejecutar las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pedía el reconocimiento o la ejecución, o las sentencias arbitrales que no fuesen consideradas como sentencias nacionales en el Estado en que se pedía su reconocimiento y ejecución. Los Estados Contratantes reconocerían asimismo el acuerdo por escrito, y cuando ante sus tribunales se sometiera un litigio respecto del cual las partes hubieran concluido un acuerdo deberían remitir a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas. La Convención especificaba qué documentos debería presentar la parte que pidiera el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral, y enumeraba las razones por las cuales se podría denegar el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales.

Hasta el 20 de junio de 1958, diez Estados habían firmado la Convención. Esta permanecerá abierta a la firma hasta el 31 de diciembre de 1958 y entrará en vigor el noagésimo día después de la fecha de depósito del tercer instrumento de ratificación o adhesión.

La Conferencia aprobó asimismo una resolución por la que expresaba sus opiniones y deseos respecto de otras medidas que se pudieran tomar para acrecentar la eficacia del arbitraje como medio de resolver las controversias de derecho privado, y pidió al Secretario General que comunicara esta resolución a los órganos correspondientes de las Naciones Unidas.

f) CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA SUPRESIÓN O REDUCCIÓN DE LA APATRIDIA

Hasta la fecha, 21 Estados han informado al Secretario General que están dispuestos a participar en la Conferencia propuesta. Así se ha cumplido el requisito establecido por la resolución 896 (IX) del 4 de diciembre de 1954, y se ha dispuesto en forma provisional que la Conferencia se celebrará en Ginebra y durará cuatro semanas contadas a partir del 4 de marzo de 1959.

6. Prerrogativas e inmunidades

a) CONVENCION SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS

Desde la publicación de la última Memoria anual, tres Estados más han depositado instrumentos de adhesión a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. Estos Estados son Jordania, Italia y Albania en el orden cronológico en que depositaron sus instrumentos de adhesión. Albania se adhirió a la Convención formulando reservas con respecto a la sección 30 de la misma. Además, la Federación Malaya comunicó al Secretario General que se consideraba obligada por la Convención a la que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se adhirió el 17 de septiembre de 1946, puesto que la Orden de Prerrogativas Diplomáticas (Naciones Unidas y Corte Internacional de Justicia) de 1949 forma parte de la ley de la Federación que continuó en vigor después del *Día Merdeka* (31 de agosto de 1957), en virtud del artículo 162 de la Constitución de la Federación. Por lo tanto, 58 Estados son partes en la Convención.

b) CONVENCION SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Durante el período que se reseña, otros tres Estados han depositado instrumentos de adhesión a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, a saber, Túnez, Libia y Marruecos. Además, la República Federal de Alemania, que previamente había presentado al Secretario General un instrumento de adhesión sujeto a una reserva, retiró la reserva, convirtiéndose así en parte en la Convención. Por lo tanto, 25 Estados son partes en la Convención.

c) ACUERDOS ESPECIALES SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES

La condición jurídica, prerrogativas e inmunidades del Grupo de Observación de las Naciones Unidas en el Líbano quedaron definidas en un intercambio de cartas del 13 de junio de 1958 entre el Secretario General y el Ministro de Relaciones Exteriores del Líbano. Los acuerdos concertados con el Líbano en enero de 1958 proporcionaron asimismo ciertas facilidades e inmunidades en relación con los servicios

postales para la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas y para una unidad perteneciente a ésta, en el aeropuerto internacional de Beirut.

7. Reglamentos de los órganos de las Naciones Unidas

a) REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

En su duodécimo período de sesiones, la Asamblea General eligió un noveno Vicepresidente, con carácter provisional, para el período de sesiones. Posteriormente decidió aumentar el número de sus vicepresidentes y modificar en consecuencia la composición de la Mesa de la Asamblea General. A petición de Checoslovaquia, se incluyó en el programa un tema titulado "Cuestión de la composición de la Mesa de la Asamblea General", y lo sometió a la consideración de la Comisión Política Especial.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión, la Asamblea General aprobó, el 12 de diciembre de 1957, la resolución 1192 (XII) por la cual, considerando que el número de Miembros de las Naciones Unidas había aumentado en forma considerable y que la Mesa de la Asamblea debía estar integrada de modo que quedara asegurado su carácter representativo de base de una distribución geográfica equilibrada de sus Miembros, decidió modificar los artículos 31 y 38 de su reglamento para prever la elección, en cada período de sesiones, de 13 vicepresidentes. En un anexo de la resolución se disponía que los 13 vicepresidentes serían elegidos de las diferentes regiones del mundo. La resolución confirmaba asimismo la práctica establecida con respecto a la distribución de la presidencia de las Comisiones Principales de la Asamblea entre representantes de distintas regiones, a saber, que dos de los presidentes serían representantes de Estados de América Latina, dos de Estados de Asia y África, dos de Europa occidental y otros Estados y uno de un Estado de Europa oriental.

b) REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

En su 20° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria modificó el artículo 19 de su reglamento a fin de disponer que la elección de su Presidente y Vicepresidentes se realizaría a comienzos del período de sesiones de enero y no del período de sesiones de junio.

En el 20° período de sesiones, el Consejo examinó asimismo el informe del Comité de procedimientos con respecto a peticiones. Por su resolución 1713 (XX), del 8 de julio de 1957, el Consejo decidió, como medida de carácter provisional, sujeta a revisión al final del año, y sin perjuicio del reglamento existente, establecer un comité de dos miembros encargado de determinar, con ayuda de la Secretaría, la clasificación provisional de todas las comunicaciones recibidas de conformidad con el procedimiento establecido en el anexo a la resolución. No se hizo modificación alguna del reglamento. En el programa del 22° período de sesiones del Consejo se ha incluido la cuestión de la revisión de la aplicación dada a esta resolución.

8. Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas

a) ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL

El Tribunal Administrativo se reunió en Ginebra en agosto de 1957 a fin de examinar tres casos.

El primer caso (fallo No. 68) se refería a una demanda entablada por un experto en servicios sociales de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas contra la rescisión de su nombramiento por un plazo fijo. Con anterioridad a esta rescisión, se había denegado al demandante un nombramiento permanente y se le había comunicado la rescisión del nombramiento temporal indefinido que tenía en esa fecha. El demandante apeló ante la Junta Mixta de Apelación, la cual recomendó que continuara al servicio de las Naciones Unidas con nombramiento por un plazo fijo hasta la edad normal de jubilación. El Secretario General aceptó la recomendación de la Junta concediéndole un nombramiento por un plazo fijo, en el entendimiento de que el mismo se rescindiría en el caso de no ser posible asignarlo al campo de los servicios sociales en un futuro cercano. Después de seis meses, se rescindieron los servicios del demandante debido a que no fué posible encontrar para él un cargo adecuado. El Tribunal sostuvo que en virtud del arreglo concertado para la continuación del empleo del demandante, la Administración sólo podía recurrir a la rescisión de su contrato si se establecía que no era posible encontrar para él un cargo adecuado. A este respecto, se observó que la Administración había dejado de proponer el nombre del demandante para más de un cargo y que, al decidir que no había otros cargos adecuados, había actuado con una celeridad indebida, haciendo caso omiso de sus calificaciones y bajo la influencia de ciertas cartas confidenciales que contenían observaciones difamatorias sobre la conducta del demandante en un período muy anterior de sus servicios en las Naciones Unidas. En consecuencia, el Tribunal decidió que la Administración no había ejercido suficiente diligencia para cumplir su obligación de encontrar un cargo para el demandante y le concedió una indemnización equivalente a un año de salario, deduciendo tres meses de salario que el demandante ya había recibido como indemnización por rescisión de contrato.

En el segundo caso (fallo No. 69), una ex experta en desarrollo de la comunidad, de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas en Haití, impugnaba la decisión del Secretario General de no renovar su nombramiento por un plazo fijo por razones de salud. La demandante sostuvo que la decisión se basaba en conclusiones erróneas del Director del Servicio Médico y pidió al Tribunal que obtuviera nuevas pruebas médicas a fin de establecer si podía o no seguir prestando servicios en una zona tropical. La demandante solicitó que, en caso de que se demostrara su ineptitud para el servicio en el momento de la rescisión de su contrato con las Naciones Unidas, se le concediera indemnización por enfermedad contraída en el servicio durante su empleo en Haití. El Tribunal sostuvo que no tenía competencia para poner en tela de juicio la confianza depositada por el Secretario General en la opinión del Director del Servicio Médico, ni para reconsiderar la decisión por razones médicas. Como no se demostrara la existencia de perjuicio en el caso, el Tribunal rechazó la reclamación de la demandante. Se rechazó asimismo la otra demanda de indemnización por enfermedad incurrida en el servicio, por no haber sido presentada conforme al procedimiento ordinario prescrito en el Reglamento del Personal.

El tercer caso (fallo No. 70) se refería a la demanda de un ex funcionario del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, quien impugnó la rescisión de su contrato por

razones médicas. El demandante sostuvo que el Organismo había basado su decisión en un diagnóstico equivocado de su enfermedad que, según sostuvo, no se debía a un mal incurable sino a dos accidentes sobrevenidos durante su empleo. El Organismo negó que el demandante, en su carácter de ex funcionario del mismo, tuviera el derecho de apelar ante el Tribunal en virtud del artículo 2 del Estatuto y afirmó que además tenía la prohibición de hacerlo en virtud de las atribuciones de una Junta especial de apelación creada para tratar su caso. Sin embargo, se observó que este procedimiento se había instituido como regla general para el personal local del Organismo sólo después de haberse rescindido el contrato del demandante. Por lo tanto, no existiendo ninguna disposición mandatoria por la que se instituyera un procedimiento diferente, el Tribunal sostuvo que tenía competencia para conocer de la demanda a base del acuerdo concertado en 1950 entre las Naciones Unidas y el Organismo, en cumplimiento de la resolución 302 (IV) aprobada por la Asamblea General, el 8 de diciembre de 1949, e interpretada por el Tribunal en un fallo anterior (fallo No. 57) en el sentido de que el demandante tenía a su disposición el Estatuto y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas, que ofrecía el derecho de apelación ante el Tribunal. En lo que se refiere a las afirmaciones del demandante, el Tribunal decidió que, basándose en los hechos que tenía ante sí y aparte de las pruebas médicas aducidas, no podía llegar a la conclusión de que la epilepsia que sufría podía atribuirse a acontecimiento alguno sobrevenido durante sus servicios en el Organismo. Asimismo llegó a la conclusión de que la decisión del Organismo de rescindir el nombramiento del demandante por razones de salud se había tomado con el asesoramiento del Jefe del Servicio Médico, sin perjuicio ni razón impropia. Por lo tanto, se desechó la demanda.

Como al final del año no había casos pendientes, el Tribunal no celebró su sesión plenaria anual en 1957.

En mayo de 1958, el Presidente del Tribunal, con la ayuda de un Vicepresidente, realizó trámites preliminares en Ginebra, en virtud del párrafo 3 del artículo 9 del reglamento del Tribunal. Se escucharon declaraciones de las partes en un grupo de casos relativos a cinco correctores de pruebas de la Oficina Europea de las Naciones Unidas y en otro caso referente a un funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

b) REVISIÓN DE LOS FALLOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Durante el período que abarca la presente Memoria se recibió una sola solicitud de revisión de un fallo del Tribunal Administrativo conforme al procedimiento establecido por la Asamblea General en su décimo período de sesiones (resolución 957 (X) del 8 de noviembre de 1955 y artículo 11 del Estatuto del Tribunal Administrativo). El Tribunal dictó el fallo No. 68 (véase la sección a) *supra*), el 22 de agosto de 1957. El funcionario interesado presentó una solicitud de revisión el 21 de mayo de 1958. El Comité, que se reunió el 16 de junio de 1958, resolvió por unanimidad que, puesto que la solicitud no se había presentado dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo, como lo prescribía el artículo 11 del Estatuto, no podía ser admitida. El Comité declaró también que en lo sucesivo, si se recibía una petición después de expirado el plazo de 30 días, el Secretario del Comité no debía ad-

mirla, pero había de informar al respecto a los miembros del Comité, en cuyo caso cualquiera de ellos, si así lo deseaba, podía pedir que éste se reuniera.

9. Cuestión de la revisión de la Carta

En su resolución 1136 (XII), del 14 de octubre de 1957, la Asamblea General, habiendo examinado el informe del Comité de preparativos para celebrar una conferencia con el propósito de revisar la Carta, establecido por la Asamblea General en su resolución 992 (X), del 21 de noviembre de 1955, 1) decidió mantener en funciones el Comité y pedirle que presentara a la Asamblea General, a más tardar en su décimocuarto

período de sesiones, un informe con recomendaciones; y 2) pidió al Secretario General que prosiguiera la labor indicada en el párrafo 4 de la resolución 992 (X) de la Asamblea General.

Ese párrafo disponía entre otras cosas, que se prepararan suplementos al *Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas*. El primer suplemento al *Repertorio*, correspondiente a los dos años comprendidos entre 1° de septiembre de 1954 y el 1° de septiembre de 1956, ya ha sido publicado en inglés en dos tomos. El segundo suplemento abarcará el período comprendido entre el 1° de septiembre de 1956 y el 1° de septiembre de 1959 y se publicará en 1960.

Capítulo V

MAYOR COMPRENSION EN LA OPINION PUBLICA

a) CONSIDERACIONES GENERALES

El año pasado siguió aumentando el interés del público por la Naciones Unidas. La prensa y la radio se ocuparon ampliamente de los temas importantes sometidos a la Organización, tales como la cuestión del desarme, la cuestión de Hungría, el Oriente Medio, Chipre, Cachemira, el desarrollo económico y la situación de los territorios en fideicomiso y de los territorios no autónomos. Los gobiernos y las autoridades docentes han demostrado un interés cada vez mayor en enseñar sobre las Naciones Unidas en escuelas y colegios. Las organizaciones no gubernamentales han celebrado conferencias y realizado estudios acerca de diversos aspectos de la Organización. Siguió aumentando el número de conmemoraciones anuales del Día de las Naciones Unidas, preparadas por los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, en más lugares y por nuevos grupos de personas. Las actividades de carácter local y regional de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, continuaron figurando en las noticias, y despertaron un interés considerable en varias zonas, particularmente los trabajos locales realizados con ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otros organismos. Interesaron asimismo diversos programas de asistencia técnica y los estudios efectuados por las comisiones económicas regionales. La creación del Organismo Internacional de Energía Atómica fué acogida con beneplácito universal, se prestó atención cuidadosa a los debates celebrados en las Naciones Unidas acerca de los efectos de las radiaciones atómicas, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar despertó amplio interés que no se limitó a los Estados con litoral.

Es probable que se haya reconocido, más que en años anteriores, que las Naciones Unidas constituyen un factor permanente y esencial en los asuntos mundiales. En muchos casos se dan por descontadas sus actividades. Algunas veces, la expresión de pareceres a favor de una parte en una controversia se ha manifestado en forma de declaraciones en el sentido de que dicha parte es la única que se ajusta a los propósitos y principios de la Carta. Juntamente con las críticas relativas al funcionamiento de la Organización, se ha recalcado frecuentemente la necesidad de conservarla, prestarle apoyo y fortalecerla. A menudo se expone el juicio de que las Naciones Unidas no sólo deben seguir funcionando conforme a sus compromisos existentes, sino que deben aumentar sus responsabilidades. En realidad, las opiniones expresadas generalmente reflejan el parecer de que con respecto a los asuntos mundiales la Organización debe aumentar su actividad, en lugar de disminuirla. Las personas que abogan por

un cambio en la estructura de la Organización lo hacen con el propósito explícito de que sea más eficaz.

Sin embargo, otras personas expresan el parecer de que, como las propias Naciones Unidas no están bien dotadas para hacer efectiva la paz, sus posibilidades como pacificadoras son escasas y que, por lo tanto, deben hallarse fuera de la Organización maneras concurrentes de mantener la paz. Con todo, parece existir un deseo creciente de vincular en la esfera internacional las actividades políticas de los gobiernos nacionales y de las organizaciones regionales con las de la Organización mundial, para que con este vínculo con los propósitos de la comunidad internacional dichas actividades cobren mayor fuerza y autoridad.

Se ha acentuado la tendencia de vincular a las Naciones Unidas con todos los aspectos de la vida internacional, a causa de los rápidos adelantos que se registran en los descubrimientos científicos, en la exploración del espacio cósmico, en el desarrollo de la energía atómica y en las nuevas y poderosas armas de destrucción en masa. Cada vez resulta más evidente, para personas de opiniones muy variadas, que no se pueden resolver los problemas planteados por estos acontecimientos recientes sin contar con la ayuda de instituciones mundiales. De ahí que se considere en general que, como las Naciones Unidas y sus organismos especializados constituyen un instrumento internacional, éste debe emplearse en cualquier esfuerzo que se haga por resolver esas cuestiones tan apremiantes.

Se ha sufrido una desilusión muy generalizada por la falta de progreso en la cuestión del desarme. El sentimiento cada vez más acentuado de la urgencia del problema, causado por la viva conciencia de la capacidad de destrucción de las armas modernas y de los peligros que implica un estancamiento continuo en esta esfera, ha motivado numerosas e insistentes solicitudes de que se tomen medidas de distinta naturaleza. Por lo tanto, se ha revelado una impaciencia considerable respecto de los largos procesos de negociación que no parecen redundar en ningún adelanto rápido o definitivo. Por supuesto, tal impaciencia no se limita en forma alguna al tema del desarme ni a la totalidad de los problemas sometidos a las Naciones Unidas, sino que constituye la reacción a una época de cambios rápidos. Por otra parte, el papel que desempeñó la Organización en la crisis del Oriente Medio, en el invierno de 1956-1957, ha infundido en cierto modo la esperanza de que en otras esferas se pueden tomar medidas análogas de carácter decisivo. Por razones evidentes, el tiempo inevitable que transcurre entre la aceptación general de una manera de proceder y la aplicación detallada de la misma resulta casi siempre más largo en la esfera internacional que en la nacional. En los casos en que la opinión pública puede contribuir a encauzar la paz hacia el bienestar general, constituye una fuerza valiosa en esta época tan llena de peligros.

Prevalece inevitablemente la tendencia de culpar a las Naciones Unidas por las recomendaciones o actividades que pueden causar una situación embarazosa respecto de los intereses nacionales o locales y, por el contrario, de elogiarlas cuando parecen apoyar las políticas nacionales. La actitud ante las Naciones Unidas, así como la esperanza que despierta, varían también en diferentes tipos de países y en distintas regiones. Por ejemplo, los grandes países desean una organización internacional eficaz para poner en vigor la seguridad colectiva. En cambio, los países pequeños desean protección por parte de la comunidad internacional con respecto a su independencia e integridad y a su derecho de evolucionar según sus propios deseos. Los países insuficientemente desarrollados dependen de las Naciones Unidas para la asistencia financiera y técnica con la que han de fomentar sus recursos y los países industrializados esperan que la Organización les dé mayores oportunidades de desarrollar su industria y comercio. De manera análoga se hacen sentir las diferencias entre países de ideologías políticas opuestas, o bien entre antiguas Potencias "coloniales" y los Estados de Asia y Africa que acaban de conseguir su independencia. No obstante, todos los países parecen considerar que las Naciones Unidas tienen valor especial como tribuna para cambiar opiniones y resolver conflictos y como único instrumento común para mantener la paz y lograr una vida mejor conforme a la Carta.

En algunos círculos se ha observado la tendencia de considerar que las Naciones Unidas son capaces de intervenir en forma decisiva en controversias internacionales. En los casos en que dicha tendencia supone el reconocimiento de que las políticas nacionales deben justificarse en una tribuna internacional, ello resulta ventajoso para los Estados Miembros y está de acuerdo con la finalidad para la cual fueron creadas las Naciones Unidas. Pero cuando va implícito el juicio de que las Naciones Unidas pueden reemplazar la política de un gobierno nacional, la expresión de este parecer revela cierta confusión acerca del carácter y propósito de la Organización y no es la primera vez que esto ocurre. Al comprender que las Naciones Unidas tienen su propia personalidad, se olvida a veces que dicha personalidad se deriva de la voluntad conjunta de sus Estados Miembros. Cuando falta la voluntad de llegar a un acuerdo, no puede lograrse éste por el mero hecho de que se dispone de un instrumento para lograrlo. Cuando no existe una base para la reconciliación, los esfuerzos encaminados a resolver un conflicto se hallan entorpecidos desde el principio.

Pero en general se van comprendiendo mejor las verdaderas posibilidades de la Organización y las limitaciones políticas y constitucionales con las cuales debe trabajar. Se reconoce cada vez más que las actividades y procedimientos de las Naciones Unidas se derivan del equilibrio de las fuerzas que hay en el mundo y que la Organización sólo puede expresar la medida de internacionalismo que existe. Cada vez se acepta más el verdadero objetivo de la Organización y hay una insistencia alentadora en que deben ampliarse las esferas relativas a los acuerdos internacionales, que representan la base de sus actividades.

b) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS NACIONES UNIDAS

Las actividades de información pública de las Naciones Unidas han continuado ajustándose al plan general formulado en años anteriores, según el cual se procura ante todo apoyar y completar los servicios de

los gobiernos de los Estados Miembros, así como los de las agencias extraoficiales de información, en la labor de informar acerca de las actividades de las Naciones Unidas.

A causa de las limitaciones presupuestarias, ha habido una tendencia de reajustar cada vez más las actividades a fin de permitir la realización de nuevos trabajos de carácter esencial. Así, se han tomado de la plantilla del personal de la Sede dos funcionarios que ocupan los cargos de Directores de los nuevos Centros de Información establecidos en Tokio y en Roma. La considerable labor de información preparatoria, relativa a la Segunda Conferencia Internacional de las Naciones Unidas para la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, se realizó con la cooperación del personal existente. El Servicio de Cine ha limitado su producción de películas cortas concentrando sus esfuerzos en cintas de largo metraje. El Servicio de Radio ha concentrado sus esfuerzos en los programas que tienen mayor demanda general. El informe diario que anteriormente se enviaba a los Centros de Información ha sido reemplazado por un comunicado semanal, que se completa con notas de orientación.

El proceso de descentralización ha continuado. Además de los nuevos Centros de Roma y Tokio, se inauguró uno nuevo en Accra el día del primer aniversario de la admisión de Ghana en las Naciones Unidas. Este Centro fué establecido con la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual prosigue los trabajos de información de las Naciones Unidas en Liberia con un funcionario contratado en la localidad. Siguiendo el ejemplo de disponer de un oficial del Servicio de Cine en Asia y el Lejano Oriente, se designó a un funcionario del mismo servicio para que trabajara en Europa. Actualmente se atiende a las organizaciones no gubernamentales de carácter nacional por medio de los Centros de Información. En la medida en que lo permite el presupuesto, en tales Centros se imprimen publicaciones de las Naciones Unidas en los idiomas nacionales. Tanto los Servicios Exteriores, como el Servicio de Lengua Francesa, el Servicio de Lengua Árabe y el Servicio de Lengua Española se ocupan en proporcionar a los Centros la información y el material adecuados para sus regiones. Se han preparado exposiciones fotográficas especialmente para ser distribuidas por conducto de dichos Centros.

En mayo se anunciaron ciertos cambios administrativos que entrarían en vigor el 1º de julio de 1958. Así, tal como lo propuso la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones, el Departamento de Información Pública pasará a ser Servicios de Información Pública, conforme a la política de emplear la palabra "departamento" sólo para las actividades que se relacionen directamente con el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración Fiduciaria. Se creará una división nueva que se denominará División de Relaciones Exteriores.

El Comité establecido por la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones (resolución 1177 (XI) del 26 de noviembre de 1957) para examinar las actividades de información pública de las Naciones Unidas, celebró reuniones en la Sede entre marzo y abril de 1957 y luego visitó los Centros de Información en diversas regiones. Algunos funcionarios de la Secretaría suministraron datos al Comité, tanto de palabra como por escrito, y los miembros del Comité se entrevistaron también con las personas que utili-

zaban el material de información. El Comité presentará su informe a la Asamblea General en su décimo-tercer período de sesiones.

A continuación se reseñan las actividades principales realizadas por los distintos servicios durante el año que se examina.

Han continuado los esfuerzos encaminados a facilitar la publicación de noticias completas y objetivas en la prensa mundial acerca de los trabajos de las Naciones Unidas. Entre los servicios prestados a los corresponsales acreditados en la Sede (que en junio de 1958 eran 347, procedentes de 39 países) figuraban los siguientes: comunicados de prensa e información oral acerca de las actividades de las Naciones Unidas, documentos, material sobre antecedentes, textos preparados por adelantado, conferencias de prensa y oficinas puestas a la disposición de dichos corresponsales. Los Centros y Oficinas de Información de las Naciones Unidas, situados en 26 países, recibieron con regularidad noticias y artículos especiales que se prestaban a ser reproducidos o adaptados por los medios locales de información. Entre este material figuraban los comunicados semanales en inglés y en francés, que contenían una reseña general de los acontecimientos en las Naciones Unidas, lo cual se completaba con notas sobre antecedentes y, cuando era necesario, con textos cableografiados de las decisiones importantes adoptadas.

Las delegaciones han utilizado ampliamente los servicios de la Sede para distribuir comunicados y celebrar conferencias de prensa. Ha continuado la cooperación con los servicios de información de los organismos especializados, cuyos comunicados se emiten asimismo en la Sede de las Naciones Unidas y en los Centros de Información. Del personal de los servicios de prensa de la Sede se enviaron funcionarios de información adscritos a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, a la Misión de las Naciones Unidas al Togo bajo administración francesa y al Grupo de Observación de las Naciones Unidas en el Líbano.

Se han preparado muy cuidadosamente los servicios destinados a permitir que la prensa, en general, y las publicaciones científicas informen acerca de la Segunda Conferencia Internacional de las Naciones Unidas para la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, que se celebrará próximamente.

En lo posible, con el programa de publicaciones se trata de satisfacer la creciente demanda de material en muchos idiomas. En 1957, aparecieron 94 de tales publicaciones en 398 ediciones en diversos idiomas. El cartel para el Día de las Naciones Unidas se publicó en 70 idiomas. Por conducto de los Centros de Información se han hecho todos los arreglos necesarios para imprimir las publicaciones básicas en los países de su mayor distribución. La *Revista de las Naciones Unidas* siguió siendo una fuente económica y flexible de folletos relativos a temas de la Organización, que se publican en ediciones separadas o como traducciones a idiomas distintos de los originales.

Durante el pasado año, los servicios de radio continuaron con dos propósitos principales: suministrar información continua sobre las actividades ordinarias de los diversos órganos y dependencias de las Naciones Unidas y de los organismos especializados y distribuir material por temas separados para presentar y explicar los trabajos de las Naciones Unidas en función de las finalidades enunciadas por la Carta.

En la primera categoría, la Radio de las Naciones Unidas ha transmitido boletines diarios o semanales de actualidad, noticiarios y resúmenes de noticias en

30 idiomas, que se han retransmitido directamente o por grabación en 47 países. Todas las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad fueron transmitidas desde las respectivas salas para los países de la América del Norte, la América Latina, Europa y el Oriente Medio.

En el segundo grupo, la Radio de las Naciones Unidas produjo 39 programas semanales de carácter especial de 15 minutos de duración, así como 12 programas documentales — uno cada mes — de media hora de duración en 33 idiomas, que fueron retransmitidos en 56 países. Además, se prepararon programas especiales para conmemorar el Día de la Carta, el Día de las Naciones Unidas, el Día de los Derechos Humanos y el Día Mundial de la Salud.

El Servicio de Televisión de las Naciones Unidas ha suministrado películas sobre las actividades de la Sede a las redes mundiales de televisión abonadas. También ha facilitado programas documentales para diversos países, así como servicios para las estaciones de televisión que transmiten programas desde la Sede de las Naciones Unidas o preparan temas para sus programas en ese lugar.

En 1957 se distribuyeron 144 programas grabados en 10 idiomas y se tomaron en telecine los debates de 179 sesiones, para las redes abonadas al servicio y para otros clientes; además, se produjeron por encargo especial 130 películas de comentarios por corresponsales acreditados. De una serie de programas de 30 minutos de duración en inglés, el primero se dedicó a la cuestión del desarme y fué transmitido en los Estados Unidos, Canadá y Australia. El segundo, que versaba sobre la situación de los refugiados en Europa, fué el mayor programa realizado hasta la fecha en los estudios de la Sede. Otra serie, transmitida al mismo tiempo, se titula "Perspectiva para 1958", y consta de cinco programas de 15 minutos cada uno, relativos al espacio cósmico, la erradicación del paludismo, la radiación atómica, el derecho del mar y los refugiados árabes. Estos programas se han hecho con narración en español, francés, inglés, italiano, alemán y japonés. Por encargo del *Educational Television and Radio Center*, se realiza la serie *UN Review*, transmitida semanalmente por televisión en inglés, la cual ha alcanzado 35 ediciones y se distribuye mediante 40 estaciones educativas y comerciales en los Estados Unidos. Además, se prestaron servicios para la transmisión de 36 programas de la compañía CBS que se titularon *United Nations in Action*, así como para transmitir una serie de 13 programas de 15 minutos de duración, realizados por la misma compañía y titulados *UN Review*.

Con respecto a las actividades cinematográficas, se han concentrado los esfuerzos en la producción de un número menor de películas más largas. Las principales son: *Power Among Men*, película en colores y en blanco y negro, de 90 minutos de duración, referente a los niveles de vida y a la promesa y amenaza que supone la energía atómica, así como a la necesidad de establecer un sistema de control internacional sobre esta nueva fuente de energía; una película de un rollo, en blanco y negro, titulada *Overture*, cuyas escenas se desenvuelven al compás de la obertura de la obra "Egmont", compuesta por Beethoven; y una película de tres rollos, en blanco y negro, titulada *All Our Lives*, que muestra los medios utilizados por las Naciones Unidas para satisfacer las necesidades de la humanidad.

Entre las películas hechas durante el año anterior figuraron las dedicadas a la Organización de Aviación

Capítulo VI

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

1. Servicios de conferencias y documentos

a) PROGRAMA DE CONFERENCIAS

El programa cuadrienal de conferencias a partir del 1° de enero de 1954, establecido por la Asamblea General en su resolución 694 (VII) de 1952, ha demostrado ser perfecto, en el fondo, para distribuir racional y económicamente las reuniones entre la Sede y Ginebra y ha facilitado la utilización adecuada del personal de los servicios de conferencias en ambos lugares. Por lo tanto, durante su duodécimo período de sesiones la Asamblea General decidió extender el programa de conferencias por otro período de cinco años a partir de 1958. No obstante, en virtud de la nueva resolución (1202 (XII) del 13 de diciembre de 1957) se pedía al Secretario General que cada año presentase a la Asamblea General un programa básico de reuniones para el año siguiente, el cual se establecería en conformidad con el plan citado y se le autorizaba a decidir con arreglo a los límites financieros cuándo y dónde debía reunirse algún órgano o conferencia especial que no estuviesen comprendidos en el programa anual básico. Hasta la fecha los resultados de este nuevo sistema parecen indicar que se garantizará el cumplimiento más exacto del programa anual básico con la consiguiente eliminación de gastos adicionales imprevistos y la utilización más racional del personal y de los servicios.

b) SERVICIOS DE DOCUMENTOS

La Sección de Control Editorial prosiguió su trabajo siguiendo el plan indicado en anteriores informes teniendo especialmente en cuenta la resolución 1203 (XII) de la Asamblea General aprobada el 13 de diciembre de 1957. Tanto en la Sede como en las oficinas regionales se consiguieron buenos resultados racionalizando la presentación de los documentos y su preparación; también se eliminó material no esencial y se redactaron los textos de forma más legible y más concisa. La celebración de seminarios sobre la preparación de documentos, la publicación de instrucciones al respecto y la nueva redacción de ciertos manuscritos aparte de las actividades corrientes descritas anteriormente, contribuyeron al logro de dichos resultados.

Es aún demasiado pronto para calcular en qué medida se ha logrado alcanzar la reducción del 25% sugerida, pero en varios campos existen ya claros indicios de que se ha llegado a la máxima concisión aceptable por las delegaciones. Como el volumen de documentos sobre los cuales la Secretaría tiene absoluta autoridad o puede ejercer alguna influencia es relativamente pequeño, la posibilidad de conseguir más reducciones durante los años venideros dependerá en primer lugar de las recomendaciones concretas que el Comité para el Control y Reducción de Documentos considere oportuno hacer y que la Asamblea General decida aprobar.

Respecto a las actividades de publicación, durante el período a que se refiere esta Memoria se han realizado nuevos esfuerzos para ampliar y mejorar los objetivos señalados en anteriores informes. Por primera vez, el porcentaje del programa de trabajo de imprenta contratado en la zona de la Sede fué inferior a la mitad de la asignación total para dicho efecto. Aun así, se considera que no se ha llegado aún al límite en cuanto a la contratación de trabajos de imprenta en países de moneda débil. Durante lo que queda de 1958 y todo el año 1959 se aumentará probablemente el número de contrataciones para trabajos de imprenta en zonas de moneda débil. La ampliación de este programa, que no sólo se ha proyectado sino que está convirtiéndose en realidad, se ha debido en gran parte a un aumento del número de trabajos de imprenta realizados en Asia y en el Oriente Medio. Todas las versiones chinas de los documentos oficiales están siendo impresas en la actualidad en el Lejano Oriente. Las gestiones para utilizar impresores de la América Latina han permitido ya conceder contrataciones para trabajos de imprenta en condiciones satisfactorias que respetan las normas de producción y calidad exigidas por las Naciones Unidas.

Los servicios de reproducción propios de la Organización están siendo utilizados aún más que antes para disminuir los gastos de imprenta por contrata. El volumen de los trabajos entregados a los servicios de reproducción de la Organización y que antes se ejecutaban con cargo al presupuesto de gastos de imprenta por contrata, representó durante este período aproximadamente unos 170.000 dólares con arreglo a los precios del mercado. Durante el próximo año fiscal se confía en ampliar aún más la participación de los servicios de reproducción de la Organización según puede verse por un crédito de 180.000 dólares que consta frente a la partida propuesta para los gastos de imprenta por contrata en el presupuesto de 1959. Este programa sigue desarrollándose con el asesoramiento y la aprobación de la Junta de Publicaciones y se ha logrado darle curso sin disminuir la reproducción de documentos destinados a las reuniones o procedentes de las mismas, ni la de otros documentos varios.

Los servicios de distribución son objeto de constante examen a fin de proporcionar a los Estados Miembros un servicio completo y satisfactorio teniéndose al mismo tiempo en cuenta la necesidad de mantener la más estricta economía. Para intensificar aún más el enlace entre los servicios de distribución y los Estados Miembros, se celebró en noviembre de 1957 un seminario para miembros de las delegaciones. Este seminario recibió una acogida favorable y resultó provechoso, pues dió a las delegaciones la oportunidad de evaluar con más exactitud sus necesidades reales respecto a los servicios de distribución.

ias de ultramar. El interés en la transmisión por televisión de las sesiones de la Asamblea General siguió en aumento y se están haciendo las mejoras necesarias para ofrecer la retransmisión simultánea de dos reuniones por dicho medio.

d) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS

Durante el período a que se refiere esta Memoria no se realizaron trabajos de construcción o alteraciones de importancia; sin embargo, se mejoró la decoración de la Sala de Meditación, así como algunos servicios menores para conveniencia de los delegados. Como parte del programa preventivo de conservación volvieron a repasarse los intersticios del revestimiento de los muros norte y sur del edificio de la Secretaría y se efectuaron modificaciones en el sistema de aire acondicionado. Después de estudiar las condiciones de mantenimiento fué posible realizar economías en los gastos de limpieza por contrata, funcionamiento de los ascensores y cuidado de los jardines.

El interés manifestado por el público en visitar la Sede y asistir a las sesiones siguió siendo elevado y en ciertas ocasiones la multitud fué tal que se tuvieron que tomar medidas especiales de precaución y seguridad para evitar accidentes o incidentes. En un día se recibieron hasta 1.500 solicitudes de información por teléfono relativas a las reuniones y otros asuntos de información general. Durante el año el promedio fué de 900 llamadas diarias.

e) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

Teniendo en cuenta la conveniencia de disponer de servicios centralizados de dirección con respecto a ciertas actividades lucrativas, en marzo de 1958 se organizó el Servicio de Administración Comercial. Entre sus funciones, que anteriormente habían sido encomendadas a otras unidades de la Oficina de Servicios Generales, figuran la responsabilidad de administrar los servicios de restaurante y cafetería, garage, tienda de recuerdos y artículos de regalo y Administración Postal de las Naciones Unidas.

La demanda de sellos de correo de las Naciones Unidas siguió siendo elevada y produjo un ingreso total bruto anual que excedió de 1.350.000 dólares. Aunque las ventas en la Sede fueron inferiores a las del anterior período anual, en las oficinas de ultramar se registró un notable aumento. Se cree que esto refleja la creciente atención que se ha concedido a las actividades de propaganda por conducto de la Oficina Europea y de ciertos Centros de Información por lo que se piensa ampliar aún más estas actividades.

3. Administración del personal

La asignación de personal siguió la misma pauta que en el año anterior, aunque a un ritmo algo más lento. En la región atendida por la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas se mantuvo un cuadro de unos 40 funcionarios del cuadro de servicios orgánicos mediante un sistema de rotación de personal extraído de las otras oficinas. Se cooperó con el nuevo Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena destacando a unos 20 miembros experimentados del personal de las Naciones Unidas quienes trabajaron en Viena durante el año pasado.

El informe del Comité de Estudio de Sueldos aprobado por la Asamblea General y por los jefes ejecutivos de las secretarías participantes se llevó en general a

la práctica en todas las oficinas y programas de las Naciones Unidas, incluso en las del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

El nuevo sistema se aplicó al programa de asistencia técnica a partir del 1° de enero de 1958, en virtud de una decisión de la Asamblea General por la que se creaba un nuevo tipo de participación en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (afiliación parcial) para personal con nombramientos por un plazo fijo (resolución 1201 (XII) del 13 de diciembre de 1957).

Al mismo tiempo, atendiendo la solicitud que hizo la Asamblea General en su resolución 1095 (XI) del 27 de febrero de 1957, se inició con la cooperación de los jefes ejecutivos de los organismos especializados interesados y en colaboración con el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal, un estudio de los sueldos del personal sujetos a descuento a efectos de la Caja de Pensiones.

La contratación de expertos calificados para el programa de asistencia técnica siguió a un ritmo algo acelerado. Unos 360 expertos procedentes de 46 países fueron contratados y enviados a misiones muy distintas en 61 países.

Después de haberse celebrado detenidas consultas con los representantes del personal se creó y puso en funcionamiento un nuevo órgano interno para nombramientos y ascensos del personal. Este órgano que está formado por una Junta Central que cuenta con la cooperación de un comité y de grupos auxiliares de trabajo, inició un estudio sistemático y comprensivo de todo el personal para hacer recomendaciones al Secretario General relativas a las medidas que deben tomarse una vez terminado el período de servicio de prueba y al terminar los cinco años de servicio con contrato permanente, y para determinar qué miembros del personal parecen tener las mejores calificaciones a fin de merecer el ascenso. Esta Junta también asesoró respecto al nombramiento de personal nuevo, teniendo en cuenta no sólo las necesidades de eficiencia, competencia e integridad sino también el principio de distribución geográfica. La Junta y su comité y grupos de trabajo auxiliares estaban integrados por personal nombrado para estas funciones por el Secretario General y escogido entre las listas recomendadas por los representantes del personal.

Además se inició un estudio del personal del Servicio Móvil con antigüedad considerable con objeto de conceder categoría permanente a un grupo numeroso de personas con experiencia que, se confía, serán necesarias en misiones de las Naciones Unidas y en las oficinas de ultramar con carácter permanente.

La Junta Consultiva de Administración Pública Internacional se reunió en Nueva York del 17 al 21 de marzo de 1958 y presentó al Comité Administrativo de Coordinación dos informes que trataban de los procedimientos para crear normas comunes de ascenso en todas las Secretarías participantes y de la creación de un grupo de expertos para considerar ciertos problemas planteados por el sistema de ajustes de sueldos por lugar de destino. Durante la primavera de 1958, el Secretario General aceptó con pesar la dimisión del Sr. Thanassis Aghnides como presidente de la JCAPI. El Sr. Aghnides había sido Presidente de la Junta desde su creación en 1949.

El servicio voluntario de atenciones para el personal siguió contribuyendo con su habilidad y devoción al desarrollo de programas de importancia cultural e in-

terés social especialmente para aquellos miembros del personal recientemente llegados del extranjero.

DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Entre sus decisiones relativas a asuntos administrativos, durante el duodécimo período de sesiones, la Asamblea General fijó los salarios y emolumentos de los Subsecretarios en 23.000 dólares (EE.UU.) anuales (15.000 dólares una vez deducidos los descuentos previstos en el Plan de Contribuciones del Personal). El sistema de ajustes por lugar de destino también se aplicará a los Subsecretarios que tengan derecho a los otros subsidios y beneficios de que goza el personal en general. El Estatuto del Personal fué modificado en consecuencia (resolución 1234 (XII)).

La Asamblea General volvió a ocuparse de la definición de familiar a cargo que había sido mencionada en el informe del Comité de Estudio de Sueldos. La Asamblea aprobó una propuesta del Secretario General en el sentido de aplicar, con carácter experimental y sin perjuicio de que se modifique a la luz de la experiencia que traiga consigo un año completo de funcionamiento, un sistema basado en discusiones entre las organizaciones. Se introdujo una adición en la cláusula 3.4 del Estatuto de Personal (resolución 1225 (XII)).

Se crearon dos aumentos de salario por "antigüedad" para funcionarios con categoría de oficial de segunda, que podrían concederse a personal con un largo período de servicio que, a juicio del Secretario General, mereciera ser ascendido y no pudiera serlo por no existir una oportunidad adecuada (resolución 1225 (XII)).

Quedó aprobado, para su aplicación en la Sede, un plan de seguros colectivo contra gastos por atención odontológica. En virtud de este plan, la Organización contribuye con un tercio de los gastos totales, y los miembros del personal que participen en el plan pagan el resto.

La Asamblea General también modificó varios aspectos de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas después de haber estudiado el informe de la Junta de la Caja Común de Pensiones del Personal (resolución 1201 (XII)).

Estas modificaciones incluyen un reajuste de la norma de cálculo de las pensiones pagaderas por jubilación, invalidez o muerte de un afiliado de una sexagésima a una quincuagésima quinta parte de su remuneración media final. Se dispuso el pago de pensiones mínimas pagaderas por concepto de invalidez de viudedad. El tipo de interés se cambió del 2½% al 3% anuales para todas las transacciones de la Caja realizadas después del 31 de diciembre de 1957. La definición de "remuneración media final" fué modificada para significar la remuneración anual media sujeta a descuentos que el interesado ha recibido durante los 10 últimos años de su período de afiliación si este promedio es superior al de los cinco últimos años de afiliación, que sería aplicable de otro modo.

Se creó también un plan de afiliación parcial a la Caja para personal nombrado por un plazo fijo de por lo menos un año pero siempre inferior a cinco años. Este plan proporciona pensiones en el caso de muerte o invalidez del afiliado.

Se dispuso que el Organismo Internacional de Energía Atómica fuese considerado como organismo especializado a efectos de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones.

4. Asuntos financieros

a) SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Según consta en el Informe Financiero y Estados de Cuentas correspondientes al año 1957, los gastos presupuestarios para dicho año alcanzaron un total de 53.172.964 dólares. El superávit, teniendo en cuenta los distintos ingresos y otros conceptos, ascendía a finales de 1957 a 551.170 dólares que podrán acreditarse en las cuotas de los Estados Miembros para 1959.

En el preámbulo al presupuesto para 1959 se resumen los cálculos presupuestarios para dicho año y la situación presupuestaria para el ejercicio de 1958. Los cálculos iniciales para 1959 ascienden a 58.906.370 dólares con ingresos, exclusive de las contribuciones del personal, de 5.066.880 dólares; las asignaciones correspondientes al ejercicio de 1958 habían sido de 55.062.850 dólares con ingresos que ascendían a 3.250.000 dólares. Algunos de los factores que se reflejan en el aumento de los cálculos presupuestarios para 1959 influirán también en los gastos de 1958.

b) FONDO DE OPERACIONES

En su resolución 1232 (XII) del 14 de diciembre de 1957 la Asamblea General dispuso que el Fondo de Operaciones para 1958 sería de 22.000.000 de dólares. Los anticipos de los Estados Miembros se ajustaron con arreglo a la escala de cuotas correspondiente al presupuesto de 1958. El 31 de mayo de 1958 quedaba por pagar un saldo de 127.200 dólares con respecto a los anticipos hechos en 1958 al Fondo. Hasta esa misma fecha, y en virtud de las facultades que le confería la mencionada resolución, el Secretario General había anticipado con cargo al Fondo las siguientes sumas:

	Dólares de los EE.UU.
1) Para atender a los gastos presupuestarios hasta recibirse las cuotas	17.846.846
2) Préstamos a las Comisiones Preparatorias....	630.239
3) Compras y actividades autoamortizables.....	361.282
4) Anticipos para gastos imprevistos y extraordinarios	12.278
	<u>18.850.645</u>

Además de los anticipos pendientes indicados, los gastos autorizados en virtud de la resolución 1232 (XII) con el asentimiento de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y todavía no pagados, ascienden a 230.092 dólares.

c) CUOTAS

El 31 de mayo de 1958, la situación relativa a las cuotas para el ejercicio de 1958 y a los atrasos de los ejercicios correspondientes a 1955, 1956 y 1957 (sin contar las cuotas de los nuevos Estados Miembros correspondientes a los ejercicios de 1956 y 1957) era la siguiente:

	Cuotas asignadas para el ejercicio económico (en dólares de los EE.UU.)			
	1958	1957	1956	1955
Importe total...	51.500.000	49.088.050	48.330.000	39.640.000
Pagos efectuados y otros créditos	11.481.558	44.604.919	46.866.207	39.624.078
Saldo por pagar	40.018.442	4.483.131	1.463.793	15.922

Las cuotas correspondientes a los ejercicios anteriores han sido satisfechas en su totalidad.

Las cuotas correspondientes a 1958 fueron establecidas con arreglo a la escala de cuotas aprobada por la

Asamblea General en su resolución 1223 (XII) del 14 de diciembre de 1957. Conforme a la autorización concedida por la resolución 970 (X) del 15 de diciembre de 1955 para aceptar una parte de las cuotas correspondientes al ejercicio económico de los años 1956, 1957 y 1958 en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos, el Secretario General, previa consulta con el Presidente de la Comisión de Cuotas, comunicó a los Estados Miembros que el 18,65% de sus cuotas para 1958 podría ser pagado en francos suizos, el 10,30% en libras esterlinas y el 5,80% en varias otras monedas distintas del dólar de los Estados Unidos. Por lo tanto resulta que un 34,75% de las cuotas para 1958 pueden pagarse en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos.

En virtud de acuerdos concluidos entre las Naciones Unidas y el Reino Unido, la Organización podrá convertir las libras esterlinas en varias otras monedas, con el consentimiento de los países interesados.

El importe de las cuotas correspondientes a 1958 de los Estados Miembros que podrán satisfacerse en moneda distinta del dólar de los Estados Unidos asciende al equivalente de 10.440.000 dólares en las siguientes monedas: el equivalente de 5.600.000 dólares en francos suizos, de 3.100.000 dólares en libras esterlinas y de 1.740.000 dólares en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos. Veintiocho Estados Miembros han hecho uso del derecho a pagar en una o varias de esas monedas.

d) COMITÉ DE NEGOCIACIONES SOBRE LOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

El Comité de Negociaciones sobre los Fondos Extrapresupuestarios nombrado por la Asamblea General en su undécimo período de sesiones (resolución 1091 (XI) del 27 de febrero de 1957) fué creado para ayudar a obtener fondos destinados a sufragar los programas no previstos en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y que pueden serlo mediante contribuciones voluntarias de los Estados Miembros.

Se trata del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas).

En el informe que presentó a la Asamblea en su duodécimo período de sesiones, el Comité, comentando los resultados del nuevo método para obtener promesas de aportaciones con destino a los programas del OOPSRPCO y del FONUR mediante la reunión de una conferencia especial, recomendó que se mantuviese dicho procedimiento. (La situación financiera de dichos programas ha sido estudiada en los respectivos capítulos de la presente Memoria.)

Conforme a esta recomendación, el 13 de diciembre de 1957 la Asamblea aprobó la resolución 1197 (XII) en

virtud de la cual y en el curso del décimotercer período de sesiones debería reunirse un comité especial plenario de la Asamblea en el que se anunciarían las promesas de contribuciones voluntarias para ambos programas. Un nuevo Comité de Negociaciones sobre los Fondos Extrapresupuestarios fué nombrado con las mismas atribuciones que en años anteriores, con el encargo de que informe sobre sus actividades a la Asamblea durante su décimotercer período de sesiones.

5. Escuela Internacional de las Naciones Unidas y locales de oficina para las delegaciones

Atendiendo la petición que le hizo a la Asamblea General en su resolución 1228 (XII) del 14 de diciembre de 1957, el Secretario General interpuso sus buenos oficios para ayudar a la Junta Directiva de la Escuela Internacional a encontrar locales adecuados para la Escuela.

Gracias a la cooperación de las autoridades competentes de la Ciudad de Nueva York, se han concertado arreglos que permitirán a la Junta Directiva alquilar un edificio adecuado en Manhattan que haga posible la transferencia de las actividades de la escuela de Parkway Village a Manhattan y, de este modo, ofrecer sus servicios a un número mayor de hijos de funcionarios de las Naciones Unidas. El acuerdo prevé el uso provisional, durante un período de hasta tres años, por la Escuela Internacional de las Naciones Unidas, de una escuela ya existente que va a dejar vacante la Junta de Educación de la Ciudad de Nueva York. Seguirán haciéndose gestiones para la adquisición de locales permanentes que permitan instalar la escuela en Manhattan.

La misma resolución pedía al Secretario General que investigase si existían posibilidades prácticas de proporcionar a las delegaciones locales y oficinas cerca de la Sede de las Naciones Unidas.

En virtud de ello, el Secretario General está en comunicación con una empresa de constructores de Nueva York que se propone adquirir y edificar un solar en la zona vecina a los límites septentrionales de la actual Sede de las Naciones Unidas. Entre los edificios que han de construirse figurarán oficinas y viviendas que se adaptarán, a solicitud de las delegaciones, para facilitar servicios de oficina especiales con acceso separado a las Naciones Unidas. También habrá apartamentos adecuados a las necesidades de los miembros de las delegaciones que se adaptarán a las necesidades que expresen las delegaciones durante la etapa en que se proyecten los edificios. El grupo de edificios será propiedad y estará administrado por una empresa comercial y no por las Naciones Unidas, pero los buenos oficios del Secretario General con respecto a los constructores seguirán a disposición de las delegaciones hasta el momento en que éstas ocupen los locales.